

## TOMO XI

### **El comercio y la banca como ámbitos de conflicto de los mundos colonial y nacional. La Inmigración y el Capital Comercial (Siglos XVII, XVIII y XIX)**

(compuesto de once [11] capítulos):

## CAPITULO I

### INTRODUCCION

(parcialmente publicado en 1991 en Ibero-Americana, Nordic Journal of Latin American Studies [Stockholm: Nordic Association for Research on Latin America], v.XXI: 1-2, 3-42); registrado en el HAPI, 1992, p.664;

En este tomo venimos a analizar el comportamiento de la sociedad civil, en especial de aquella vinculada con el capital comercial, las oscilaciones de los ciclos comerciales, los procesos inflacionarios, las discrepancias (déficits y superávits) del comercio exterior, y la conducta de los mercados de productos, factores y servicios. En ese sentido en este tomo venimos a analizar el grado en que el debate de estos comportamientos, procesos, discrepancias y conductas venían a reproducir o a transformar las estructuras económicas, y con ellas eventualmente las estructuras culturales, políticas y sociales.

En cuanto a los ciclos comerciales, estos eran provocados --a juicio de Eklund (1980) y Tortella Casares (1986)-- tanto por las guerras Europeas que generaban desequilibrios positivos en la balanza comercial como por los momentos de paz que causaban desequilibrios negativos.<sup>1</sup> En el período del llamado Comercio Libre (1778-1810), el comercio español-americano experimentó, según Fisher (1981,1985), y Lockhart y Schwartz (1992), una euforia que cuadruplicó las cifras con respecto al período inmediatamente precedente.<sup>2</sup> Sin embargo, el período de euforia mercantil que siguió a la Paz de Aquisgrán (1748), y que se prolongó hasta fines de la llamada guerra de los Siete Años (1761-63), fué el más significativo de todos, como lo verifiqué recientemente en un artículo de mi autoría.<sup>3</sup> Con respecto a la llamada crisis del siglo XVII, Bakewell (1976) se preguntaba asimismo para el caso de la

Nueva España "...¿a que podía obedecer la discrepancia en la Balanza Comercial si la plata era el producto que más contribuía al equilibrio del comercio exterior de las colonias?".<sup>4</sup>

Con respecto al comportamiento de los mercados de productos, factores y servicios, estos se diferenciaban según la composición orgánica de capital vigente en cada economía y según el tipo de producto de que se tratara. En economías donde la composición orgánica del capital es intensiva en el factor tierra, es decir donde la tierra es abundante y la mano de obra escasa, la modernización económica tardía, a juicio de Rogowski (1987), radicaliza a los propietarios del factor tierra en favor del librecambio mas bien que a los del factor mano de obra.<sup>5</sup> En tales economías de frontera, el capital mercantil y el trabajo artesanal se hallan en el mismo bando político, pero en esta oportunidad en apoyo del proteccionismo. En sociedades con ausencia de conflictos sociales, no se requiere de un estado poderoso.<sup>6</sup>

Pero en aquellas economías donde la diversa composición orgánica perjudicaba al capital, es decir donde abundaban los factores mineros (tierra) y demográficos (mano de obra) y donde escaseaba el crédito (México, América Central y el macizo Andino), mientras ciertos autores,<sup>7</sup> han sostenido que los ingresos de todo tipo de capellanías y obras pías ayudaron a dinamizar la economía colonial;<sup>8</sup> otros autores,<sup>9</sup> han argumentado que lo que hacía que el clero secular y regular fuera una fuerza económica y financiera dominante en la sociedad colonial Latinoamericana fué no sólo el rol que desempeñó al acumular reservas de capital mediante capellanías y patrimonios, sino el papel que cumplió al convertirse en la fuente de crédito (censos) más relevante para las clases productivas locales.<sup>10</sup> En una variante opuesta, Bauer (1983) concluye por definir a la institución eclesiástica (Iglesia) más como un consumidor de la riqueza colonial que como un "banquero" o intermediario financiero,<sup>11</sup> y Lavrin (1985) y Wobeser (1990) definen a las inversiones eclesiásticas no como orientadas hacia el capitalismo sino como rentistas señoriales.<sup>12</sup>

Por ejemplo, mientras que en las economías del maciso andino, Assadourian (1980) despertó la tensión al advertir que la crisis semi-secular de la minería andina colonial habría sido precipitada por la quiebra de los insumos más críticos (el azogue y la mano de obra), los rendimientos decrecientes provocados por la baja de la ley del mineral, y los consecuentes crecientes costos de explotación que la naturaleza "trastornada" de sus venas producía; Tandeter (1980), atribuía la vulnerabilidad de la minería andina, y por consiguiente la crisis social pre-moderna, a la delicada ecuación que la mano de obra (demografía mitaya) mantenía con el factor tierra (la geología del cerro de Potosí). Y en las economías de abundante tierra libre como el Río de la Plata (Banda Oriental durante el siglo XVIII), mientras Azcuy Ameghino (1988) insistía en los indudables mecanismos extra-económicos pre-modernos que existieron para retener y disciplinar la mano de obra rural, Amaral (1987, 1989), Garavaglia (1987) y Gelman (1989), persisten en atribuir la crisis social pre-moderna a la estacionalidad de la fuerza de trabajo rural, marcada por el ciclo agrícola.

Por el contrario, en aquellas economías donde la composición orgánica del capital ponía hincapié en el rol desempeñado por el capital comercial, hubo quienes negaban la relevancia del crédito mercantil en el período colonial americano,<sup>13</sup> y quienes por el contrario sostuvieron que en el pasado rigió una intensa reciprocidad crediticia que aceleraba la rotación del circulante,<sup>14</sup> reflejada en las cartas de poder en causa propia, el fiado, los vales, las libranzas y las cesiones de crédito.<sup>15</sup> Para estos autores, la inflación o alza de los precios y la correlativa devaluación del dinero metálico significó una profunda erosión de la base material de las elites encomendiles, las cuales recibían de sus encomiendas de indios y de la propiedad de sus inmuebles urbanos y rurales rentas fijas, todo lo cual las inhabilitaba

para participar de la venalidad, o como lo denomina Salzmann (1993), la privatización de los oficios públicos.<sup>16</sup> Al continuar las inyecciones de medios de pago metálico y crediticio --notariales y extra-notariales-- los comerciantes comenzaron a descontar las obligaciones aumentando así la velocidad de rotación del circulante.<sup>17</sup> Para una lectura demografista (transaccionista) y velocista de la Teoría Cuantitativa del Dinero --diseñada por Goldstone (1984, 1991)-- las contradicciones, fracturas y conflictos económicos y sociales pre-modernos aparecerían debido a una cada vez más compleja red de intercambios mercantiles.<sup>18</sup>

El comportamiento de los mercados variaba también según el tipo de producto comercializado. Podía ser que se trataran de productos importados, de frutos americanos exportables (cueros), de productos americanos no exportables (como la yerba mate en el Cono Sur), o de los salarios y los alquileres. Respecto de los productos importados, y de frutos americanos exportables (cueros), L. Johnson (1990, 1992) y Saguier (1991b), en contraste también con Romano (1963), sostuvieron para la región del Río de la Plata, que en la segunda mitad del siglo XVIII se experimentó en sus precios una tendencia ascendente en el largo plazo; y para Chile, De Ramón y Larraín (1982), encontraron una tendencia ascendente sólo a partir de 1799. En cuanto a los mercados de los productos americanos no exportables (como la yerba mate en el Cono Sur), Garavaglia (1976) había observado que --a diferencia de los mercados de productos Europeos-- sus precios no permanecieron estancados ni sus mercados eran meramente compulsivos, pues "los precios sufrían graves alteraciones en el corto plazo". Garavaglia (1983), contrastando sus datos con los de Wachtel y Tandeter (1983), nos advierte además que cuando los paraguayos detienen el comercio de la yerba mate, los precios de la yerba en Potosí tienden a subir. Estas fluctuaciones de precios en el interior de mercados como el de Buenos Aires, solo obedecería para Carmagnani (1975) a la existencia de una demanda interna o local capaz de desequilibrar episódicamente la oferta y la demanda globales. En cambio, las fluctuaciones de precios de mercancías europeas, dentro de mercados como el potosino, confirmarían según Wachtel y Tandeter (1983), la tesis de Romano (1963) acerca de la originalidad de la coyuntura sudamericana respecto de la europea.

Pero la vigencia generalizada de relaciones de reciprocidad o no mercantiles, la escasa productividad, el consiguiente bajo desarrollo de la economía de mercado, las múltiples presiones mercantilizadoras o privatizadoras, y las nuevas fracturas impuestas por la competencia naciente que trajo el llamado Libre Comercio, impusieron en el mundo colonial la necesidad de maximizar la renta y disminuir los costos de transacción. Para cumplir esta imposición se necesitaron --como afirma Pastore (1991), fundado en las teorías de Baysinger (1981)-- mecanismos coactivos de circulación de mercancías y mano de obra.<sup>19</sup>

En este tomo, nos dedicamos entonces a analizar la estabilidad del estado colonial y el rol que en ella jugaron los mercados. Asimismo, nos preguntamos si la intensidad de los mercados laborales e inmobiliarios afectaron la estabilidad de la estructura social colonial. Para analizar los mercados de mano de obra esclava y de inmuebles urbanos y rurales investigaremos el monto y la intensidad de las operaciones transcurridas en dichos mercados. Para investigar su comportamiento estudiamos también los casos en que se manifestaron procesos de movilidad interna.

La desigual oferta de capital, tierra y trabajo existente en las diversas regiones del espacio colonial alimentó la cíclica y crónica inestabilidad o precariedad del estado colonial. La escasez de recursos per cápita por parte de una demanda cautiva, combinada con la abundante oferta de mercancías, condicionó el desarrollo de mecanismos coactivos de extracción del excedente, tales como

el reparto forzoso de mercancías practicado por los Corregidores de Indios, los Curas Párrocos y los Comandantes de Campaña. Las relaciones de reciprocidad vigentes y la escasez de mano de obra indígena en el Alto Perú y el Paraguay, combinada con la alta oferta de tierras y yacimientos mineros, condicionó el desarrollo de mecanismos coactivos como la mita y la encomienda.<sup>20</sup> La escasez de mano de obra rural asociada con la alta oferta de tierra libre, presidió asimismo el desarrollo de mecanismos coactivos de circulación de la mano de obra, como la papeleta de conchavo en Buenos Aires y Córdoba.<sup>21</sup> La escasez de peninsulares y de criollos españoles calificados para desempeñar cargos públicos eclesiásticos y civiles y la alta demanda de funcionarios idóneos determinó la aparición de instituciones como las gracias al sacar, las excepciones de calidad, y las dispensas de ilegitimidad.<sup>22</sup> La extrema fragmentación de la propiedad inmobiliaria rural motorizó el desarrollo de mecanismos extra-económicos --tales como los derechos de abolengo o de sangre (tanteo y retracto) y el régimen capellánico-- que intentaron restringir el dinamismo de los mercados inmobiliarios rurales.<sup>23</sup> La centralidad geopolítica de que gozó la actividad mercantil condicionó el desarrollo de mercados cautivos de mercancías (locales e importadas) y de factores o bienes de renta (tierra y mano de obra). La antigüedad con que se distribuyó la tierra pública en las diversas provincias alentó el desarrollo de los mercados inmobiliarios urbanos y rurales y de instituciones como los derechos de abolengo o de sangre (el tanteo y retracto ya citados). La proliferación de capellanías y censos en el interior del espacio colonial inhibió la subdivisión territorial de la gran propiedad rural.

Para este estudio hemos debido tratar diversas fuentes documentales, entre ellas las notariales, judiciales, sucesorias, capitulares, hacendarias, administrativas, gubernativas, censales, eclesiásticas y parroquiales. De entre todas ellas la fuente notarial ha sido central para nuestra investigación.<sup>24</sup> La fuente notarial es eminentemente una fuente única, continua, heterogénea o miscelánea, e interpenetrable. Ella no es desde el punto de vista historiográfico una fuente autosubsistente. La fuente notarial es y fué una fuente única en su género (carece de copias, salvo escasos testimonios), continua en un tiempo de larga duración, regular en sus formas, heterogénea o miscelánea en su contenido, y complementaria de otras fuentes documentales. La interpenetrabilidad de la fuente notarial es tanto horizontal y geográfica como vertical o temporal. Horizontal y geográfica, por cuanto el mercado del crédito notarial puede ser seguido de ciudad en ciudad, reconstruyéndose así el circuito comercial o las redes mercantiles y crediticias. Vertical o temporal por cuanto la propiedad inmobiliaria y esclava puede ser estudiada en su sucesión a través del tiempo.

Entre la gama de problemas económicos a resolver debemos preguntarnos que relación hubo entre los déficits y superávits de la balanza comercial y la insuficiencia o exceso de importaciones; entre el incremento de la población de mercaderes, y el tamaño de sus capitales y tiendas, la dimensión de sus transacciones, y la permanencia física y/o generacional en el giro; entre los períodos de paz y guerra y los procesos inflacionarios y deflacionarios; entre la intensidad del proceso de urbanización y la densidad del mercado inmobiliario urbano; entre el tamaño y la especialización de chacras y estancias y su participación en los mercados abastecedores; entre la velocidad de circulación del dinero y la naturaleza de las redes de intercambio; entre las dificultades para exportar mercancía-dinero y el aumento de los capitales invertidos en bienes de renta (esclavos, casas, chacras o estancias) o puestos a censo; entre la densidad de las redes mercantiles y la amplitud de los espacios coloniales; entre la movilidad social y el alto grado de endeudamiento comercial y rotación inmobiliaria; entre la profundidad de las crisis comerciales y la frecuencia de los concursos y las quiebras; y entre la coacción extra-económica y el endeudamiento forzoso.

En lo que respecta a los problemas económicos, la densidad de las redes mercantiles podrá

deducirse del número de localidades geográficas y la frecuencia con que eran cubiertas por las escrituras del fiado de Castilla, los poderes generales y poderes especiales para cobrar deudas,<sup>25</sup> de las cesiones de créditos que los acreedores porteños transmitían a comerciantes de mayor giro,<sup>26</sup> y de las escrituras de declaratoria.<sup>27</sup> El endeudamiento mercantil podrá deducirse del cómputo de las escrituras de fiado de Castilla; el cumplimiento mercantil de las moras registradas en los márgenes de las escrituras de fiado, y las cancelaciones practicadas en Buenos Aires de obligaciones a riesgo de mar que se otorgaban en Cádiz, Bilbao, La Coruña y demás puertos de España; y el endeudamiento hipotecario de los censos, reconocimientos de censos, u obligaciones a censo. La cultura material podrá ser deducida de los inventarios testamentarios y de las cartas dotalas. La movilidad social y la rotación inmobiliaria de la restauración catastral que las escrituras de compra-venta, donación y trueque hicieran posible. La intensidad del mercado a término del cuero de las escrituras de obligación. La vida económica, manufacturera e industrial de las compañías y sociedades concertadas. La intensidad del comercio al por menor del número de fianzas de pulpería. La promoción del gremio artesanal urbano de los conciertos u obligaciones de aprendizaje; y la industria del transporte de los fletamentos de carretas y ganado vacuno y mular. El mercado de mano de obra rural de los asientos o conciertos de servicio de mano de obra indígena asalariada procedente de las encomiendas del interior. La crisis comercial del número y monto de las cesiones de deudas, finiquitos, compromisos, transacciones, ajustes y convenios concertados. La cristalización de los mercados inmobiliarios de las cláusulas de tanteo y retracto vigentes en las escrituras de compra-venta.

La complementariedad de la fuente notarial lo es respecto de las fuentes judiciales, sucesorias, capitulares, hacendarias, administrativas, gubernativas, censales, eclesiásticas y parroquiales. Las escrituras de fiado de Castilla y las cancelaciones de obligaciones a riesgo de mar deberán complementarse con los asientos de remesas de oro y plata inscriptos en los Registros de Caudales de los Buques-Correo, con los juicios por embargos, cobro de pesos y rendición de cuentas, y con los expedientes de las series hacendarias, administrativas y comerciales de la División Colonia existentes en el AGN. Las compraventas de esclavos con los juicios por acciones redhibitorias; y los poderes especiales para cobrar esclavos fugados con las Visitas de Cárcel. Las compraventas, donaciones y particiones de tierras e inmuebles con las hijuelas de los autos sucesorios, los juicios por reivindicaciones, retractos, tanteos, divisiones de condominio, y escrituraciones, los extractos de títulos de los Duplicados de Mensuras existentes en el Archivo de Geodesia y Catastro y con los Ficheros-Índice Comprador-Vendedor existentes en el Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires; las renunciaciones de oficio con las actas de elecciones capitulares; las cláusulas testamentarias y las promesas y recibos de dotes y arras con las actas de los libros de bautismo, matrimonio y defunción existentes en los archivos parroquiales; y las compañías y sociedades con la información que brindan los Almanques y Guías Comerciales y de Forasteros y con los expedientes de las series judiciales de la División Colonia existentes en el AGN.

Asimismo, para este estudio hemos debido detectar, relevar y procesar en numerosas tablas, cuadros y apéndices, miles de escrituras notariales de los siglos XVII, XVIII y XIX, íntimamente interpenetrables entre sí, registradas en los protocolos de escribanos, y estudiar centenares de actas capitulares y litigios de dichos siglos, correspondientes a las series judiciales civiles, comerciales, criminales y eclesiásticas de los períodos colonial y nacional, depositados en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires;<sup>28</sup> en los Archivos Históricos de Córdoba, La Plata, Salta y Mendoza, y en el Archivo del Arzobispado de Córdoba (AAC).<sup>29</sup>

En este tomo, nos dedicamos a analizar la estabilidad del estado colonial y el rol que en ella

jugaron los mercados. Asimismo, nos preguntamos si la intensidad de los mercados laborales e inmobiliarios afectaron la estabilidad de la estructura social colonial. Para analizar los mercados de mano de obra esclava y de inmuebles urbanos y rurales investigaremos el monto y la intensidad de las operaciones transcurridas en dichos mercados. Para investigar su comportamiento estudiamos también los casos en que se manifestaron procesos de movilidad interna.

El capital comercial y su influjo en las transacciones crediticias es el motivo del capítulo 2. En el capítulo 3 nos centraremos en el estudio del rol del crédito mercantil en el dinamismo de los mercados Rioplatenses. La articulación comercial del espacio colonial Rioplatense en el siglo XVIII es materia del capítulo 4. El capítulo 5 estudia la lucha contra el Monopolio Comercial Español en los orígenes de la Revolución de Independencia. El mercado de mano de obra indígena, liberta y mestiza y su impacto en la estabilidad del estado colonial en el caso de las encomiendas del interior del espacio colonial Rioplatense es motivo del capítulo 6. El capítulo 7 analiza el mercado de mano de obra esclava y el endeudamiento contraído por los libertos para su manumisión. El mercado inmobiliario urbano y la movilidad social en la ciudad Rioplatense (siglo XVIII) es el motivo del capítulo 8. Y en el capítulo 9 nos volcamos al estudio de la Banca como lugar de lucha en las "Situaciones" Provinciales, específicamente el caso de las Gerencias y los Directorios en la Argentina del siglo XIX.

## NOTAS

<sup>1</sup> Eklund, 1980, 383; y Tortella Casares, 1986.

<sup>2</sup> Lockhart y Schwartz, 1992, 336.

<sup>3</sup> ver Saguier, 1993e, Tabla I, 162-165.

<sup>4</sup> Para responder a su propio interrogante, Bakewell se formuló tres explicaciones hipotéticas. La primera: de que este comercio no hubiera decaído tanto en valor como en volumen; la segunda: de que con tan abundante plata a su disposición la Nueva España hubiere regresado a su antiguo sistema comercial pagando sus importaciones principalmente con metal precioso y menos con otros productos; y en tercer lugar: de que el incremento de las exportaciones de plata habría obedecido al aumento de las remesas oficiales de plata amonedada dirigidas a la corona y no al aumento de las remesas privadas destinadas a cancelar los adelantos de mercadería fiada en Cádiz (Bakewell, 1976, 319).

<sup>5</sup> Rogowski, 1987, 1130.

<sup>6</sup> Rogowski, 1987, 1130.

<sup>7</sup> Cabat (1971), Greenow (1979, 1980), Gudmundson (1983), Schwaller (1985), Levaggi (1986), J. Fisher (1990), y últimamente Jiménez-Pelayo (1991) y Burns (1991).

<sup>8</sup> Schwaller, 1985, 147. Bauer (1971) concluyó que la mayoría de las capellanías y obras pías estuvieron fundadas en gravámenes a la propiedad inmueble y no en donaciones en efectivo o en inmuebles, como comprueba Schwaller para la Nueva España del siglo XVI (Bauer, 1971, 78-82).

<sup>9</sup> como Greenow (1979,1980), Levaggi (1986), Fisher (1990) y últimamente Jiménez-Pelayo (1991).

<sup>10</sup> Levaggi, 1986, 19; y Fisher, 1990, 642. El mismo argumento ensayan para España Alvarez Vázquez (1978) y Sánchez González (1991).

<sup>11</sup> Bauer, 1983, 732.

<sup>12</sup> Lavrin, 1985, 38. Lamentablemente me ha sido imposible consultar el trabajo de Cervantes Bello (1986).

<sup>13</sup> Romano (1966).

<sup>14</sup> para México: Brading (1975), Morin (1979), Greenow (1980), Super (1983), Borchart de Moreno (1984) y Pérez Herrero (1988); para el Perú: Chocano (1982), Pérez Canto (1985), Brown (1986), Laviana Cuetos (1987) y Contreras (1990); para Chile: Mellafe (1959); para el Paraguay: Whigham (1991); y para el Río de la Plata: Müller (1987).

<sup>15</sup> Sin embargo, asimilar las operaciones de crédito privado del Antiguo Régimen a nuestras "monedas escriturales" actuales era, para Vilar (1969), imposible, si no se le tomaba con cautela. En el caso del crédito de venta, mutuo, o fiado, pese a ser endosable, no era convertible en circulante, según Vilar, por padecer de fecha de vencimiento, circular en cifras desmedidas, y no ser divisible o fraccionable. Al igual que hoy las tarjetas de crédito no son implementadas en las investigaciones que refutan la teoría cuantitativa del dinero, tampoco podríamos considerar para este propósito al fiado y las libranzas. No obstante, para autores como Flynn (1980), el padecer de fecha de vencimiento no le impedía al dinero escriturario convertirse en un circulante transitorio, que por la ley de Gresham desplazaba de la circulación doméstica en el mercado mayorista a la moneda metálica.

<sup>16</sup> En el caso particular de la Nueva España, de no haber estado acompañada por un proceso de proto-industrialización y por un incremento en la circulación del stock de moneda, la inflación de precios no se habría producido (Ouweneel y Bijleveld, 1989, 500).

<sup>17</sup> "...Estas operaciones de descuento, hechas a una determinada tasa de interés, deben haber alentado las importaciones de mercancías Europeas y de esclavos Africanos, la producción minera, la recolección de frutos (cueros y yerba) y la consiguiente salida al exterior de metal y de frutos de la tierra (cueros), así como afectado el monto de los capitales descontados en dichas cesiones de deudas. Los medios de pago no metálicos emitidos por particulares deben haber sustituido, en gran medida, al oro y plata en circulación" (Saguier, 1993c y 1994b). Con respecto a la llamada crisis del siglo XVII, Bakewell (1976) se preguntaba --sin alcanzar a vertebrar una respuesta-- para el caso de la Nueva España "...¿a que podía obedecer la discrepancia en la Balanza Comercial si la plata era el producto que más contribuía al equilibrio del comercio exterior de las colonias?". Para responder a su interrogante, Bakewell se formuló tres explicaciones hipotéticas. La primera: de que este comercio no hubiera decaído tanto en valor como en volumen; la segunda: de que con tan abundante plata a su disposición la Nueva España hubiere regresado a su antiguo sistema comercial pagando sus importaciones principalmente con metal precioso y menos con otros productos; y en tercer lugar: de que el incremento de las exportaciones de plata habría obedecido al aumento de las remesas oficiales de plata amonedada dirigidas a la corona y no al aumento de las remesas privadas destinadas a cancelar los adelantos de mercadería fiada en Cádiz (Bakewell, 1976, 319). Sin embargo, la respuesta habría que hallarla en el rol jugado por el crédito comercial.

<sup>18</sup> Goldstone (1984) sostuvo que el elemento clave del problema suscitado entre la población y la oferta monetaria eran las proporciones que resultaban de dividir la velocidad de circulación del dinero (V) por el volumen de bienes comercializados (T) y no la proporción entre la oferta de moneda (M) y el nivel general de precios (P) (Goldstone, 1984, 1141).

<sup>19</sup> ver Pastore, 1990, y 1991, 6.

<sup>20</sup> ver Pastore, 1990 y 1991.

<sup>21</sup> suerte de pasaporte interno requerido por los Alcaldes de Hermandad y los Jueces de Paz para autorizar a los habitantes, para circular de pago en pago, la cual perduró legalmente hasta Caseros.

<sup>22</sup> otorgadas por el Consejo de Gracia y Justicia del Consejo de Indias.

<sup>23</sup> ver Saguier, 1994c.

<sup>24</sup> ver Saguier, 1993i.

<sup>25</sup> los que se otorgaban en Buenos Aires a aquellos comerciantes que se internaban al interior del espacio colonial.

<sup>26</sup> por lo general peninsulares, o a comerciantes en viaje al lugar de residencia del deudor.

<sup>27</sup> por las que los cesionarios de cesiones de créditos se embarcaban en nuevas operaciones de cesión de créditos.

<sup>28</sup> El estado de este Archivo es lamentable, no tanto por las deficiencias físicas como por la incuria e ignorancia de sus actuales autoridades.

<sup>29</sup> De ahora en más identificado con las siglas AAC, cuyas copias en microfilm se hallan en el Centro de Historia Familiar perteneciente a la Genealogical Society of Salt Lake City, Utah, de la Granite Mountain Record, y en su filial de Buenos Aires ubicada en la sede-Archivo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días, también de ahora en más conocida con las siglas CHF.



## TOMO XI

### Capítulo 2

#### **El capital comercial y su influjo en las transacciones crediticias. Buenos Aires a comienzos del siglo XVII",**

(publicado en 1987 en el Anuario de Estudios Americanos [Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos], XLIV, 109-139; bajo el título: "Economic Impact of Commercial Capital on Credit Transactions: Buenos Aires in the Early Seventeenth Century", rescens. en Historical Abstracts [Sta. Bárbara, Cal.], v.40, part A, n.2, 1989, p.390; registrado en el HLAS, v.52, 1993, item 2295);

#### **Los ciclos comerciales porteños.**

Los ciclos comerciales de Buenos Aires fueron influenciados por factores externos e internos. Entre los primeros, estaba la demanda europea de plata libre de impuestos y la demanda brasilera de harina. Entre los últimos, las diferentes intensidades de producción de plata y provisiones, el grado en que los constreñimientos indirectos externos (las actividades de contrabando) eran enfrentadas por el estado colonial, y la cantidad de mano de obra disponible para el transporte de bienes. Estos factores económicos y políticos eran ocasionalmente fortalecidos por interrupciones, tales como desacuerdos entre los mercaderes de Lisboa y Sevilla, crisis económicas mundiales, políticas aduaneras, epidemias, violencia política, y rebeliones indígenas.

La paradoja de la América Latina colonial era que en los puertos de salida, tal como Buenos Aires, que drenaba más plata ilegal que cualquier otro, cada vez que había paz y el comercio ultramarino fluía tranquilamente, había escasez de metálico. Aún cuando había una interrupción del comercio exterior, la ciudad portuaria era plenamente abastecida con plata. De acuerdo al pensamiento mercantilista, una efusión de plata es comparable a una caída en un factor de producción y, vía incremento de la tasa de interés, tiene un gran impacto depresivo en la economía del país abastecedor. El efecto opuesto ocurre en el país que experimenta una afluencia de plata. Pero Buenos Aires, como la totalidad de Hispanoamérica, no sufrió un incremento en la cantidad absoluta de plata en circulación durante el siglo diecisiete, a causa de la permanente efusión de la misma hacia otros países

metropolitanos.<sup>1</sup>

### **Interrupciones del comercio exterior.**

Las interrupciones del comercio exterior fueron siempre resultado de la competencia metropolitana. Durante el período en que prevaleció la unión dinástica entre Portugal y España (1580-1640), las burguesías sevillana y lisboeta, comercialmente dependientes de Francia, Inglaterra, y los Países Bajos, lucharon competitivamente por la hegemonía del comercio colonial. Las ciudades de Cartagena y Buenos Aires, alternativamente, se convirtieron en los campos de batalla donde esta hegemonía era disputada. Cada vez que la trata de esclavos era conducida legalmente a través de Cartagena, una depresión comercial era sentida en Buenos Aires. Cuando esto sucedía, aquellos sectores económicos de Buenos Aires no vinculados a la trata intentaban incrementar su poder así como fomentar actividades económicas (proteccionismo y monopolio). A la inversa, cada vez que se suscitaban desacuerdos entre mercaderes sevillanos y lisboetas, Buenos Aires era elegida, ilegalmente, como el principal centro comercial, la interrupción del comercio exterior concluía, la tasa de interés y el costo de vida crecían casi espontáneamente, el desempleo disminuía, y aquellos sectores vinculados a actividades del mercado interno perdían poder frente a los intereses antimonopolísticos del "libre comercio".

### **Los períodos de guerra y paz.**

Los períodos de guerra y paz determinaban en gran parte el patrón de desarrollo mercantil. Cada vez que estallaba la guerra en el mar entre España y Portugal o entre Francia e Inglaterra, la compra a crédito disminuía, se disponían situados (subsidios) para propósitos militares, Buenos Aires perdía su rol como centro comercial, y el bloque en el poder (la alianza intra-colonial) se desgastaba. Cuando había amenazas directas externas de invasiones militares sobre Buenos Aires, los socorros (tropas) eran enviados al puerto desde las norteñas provincias de Santa Fé, Córdoba, Tucumán y Paraguay.<sup>2</sup> Los mercaderes coloniales, como resultado de las grandes caídas en las tasas de interés a causa de los constreñimientos directos externos (el peligro de invasiones extranjeras), estimulaban el crédito hipotecario. Cuando se alcanzaba la paz entre ambas potencias metropolitanas, los constreñimientos indirectos externos (las actividades de contrabando) eran reactivados, se reanudaba la venta a crédito, el crédito hipotecario disminuía, y el porcentaje de prestatarios sobre prestamistas se aceleraba. Buenos Aires se convertía nuevamente en un centro comercial y la alianza de clases mercantil se reconstituía. Asimismo, los constreñimientos internos (las guerras indígenas y las rebeliones) no eran ajenos a la existencia de los pobladores de Buenos Aires. Mientras las guerras araucanas en Chile y el peligro de invasiones exteriores tuvieron un impacto positivo sobre la economía agraria de Buenos Aires, las rebeliones de los indios calchaquies y de los pampas causaron, respectivamente, una caída de los envíos de ganado al Alto Perú y de las vaquerías en la pampa.

Sin embargo, las principales interrupciones eran causadas por constreñimientos directos externos (las guerras por mar y el peligro de invasiones externas) y por políticas aduaneras fuertemente represivas. Una vez que se declaraban las guerras, la cotización mundial del riesgo del mar se duplicaba casi inmediatamente. No valía la pena enviar a las colonias un barco a tal precio. Más y más mercaderes eran obligados a asegurar sus barcos sólo parcialmente, o sólo el barco y no la carga, o aún a renunciar al seguro por completo y depender de la velocidad y de la fortuna para proteger su inversión. Los precios de las mercancías reflejaban rápidamente este hecho. Tan pronto como las noticias sobre declaración de guerra de España llegaban a Buenos Aires, o a algún otro puerto

hispanoamericano, los mercaderes procedían a acaparar todos los productos españoles metropolitanos que permanecían en el puerto como un negocio especulativo que avizoraba una gran demanda y exorbitantes precios.<sup>3</sup> La mercadería europea se convertía en extremadamente escasa y la plata era acumulada en enormes sumas líquidas. Los especuladores en España y los mercaderes extranjeros en Buenos Aires trataban de mantener y, si era posible, incrementar el alza de precios en el mercado de bienes o, en otras palabras, sobrevaluaban las importaciones y subvaluaban las exportaciones. La mercadería era mantenida fuera del mercado durante el mayor tiempo posible con el fin de incrementar su precio. Pero para poder retener la mercadería, era necesario el uso del crédito, que resultaba a su vez en un incremento de la tasa de interés.<sup>4</sup>

Desde 1593 a 1640, la expansión de la venta a crédito fue principalmente determinada por la naturaleza de la trata de esclavos, tanto en Angola como en la travesía por mar, y por el grado de los constreñimientos externos e internos (las invasiones extranjeras y las políticas proteccionistas). Por un lado, cada vez que el abastecimiento de mano de obra esclava en las ferias de esclavos africanas disminuía, la trata de esclavos atlántica decrecía. Asimismo, cada vez que ocurría un desacuerdo entre los mercaderes sevillanos y los lisboetas, concluyo que Buenos Aires debe haber sido elegida como el destino del contrabando de esclavos y, consecuentemente, tanto las transacciones en efectivo como las crediticias se expandían.<sup>5</sup> Cuando se alcanzaba un acuerdo en el centro metropolitano, la trata legal penetraba en Cartagena y de este modo, socavaba la venta a crédito en Buenos Aires. Por otra parte, cada vez que las políticas proteccionistas eran vulneradas por medidas de "libre comercio", las actividades comerciales se expandían. Contrariamente, cada vez que las políticas proteccionistas se fortalecían con medidas represivas, la trata de esclavos se contraía.

El crédito puede haberse expandido en el primer ciclo de este periodo desde 1593 a 1598. Aunque carecemos de evidencia notarial para este periodo, la correspondencia comercial entre dos comerciantes en la decada de 1590 nos revela que la presencia de comerciantes Portugueses procedentes de Brasil a traves de Buenos Aires socavaban el rol de Santiago de Chile como mercado redistribuidor para las importaciones del Tucuman.<sup>6</sup> Corroborando este periodo, los registros de la Casa de Contratacion en Sevilla declaraban que un total de 1.020 esclavos del asiento de Pedro Gómez Reinel, un comerciante monopolista Portugués, fue específicamente registrado para Buenos Aires. El comerciante Manuel Machado actuó como un agente comercial o consignatario de este Asentista en Buenos Aires.<sup>7</sup> En 1599, Gómez Reinel fue procesado por fraude y renunció el asiento a favor de la corona, causando un profundo colapso en las transacciones crediticias.<sup>8</sup>

Cuando Hernandarias asumió la gobernación de Buenos Aires en 1603, comenzó a perseguir el comercio ilegal. Mientras que en 1592, 22 navíos arrivaban a Buenos Aires, en 1603, Hernandarias le escribió al Rey en un estilo jactancioso que solo una docena de navios habían arribado.<sup>9</sup> El resultado lógico debió haber sido un profundo debilitamiento del sistema crediticio. Dos años más tarde, en 1605, debido al tratado de asiento firmado por la corona con el asentista Gonzalo Vaez Coutinho, las transacciones crediticias se expandieron. El crédito total saltó de \$6.565 en 1603, a \$43.693 en 1605, y \$43.480 en 1606, totalizando \$91.000 (ver Tabla 1). Las importaciones de mercaderías crecieron de \$9.398 en 1603, a \$34.812 en 1604, y \$51.695 en 1605, totalizando \$96.000 por el período de tres años (ver Tabla 2). Entre 1603 y 1605, alrededor de 2.600 esclavos valuados en \$182.000 fueron importados.<sup>10</sup> Contrastando las cifras crediticias totales con el monto de las importaciones totales revela que el 27% de todas las importaciones fueron adelantadas a crédito mientras que el 73% deben haber sido necesariamente operadas en efectivo, y presuntamente con plata sin sellar o ilegal.

De resultas de esta expansion de las operaciones crediticias, otras actividades económicas fueron afectadas. La Tabla 3 sugiere una correlación directa entre el incremento de barcos arribados, barcos que fueron vendidos, importaciones de esclavos, y embarques de carretas para los años 1604-1607. De los 34 barcos que entraron a Buenos Aires en dicho período, ocho barcos por valor de \$6.500 fueron vendidos en el mercado de navíos. Dichos barcos descargaron 2.993 esclavos valuados en \$200.000. La mayoría de los esclavos fueron reembarcados en carretas directamente al Alto Perú y a Chile. Aunque 375 esclavos cambiaron de amo en Buenos Aires, fueron adquiridos también con el propósito de introducirlos al Alto Perú y a Chile. Algunos de los esclavos que fueron adquiridos en Buenos Aires fueron embarcados al Alto Perú en 90 carretas por Antonio de Avila, Geronimo Luis de Cabrera, y Alonso Díaz Caballero, todos residentes en la ciudad de Córdoba.<sup>11</sup> El ciclo expansivo en transacciones crediticias alcanzó su crisis en 1607 cuando la Junta de Negros en Sevilla decidió cancelar el asiento de Gonzalo Vaez por no haber abonado las fianzas que habia prometido.<sup>12</sup> El comercio con provincias interiores fue tambien afectado por la Real Cédula de Ampudia emitida por el Rey en 1606 prohibiendo la exportación de trigo y harina de la provincia de Tucumán a Buenos Aires.<sup>13</sup> De resultas de esta prohibición, Buenos Aires reemplazó a Córdoba como mercado redistribuidor para las importaciones del Tucumán. Finalmente, el comercio fue severamente dañado por las rebeliones indígenas. En 1607, una flota de navíos viajando al Paraguay fue atacada por indios Charrúas.<sup>14</sup>

Por un lado, de resultas de la negativa de la corona española en 1611 a renovar el asiento con el asentista Portugues Gonzalo Vaez Coutinho, concluimos que una gran porción del comercio esclavo que previamente circulaba legalmente a traves de Cartagena comenzó a ser canalizado ilegalmente a través de Buenos Aires. Por otro lado, las ferias esclavas en Angola en 1614, de acuerdo con el Gobernador de Angola Bento Banha Cardoso, estaban floreciendo.<sup>15</sup> Como ilustra la Tabla 1, el crédito de venta en Buenos Aires se elevó de \$5.762 en 1610, a \$36.836 en 1613, totalizando \$137.000 en los años 1610-1613. Consecuentemente, el crédito de compra para adquirir esclavos en Africa se incremento nuevamente en 1613-15 (Tabla 2). La mayor parte del crédito adelantado era para la venta de esclavos: \$27.604, o el 76% del crédito de venta, transferido en 1613, y \$47.259. o el 80% del crédito de venta, transferido en 1614, era para operaciones con esclavos. Las cifras precedentes sugieren que el crédito de venta decreció con respecto al período 1603-06, disminuyendo 8 puntos de porcentaje, de 27% en el período 1603-06 a 19% en 1610-15. Doce barcos sobre 68 navíos arribados a Buenos Aires desde 1610 hasta 1615 fueron revendidos. Los propietarios de esclavos pagaron fianzas por 2.782 esclavos, 67 carretas fueron fletadas, y 80 indios fueron alquilados (ver Tabla 3). Estas cifras corroboran la correlación directa entre el incremento de barcos arribados, la venta de barcos, los esclavos importados, las carretas fletadas, y los indios contratados.

Los comerciantes que llevaban esclavos al Alto Perú se endeudaron para pagar peajes fiscales por 2.782 esclavos. De resultas de sus ventas, los comerciantes de esclavos ganaron, durante este período, alrededor de \$1.700.000. Sus enormes ganancias terminaron abruptamente, sin embargo, en 1615 cuando se firmó un nuevo asiento con el Portugués Fernandez d'Elbas.<sup>16</sup> El comercio esclavo legal paso de nuevo a través de Cartagena, mientras en Buenos Aires el Gobernador Hernandarias ocupó el poder por tercera vez y comenzo a procesar a los contrabandistas Portugueses. El numero de barcos arribados disminuyó de doce en 1615 a tres en 1616. Las importaciones cayeron dramáticamente, disminuyendo de \$134.392 en 1615 a \$42.067 en 1616 (ver Tabla 2). El crédito de venta declinó aun mas, cayendo de \$41.484 en 1615 a \$2.875 en 1616 (ver Tabla 1). Pero aun si un acuerdo entre ambas Lisboa y Sevilla no había concluido o Hernandarias no hubiera asumido el poder, las importaciones de esclavos en Buenos Aires deben haber caído abruptamente, por cuanto en 1616 las tasas de riesgo de mar se catapultaron a raíz de la captura de 16 navíos portugueses por los

Holandeses en alta mar.<sup>17</sup> Además, aún cuando las tasas de riesgo de mar no se hubieren incrementado tan drásticamente, las importaciones de esclavos en Buenos Aires debían haber disminuído drásticamente por cuanto en 1617, de acuerdo con el nuevo Gobernador de Angola Luis Mendes de Vaconcelos, las ferias de esclavos en Angola "...casi cesaron de funcionar por falta de esclavos",<sup>18</sup> presumiblemente debido a la fructífera competencia que los Holandeses fueron capaces de desarrollar mediante recursos militares.

Por segunda vez, comenzando en 1618, a Buenos Aires le fue permitido comprometerse en su propia clase de comercio limitado. Debido a la enorme presión ejercida sobre la corona por los intereses del comercio esclavo, en 1618, Felipe III le dió a Buenos Aires una gobernación autónoma del Paraguay, permitió al asentista Portugués Fernandez d'Elbas embarcar a Buenos Aires 450 esclavos en un trienio, y autorizó un permiso especial mediante el cual en un período de tres años dos barcos zarparían anualmente de Sevilla a Buenos Aires, cargados con mercadería Europea que no excediera de dos toneladas cada uno.<sup>19</sup> Simultáneamente, Hernandarias tuvo que retirarse de la gobernación sucediéndolo Diego de Góngora. Con el advenimiento de Góngora como gobernador en 1618, el contrabando resucitó. El número de navíos arribados a Buenos Aires creció de uno en 1618 a diez en 1619. Las importaciones y el crédito crecieron. De acuerdo con la Tabla 1, el crédito de compra y de venta se expandió de \$4.010 en 1617 a \$26.546 en 1619 y totalizó \$181.000 para los años 1617-19. Estas cifras indican que el 80% de las importaciones fueron obtenidas mediante efectivo y solo el 20% mediante el crédito.

Tan pronto como los Españoles descubrieron que la Tregua de los Doce Años (1609-1621) fracasó en detener el contrabando Holandés con sus colonias americanas, el conflicto comercial con Holanda dió lugar al estallido de la Guerra de los Treinta Años (1618-48) entre España y los Países Bajos. Con el estallido de la Guerra en la década de 1620, el comercio esclavo del Atlántico recayó en el caos. Es muy difícil de seguir los movimientos clandestinos entre el gobernador, el cabildo y los comerciantes nativos y extranjeros en esos años. Cada uno de los mismos llevaba un interés propio. Aunque la producción de plata en el Alto Perú en 1620-21 no se incrementó, las remisiones oficiales de plata desde Lima a España se redujeron abruptamente (alrededor del 50%).<sup>20</sup> Por supuesto, toda la culpa recayó en la conducta de Buenos Aires (Tabla 5). Desde 1621 hasta que Lima decidió --de resultas del creciente contrabando holandés-- intervenir en la gobernación de Buenos Aires en 1624, la actividad comercial legal e ilegal en Buenos Aires alcanzó el punto más alto del siglo. El monto de las importaciones legales en Buenos Aires era aproximadamente el 3.4 % de la producción anual de plata registrada en Potosí (la mitad del monto de remesas Reales de plata que Perú envió directamente a España a través de la flota de Portobelo) (ver Tabla 5). Pero el monto total de las importaciones (incluyendo las importaciones ilegales) pueden haber alcanzado, en su punto más alto (1600-25), como máximo el 25% y como mínimo el 15% de la producción total de plata del Potosí.<sup>21</sup> Esta es la razón por la que el mercado minero Alto Peruano mantuvo una influencia directa aún en el monto y la naturaleza de la mercancía importada a través de puertos como Buenos Aires, localizados a distancia tan lejana de los yacimientos de plata.

Durante los años 1619-24, una amarga lucha se entabló en Potosí entre el vecindario Vasco, usualmente mineros, y los Vicuñas, denominación que alcanzaba a la facción integrada por peninsulares no vascos, comunmente no vinculados directamente con las actividades mineras. Esta lucha significó tal sangría que los esclavos africanos fueron requeridos para la tropa de los ejércitos privados. Por esta alta demanda de esclavos, vemos de nuevo en Buenos Aires una correlación muy estrecha entre los esclavos importados y fiados, barcos arribados y vendidos, carretas fletadas al Alto Perú, e indios alquilados. Sobre 60 barcos que entraron en ese período, 23 barcos fueron vendidos,

4.366 esclavos fueron importados, 60 carretas fueron fletadas, y 370 indios fueron alquilados (ver Tabla 3). Las importaciones, de acuerdo con la Tabla 2, se elevó de \$31.574 en 1618 a \$136.115 en 1619 y totalizó \$863.000 para el período 1619-24.

La mayor parte del crédito de venta otorgado implicaba operaciones de esclavos. Entre 1621 y 1624, 472 esclavos valuados en \$87.000 fueron comercializados y 82 esclavos valuados en \$15.000 fueron transferidos (ver Tablas 1 y 2). El resto de la mercancía adelantada a crédito consistió en provisiones tales como vino Portugués y azúcar Brasileiro, textiles para la indumentaria y hierro para las refinerías mineras del Alto Perú.

De resultas de haber conferido la corona española en 1624 un nuevo asiento para el tráfico de esclavos en el Portugués Manuel Rodríguez Lamago, que como siempre pasaba por Cartagena, los barcos que arribaban a Buenos Aires cayeron de 18 en 1623 a 2 en 1624.<sup>22</sup> El crédito de venta declinó también, cayendo en la mitad, de \$26.647 en 1623 a \$14.143 en 1624, antes de llegar al mínimo en 1625 con \$2.293, un monto menor a un décimo de la cifra de 1623. Las importaciones sufrieron, también, cayendo de \$108.028 en 1623 a \$8.105 en 1624 (ver Tablas 1 y 2). Como uno de los resultados de esta temporaria crisis comercial el rol económico de ciertos mercados de las provincias interiores experimentaron un cambio drástico. En 1625, Santiago de Chile recobró de las manos de Córdoba la función perdida en 1593 como mercado redistribuidor de las importaciones Tucumanas.<sup>23</sup>

Muy pronto, en 1625, una vez que la recaptura de Bahía fue lograda y Pérez de Salazar dejó la gobernación, retornando a Charcas luego de dos años de servicio, el nuevo Gobernador Francisco de Céspedes, se complotó con Antonio de Oliveira Cadornega, asistente del Asentista Manuel Rodríguez Lamago, permitiendo a los contrabandistas Portugueses comprometerse de nuevo en el comercio ilegal.<sup>24</sup> De 1626 a 1632, 44 barcos y 1.814 esclavos valuados en \$253.960 llegaron a Buenos Aires. El Gobernador Céspedes apoyó el tráfico sobre la base que la prohibición general de exportar plata causó un gran daño a las provincias del Río de la Plata. Sin la permisión de exportar plata, la población de Buenos Aires no podía sostenerse por sí misma, aun si comerciaban con Sevilla.<sup>25</sup>

Una vez que el Atlántico Sud estuvo transitoriamente libre de la amenaza Holandesa, el mar Caribe devino el punto focal del conflicto marítimo. En 1628, la entera flota de galeones española fue abordada por los Holandeses, provocando también que las tasas de seguro marítimo se dispararan. De resultas de este gasto agregado en los costos del flete marítimo, los comerciantes de esclavos comenzaron a preferir las rutas marítimas del Atlántico Sud mas que aquellas del mar Caribe.

Tan pronto como un nuevo asiento fue asignado por la corona al hermano de Felipe IV, el Infante Fernando, arzobispo de Toledo, en 1631, el comercio esclavo resurgió. Inmediatamente el arzobispo vendió el asiento al comerciante genovés Nicolás Salvago.<sup>26</sup> Esta venta fue contratada con la peculiaridad que --como resultado de las hostilidades marítimas causada por la Guerra de los Treinta Años-- en lugar de estar obligados a llevar los esclavos a Cartagena a través del Caribe, debían ser embarcados a Buenos Aires a través del Atlántico Sud, una ruta marítima mucho más segura.

Al mismo tiempo, un cambio tuvo lugar en Buenos Aires, debido a la erosión política del Gobernador Céspedes, provocada por su comportamiento nepótico, que amenazaba la hegemonía del bloque en el poder. Un nuevo Gobernador, el General Pedro Estéban Dávila, asumió el cargo. Dávila era un guerrero corrompido por las miserias de la Guerra de los Treinta Años. Como secuela de este cambio político y económico, las relaciones políticas con los remanentes de la facción Confederada (compuesta esencialmente de contrabandistas) mejoraron radicalmente, consolidando el bloque en el

poder.<sup>27</sup> El uso del crédito en Buenos Aires se incrementó y las importaciones de esclavos del Africa occidental y la inmigración de mano de obra indígena procedente de las provincias interiores revivió. Las importaciones se elevaron de \$19.579 en 1629 a \$31.598 en 1630, totalizando \$213.000 en todo el período (ver Tabla 2). El volumen del crédito de venta saltó de \$2.570 en 1628 a \$46.683 en 1631, totalizando \$158.000 para el período 1631-37 (ver Tabla 1). De igual manera, el crédito de compra para las operaciones de adquisición de esclavos en Africa también se expandió en la década del 30. En Buenos Aires, durante esta década, siete propietarios de naves tomaron prestado un total de \$65.000 para este propósito (ver Tabla 4). También en este período, como muestra la Tabla 3, se dio una correlación muy estricta entre los esclavos importados y fiados, las carretas fletadas, y los indios alquilados. Durante estos años, un total de 1.432 esclavos fueron importados, 32 carretas fueron fletadas a Chile y el Alto Perú, y 348 indios fueron alquilados para llevar los esclavos.

El ciclo expansivo en las transacciones crediticias alcanzó otra crisis en 1634 luego que Pernambuco fue temporariamente tomado por los Holandeses. Como lo ilustra la Tabla 2, las importaciones de esclavos cayeron drásticamente, decreciendo de \$28.826 a \$7.240, o el 75%. El crédito de venta en Buenos Aires también declinó a una tasa similar, cayendo de \$49.204 en 1633 a \$12.536 en 1634 (ver Tabla 1).

Durante la gobernación de Dávila, debido a una mucho más homogénea política que no intentó romper el bloque en el poder, el contrabando y la corrupción de los funcionarios públicos alcanzaron niveles increíbles. Asumiendo que las políticas financieras seguidas en el pasado por los comerciantes procedentes del Alto Perú y de Chile fuera continuada, se concluye inevitablemente que la corona debió haber sufrido un fraude tremendo. Si, de acuerdo a mis previos cálculos, mostrados en las Tablas 1 y 2, el 20% de la mercancía importada fue comprada a crédito, casi un millón de pesos en mercancías deben haber sido importadas. Sin embargo, los funcionarios aduaneros declararon solo \$213.000. El 33% de los gravámenes aduaneros fueron defraudados. Más tarde, en 1639, para evadir el fraude aduanero, el Visitador Juan de Palacios, enviado por la Real Audiencia de Charcas, emitió un acuerdo para reducir el precio fiscal de cada esclavo de más de 15 años de edad desde \$70 a \$57,6 incrementando así los ingresos Reales.<sup>28</sup> La decisión de Palacios para disminuir la valuación fiscal del esclavo estimuló el tráfico esclavo.

Desde que un gran número de licencias quedaron disponibles del último asiento administrado por el Arzobispo de Toledo un par de transacciones alrededor de estas licencias tuvieron lugar en España. Estas licencias fueron primero adquiridas por Martín Alfonso de Atayde quien, al mismo tiempo, las vendió en 1638 a Nicolás Salvago.<sup>29</sup> Como resultado del comercio desatado por estas licencias en el período 1640-42, el valor de los esclavos importados alcanzaron \$64.338, el crédito de venta alcanzó \$175.275, y el monto de esclavos para los cuales los gravámenes Reales fueron pagados se elevó a \$1.660.

Sin embargo, a pesar de este boom comercial, las rutas comerciales para el tráfico esclavo durante la década de 1630 y comienzos de la de 1640 cambiaron debido a la gran rebelión Calchaquí.<sup>30</sup> Comerciantes como Cristóbal de Ahumada, Manuel Gómez, Juan Jofré de Arce, Francisco Núñez de Villoldo, Felipe Ramírez de Arellano y Luis de Toro Macote se comprometieron en el comercio esclavo de larga distancia con Lima a través de los Andes.<sup>31</sup>

Esta larga y próspera situación se revirtió en 1642 cuando el Gobernador Gerónimo Luis de Cabrera, el yerno de Hernandarias, tomó el poder y comenzó, debido a la Guerra de Independencia del Portugal contra la dominación española, a procesar comerciantes Portugueses. Como resultado, las

importaciones se desplomaron de \$49.750 en mercancías en 1641 a \$1.853 en 1642. El crédito de venta cayó de \$94.445 en 1640 a \$14.582 en 1641. El número de carretas fletadas cayó de 24 en 1640 a 7 en 1641. Las importaciones de esclavos y los conciertos de indios también experimentaron una caída. En 1641, el último año próspero de este ciclo, los esclavos legalmente importados montaron a 175 y los indios bajo concierto alcanzaron a 21 (ver Tabla 2).

El siguiente período de crisis comerciales, sin embargo, no fue un constante período de estancamiento. En 1648 y 1649, aunque la producción de plata en los yacimientos Altoperuanos experimentaron una repentina y corta recuperación, gracias a un incremento en las importaciones de azogue (mercurio), las públicas remesas de plata de Lima a España fueron cortadas a la mitad. En efecto, mientras los gravámenes por esclavos pagados a la Cajas Reales de Potosí se elevaron de \$551.034 pesos ensayados de 450 maravedies en 1647 a \$694.659 pesos en 1648, y \$661.200 pesos en 1649, o un incremento de corto plazo del 25%, las públicas remesas de plata de Lima a España decrecieron de \$1.800.000 en 1647 a \$956.000 en 1648.<sup>32</sup>

Este repentino incremento en la producción de plata mas los continuos fraudes en la ceca de Potosí, y el creciente contrabando de plata a través de Buenos Aires generó en esta última un proceso inflacionario de corto plazo. En 1652, el ensayista de la ceca de Potosí fue hallado culpable de defraudar a la corona por un monto superior a los \$472.000.<sup>33</sup> Debido a estos vastos fraudes, el Virrey de Lima, Conde de Salvatierra, ordenó en Septiembre de 1652 la ejecución de la Real Orden de octubre de 1650, que habia establecido una reacuñación de la moneda de plata valuada en 7 1/2 reales por peso y simultáneamente una reacuñación de la moneda de plata devaluada en seis reales por peso.<sup>34</sup> Para los consumidores, esta regulación significó una pérdida equivalente al 25% del poder de compra del dinero. Estuvo puesta en efecto por ocho meses, de septiembre de 1652, y durante ese tiempo fue responsable de un increíble fraude practicado por el Gobernador Lariz. Lariz, de acuerdo con Levene, ocultando la Real Pragmática, fue capaz de beneficiarse de la diferencia entre ambas monedas. Finalmente, como los acreedores se rehusaron a aceptar monedas envilecidas en pago por deudas pasadas, el Presidente de la Audiencia de La Plata (o Charcas) fue obligado a poner en vigor la circulación de las nuevas monedas de plata.<sup>35</sup> Como una inmediata salida de estas políticas inflacionarias, los ahorros en Buenos Aires se desviaron desde un campo incierto pero de una alta tasa de interés como los préstamos personales, a un campo más seguro pero de más bajas tasas de interes como el crédito hipotecario rural. De repente, como resultado de un incremento del 25% en la renta hipotecaria surgida de la aplicación de la Real Pragmatica en 1652, el monto total del dinero prestado a traves de hipotecas alcanzó los \$5.507.<sup>36</sup>

El efecto neto de las actividades de los funcionarios de la ceca volcados al fraude fue también la de volver las importaciones de la Europa Occidental muchos más costosas en términos de esta inferior moneda. Los comerciantes que exportaban al área, los que aspiraban a retornar a su país con similares ganancias tenían que recaudar mas cantidad de la moneda envilecida, que la que lograban antes del fraude. Los comerciantes que exportaban a Buenos Aires fueron forzados a elevar sus precios. La reducción del poder de compra de Buenos Aires fue inevitablemente acompañado por una reducción en la demanda. De igual manera, de resultas de la circulación forzada de esta nueva moneda, una ola de quiebras asolaron Sevilla, Madrid y Toledo en 1655, para detrimento de una gran cantidad de frágiles comerciantes que habían atesorado la moneda fraudulenta.<sup>37</sup> De los tres Maestres de Plata que se declararon en quiebra en Sevilla en 1655, dos buscaron refugio en Lisboa y el otro fue encarcelado en Sevilla. El caso más famoso fue la quiebra de Domingo Ipeñarrieta, el Maestre de Plata de la flota del General Mencos.<sup>38</sup>



Resumiendo, reconocemos en la primer parte del siglo, seis períodos de expansión, seguidos de cinco crisis cortas. Los primeros dos períodos de expansión tuvieron lugar cuando los contratos de asiento para el tráfico esclavo fueron firmados por el Rey de España y las medidas represivas anti-intérlopes fueron removidas. Esto ocurrió en 1593-98 y 1605-06. El tercer período de expansión (1613-15) resultó no solo del fracaso de los comerciantes de Lisboa y Sevilla para alcanzar un acuerdo en el negocio del asiento sino también del hecho que el gobierno de Buenos Aires estaba siendo conducido por intereses orientados hacia el mercado externo. Los tres últimos períodos de expansión ocurrieron debido a los asientos y registros contratados específicamente para llevar esclavos y mercancía Europea a Buenos Aires. Ellos cubrieron los años 1619-23, 1631-36, y 1640-42. Y las crisis económicas ocurrieron en Buenos Aires siempre y cuando ambas burguesías mercantiles de Sevilla y Lisboa alcanzaban un acuerdo para conducir el tráfico esclavo por Cartagena o duras políticas proteccionistas eran ejecutadas por las autoridades coloniales de Buenos Aires, como en 1608-10, 1615-18, y 1624-30. También ocurrieron cuando las fuentes Africanas que proveían con esclavos estaban exhaustas, o cuando los asientos contraidos específicamente para transportar esclavos a Buenos Aires expiraban, como en 1637-39, o cuando los constreñimientos externos directos amenazaban las rutas del Atlántico Sud, como en 1616, 1634 y 1637.

## NOTAS

<sup>1</sup> Schumpeter, 1954, 314.

<sup>2</sup> Molina, 1948, 117-118; Cervera, 1907, I, 352; Peña, 1916, 9, 12 y 44; y Garretón, 1933.

<sup>3</sup> Hamnet, 1971, 117.

<sup>4</sup> Hilferding, 1960, 301.

<sup>5</sup> Bowser, 1974, 35.

<sup>6</sup> Assadourian, 1983, 72.

<sup>7</sup> Vila Vilar, 1973, 585.

<sup>8</sup> Otte y Ruiz-Burruecos, 1963, 3-31; y Lapeyre, 1967.

<sup>9</sup> Coni, 1941, 94.

<sup>10</sup> Vila Vilar, 1973, 587.

<sup>11</sup> AGN, v.2, f.2031v., 3.013v., y 3.011v.; y v.3, f.17, 116, 154, 268v., 272, 502v., y 515v.

<sup>12</sup> Vila Vilar, 1973, 568.

<sup>13</sup> Gelman, 1983, 139; Torres, 1984, 68.

<sup>14</sup> Acuerdos, I, 203, 395 y 398.

- <sup>15</sup> Birmingham, 1966, 83.
- <sup>16</sup> Bowser,, op. cit., 36.
- <sup>17</sup> Canabrava, op. cit., 150.
- <sup>18</sup> Birmingham, op. cit., 85.
- <sup>19</sup> Scheuss de Studer, 1958, 93.
- <sup>20</sup> Ver Tabla 5, y Bakewell, 1975, Tabla 1.
- <sup>21</sup> Lynch, 1969; Cross, 1978, 154.
- <sup>22</sup> Bowser, op. cit., 33.
- <sup>23</sup> Assadourian, Chile y el Tucuman, 75.
- <sup>24</sup> Canabrava, op. cit., 147. Cadornega devino luego en el Cronista de la historia Angoleña, escribió en 1680 la Historia Geral das guerras angolanas.
- <sup>25</sup> Levene, 1962, 177.
- <sup>26</sup> Scheuss de Studer, op. cit., 95.
- <sup>27</sup> Peña, Don Francisco de Cespedes...
- <sup>28</sup> Acuerdo para el manifiesto de esclavos que hizo el Visitador Juan de Palacio en 5 de mayo de 1639, Documento n.52, Registro Estadístico de Buenos Aires, 1866, t.II, p.56.
- <sup>29</sup> Scheuss de Studer, op. cit., 97.
- <sup>30</sup> Para el Gran Alzamiento, ver Montes, 1959, 81-159; y Fortuny, 1966.
- <sup>31</sup> ver Banco de Datos del comercio esclavo.
- <sup>32</sup> ver Tabla 5 y Bakewell, op. cit., Tabla 1.
- <sup>33</sup> Lohmann Villena, 1976, 579-639.
- <sup>34</sup> AGN, v.23, f.333v.; y v.30, f.394.
- <sup>35</sup> Garcia, La Ciudad Indiana,
- <sup>36</sup> ver Saguier, 1982, Tabla 36.
- <sup>37</sup> Silva, 1965, 143.

<sup>38</sup> Dominguez Ortiz, 1979, 813.

## TOMO XI

### Capítulo 3

# **El mercado de mercancías y su comportamiento cíclico. El rol del crédito mercantil en el dinamismo de los mercados (siglo XVIII).**

\* versión mejorada del trabajo publicado en la Revista Complutense de Historia de América, 1993, 19, 149-194; y de la ponencia presentada en las II Jornadas de Estado, Sociedad y Economía en el Mundo Colonial, organizadas por el Centro de Estudios de Historia Americana Colonial (Universidad Nacional de La Plata) y el Centro de Estado y Sociedad (CEDES), celebradas el 19 y 20 de agosto de 1993 en el Museo Roca (Buenos Aires). Presentado para su publicación al Anuario IEHS (Tandil, Argentina: Universidad Nacional del Centro),

\*\* El autor agradece al Profesor Ricardo D. Salvatore por los comentarios y sugerencias hechas a una previa versión de este manuscrito.

La abrumadora presencia de capital comercial y de comerciantes peninsulares en el Buenos Aires dieciochesco, sumado a las crónicas crisis comerciales, acentuó el proceso de diferenciación social, desestabilizó la sociedad colonial, multiplicó la demanda de crédito, y condicionó el desarrollo de una vía mercantil de extracción del excedente (operaciones crediticias) en perjuicio de las vías eclesiásticas y fiscales. Por el contrario, la escasez de capital comercial y de comerciantes en el Nordeste y el Noroeste del antiguo Virreinato del Río de la Plata congeló la estructura de la sociedad colonial y determinó que el peso de la extracción del excedente económico recayera en las vías eclesiásticas y fiscales, en perjuicio de las vías mercantiles de extracción del excedente.

Si tomamos el plano de la circulación (comercio) como corte central de las crisis económicas, tal como lo pretendió Levene (1952) para el Río de la Plata del siglo XVIII y Prado Junior (1961) para el Brasil de igual siglo, las depresiones que seguían a las euforias económicas o procesos inflacionarios de mediados del siglo XVIII habrían sido consecuencia del incremento y caída del comercio exterior.<sup>1</sup> Pero las crisis cíclicas no eran producto de la escasez de metálico como lo sugiriera Hamilton (1934), o a la caída demográfica tal como lo sugirieron Borah (1949) y Chaunu (1963), o a la creciente auto-suficiencia de las colonias, como lo sostuvo Lynch (1969), o a la baja tendencial de la tasa de ganancia --que habría resultado del aumento de la composición orgánica del capital minero-- porque simplemente el capital minero apenas si había modificado su composición orgánica.<sup>2</sup> Siguiendo la

Teoría Cuantitativa del Dinero y fundados en Hamilton (1934), autores como Mauro (1964), Chaunu (1969) y Carmagnani (1975) sostuvieron que las crisis comerciales en las colonias carecerían de motivaciones propias referidas a la geología del Cerro y al comportamiento del mercado interno colonial, y serían más bien producto de la caída de la demanda Europea de metálico.

En su lugar, Bernal (1992) sugiere fundado en las fuentes estadísticas que brinda Schumpeter (1960), y en las obras de Dermigny (1964), Vilar (1969), Boxer (1969), y Brading y Cross (1972) que dichas crisis fueron producto de los desequilibrios de la paridad oro-plata y de la caída relativa de la demanda Inglesa de metal plata en favor del oro brasileño.<sup>3</sup> Como bien lo señala Bernal (1992), Chaunu probó sus hipótesis preocupándose por el ritmo del tráfico, y el nombre de los barcos y de los maestros; y García Baquero (1977), para justificar su seguimiento de la metodología de Chaunu, subrayó la imposibilidad física de cuantificar las escrituras de riesgo marítimo.<sup>4</sup> En el análisis de las discrepancias (déficits y superávits) del comercio exterior, Bakewell (1976) se preguntaba para el caso de la Nueva España del siglo XVII ¿a que podía obedecer la discrepancia en la Balanza Comercial si la plata era el producto que más contribuía al equilibrio del comercio exterior de las colonias?. Para responder a su propio interrogante, Bakewell se formuló tres explicaciones hipotéticas: la primera: de que este comercio no hubiera decaído tanto en valor como en volumen; la segunda: de que con tan abundante plata a su disposición la Nueva España hubiere regresado a su antiguo sistema comercial pagando sus importaciones principalmente con metal precioso y menos con otros productos; y en tercer lugar: de que el incremento de las exportaciones de plata habría obedecido al aumento de las remesas oficiales de plata amonedada dirigidas a la corona y no al aumento de las remesas privadas destinadas a cancelar los adelantos de mercadería fiada en Cádiz.<sup>5</sup>

Pero en Europa, para Spooner (1972), Meuvret (1974), Van der Wee (1977) y Miskimin (1975, 1979), el crédito es el que vino a sustituir a la moneda metálica en momentos de crisis. Y en América Latina, Mellafe (1959), Brading (1975), Morin (1979), Greenow (1980), Super (1983), Borchart de Moreno (1984), Müller (1987), Saguier (1987) y Pérez Herrero (1988) sostuvieron, a diferencia de Romano (1966), que en el pasado colonial rigió una intensa reciprocidad crediticia que aceleraba la rotación del circulante, reflejada en las cartas de poder en causa propia, el fiado o crédito de venta, las libranzas y las cesiones de crédito.<sup>6</sup> Y en el Río de la Plata, L. Johnson (1990, 1992) y Saguier (1991), también en contraste con Romano (1963), sostuvieron que en la segunda mitad del siglo XVIII se experimentó en los precios de las mercancías, los frutos de la tierra, los salarios y los alquileres, una tendencia ascendente en el largo plazo. Pero como esta tendencia no se explica sólo por el incremento demográfico (variable T en la fórmula de Fisher) y la recuperación minera (variable M de dicha fórmula), experimentada a mediados del siglo XVIII, fué preciso recurrir a otros factores, algunos de ellos presentes en la velocidad de circulación de la moneda (variable V de dicha fórmula).<sup>7</sup> En efecto, Goldstone (1984) sostuvo que los elementos claves del problema suscitado entre la población y la oferta monetaria eran las proporciones que resultaban de dividir la velocidad de circulación del dinero (V) por el volumen de bienes comercializados (T), y no la proporción entre la oferta de moneda (M) y el nivel general de precios (P).<sup>8</sup> De no haber estado acompañada la inflación de precios por un proceso de proto-industrialización y por un incremento en la circulación del stock de moneda, la inflación en Nueva España --a juicio de Ouweneel y Bijleveld (1989)-- no se habría producido.<sup>9</sup>

A juicio de Eklund (1980) y Tortella Casares (1986), las crisis inflacionarias y deflacionarias del mundo colonial habrían sido provocadas tanto por los momentos de paz que causaban desequilibrios negativos como por las guerras Europeas que generaban desequilibrios positivos en la balanza comercial.<sup>10</sup> En el Río de la Plata, las crisis cíclicas habrían sido --a diferencia de las tesis de Romano (1963) y H. Johnson (1973) que sostienen la escasez crónica de dinero en circulación y la

existencia de una "economía natural"-- producto de una perturbación de la circulación del capital comercial, provocada por una insuficiencia de importaciones en relación con una abundancia de metálico por un lado, o producto de un exceso de importaciones en relación con un vaciamiento de metálico por el otro. Es decir, las crisis serían producto de un desbalance entre la demanda y la oferta de artículos de importación y de exportación (plata, oro, cueros, sebo, tasajo, yerba, lana, etc.).

Pero mientras mediante el crédito de venta o fiado las mercancías importadas se enfrentaban a la moneda-mercancía, mediante los instrumentos del censo y las obligaciones a réditos (crédito de compra) la moneda-circulación se enfrentaba a los frutos de la tierra (cueros, ganados, etc.), a la adquisición de inmuebles urbanos y rurales y mano de obra esclava, y a la industria de la construcción. Por ello es que Greenow (1979,1980), Levaggi (1986), Fisher (1990), y últimamente Jiménez-Pelayo (1991), han argumentado que lo que hacía que el clero secular y regular fuera una fuerza económica y financiera dominante en la sociedad colonial Latinoamericana fué no sólo el rol que desempeñó al acumular reservas de capital mediante capellanías y patrimonios, sino el papel que cumplió al convertirse en la fuente de crédito (censos) más relevante para las clases productivas locales.<sup>11</sup>

Las euforias o procesos inflacionarios habrían difundido esperanzadas expectativas de prosperidad, las que al no cumplirse, como consecuencia de las depresiones provocadas por las guerras europeas y/o la saturación de los mercados, habrían generado una profunda frustración, fuente principal de un creciente descontento. A su vez, estas depresiones económicas habrían provocado, según Assadourian (1970), una desarticulación radical del comercio colonial en general, elevando y/o hundiendo la función de diversas ciudades como mercados redistribuidores de las importaciones y las exportaciones, sin que por ello se alcanzase a alterar los modos de producción existentes.<sup>12</sup>

Precisamente, por su naturaleza de circulante transitorio, el crédito mercantil o los medios de pago escriturarios vinieron, al menos en la esfera del comercio mayorista o de larga distancia, a sustituir o desplazar la moneda metálica. Asimismo, la plata, los cueros, los ponchos, el lienzo de algodón, la yerba y las sacas de lana de vicuña, cobrados a los comerciantes del interior, que habían comprado mercancías a crédito en Buenos Aires, era remesada a este puerto por los apoderados o consignatarios de los comerciantes porteños o peninsulares, funcionando así el dinero metálico y los llamados frutos del país como base financiera de una pirámide constituida por préstamos y créditos, instrumentados mediante cesiones de crédito, letras, libranzas, asientos contables, vales y obligaciones endosables. Estos instrumentos implicaban un mecanismo multiplicador que convertía los medios de pago emitidos por firmas privadas en un múltiplo de la moneda metálica, soberana y monopolísticamente emitida por el monarca absoluto.<sup>13</sup> Para expandir el volumen total de medios de pago actuaba sobre la base metálica un multiplicador de crédito. Por ello, la masa de medios de pago en circulación debió de ser en tiempos coloniales muy superior a la que resultaría de computar solamente la circulación de monedas de oro y plata. Y si consideramos la emisión por parte de los comerciantes de vales privados o extra-notariales también la masa de medios de pago en circulación habría sido en tiempos coloniales muy superior a la que resultaría de computar solo la circulación de obligaciones notariales. Al continuar las inyecciones de medios de pago metálico y crediticio, notarial y extra-notarial, los comerciantes comenzaron a descontar las obligaciones aumentando así la velocidad de rotación del circulante. Estas operaciones de descuento, hechas a una determinada tasa de interés, deben haber alentado las importaciones de mercancías Europeas y de esclavos Africanos, la producción minera, la recolección de frutos (cueros y yerba) y la consiguiente salida al exterior de metal y de frutos de la tierra (cueros), así como afectado el monto de los capitales descontados en dichas cesiones de deudas. Los medios de pago no metálicos emitidos por particulares deben haber sustituido, en gran medida, al oro y plata en circulación.

En períodos de crisis comercial, la brecha social se acentuaba, los comerciantes locales y los terratenientes se aliaron en un frente común, bajo la hegemonía de estos últimos, contra los representantes del monopolio español desatelizando sus "hinterlands" y sentando nuevos patrones de comportamiento económico, demográfico y social. La relajación de los mecanismos de dependencia permitiría acaso un más descentralizado sistema de crédito, una mayor concurrencia de mercancías en el mercado interno; una acentuada dependencia de la oferta de mercancías peruanas y chilenas; un crecimiento temporario de la manufactura local (carnes saladas, suelas, velas, etc.); un acentuado proceso de mercantilización de la tierra y la fuerza de trabajo; un creciente proceso de mestización, y un intenso proceso de desestamentalización de la sociedad colonial.

Históricamente, las crisis comerciales se saldaron siempre, ya sea ampliando los mercados externos mediante la conquista o la guerra, o mediante políticas mercantilistas, proteccionistas o librecambistas (comercio con colonias extranjeras o en buques neutrales); o ampliando la demanda interna mediante violentas redistribuciones del ingreso (confiscaciones eclesiásticas, desamortizaciones, reformas comerciales, etc.). Como era de esperar, Buenos Aires y su área de influencia no podían estar ajenos al impacto de dichas políticas anticíclicas. Durante el ejercicio de dichas políticas es que Buenos Aires comienza a engendrar una burguesía comercial local.

### **Los períodos de guerra.**

Una vez que Buenos Aires comenzó a emanciparse gradualmente del colonialismo interno practicado por Lima, que le prohibía extraer metálico, y consecuentemente, comenzó a estar directamente ligada al mercado mundial descansando en las exportaciones de plata y cueros a Europa (a través del sistema de barcos de registro primero, del Asiento británico después, y finalmente, de las regulaciones del Libre Comercio de 1778), los períodos de guerra signaron en alto grado el patrón de desarrollo mercantil. En este período del llamado Comercio Libre (1778-1810), el comercio español-americano experimentó, según Fisher (1981,1985), y repetido por Lockhart y Schwartz (1992), una euforia que cuadruplicó las cifras con respecto al período que lo precedió.<sup>14</sup> Sin embargo, el período de euforia mercantil que siguió a la Paz de Aquisgrán (1748), que como aquí veremos fué el más significativo de todos, no ha merecido por parte de la historiografía la consideración que su relevancia merecía.<sup>15</sup> Pero las crisis comerciales reaparecieron sistemáticamente en América Latina, particularmente en Buenos Aires durante todo el siglo XVIII, cada vez que la decadente y débil metrópoli española encaró militarmente el creciente dominio del imperio británico. Ocurrió en las Guerras de Sucesión de España (1703-1715) y de la Sucesión de Austria (1739-48); en la de los Siete Años (1762-63), en la de la Independencia Americana (1778-83), y finalmente en las guerras Napoleónicas (1796-1803). Con las guerras, la Colonia del Sacramento, puerto ubicado en la banda oriental del Río de la Plata, cuya función principal consistía en valorizar toda mercancía que pasara por sus muelles, cambiaba rápidamente de metrópoli, según quien resultara triunfante, o más bien según lo que surgiera de la posterior mesa de negociaciones, entabladas en Europa. Después que España en 1701, al decir de Puiggrós (1940), reconoció la propiedad de Portugal sobre la Colonia del Sacramento (Tratado de Alfonsa), se apoderó de ella en 1705, la devolvió en 1715 (Tratado de Utrecht), la recobró en 1750 (Tratado de Madrid), la volvió a perder en 1761 (Tratado de Pardo), la tomó por asalto en 1763 de una flota anglo-portuguesa que trató de reconquistarla, la entregó a Portugal ese mismo año (Tratado de París) y, finalmente, la destruyó hasta sus cimientos en 1778.<sup>16</sup> Las guerras entre las metrópolis, que afectaban el comercio ultramarino, amén de generar en las colonias escasez y la consiguiente elevación de precios de las mercaderías importadas, la caída de los precios de los frutos exportables, y el alza de los frutos sustitutivos de los importados (vinos, frutas secas, etc.) deberían hipotéticamente haber reducido la exportación de metales y con ella disminuído el premio de la moneda doble, transformado

parte de la moneda-mercancía en moneda-circulación y provocado espirales inflacionarias en los escasos productos de importación que restaban en el circuito interno.<sup>17</sup> Sin embargo, en tiempos de guerra entre España e Inglaterra, era rutina saldar las deudas con los monopolistas remesando la plata a Cádiz por medio de puertos neutrales como Bahía o Lisboa.<sup>18</sup>

De aquí que siempre que la guerra ocurrió entre las dinastías Borbónicas de Francia y España, por un lado, y la monarquía Inglesa, garante de la independencia de Portugal, por el otro; la Colonia del Sacramento era tomada por la fuerza; el comercio monopolista al multiplicarse las tasas de riesgo marítimo se desplomaba; el premio de la moneda doble (de ocho reales) caía; el monto de dinero puesto a censo, de los depósitos en capital-dinero y de las operaciones de crédito eclesiástico aumentaban; y la sede del contrabando se trasladaba de la Colonia del Sacramento a Buenos Aires. Buenos Aires mismo devino en tiempos de guerra en una colonia periférica, provista por las Cajas Reales de situados o subsidios con fines militares, donde la alianza mercantil se fragmentaba incrementando la presencia de una embrionaria burguesía comercial de origen local constituida por contrabandistas criollos, donde los arrendamientos urbanos y rurales se deprimían arrastrando consigo a la construcción urbana, y donde la autonomía relativa de la burocracia político-colonial se expandía. Por otro lado, la llegada de los caudales a España en tiempos de guerra amortiguaba la inflación que sufrían en la misma Europa los vales reales.

Es así que en tiempos de guerra, los precios de los productos importados y el flete marítimo sufrían una espiral inflacionaria, de tal suerte que los stocks de tiendas y almacenes se mestizaban con productos locales y el salario y la renta urbana se desfasaban. De igual modo, cuando en tiempos de guerra, el precio de los productos de exportación era bajo, debido a la imposibilidad de exportarlos, la demanda de crédito en moneda dura caía, al igual que su premio en el canje por moneda corriente o sencilla.<sup>19</sup> La demanda de moneda corriente o sencilla para la circulación del mercado interno, por el contrario, aumentaba. De cualquier forma, y a pesar de la carestía de la mano de obra, el efecto del alza de precios de los productos importados --para los comerciantes que mantenían intactos sus stocks de mercancías-- habría sido una elevación de los ingresos sobre los costos, creando sin duda una inflación de ganancias que favoreció al estrato mercantil a expensas de los rentistas urbanos y de los asalariados y jornaleros. Mas aún, los tiempos de guerra indujeron a la corona, en su afán de recaudar ingresos genuinos, a enagenar los oficios públicos a comerciantes criollos o españoles residentes en las colonias, generando como secuela involuntaria un creciente patrimonialismo en la burocracia civil, tan endeble como incipiente. Para algunos el dinero-mercancía (moneda doble) retirado del circuito oficial en virtud de la crisis del comercio exterior, en vez de ser asignado al mercado interno habría sido transferido al exterior a través de circuitos no oficiales. El mercado de bienes de consumo (yerba, vino, tabaco, ganado, etc.), el mercado de bienes de inversión o renta (ingenios, trapiches, haciendas, chacras, estancias, oficios públicos, casas, y esclavos) y la constitución de capellanías sobre bienes raíces, no se habrían visto beneficiados por las crisis del comercio exterior.

### **Los períodos de paz.**

Por el contrario, la paz, con la afluencia de mercaderías importadas procedentes de Africa y Europa, inducía la deflación de los precios de dichas mercancías, la caída del flete marítimo, el alza del premio de la moneda doble, la disminución del monto de dinero puesto a censo, de los depósitos en capital-dinero y de las operaciones de crédito eclesiástico, la mayor diferenciación del comercio mayorista y minorista, una mayor movilidad social del personal dependiente del comercio, la estamentalización de la burocracia colonial, y paralelamente, la inflación de los precios de los productos de exportación y el consecuente aumento de la demanda de crédito en efectivo, por lo



general otorgado por los patronos de capellanías, los mayordomos de cofradías y hermandades religiosas y los apoderados, tutores y curadores de viudas, huérfanos e incapaces. Dado que los precios de las mercancías importadas caían aún en forma más fuerte con relación a los precios de la tierra urbana y rural y de los bienes inmuebles, éstos últimos servían de garantía para la adquisición de las primeras. De tal modo caían los precios de los bienes importados que el premio de la moneda doble, los salarios y jornales rurales, y la renta de la tierra también se elevaban. No obstante, la diferencia de precios entre regiones dispares seguía siendo una fuente de ganancias siderales. El efecto habría sido una elevación de los ingresos sobre los costos, creando una inflación de ganancias que favoreció a la clase mercantil a expensas de los encomenderos, los propietarios de tierras y los detentadores de ingresos fijos. Agréguese que, los tiempos de paz indujeron a la corona a recuperar los oficios públicos de manos de los criollos, para favorecer fundamentalmente a aquellos originarios de España.

Cuando la paz era alcanzada entre ambas potencias metropolitanas el comercio monopolista era reanudado y se practicaban mutuas concesiones económicas, la Colonia del Sacramento era devuelta a los Portugueses, el Río de la Plata retornaba a su status de colonia semi-periférica, reforzada con la presencia de minorías comisionistas, intermediarias o consignatarias; la vigencia de una burguesía comercial autónoma quedaba frustrada con la consecuente multiplicación de los concursos de acreedores y las liquidaciones de cuentas, la movilidad social de la población empleada en el comercio mayorista y minorista acentuada, el precio de los arrendamientos urbanos y rurales en alza con la consiguiente reactivación de la construcción urbana, y la autonomía relativa de la burocracia política colonial disminuía. En efecto, en períodos de paz o tregua (precios bajos) los premios por la moneda doble habrían sido altos, los valores de la tierra y de la mano de obra esclava serían relativamente bajos, así como la tasa de interés de la moneda corriente o sencilla, con probable efecto estimulante sobre la compra de tierras y esclavos o el alquiler de mano de obra indígena y esclava. Si bien es cierto que las guerras exitosas o los tratados de paz exitosos alcanzan a extender los mercados coloniales de mercancías más allá de las fronteras originales (tal es el caso de los Portugueses a través de la Colonia del Sacramento), también lo es que las burguesías comerciales locales no alcanzan en esa misma época a extender su hegemonía sobre un mercado interno de tierras y mano de obra más allá de sus propios límites provinciales. Sin embargo, la emergente burguesía comercial Rioplatense habría logrado articular mercados consumidores geográficamente dispersos y económicamente distintos que, a su vez, le permitirían compensar los altibajos de las crisis comerciales cíclicas reacomodando los elementos que componían el viejo mercado interno colonial.

En principio, entonces, entre la gama de fenómenos históricos a discutir debemos mencionar la balanza comercial, la relación entre el crecimiento de la población y la oferta de moneda, la estructura (cantidad, dimensión y permanencia) y comportamiento de los mercados de mercancías y de bienes de inversión o de renta (casas, esclavos, chacras y estancias), el proceso de urbanización y el tipo y naturaleza de las redes de intercambio. Y entre la gama de problemas históricos a resolver debemos preguntarnos que relación hubo entre los déficits y superávits de la balanza comercial y la insuficiencia o exceso de importaciones; entre el incremento de la población de mercaderes y el tamaño de sus capitales y tiendas, la dimensión de sus transacciones, y la permanencia física y/o generacional en el giro; entre la intensidad del proceso de urbanización y la densidad del mercado inmobiliario urbano; entre el tamaño y la especialización de chacras y estancias y su participación en los mercados abastecedores; entre la velocidad de circulación del dinero y la naturaleza de las redes de intercambio; y entre las dificultades para exportar mercancía-dinero y el aumento de los capitales puestos a censo. Resolver estos problemas históricos implica investigar un intrincado tejido documental.

A los efectos de realizar este estudio fué preciso analizar las importaciones de géneros

españoles y libres, las remesas de plata a España, el comportamiento de los mercados de mercancías y del dinero escriturario, del crédito hipotecario y de los mercados de bienes de inversión o de renta.<sup>20</sup> Para ello fué necesario relevar una inmensa masa de datos de los libros de Contaduría de la Caja de Buenos Aires, de los protocolos notariales de Buenos Aires y de los Registros de Caudales de los Buques-Correo. Dicho relevamiento consistió básicamente en las escrituras de obligaciones a riesgo de mar que se otorgaban en Cádiz, Bilbao, La Coruña y demás puertos de España; en las infinitas escrituras de fiado de Castilla que se otorgaban en Buenos Aires a aquellos comerciantes que se internaban al interior del espacio colonial; en las numerosísimas escrituras de cesiones de crédito que los acreedores porteños transmitían a comerciantes de mayor giro, por lo general peninsulares, o a comerciantes en viaje al lugar de residencia del deudor; en las cancelaciones de las escrituras de fiado que los deudores o sus apoderados otorgaban en Buenos Aires; en las obligaciones e imposiciones a censo y a réditos pupilares o crédito de compra; en las compraventas de mano de obra esclava y de inmuebles urbanos y rurales; en las escrituras de declaratorias por las que los cesionarios de cesiones de créditos se embarcaban en nuevas operaciones de cesión de créditos; y en los asientos de remesas de oro y plata inscriptos en los Registros de Caudales de los Buques-Correo. Para ello tuvimos que ordenar miles de escrituras y asientos por la fecha de la transacción registrada.

El problema metodológico que se nos plantea es el de elaborar instrumentos y técnicas que nos ayuden a explicar las alzas y bajas del volumen y valor de las transacciones en el comercio exterior e interior. En principio, postulamos la hipótesis de una relación causa-efecto o co-variación positiva o correlación directa entre las cinco variables principales del capital mercantil: las arribadas de los navíos de la Real Compañía de Guinea y del Real Asiento de Inglaterra (RAI) y de los llamados navíos de registro (Francisco de Alzaybar, Pedro de Lea, Manuel de Olivera Braga), el fiado registrado en Cádiz, el fiado registrado en Buenos Aires, la cancelación y la cesión de créditos, las importaciones y las remesas de metal y frutos de la tierra a España para adquirir mercancías al contado o cancelar deudas contraídas al adquirir mercancías a crédito; y de una co-variación negativa entre el fiado de Castilla por un lado y las obligaciones e imposiciones a censo y a réditos pupilares y los mercados de bienes de inversión o de renta (esclavos, casas, chacras y estancias) por el otro. El estudio del alza o baja de los precios de los productos en el Río de la Plata debería comenzar por el de las mercancías importadas, porque sólo ellas se enfrentaban al metal como mercancía y no como medio de circulación. Ellas habrán de ser analizadas a través de la información brindada por el crédito de venta, las cancelaciones, las cesiones y las remesas de plata a España.

### **Las balanzas comerciales.**

El simple cotejo entre importaciones y exportaciones y su consiguiente deducción dió lugar a lo que se dió en llamar balanzas comerciales. Estas últimas podían alcanzar superávits o déficits. La Tabla A-I ilustra los altibajos de la Balanza Comercial entre 1778 y 1796. El Gráfico A-I, fundado en la Tabla A-II, ilustra las fluctuaciones del mercado de mercancías (CM) entre 1697 y 1810, el cual totaliza unas 20.000 escrituras de fiado. El Gráfico A-II, fundado en la Tabla A-II, ilustra las fluctuaciones del mercado de cesiones de crédito (CC) entre 1749 y 1799, el cual totaliza un millar de cesiones de crédito. El Gráfico A-III, fundado en la Tabla A-III, ilustra las fluctuaciones de los gravámenes eclesiásticos (CH) entre 1707 y 1818, el cual totaliza unas 700 escrituras de capellanías. Los Gráficos A-IV al A-VI, fundado en la Tabla A-IV, ilustran las fluctuaciones del crédito hipotecario (CH) entre 1696 y 1810, el cual totaliza unas 572 obligaciones a censo, unas 755 imposiciones a censo, y 1.528 obligaciones a réditos pupilares. El Gráfico A-VII, fundados en la Tabla A-V, ilustran las fluctuaciones del mercado de mano de obra esclava (MMOE) entre 1700 y 1810, el cual totaliza unas 16.318 compraventas y unas 1.932 manumisiones. El Gráfico A-VIII, fundado en la Tabla A-VI, ilustra las

fluctuaciones del mercado inmobiliario urbano (MIU) entre 1700 y 1810, el cual totaliza unas 12.831 escrituras. El Gráfico A-IX, fundado en la Tabla A-VII, ilustra las fluctuaciones del mercado inmobiliario rural (MIR) entre 1696 y 1810, el cual totaliza unas 1851 escrituras.

### **Etapas comerciales marcadas por los ciclos de expansión y depresión.**

La importación de géneros españoles, extranjeros y libres, pasó por diversas etapas marcadas por los ciclos de expansión y depresión, provocados por los desequilibrios de la balanza comercial. En su primer etapa rigieron los acuerdos o asientos. Con la Paz de Ryswick (1697), en el bienio 1697/98, el crédito mercantil notarial (CM) creció de 63 operaciones por valor de \$87.459, a un promedio del orden de los \$43.000 anuales, a 377 operaciones por valor de \$1.756.000 en el quinquenio 1699/03, a razón de \$350.000 anuales. Algunos años después, la arribada de los barcos negreros de la Real Compañía de Guinea provocaron el crecimiento del crédito mercantil de 27 operaciones por \$42.000 en 1707 a 51 operaciones por \$132.000 en 1708, prolongándose hasta 1713. Jorge Hays, director de la Real Compañía de Guinea, alcanza a practicar entre 1705 y 1719 más de medio centenar de operaciones de crédito por valor de \$471.621. Mas no sólo la Compañía de Guinea lucró con este negocio, sino también otros comerciantes como el Cap. Joseph de Ibarra Lascano, con 23 operaciones por valor de \$232.141, y Domingo de Ormazábal con 5 operaciones por valor de \$154.915.

Con las guerras, el crédito mercantil declinaba y el riesgo de mar crecía. El Gráfico A-I y la Tabla A-II demuestran como durante la Guerra de Sucesión de España (1708-13) el crédito mercantil declinó en un 88% y el riesgo de mar creció en un 90% para las Islas del Caribe, y en un 100% para el comercio del Pacífico.<sup>21</sup> El resultado de la Paz de Utrecht (1715), provocó la entrega de la aduana porteña al Real Asiento de Inglaterra (RAI). Cada vez que esta Compañía arribaba con sus barcos negreros a Buenos Aires el crédito mercantil sufrió sendos impactos positivos. Ello ocurrió en 1715, 1722 y 1728. En el período de 1715 a 1740 el RAI alcanzó a realizar 82 operaciones de fiado por valor de \$935.420.

Pero, las primeras reformas borbónicas de la post-guerra lograron rescatar a Buenos Aires del control británico en aras del monopolio gaditano, al tratar de cortar los privilegios y monopolios del Real Asiento de Inglaterra (RAI) mediante sucesivas confiscaciones. En la primera confiscación del RAI (1718-22), provocada por la guerra que mantuvo España contra Francia, Inglaterra y Holanda, el Gráfico A-I y la Tabla A-II demuestran que el crédito mercantil cayó un 76%, de 56 operaciones por \$443.931 en 1718 a 45 operaciones por \$107.659 en 1719, reduciéndose progresivamente hasta alcanzar en 1722 su cota más baja, con 23 operaciones por \$16.859. Por el contrario, el crédito hipotecario aumentó, de una obligación a censo por \$1.000 en 1716 a 5 y 7 obligaciones por \$23.000 y \$43.000 en 1717 y 1718 respectivamente; el mercado inmobiliario urbano (MIU) creció de un promedio de 25 operaciones anuales por valor de \$9.000 en el trienio 1716-18, a un promedio de 45 operaciones anuales por valor de \$17.000 en el bienio 1719-20; el mercado inmobiliario rural (MIR) se incrementó, de 10 operaciones en 1720, por valor de \$4.325, y correspondientes a 23.750 varas lineales, a 21 por valor de \$49.960 en 1721, correspondientes a 50 mil varas lineales; y el mercado de mano de obra esclava (MMOE) creció de un promedio de 15 operaciones anuales por valor de \$4.000 en el bienio 1716-17 a un promedio de 45 operaciones anuales por valor de \$14.000 en el quinquenio 1719-23. Paralelamente, la corona comenzó a otorgar a diversos comerciantes españoles permisos de registro con licencias de internación que implicaban la autorización de extraer el equivalente de lo importado en plata doble, lo que le hacía difícil al RAI lucrar con creces mediante el contrabando. A fines de 1721 se le concede permiso de registro a Salvador García Posse, quien alcanzó a concertar en 1723, siete operaciones de fiado por un valor total de \$49.139, y en 1729, una operación por valor de \$36.000. Durante la segunda confiscación (1727-30), el Gráfico A-I y la Tabla A-II ilustran como el

crédito mercantil cayó un 70%, de \$407.749 en 1727 a \$121.889 en 1728. Podemos deducir de estas cifras, que ambas guerras confiscatorias golpearon al comercio legal español, mucho menos que la Guerra de Sucesión de España. Por el contrario, el crédito hipotecario aumentó, de tres (3) obligaciones a censo por \$2.840 en 1726, a siete (7) imposiciones a censo por \$9.000 en 1727, y una docena de obligaciones a censo por \$10.000 en 1728; el MIU creció de un promedio de 51 operaciones anuales por valor de \$14.000 en el bienio 1726-27, a un promedio de 74 operaciones anuales por valor de \$40.000 en el trienio 1728-30; y el MMOE creció casi un 100% de un promedio de 33 operaciones anuales por valor de \$10.000, en el trienio 1724-26, a un promedio de 68 operaciones anuales por valor de \$18.000 en el cuatrienio 1727-30.

### **El comercio de los Navíos de Registro.**

En la submetrópoli porteña, Buenos Aires, el comercio a larga distancia se halló en un comienzo monopolizado por los llamados Registreros. Una vez producida la segunda confiscación del Real Asiento de Inglaterra (RAI), a fines de 1729, arribaban a Buenos Aires los navíos de los Registreros Francisco de Alzáibar y Cristóbal de Urquijo, los que revitalizaron el alicaído comercio porteño. En la docena de años que Alzáibar operó en el Río de la Plata (1730-42), alcanzó a concretar 42 operaciones de fiado por valor de \$117.735. Fué, sin embargo, en los años de 1734 y 1735 cuando mayor fué su actividad. En el primero de estos años concretó cinco operaciones por valor de \$12.672, y en el segundo celebró siete operaciones por valor de \$70.749. Pero no sólo los comerciantes dueños de navíos de registro lucraban en este negocio. Lo hacían también sus factores, encomenderos y apoderados. Este fué el caso en orden decreciente de Nicolás de la Quintana con 21 operaciones por valor de \$192.000; de Nicolás de Echalecu con 24 operaciones por valor de \$110.000; Pedro Antonio Warnes con 17 operaciones por valor de \$107.000; Pedro Prudencio Pérez con ocho operaciones por valor de \$103.000; Francisco Ruiloba con 22 operaciones por valor de \$96.594; y Melchor García de Tagle con 14 operaciones por valor de \$79.508. Pocos años después de la caída de Portobello (1740), fueron los navíos de registro de Lorenzo del Arco en las personas de los primos Pedro de Lea y Arco y Manuel del Arco, los que revitalizaron el comercio del Atlántico sur. En los ocho años que los primos Del Arco operaron en el Río de la Plata (1744-52), alcanzaron a concretar 193 operaciones de fiado por valor de \$1.273.000. Sin embargo, fueron los bienios 1744-45 y 1748-49 los que registraron la actividad más intensa. En el primer bienio consumó 117 operaciones por valor de \$645.000 y en el segundo 53 operaciones por valor de \$382.000.

De resultas del comercio intérlope con la Colonia del Sacramento, el Gráfico A-I y la Tabla A-II ilustran como el crédito mercantil creció de 247 operaciones por 1 1/2 millón de pesos en 1748 a 420 operaciones por 3 1/2 millones en 1749 y a 800 operaciones por 5 millones en 1751, registrándose en esta coyuntura el pico más alto de la serie. La inflación del crédito mercantil empezó a traer como efecto tardío, una espiral de cesiones de crédito. La abrupta introducción de mercadería Europea vía Colonia del Sacramento, a una escala hasta entónces nunca vista y destinada parcialmente a renovar el capital fijo de los ingenios de moler metal Altoperuanos, y la creciente demanda de cueros por parte de los barcos surtos en el Puerto, que entre los años 1745 y 1753 alcanzó al 33%, drenó el circulante metálico existente en el mercado porteño, generando una acuciante escasez.<sup>22</sup> Esta escasez, explica la incipiente sustitución de circulante metálico en las transacciones mayoristas por el circulante escriturario proveído por las cesiones de crédito. En la cesión de créditos es preciso distinguir la cesión de créditos vencidos de aquellos aún no vencidos. Los primeros eran adquiridos por aquellos cesionarios más capaces de ejecutar a los deudores. Los segundos eran adquiridos con descuentos proporcionales a los plazos faltantes para sus respectivos vencimientos. El volumen de cesiones de crédito (CCM), de acuerdo a la Tabla A-II, creció en 1752 un 64% y en 1755 un 80%, de 6 operaciones

por \$44.000 en 1749 a 16 operaciones por \$123.000 en 1752. El boom mercantil también se tradujo en 1752 por un record en el número de capellanías y cartas dotales registradas, en las ventas de oficios venales concertadas, y en el número de mozos de tienda contratados. En efecto, según el Gráfico A-III y la Tabla A-III, el número y monto de las capellanías aumentó de dos capellanías por valor de \$1.200 en 1750 a 11 capellanías por valor de \$15.500 en 1752.

Pero, en 1754, una sobreoferta de mercadería Europea provocó en Buenos Aires por vez primera una crisis comercial propiamente dicha, es decir no vinculada con un acontecimiento guerrero. Como consecuencia también del Tratado de Paz de Madrid, celebrado en 1750 y la devolución de la Colonia del Sacramento a España en 1751, el crédito mercantil declinó un 62%, de 900 operaciones por 4 millones en 1753 a 500 operaciones por 1 1/2 millones en 1754; y las cesiones de crédito siguieron el ejemplo al cabo de un año calendario, reduciéndose de 35 operaciones por \$219.000 a 30 operaciones por \$85.000.

Las demandas por cobro de pesos, las quiebras y las fianzas de cárcel son también un testimonio de las crisis.<sup>23</sup> Durante la crisis de 1754 los Jueces de Paz procesaron un número de demandas por cobro de pesos sin precedentes. Aunque los números puedan parecer pequeños, la economía de Buenos Aires nunca los había experimentado. En 1754, fueron registradas diez demandas para cobrar deudas y en 1755 una quincena por el mismo concepto. Mayo y Latrubesse de Díaz (1983) ilustraron la inquietante situación generada por esta crisis mediante el epistolario dirigido desde Buenos Aires por la mujer de Fernando Mazeira, un comerciante residente en Asunción. Con relación a las prisiones por deudas, la Tabla A-VIII ilustra como en 1754 fueron emitidas a favor de deudores insolventes cinco fianzas de cárcel y nueve en 1757. En noviembre de este último año, durante las primeras batallas de la Guerra de los Siete Años, la tasa de riesgo de mar subió al 40% (Tabla A-IX).

Aunque España no participó en esta guerra hasta que el Pacto de Familia fué firmado en enero de 1762, el comercio Español con sus colonias Americanas, experimentó las mismas tasas de riesgo y similares crisis comerciales. Por de pronto, el crédito mercantil decreció de 476 operaciones por 1 1/2 millón en 1756 a 237 operaciones por 1/2 millón en 1758, y de 408 operaciones por un millón en 1759 a 237 operaciones por \$350.000 en 1760. Con un efecto tardío de un año, las cesiones de crédito continuaron la tendencia marcada por el fiado de Castilla. Después que se hubieren registrado en 1759 un millón de pesos en concepto de mercaderías fiadas, se concertaron en 1761 una treintena de operaciones de cesión de créditos por valor de \$150.000, y cerca de cuarenta operaciones por \$196.000 en 1762. Por el contrario, según el Gráfico A-IV y la Tabla A-IV, el crédito hipotecario creció, de 5 obligaciones a censo por valor de \$4.000 y 3 imposiciones a censo por valor de \$790 en 1761, a 15 obligaciones a censos por valor de 17.261 en 1762 y 32 obligaciones a censo por valor de \$29.135 en 1763; el MIU creció de un total de 59 operaciones por valor de \$48.000 en 1756, a un total de 106 operaciones por valor de \$83.000 en 1758 y 85 operaciones por valor de \$87.000 en 1762; y el MMOE creció de un total de 111 operaciones por valor de \$25.000 en 1756 a un total de 165 operaciones por valor de \$32.000 en 1758. El MMOE creció un 34% en cantidad de esclavos comercializados y un 14% en valor. Esta última disparidad en porcentajes era debida a la inflación de precios experimentada por la mano de obra esclava, que alcanzó al 23% (Tabla A-V).

A medida que la economía española comenzó a recuperarse y expandirse a mediados del siglo XVIII, el poder económico fué perceptiblemente girando hacia la periferia; en la metrópoli hacia áreas tales como Cataluña y la región Vasca, y en las colonias hacia áreas tales como Guatemala, Nueva Granada, Chile, y el Río de la Plata.<sup>24</sup> Los comerciantes de esas áreas obtuvieron, gracias a una Real Orden, fechada en Junio de 1749, total libertad para sus giros. No fué ya necesario por el momento que los comerciantes residentes en la América colonial consignaran sus remesas de plata y oro. Este

transitorio éxito político de las burguesías mercantiles del Río de la Plata, Chile y la Nueva Granada representó un paso muy importante en la quiebra del sistema de Flotas de Galeones. Desde entonces, la emigración de comerciantes españoles hacia territorios coloniales periféricos, consignatarios de casas mercantiles Catalanas y Vascas, influirá decisivamente en el cambio de estas colonias hispano-americanas desde una posición periférica hacia posiciones semi-periféricas, mejorando relativamente sus perspectivas secesionistas.<sup>25</sup> De igual forma, la fundación de Casas de Moneda en Santiago de Chile y en Popayán, en la década del 40, reforzó el vigor de sus respectivas burguesías mercantiles coloniales. Asimismo, la inauguración de los navíos de registro, a partir de la caída de Portobello (1740), fuera de los convoyes de flotas y galeones, y la fundación en 1748 de la Administración de Correos en Buenos Aires aceleró la velocidad de circulación del dinero y del crédito.<sup>26</sup>

### **El comportamiento de las cesiones de crédito.**

Habiéndose diversificado y descentralizado el control monopólico del crédito mercantil con la instauración de las Reformas Borbónicas, el comportamiento de las cesiones de crédito no podían estar ajenas al nuevo impacto del crédito. La más dinámica realidad económica acortaba el plazo en que el crédito mercantil influía sobre las cesiones de crédito. En otras palabras, el dinamismo alcanzado por el circulante se hizo más sensible a la inyección de nuevas emisiones de crédito mercantil. Así observamos como, cuando el crédito mercantil crece de 186 operaciones por \$637.000 en 1778 a 208 operaciones por \$1.130.000 en 1779, las cesiones también suben de un par de operaciones por \$4.751 en 1778 a catorce operaciones por \$45.000 en 1779 y una quincena por \$49.000 en 1780.

Las frustraciones económicas o la brecha entre expectativas y ganancias mercantiles, durante la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, se profundizan más que durante la intervención española en la Guerra de los Siete Años. Pero las perspectivas de la Ordenanza de Libre Comercio de 1778 y la tendencia mercantil ascendente, que las exportaciones de cueros prometían, aliviaron el sentimiento de frustración. De todas formas, la balanza comercial acusa un déficit alarmante, pues las importaciones alcanzan en 1778 a los \$840.833 y las exportaciones a los \$175.846. El boom de las importaciones continúa en 1779 con \$1.303.400 y en 1780 con \$1.233.000. Con la Guerra de la Independencia Americana (1776-83) tan pronto como España se sumó a la misma (1780) el crédito mercantil, ilustrado en el Gráfico A-I y la Tabla A-II, cayó de un par de centenar de operaciones por \$1.100.000 en 1779 a casi un centenar y medio por \$440.000 en 1780, alcanzando su nivel más bajo en 1782 con 94 operaciones por \$345.000 y las importaciones se redujeron en 1781, a \$81.933. La crisis mercantil se tradujo también en 1780 en un pico mínimo en el número de capellanías y cartas dotales registradas, en las ventas de oficios venales concertadas, en el número de asistencias otorgadas para sentar plaza de cadete, y en el número de mozos de tienda contratados. En efecto, según la Tabla A-III, el número y monto de las capellanías cayó de 10 en 1778 y 6 en 1779 a 2 en 1780 y 1781 respectivamente. Por el contrario, según la Tabla A-IV, el número de censos creció, de 6 y 11 obligaciones e imposiciones a censo por valor de \$7.068 y \$11.050 en 1778 y 1779 respectivamente, a 21 obligaciones e imposiciones a censo por valor de 19.096 en 1780; el MIU saltó de un total de 122 operaciones por valor de \$82.000 en 1780, a 214 operaciones por valor de \$162.000 en 1781, y 147 operaciones por valor de \$236.000 en 1782; y el valor de las operaciones del MIR se sextuplicaron de un total de \$5.862 en 1780, correspondientes a 10 mil varas lineales, a \$29.915 en 1781, correspondientes a 23.641 varas lineales. En la década inmediata a la inauguración de las Ordenanzas de Libre Cambio (1779-89) el MMOE creció tres (3) puntos logrando un promedio del 7% (Tabla A-V). Al caer el número de capellanías habilitadas para servir el culto religioso le fué preciso a la Iglesia flexibilizar las exigencias de Limpieza de Sangre en el otorgamiento de las ordenes sagradas. Asimismo, al caer la capacidad de otorgar cartas dotales para casar a su prole, las élites se vieron

obligadas a flexibilizar sus pretensiones étnicas. La acumulación de estas crisis mercantiles deben haber alimentado sendas crisis en los aparatos eclesiástico y militar del estado colonial.

Pero al igual que en 1754, no sólo los momentos de guerra marcaban la oportunidad de las crisis. En 1785, la balanza comercial se vuelve deficitaria, montando lo importado más de 6 1/2 millones de pesos, lo fiado al interior casi 400 operaciones por más de 3 millones de pesos (2 millones menos que en la década del 50), y lo exportado en plata apenas a 4 1/2 millones, registrándose como consecuencia una mayor caída de los precios. Tal como lo aseveró Puiggrós (1940), si bien los comerciantes porteños habían conquistado el monopolio del mercado interior al eliminar políticamente la competencia Limeña, perdieron la corriente comercial anglo-portuguesa al restringir el contrabando.<sup>27</sup> En los dos años siguientes, 1786-87, los precios se equilibraron porque las importaciones y las exportaciones oscilaron alrededor de los cuatro millones anuales. Es en 1788 que la balanza comercial se vuelve a desequilibrar, tanto en el Río de la Plata como en Chile, en cerca de 1 1/2 millones de pesos por haberse reducido las exportaciones de plata a sólo 2 1/2 millones, provocándose como secuela una rápida inflación de los precios y una consecuente caída del fiado que alcanza sólo a un par de centenares de operaciones por poco más de 700.000 pesos.<sup>28</sup>

### **Guerras de Coalición contra la Francia Revolucionaria.**

No todas las guerras provocadas por la Revolución Francesa se vieron reflejadas en las estadísticas. Como en la guerra de la primera Coalición contra Francia (1791), España jugó del lado de Inglaterra, su comercio de ultramar no se vió afectado. Pero una vez que España tomó partido por Francia contra Inglaterra y sus aliados, el comercio ultramarino se vió duramente golpeado. El crédito mercantil cayó de 195 operaciones por \$864.000 en 1796 a 130 operaciones por \$416.000 en 1797. Con el desencadenamiento de la guerra continental, en 1798, es cuando las importaciones caen en forma abismal de \$1.800.000 en 1797 a los \$154.000 en 1798; y las exportaciones de plata de 3 millones en 1797 a sólo \$50.000 en 1798. En cuanto a los bienes de renta, el MIU creció de un total de 118 operaciones por valor de \$54.000 en 1794, el año de más baja actividad desde la Paz de Versailles (1783), a un total de 143 operaciones por valor de \$136.000 en 1795. La tendencia alcista en el MIU fue sostenida a lo largo de lo que resta del siglo XVIII y se prolonga al inicio del siglo siguiente. La respuesta clave para explicar la desaparición del comercio de comisión (fiado otorgado en Cádiz) la encontró García Baquero (1977), en el abandono de Cádiz por parte de los comerciantes extranjeros cuando España tomó partido por Francia. En efecto, comenzando con el decreto de Libre Comercio con colonias extranjeras y en buques neutrales de Carlos IV (1797), la presencia de extranjeros y de comerciantes criollos en los puertos de España, para que España pudiera comerciar con sus colonias ya no era más necesaria. Los comerciantes extranjeros podían comerciar, libremente, desde cualquier puerto del continente que quedara neutral en el conflicto de Inglaterra con España. Desde ese momento, los extranjeros y los criollos podían ignorar a los comerciantes de Cádiz que servían de intermediarios. Más aún, debemos recordar que durante las guerras, debido al bloqueo de su bahía, Cádiz era prácticamente una plaza sitiada. Esto ayuda a explicar el abandono de Cádiz por los extranjeros y los criollos americanos en búsqueda de lugares más seguros, para practicar sus negocios.<sup>29</sup>

De repente, con la breve paz declarada en 1799, la tasa de riesgo de mar descendió un 16% (Tabla A-IX), provocando no sólo la abolición del Decreto sobre el libre comercio con Colonias Extranjeras y en Buques neutrales, sino también el incremento del 86% en las importaciones, del 50% en el monto de capitales asociados en compañías (Tabla A-X), y del 34% en el crédito mercantil durante aquel año y del 50% en 1800.<sup>30</sup> En efecto, el crédito mercantil aumentó de 132 operaciones por \$429.000 en 1798 a 144 operaciones por \$643.000 en 1799, y 136 operaciones por \$850.000 en 1800.

La guerra entre Inglaterra y Francia, con España de aliada de esta última, que se desató nuevamente a fines de 1799 se reflejó en los mercados de bienes de renta. El MIU creció un 21% en 1799, 33% en 1800, y 55% en 1801. Y el mercado de embarcaciones fluviales y marítimas, inflado por el cambio de banderas, creció de un total de 23 operaciones por valor de \$73.720 en 1800 a un total de 37 operaciones por valor de \$174.000 en 1801.

Durante el breve período de paz (1802-03) que siguió al Tratado de Amiens (1802), que concluyó la guerra de la segunda Coalición contra Francia (1799-1802), las importaciones desde España crecieron un 72% en 1802, ascendiendo a casi el millón de pesos, para finalmente, con la Paz de Amiens, superar el millón y medio de pesos; y el crédito mercantil creció de 129 operaciones por \$585.000 en 1801 a 115 operaciones por \$612.000 y 137 operaciones por \$844.000 en 1802 y 1803 respectivamente. Algunos de los Agentes de las Casas comerciales de Cádiz vuelven a enviar sus remesas a España.<sup>31</sup> El precio promedio del esclavo cayó un 2% en 1802 y un 9% en 1803 (Tabla A-V).

Con la renovación de la guerra entre Inglaterra y Francia, con España de aliada de esta última, en 1804, y gracias al comercio de intermediación norteamericano, el crédito mercantil experimentó un incremento en lugar de una caída y los mercados de bienes de renta vuelven a recobrar la espiral expansiva. En efecto, el CM creció de 137 operaciones por \$844.000 en 1803 a 177 operaciones por \$1.072.000 en 1804, y 124 operaciones por \$1.000.000 en 1805. Con relación al MMOE, este experimentó un alza del 13% (Tabla A-V).

Debido a las Invasiones Inglesas (1806-07), el comercio de consignación con el interior decayó. El crédito mercantil descendió un 33%, de 124 operaciones por un millón de pesos en 1805 a un centenar por \$670.000 en 1806 y medio centenar por \$242.000 en 1807. Y lo mismo ocurrió con los bienes de renta. De un total de 211 operaciones inmobiliarias urbanas por valor de \$295.000 en 1806, el MIU cayó el año siguiente un 50%, a un total de 131 operaciones por valor de \$157.000.

Luego que Buenos Aires fué reconquistada y la paz con Inglaterra sellada como consecuencia de la invasión Napoleónica a España, 31 navíos británicos con una carga valuada en más de un millón de libras esterlinas o cinco millones de pesos plata arribó a Buenos Aires.<sup>32</sup> Como consecuencia de ello, el crédito mercantil creció un 220%, de 82 operaciones por \$276.000 en 1808 a un centenar de operaciones por \$535.503 en 1809 (Gráfico A-I y Tabla A-II). El número y monto de las obligaciones e imposiciones a censo se incrementan en forma gradual, de 15 imposiciones a censo por valor de \$16.651 en 1799, a 22, 30, 20 y 22 obligaciones e imposiciones a censo, por valor de \$26.849, \$48.576, \$45.087, y \$32.620 en 1800, 1801, 1802, y 1803 respectivamente. También en Montevideo se observa el mismo fenómeno, pues el número y monto de los censos aumentan de dos censos por valor de \$1.335 en 1800 a 25 censos por valor de \$77.381 en 1801.<sup>33</sup> Con la amenaza de la aplicación de la Real Cédula de Consolidación de Vales Reales, los censos disminuyeron drásticamente, de 22 censos por valor de \$32.620 en 1803 a 12 censos por valor de \$16.150 en 1804, 4 censos por valor de \$4.150 en 1805, y 2 censos por valor de 2.500 en 1806. También Montevideo sufrió dicha caída, por cuanto el número y monto de los censos cayó de un pico máximo de 20 censos por valor de \$107.053 en 1805 a 13 censos por valor de \$59.414 en 1806, y 5 censos por valor de \$6.287 en 1807.<sup>34</sup> Asimismo, el mercado de bienes de renta experimentó las consecuencias del arribo en aluvión de mercadería inglesa. El MMOE creció de \$59.176 en 1807 a \$80.800 en 1808, o el 27% (Tabla A-V). El MIU subió de \$157.022 en 1807 a \$413.018 en 1808 o el 263%, y a \$629.579 en 1809 o el 400%. En cuanto al MIR, este creció de 9 operaciones por valor de \$6.795 en 1807 a un total de 23 operaciones por valor de \$144.554, en 1808.<sup>35</sup>



Para terminar, podemos afirmar, sobre la base de los numerosas tablas y gráficos aquí producidos, que si bien el trato con las casas monopolistas de Cádiz había fortalecido el poder económico y social de algunas casas mercantiles porteñas; la movilidad del comercio generado a través de Buenos Aires, que alcanzó una de las intensidades más altas de la América Latina colonial, había vulnerado la hegemonía y la estabilidad de los sectores monopolistas más tradicionales. Las reiteradas crisis mercantiles y su efecto acumulativo, que acabó con el crédito comercial, afectaron profundamente la estabilidad social colonial para desatar finalmente sus contradicciones a comienzos del siglo XIX.

## NOTAS

<sup>1</sup> Levene, 1952, 415. Levene fundaba sus conocimientos monetarios en la obra de Sáez (1805).

<sup>2</sup> ver Saguier, 1987, 111.

<sup>3</sup> Bernal, 1992, 317.

<sup>4</sup> Bernal, 1992, 78 y 80.

<sup>5</sup> Bakewell, 1976, 319.

<sup>6</sup> Sin embargo, asimilar las operaciones de crédito privado del Antiguo Régimen a nuestras "monedas escriturales" actuales era, para Vilar (1969), imposible, si no se le tomaba con cautela. En el caso del crédito de venta, mutuo, o fiado, pese a ser endosable, no era convertible en circulante, según Vilar, por padecer de fecha de vencimiento, circular en cifras desmedidas, y no ser divisible o fraccionable. Al igual que hoy las tarjetas de crédito no son implementadas en las investigaciones que refutan la teoría cuantitativa del dinero, tampoco podríamos considerar para este propósito al fiado y las libranzas. No obstante, para autores como Flynn (1980), el padecer de fecha de vencimiento no le impedía al dinero escriturario convertirse en un circulante transitorio, que por la ley de Gresham desplazaba de la circulación doméstica en el mercado mayorista a la moneda metálica.

<sup>7</sup> ver Comadrán Ruiz, 1969; y Tandeter, 1992.

<sup>8</sup> Goldstone, 1984, 1141.

<sup>9</sup> Ouweneel y Bijleveld, 1989, 500.

<sup>10</sup> Eklund, 1980, 383; y Tortella Casares, 1986.

<sup>11</sup> Levaggi, 1986, 19; y Fisher, 1990, 642.

<sup>12</sup> Assadourian, 1970, 72 y 75.

<sup>13</sup> Aglietta, 1990, 225.

<sup>14</sup> Lockhart y Schwartz, 1992, 336.

<sup>15</sup> Entre Levene (1927) y Muñoz Pérez (1947) se suscitó una efímera polémica fundada en que el

primero sostenía que la Reforma de 1778 fue un grado más avanzado dentro de una trayectoria secular, mientras el segundo sostenía que se trataba sólo de "el hito final de un proceso" (Muñoz Pérez, 1947, 618; y Levene, 1952, 229). Debo la referencia de este debate a la gentileza de la Prof. Ana María Martínez de Sánchez).

<sup>16</sup> Puiggrós, 1940, 169; y Bermejo de la Rica, 1920.

<sup>17</sup> "...el valor de los diversos tipos de moneda (monedas de ocho, dos, uno, medio y cuarto real) pese a su equivalencia general sufría de oscilaciones en su oferta y demanda que provocaban fluctuaciones en los premios o primas con que unas monedas se canjeaban por otras. El lugar geográfico elegido para cancelar los compromisos adquiridos y la naturaleza de la mercadería introducida incidía en el tipo de moneda utilizado. Cuando la paga era hecha en el Alto Perú, por lo general era hecha en moneda columnaria o doble, y si en Chile en doblones de oro. Si se trataba de saldar deudas contraídas por introducir en el Alto Perú aguardiente, yerba, mulas, o textiles de las provincias abajeñas, el pago por lo general se hacía en moneda sencilla. Mas si se trataba de géneros importados la deuda se debía saldar en moneda doble. Por su naturaleza de circulante menudo, la moneda sencilla vino a sustituir o desplazar en el mercado interno a la moneda doble, la cual constituía el dinero-mercancía por excelencia para saldar las importaciones del comercio exterior. La moneda cobrada a los comerciantes del interior que compraban géneros de Castilla a crédito en Buenos Aires, era canjeada en el Alto Perú a moneda doble y remesada a este puerto por los apoderados o consignatarios de los comerciantes porteños o peninsulares, funcionando así como base o respaldo monetaria de un circulante compuesto por moneda sencilla" (Saguier, 1989, 289).

<sup>18</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 83, Exp. 19.

<sup>19</sup> "Entre la moneda doble (o de ocho y cuatro reales) y la sencilla (de 2, 1, 1/2, o 1/4 real) no había diferencia de fino o ley ni tampoco de peso salvando la proporción, pero sí existió una diferencia de volumen, siendo mayor en moneda sencilla. También existió un premio a favor de la primera, que oscilaba según en qué momento o lugar se concertaba. El premio de la moneda doble, a la inversa de las tasas de interés, era más alto en los puertos de salida, y más bajo en tiempo muerto (tiempo de ausencia de navíos en los puertos) y cerca de las Casas de Moneda. Durante el tiempo muerto en Buenos Aires el premio que se estilaba alcanzaba al 3%, y en tiempos de navíos oscilaba entre el 5 y el 15%. En Chile, en 1737, el premio de la moneda doble alcanzaba al 2% y en Potosí, donde había más abundancia de moneda doble el premio debió haber sido menor. En igual fecha, en Buenos Aires, el premio llegó al 6%, en 1778 en la Colonia del Sacramento alcanzó al 17%, y en Brasil al 25% (Saguier, 1989, 290).

<sup>20</sup> Acerca de la factibilidad del uso de las fuentes fiscales como indicador de actividad económica en el Imperio Otomano, ver Genç, 1987. El énfasis que Tandeter (1993) otorga a los estudios fundados en fuentes fiscales, entre las investigaciones interrumpidas por las dictaduras militares (Tandeter, 1993, 805), va en desmedro de aquellas investigaciones centradas en las fuentes notariales y judiciales, que también se vieron frustradas por dichas dictaduras y por la desidia con que fueron y son tratados los Archivos históricos.

<sup>21</sup> Sée, 1927, 295.

<sup>22</sup> Saguier, 1991, 107.

<sup>23</sup> Bernal (1992) registra una serie numerosa de quebrantos a partir de 1765 (Bernal, 1992, 467-468).

<sup>24</sup> Dilg, 1975, 263.

<sup>25</sup> Vásquez de Prada, 1968, 207.

<sup>26</sup> Bernal, 1992, 478.

<sup>27</sup> Puiggrós, 1940, 179.

<sup>28</sup> Acerca del desequilibrio de la balanza comercial Chilena, ver Villalobos, 1968, 1990, 190.

<sup>29</sup> Cooney, 1987, 163-164.

<sup>30</sup> También en México se difundieron las compañías de comercio, ver Torales Pacheco (1988).

<sup>31</sup> Diego de Agüero fleta \$138.905, Jaime Alsina \$51.527, Martín de Alzaga \$25.501, Juan Estéban de Anchorena \$20.840, Joaquín de Arana \$50.631, Tomás de Balanzategui \$90.671, Isidro J. Balbastro \$33.332, Francisco J. Díaz Vélez \$39.444, Juan Bautista Gainza \$105.739, Luis de Gardeazábal \$160.686, Bernardo Gregorio de las Heras \$27.584, Pablo Ruiz de Gaona \$122.416, Gaspar de Santa Coloma \$59.275, Martín de Sarratea \$48.241, Francisco Ignacio de Ugarte \$23.178, y Juan Ignacio Ezcurra, Anselmo Sáenz Valiente, Juan Antonio de Lezica y Casimiro Francisco de Necochea, las increíbles sumas de \$203.046, \$284.814, \$377.583 y \$331.000 respectivamente (Cuadro A-III del tomo I).

<sup>32</sup> Goebel, 1938, 309.

<sup>33</sup> Pivel Devoto, 1964, 1230.

<sup>34</sup> Pivel Devoto, 1964, 1230.

<sup>35</sup> de esta última cifra hay que deducir \$75.000 correspondientes al valor de una hacienda de cicales llamada Miraflores, existente en los Yungas, Alto Perú, que fuera vendida por Francisco Ramos Mexía y su esposa María Antonia Seguro. En Saguier, 1993, pág.10 y Tabla C-I se deslizan algunos errores que aquí quedan salvados.

## TOMO XI

### Capítulo 4

# **Las presiones mercantiles y el reparto forzoso en el siglo XVIII. La articulación comercial del espacio colonial Rioplatense.**

presentado en las XIV Jornadas de Historia Económica, organizadas por la Asociación Argentina de Historia Económica, en Córdoba el 4 de Mayo de 1994), fragmentado en cuatro (4) artículos, dos de los cuales fueron publicados, en 1996 en DATA. Revista de Estudios Andinos y Amazónicos [La Paz: Revista del Instituto de Estudios Andinos y Amazónicos], 6, 73-95); y en 1995-96 en Dimensión Histórica de Chile [Santiago de Chile: Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación], nos.11-12, 25-44); (agradezco los generosos comentarios que la Prof. Silvia Palomeque me brindó en dichas XIV Jornadas Nacionales de Historia Económica).

A diferencia de aquellos autores para quienes la formación de una conciencia nacional depende de la gestación de una identidad religiosa, lingüística y étnica, Assadourian (1972, 1983) sostuvo que para comprender el proceso de creación y configuración de los estados nacionales --que surgieron en el Cono Sur de América Latina en el siglo XIX-- era preciso evaluar el rol cumplido por la articulación del espacio colonial peruano a comienzos del siglo XVII, que por cierto incluía todo lo que fue el antiguo Virreinato del Río de la Plata.<sup>1</sup> La numerosa presencia de comerciantes peninsulares a fines del siglo XVIII en dicho espacio colonial, habría acentuado el proceso de diferenciación social, desestabilizado la sociedad colonial y condicionado la expansión del dominio sobre espacios geográficos cada vez más extensos y el desarrollo de métodos cada vez más coactivos de circulación de mercancías (repartos forzosos por parte de los Corregidores de Indios, los Curas Párrocos, los Protectores de Naturales y los Comandantes de Armas).

En dicho proceso de diferenciación social se fueron distinguiendo una burguesía mercantil comisionista y una creciente burguesía comercial local no encolumnada en las estructuras corporativas. El poder de la burguesía mercantil monopolista estaba fundado sobre su capacidad para controlar el rubro más dinámico de su tiempo, el comercio a larga distancia de: a) las mercancías europeas, b) los esclavos introducidos desde Brasil y Angola, y c) la mercancía-moneda americana. Este control la colocó a la vanguardia del desarrollo mercantil. Pero, la progresiva y paulatina hegemonía de esta fracción, no presupuso que en este patrón de acumulación, los únicos beneficiarios serían exclusivamente los grandes comerciantes monopolistas. La alianza de grupos mercantiles organizada

bajo la hegemonía de la gran burguesía comercial monopolista habría incorporado, en una posición subordinada cada vez que había paz entre España e Inglaterra, los intereses de otras minorías comisionistas de origen local, representadas en el último período colonial por los Jueces Diputados del Consulado de Comercio.

A través de esta alianza, la gran burguesía comercial monopolista lograría redefinir un modo de inserción en la estructura comercial colonial, y amortiguar las incertidumbres del comercio a larga distancia mediante instituciones tales como el seguro y el cálculo contable, permitiéndole con este modelo de articulación lógica, entre producción y circulación, configurar un espacio colonial propio, obteniendo así una cuota mayor del excedente.<sup>2</sup> Profundizando previas investigaciones de mi autoría, acerca del rol del crédito mercantil en el comportamiento cíclico de los mercados de mercancías,<sup>3</sup> y numerosas investigaciones de otros autores,<sup>4</sup> los vecinos comerciantes porteños y sus consignatarios del interior revelarían una intensa movilidad y una profunda inestabilidad social.

Para explorar el paradigma historiográfico presentado trataremos de verificar, a diferencia de una visión porteñista del comercio Riplatense (Socolow, 1978), otra visión más integradora del comercio colonial, que verifique de qué modo en tiempos de crisis o desequilibrios del comercio exterior, las minorías comisionistas subordinaron el poder económico y político de las incipientes burguesías mineras y agrarias, consolidaron una heterogénea estructura social y relativizaron la autonomía política de la burocracia colonial. Este proceso habría facilitado la satelización de sus hinterlands, sometiendo al capital minero y agrario, reforzando los patrones de comportamiento colonialista, y habría frustrado así el origen de un proceso acelerado de emancipación económica continental. En este modelo la lucha intra-colonial habría tomado lugar de una manera dual entre fracciones de la burguesía colonial, donde por un lado, los comisionistas del monopolio español ligados a la economía minero-exportadora serían aliados de la embrionaria burguesía minera Altoperuana (azogueros potosinos) y por el otro lado, la incipiente burguesía comercial local, vinculada al tráfico interlope y a la exportación de cueros, sería aliada de las minorías terratenientes. La contradicción entre terratenientes y burguesía comercial nativa era muy incipiente y ambigua, y se habría hallado subordinada a la contradicción que existió entre la elite colonialista (burocrático-monopolista) y la elite insurgente (terrateniente-burguesa).

Entre la gama de fenómenos históricos a discutir podemos mencionar el dinamismo de los mercados de mercancías, la densidad de las redes mercantiles y de parentesco, y los grados de endeudamiento, permanencia y cumplimiento mercantil. Y entre la gama de problemas históricos a resolver debemos preguntarnos qué relación hubo:

- a) entre la densidad de las redes mercantiles y la amplitud de los espacios coloniales penetrados;
- b) entre la permanencia o perdurabilidad generacional de sus actores y la densidad de las relaciones de parentesco;
- c) entre la lucha intra-colonial y la representación en las Diputaciones provinciales del Consulado de Comercio de Buenos Aires;
- y d) entre la profundidad de las crisis comerciales y la frecuencia de los cobros de pesos, los concursos y las quiebras.

Resolver esta complicada e interrelacionada serie de problemas históricos implica investigar un intrincado tejido documental. Por ejemplo, la densidad de las redes mercantiles podrá deducirse del número de localidades geográficas y la frecuencia con que eran cubiertas por las escrituras del fiado de

Castilla, los poderes generales y los poderes especiales para cobrar deudas,<sup>5</sup> las cesiones de créditos que los acreedores porteños transmitían a comerciantes de mayor giro,<sup>6</sup> y las escrituras de declaratoria.<sup>7</sup> El endeudamiento mercantil podrá deducirse del cómputo de las escrituras de fiado de Castilla; y el cumplimiento mercantil de las moras registradas en los márgenes de las escrituras de fiado, y de las cancelaciones practicadas en Buenos Aires de obligaciones a riesgo de mar que se otorgaban en Cádiz, Bilbao, La Coruña y demás puertos de España. Y las crisis comerciales podrán deducirse del número y monto de las cesiones de deudas, finiquitos, compromisos, transacciones, ajustes y convenios concertados. En este trabajo consideraremos la emisión por parte de los comerciantes de las escrituras de obligación o fiado de Castilla y no las compensaciones contables o los vales privados o extra-notariales. Esta documentación se escrituraba sin la presencia de fiador y sin garantía prendaria o hipotecaria alguna. Su única garantía era la punición del 8% a partir de su incumplimiento o mora.

A los efectos de realizar este estudio fué preciso relevar durante largos años una inmensa masa de datos de los protocolos notariales de Buenos Aires, de los Registros de Caudales de los Buques-Correo y de los repositorios judiciales.<sup>8</sup> Ella consistió básicamente en las infinitas escrituras de fiado de Castilla que se otorgaban en Buenos Aires a aquellos comerciantes que se internaban al interior del espacio colonial; en las numerosísimas escrituras de cesiones de crédito que los acreedores porteños transmitían a comerciantes de mayor giro, por lo general peninsulares, o a comerciantes en viaje al lugar de residencia del deudor; en las cancelaciones de las escrituras de fiado que los deudores o sus apoderados otorgaban en Buenos Aires; en las escrituras de declaratorias por las que los cesionarios de cesiones de créditos se embarcaban en nuevas operaciones de cesión de créditos; en los poderes para cobrar que los acreedores libraban desde Buenos Aires; en los asientos de remesas de oro y plata inscriptos en los Registros de Caudales de los Buques-Correo; y en los juicios por cobro de pesos depositados en las series Tribunales, Comerciales, Hacienda, Justicia e Interior, pertenecientes a la División Colonia del Archivo General de la Nación (AGN). Para ello tuvimos que ordenar miles de escrituras o asientos por consignatario o cliente, o por remesante, por comerciante acreedor, por cesionistas y cesionarios, y por lugar de origen de los consignatarios o clientes. Este ordenamiento en apéndices nos permitió a su vez elaborar cuadros y gráficos estadísticos. Lamentablemente, para el estudio de la frecuencia con que eran cubiertas diversas localidades geográficas por las escrituras del fiado de Castilla, no hemos podido consultar por falta de medios, los protocolos notariales de las cabeceras provinciales del interior del país y de Bolivia y Paraguay, y poder así hacer un seguimiento de cada partida o memoria. El problema metodológico que se nos plantea, es entonces el de elaborar instrumentos y técnicas que nos ayuden a explicar las alzas y bajas del volumen, valor e intensidad o frecuencia de los cambios de destino geográfico del crédito mercantil.

### **Los navíos de registro.**

En cuanto a los navíos de registro, sus licencias de internación de la mercancía importada hay que interpretarlas restrictivamente, por cuanto éstas estaban apremiadas por plazos fijos para concretar las ventas ordenadas por el Gobernador de Buenos Aires, en respuesta a requisitorias del Virrey de Lima.<sup>9</sup> De acuerdo con el Cuadro D-I, en 1748, el comerciante que vendió a crédito la mayor parte de la mercancía Europea, fué Joseph Vienne,<sup>10</sup> quien contrajo 57 operaciones por un monto de \$432.000, representativo del 29% de la totalidad del crédito mercantil. Continuaban en la lista Francisco Gutiérrez Franco y Pedro Cranisbro con un 12%, y Joseph Iturriaga con un 10%. En 1749 el primero en la lista de importadores fué Manuel de Olivera Braga con \$544.859, 15% del total del crédito mercantil, seguido por Joseph Vienne con el 8%. En 1751 la lista fué encabezada por Manuel del Arco con \$574.857, 11% del total del crédito mercantil, seguido por José de la Peña Fernández y Juan Arias Argüello con el 4%. Esta lista de posiciones cambió anualmente durante la década del 50. De aquí que, en 1752 vemos a

Francisco Alvarez Campana encabezando la lista seguido por Manuel del Arco, Pedro José Doye, y Ramón de Palacio y Manuel Sánchez de Cueto en el segundo, tercero, y cuarto lugar respectivamente (Cuadro D-I).

En la metrópoli peninsular, el grupo de comerciantes gaditanos que comerciaba con 26 puertos americanos era extremadamente numeroso alcanzando según Bernal (1992) a 2.629 comerciantes, que protocolizaron entre 1760 y 1800 unas 33.000 escrituras de riesgo marítimo o préstamos a la gruesa ventura por 185 millones de pesos.<sup>11</sup> De estos 2.629 comerciantes, sólo 183, o el 6%, comerciaron a partir de la Paz de Aquisgrán (1748) con el Río de la Plata.<sup>12</sup> Si en lugar de calcular el porcentaje de comerciantes que operaban en el Río de la Plata sobre la base del total de comerciantes gaditanos, lo calculamos sobre la base de los 85 grandes comerciantes,<sup>13</sup> señalados por Bernal en su Cuadro 6.52, donde 35 individuos comerciaban con el Río de la Plata, el porcentaje sube a casi la mitad (el 41%). Pero a su vez, los 183 comerciantes gaditanos, que adelantaban mercadería a crédito al Río de la Plata, fueron en número el doble de los comerciantes residentes en Buenos Aires, que comerciaban con los puertos de España. El Apéndice A-I detalla la nómina de sus integrantes. También detalla dicho Apéndice las vinculaciones mercantiles de este grupo con los comerciantes residentes en el cono sur que traficaban a través de Buenos Aires.<sup>14</sup> Incluso algunos de ellos contaban con representantes y habilitados en otras ciudades cabeceras de Virreinato. Pardo y Freyre y Cía., Francisco Xavier de los Ríos, J. J. Palomo, y Blanca María Utrera, titulares de casas comerciales de Cádiz, mencionados en el Cuadro D-II y en el Apéndice A-I, contaban en 1752 con representantes y clientes no sólo en Buenos Aires sino también en México.<sup>15</sup> De los 85 comerciantes, financieros e intermediarios más representativos del comercio de Cádiz entre 1760 y 1824 que figuran en el Cuadro 6.52, publicado por Bernal (1992), 30 de los mismos o el 35% comerciaban con Buenos Aires. El Cuadro D-II ilustra la nómina de los Comerciantes de Cádiz que otorgaron créditos a comerciantes de Buenos Aires, entre 1760 y 1810, con mención del número y monto de las transacciones celebradas.

A partir de esta declaración de Paz (1748), la nómina de los integrantes del Comercio Porteño y las cancelaciones de sus operaciones con comerciantes acreedores residentes en España (1748-1778) se consignan en el Apéndice A-II. De los integrantes del comercio porteño, que adelantaron mercadería fiada al interior del espacio colonial, luego de la Paz de Aquisgrán (1748), se destacaron Manuel del Arco,<sup>16</sup> Pedro de Lea y Arco,<sup>17</sup> Antonio de Arriaga,<sup>18</sup> Juan de Eguía,<sup>19</sup> y Alfonso de Guzmán y Mendoza.<sup>20</sup> De la información que se posee, en muy pocos casos se dieron entre ellos vínculos de parentesco. Por ejemplo, Don Pedro de Lea y Arco era sobrino de Lorenzo del Arco y primo hermano de Manuel del Arco, y Antonio Arriaga era hermano del monopolista Pedro Arriaga. Los vínculos que estos comerciantes mantenían con numerosos clientes residentes en las cabeceras de las provincias de las carreras del Alto Perú y de Chile, ilustrados en el Apéndice A-III, eran en número y valor, en la mayor parte de los casos, mayores a los vínculos celebrados con los comerciantes gaditanos, en virtud de los incrementos producidos por la mercadería contrabandeada desde la Colonia del Sacramento. El Apéndice A-IV trae la lista de estos comerciantes con el balance de los valores totales de las operaciones contraídas en España, de las operaciones contraídas con el interior del espacio colonial, y de las operaciones de cesiones de crédito concertadas. Por ejemplo, mientras Pedro de Lea y Manuel del Arco cancelaron una veintena de transacciones con España por valor de 232.000 pesos dobles, alcanzaron a celebrar con el interior del espacio colonial más de un centenar de operaciones por un valor cinco veces mayor. Finalmente, a estos mercaderes se suman aquellos otros comerciantes, que sin comerciar con Cádiz practicaban intensamente el contrabando.<sup>21</sup> Este último grupo, listado en el Apéndice A-V, estaba constituido por Francisco Alvarez Campana,<sup>22</sup> Francisco Pérez de Saravia,<sup>23</sup> Roque de San Martín,<sup>24</sup> Carlos de los Santos Valente,<sup>25</sup> y Manuel de Olivera Braga.<sup>26</sup> Según el Apéndice A-V este grupo también mantenía estrechos vínculos con clientes residentes en las cabeceras

de las provincias de las carreras del Alto Perú y de Chile.

Por último, los Cuadros D-III, D-IV y D-V nos revelan, para una considerable cantidad de comerciantes, el balance de las operaciones contraídas con el interior del espacio colonial y las cantidades y montos de las remesas de monedas de plata y oro enviados a España.<sup>27</sup> En la década previa a las Ordenanzas del Comercio Libre (1770-79), el comercio exterior porteño legal quedó estancado debido al estado de lucha permanente con las colonias Portuguesas. El contrabando había alcanzado entonces los niveles más altos. En la columna del fiado del Cuadro D-V, el nivel de actividad mercantil observado durante los años de guerra (1778-83) revela la probable participación en el comercio interlope de comerciantes de la talla de Manuel de Basavilbaso, Domingo Belgrano Pérez, Francisco Antonio de Escalada, Antonio García López, Luis de Gardeazábal, José González de Bolaños, Pedro González de Cueto, Bernardo Sancho Larrea, Juan Antonio de Lezica, Manuel Rodríguez de la Vega, José de San Pedro Lorente, Xavier Saturnino Saraza, Martín de Sarratea, y Francisco de Seguro.<sup>28</sup>

### **Tratos con Corregidores y Comandantes de Armas.**

En la mayor parte de los Corregimientos y Comandancias del Alto Perú y el Paraguay, el trato de los comerciantes era con los Corregidores y Comandantes del lugar. En esto el Alto Perú y el Paraguay se asemejaban notablemente a la descripción de Oaxaca, en el Virreinato de Nueva España, hecha por Borchart de Moreno (1984) y por Kicza (1986).<sup>29</sup> La provisión de los Corregimientos de Indios y de las Comandancias de Armas, a diferencia de las Regidurías Perpetuas, se hacía en interés directo de las sociedades o compañías introductoras o importadoras de efectos de Castilla o de mercadería contrabandeada, la cual era distribuída en los llamados repartimientos forzosos.<sup>30</sup> Para poder acceder a dichos cargos, y poder alcanzar los lugares de destino, los beneficiarios de los mismos, hipotecaban por lo general sus cédulas de nombramiento.<sup>31</sup> De ahí el acierto con que el Virrey Manuel de Amat y Junient anatematizara a los Corregidores como "diptongos de mercaderes y jueces", pues estos eran los que estaban a cargo de los repartimientos forzosos. En la Lista A-I constatamos que al menos una veintena de Corregidores se endeudaron en Buenos Aires antes de partir hacia sus burocráticos y lucrativos destinos.<sup>32</sup> Y en otro trabajo de este autor comprobamos como muchos corregidores, acuciados por el desfase entre los ingresos salariales y los gastos inherentes al cargo, recayeron en la defraudación y el cohecho.<sup>33</sup>

### **Tratos con Curas, Alcaldes y Comandantes.**

Asimismo, en la mayor parte de las provincias que constituían el Virreinato del Río de la Plata, el trato de los comerciantes solía ser con los Curas Párrocos, los Alcaldes de Hermandad y los Comandantes de Armas. El abuso con que en el Alto Perú y el Litoral eran cobrados los derechos eclesiásticos, muchas veces mediante la comparecencia de los Comandantes de Armas, dió lugar a que las autoridades civiles motejaran a las primicias, oblaciones y limosnas de verdaderos repartimientos forzosos. El ex-Cura Párroco de Luján y posterior Cura y Vicario de Corrientes, Maestro Ignacio Ruiloba, fué denunciado en 1736 por numerosos testigos de haber llevado a Corrientes para su posterior comercialización diversos géneros, de "...lo que le rindió el Curato de Luxán y el Producto de las Casas que se bendieron a Don Gerónimo de Escobar".<sup>34</sup> El Paraguay descripto por Garavaglia (1983), se asemejaba notablemente a la descripción del Perú, Chile y el Alto Perú, hecha por Tord Nicolini (1974), Carmagnani (1973, 1975) y Moreno Cebrián (1976).<sup>35</sup> Como gran parte de las partidas, facturas o memorias de mercancías importadas desde Buenos Aires eran repartidas a los moradores de Pueblos de Indios y a los milicianos de fortines o guardias de frontera, los Gobernadores



en sus Visitas fomentaban las licencias para beneficiar cueros o yerba, en las Entradas al Desierto o en los yerbatales silvestres del norte paraguayo, con el objeto que los indios y los milicianos pudieran hacerse de dinero con que pagar los repartos de mercancías a que estaban sujetos.<sup>36</sup>

### **La habilitación mercantil.**

Los comerciantes habilitados, se desparramaron por todo el ámbito del espacio colonial, sumando en los cinco períodos históricos seleccionados (1713-1810) un total de 2.500 mercaderes. Desagregando esta última cifra, en las regiones mineras del Alto Perú se registraron un total de 389 mercaderes, en las provincias del Noroeste (Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja) 511 mercaderes, en Chile 332 mercaderes, en Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis) 321 mercaderes, en Córdoba 304, y en el Litoral (Santa Fé, Corrientes, Paraguay y Banda Oriental) 663 mercaderes. Los Gráficos D-I al D-XV, fundados en el Cuadro D-VI, nos revelan para cada período histórico y para cada cabecera de provincia, el número de comerciantes y de sus operaciones, así como el monto alcanzado por las mismas. Esta información está fundada a su vez en una cuarentena (38) de Apéndices, enumerados desde el B-I al B-XXV, los cuales nos ilustran acerca de la identidad de estos comerciantes, residentes en el interior del espacio colonial, el número de sus operaciones de fiado contraídas en Buenos Aires, las fechas entre las cuales operaron, el número de años que permanecieron en el ramo, los respectivos montos adeudados, sus relaciones de parentesco y los litigios padecidos o impulsados. La elección del espacio geográfico y del período tienen la misma razón de ser que tuvo para Assadourian (1972,1983) la elección del espacio colonial peruano del siglo XVII: "...comprender el proceso de creación y configuración de los estados nacionales que surgen en el siglo XIX".<sup>37</sup> Los cinco períodos históricos seleccionados en este Cuadro fueron aquellos que nacían con un Tratado de Paz y culminaban con una declaración de guerra y/o su respectivo Tratado de Paz. El primer período fué aquel que nació con la Paz de Utrecht (1713) y se extendió hasta la Paz de Aquisgrán (1748). El segundo, el que se extendió desde este último acontecimiento hasta la Paz de París (1763). El tercero, desde esta última hasta la Paz de Versailles (1783). El cuarto, desde esta última y la aplicación del Reglamento de Libre Comercio hasta la Primer Guerra de Coalición contra la Francia Revolucionaria (1791). Y el quinto y último desde esta última fecha hasta la misma Revolución de Mayo (1810).

### **La cesión de créditos.**

Como hemos adelantado anteriormente la extrema demora en cancelar muchas operaciones de fiado originaron el uso generalizado de la cesión de créditos. Los Cuadros D-VIII y D-IX nos informa de dichos montos, a lo que se debe agregar los plazos y las fechas de cancelación. La nómina de cedentes y cesionarios, muchos de ellos lisa y llanamente especuladores --pues en algunos casos vuelven a ceder por segunda y hasta tercera vez el mismo documento de crédito-- que operaron en Buenos Aires durante el siglo XVIII, están ilustrados en el Cuadro D-VIII. Entre los cesionarios se destacó el Administrador del Correo Domingo Basavilbaso, apoderado de la gaditana María Terrero y Básquez, quien entre 1752 y 1757 adquirió de la compañía formada por Roque San Martín y Antonio de Guzmán y Mendoza cerca de medio centenar de obligaciones por valor de \$236.000. Los cedentes o cesionistas San Martín y Guzmán habían vendido a crédito en 1753, a Juan Bautista de Alquizaleta, Baltasar de Azevey y Juan Garrido, entre otros muchos comerciantes del interior, mercaderías por valor de \$137.000. En 1761, por ejemplo, once años después de que Pedro Mansilla concertara ciertas operaciones de fiado, el Gral. Antonio de Rueda tuvo que atajar a un tal Pedro Carvajal,<sup>38</sup> interponiendo su doble facultad de Corregidor y apoderado del acreedor, obligándolo a que no saliese de Cotagaita "...en sus pies ni en los ajenos" hasta que no le entregase \$1.000 a cuenta de lo que le debía a Mansilla, deuda que a su vez fué cedida por Mansilla a Manuel de Escalada. Para obtener su

libertad Carvajal se vió precisado a firmar un conocimiento o recibo por dicha cantidad "...sin que en realidad de verdad yo los hubiese recibido".<sup>39</sup> El propio Carvajal, conciente de la anómala dualidad que exhibía el Corregidor, apunta en su denuncia que Rueda interpuso "...las facultades de Corregidor no obstante ser apoderado".<sup>40</sup> Lamentablemente, desconocemos cuán arraigada estaba esta estrategia de los acreedores de librar poderes especiales para cobrar deudas a Corregidores y otras altas autoridades reales, asentados en las ciudades donde residían los deudores. Para ello sería preciso hacer un detallado estudio de la totalidad de los poderes librados en Buenos Aires en dichos años.

Cada una de las subregiones del espacio colonial Rioplatense sufrió a lo largo de los períodos seleccionados fuertes altibajos, absolutos y relativos, en el tráfico comercial, que en este trabajo estudiaremos detenidamente. El Alto Perú, la región más relevante en el consumo de la mercadería de Castilla fiada al interior, experimentó entre el primer período (1713-48) y el segundo período (1748-62), según el Cuadro D-VI, la duplicación del número de comerciantes, la cuadruplicación del número de operaciones, y la triplicación del volumen de las mismas. En el tercer período (1763-82) experimentó una retracción abrumadora en la demanda, habiéndose reducido a la cuarta parte de lo girado en el primer período. En el cuarto período (1783-90), con la aplicación del Reglamento de Libre Comercio, repuntó nuevamente, pero si bien nunca volvió a registrar el movimiento record del segundo período, alcanzó cantidades y guarismos del orden de la mitad de dicho período record. El quinto y último período (1791-1810) volvió a registrar una retracción, con 61 comerciantes, pero nunca tan acentuada como la del tercer período. En este período, en la Diputación del Consulado de Comercio de La Paz, se matricularon según Tjarks (1962), 41 individuos, sin discriminar el rubro; en la Diputación de La Plata: 26 comerciantes de efectos de Castilla y 31 de géneros de la tierra; y en la Diputación de Potosí: 33 comerciantes de efectos de Castilla, 15 de efectos de la tierra, y 15 indios vecinos traficantes en coca.<sup>41</sup> Esta matriculación totalizó un centenar de comerciantes de efectos de Castilla, cuarenta individuos más de los detectados en el fiado de Castilla contraído en Buenos Aires.<sup>42</sup> Pero a diferencia de las Diputaciones de las provincias Abajeñas, sólo una pequeña minoría de los comerciantes Altoperuanos alcanzaba a endeudarse en Buenos Aires. La mayoría de los matriculados lo hacía, aparentemente, en Jujuy, Salta o Tucumán. En La Paz, para el período 1771-1780, de los 38 comerciantes registrados por Jáuregui Cordero y Pérez Velasco (1993), sólo tres operaron con Buenos Aires; y para el período 1791-1810, en la Diputación de La Paz, de los 41 individuos matriculados, sólo dos comerciantes, tomaron mercadería a crédito en Buenos Aires;<sup>43</sup> y en la Diputación de La Plata, de los 26 individuos matriculados como mercaderes de efectos de Castilla solamente dos comerciantes, tomaron mercadería a crédito en Buenos Aires.<sup>44</sup> En los cinco períodos se registraron, según el Apéndice B-I, un total de 389 comerciantes residentes en Potosí, que se endeudaron en Buenos Aires. De los mismos, según el Cuadro D-VII, 200 o casi la mitad, alcanzaron la operatividad mínima de un sólo año; 97 o la cuarta parte, perduraron de 2 a 5 años; 77, o el 20%, de 6 a 20 años; y el 5%, 21 o más años. El record máximo de operatividad lo habría llevado Francisco Rodríguez de Vida con 49 años de actividad, seguido por Domingo Ferrando con 38 años,<sup>45</sup> y Miguel Alexo Arpide con 37 años.<sup>46</sup>

### **Endogamia mercantil.**

Otros comerciantes se perpetuaban por lazos de parentesco. El estudio genealógico de los designados como Jueces Diputados y de los matriculados en las Diputaciones provinciales del Consulado de Buenos Aires revela la intensa endogamia practicada por los mercaderes. Si bien en el primer bienio de vida (1794-96), los Diputados del Consulado fueron elegidos por el Virrey, con posterioridad fueron elegidos por los cónsules, dos en cada bienio, a partir de la lista enviada por la Diputación respectiva --por lo general compuesta por una decena de comerciantes-- quienes elegían un candidato cada uno, y de ambos se sacaba a suerte.<sup>47</sup> Por lo que se va a ver, los Priores, Síndicos,

Cónsules y Conciliarios de Buenos Aires no trepidaban en elegir como Diputados en el interior del espacio colonial -- con similares facultades que los Piores y Cónsules-- a quienes se hallaban entre sí emparentados.<sup>48</sup> Tampoco dudaban en elegir a sus propios consignatarios o deudores.<sup>49</sup> Las autoridades de los Tribunales del Consulado estaban inhibidas de votar entre parientes.<sup>50</sup> Sin embargo, esta prohibición no se extendía a la facultad de matricularse.<sup>51</sup> Las notas de los Apéndices B-I al B-XXV nos brindan la información genealógica que nos permite detectar los parentescos políticos de los comerciantes, que los apellidos obviamente ocultan.<sup>52</sup>

### **El caso del Alto Perú.**

En cuanto a la subordinación en que se hallaban los comerciantes provenientes de Buenos Aires respecto de las autoridades Alto-peruanas, debemos destacar los casos de los Corregidores-comerciantes Antonio de la Calzada y Antonio de Rueda. El del primero, el Corregidor de Omasuyos Antonio de la Calzada,<sup>53</sup> se había complicado al ocurrir su fallecimiento, pues su principal deudor, el minero Martín de Vértis Vereá,<sup>54</sup> cuya deuda había sido contraída en alguna ciudad del Alto Perú, eludía su cumplimiento respondiendo en 1755 al Barón de Oña Juan José de Yturribáizaga, apoderado de Francisco de las Heras,

"...muy desentonadamente, engreído en que su pariente Don Juan Agustín de Ustáriz, vecino de Cádiz, tiene contenidas a las Herederas Doña Catalina Patrón y su hermana".<sup>55</sup>

Heras argumentaba que con prioridad a las herederas de Calzada estaban sus acreedores, por lo que encarecía a Nicolás de la Quintana

"...me noticie individualmente el nombre, y vecindario de los dueños de la escritura que vino debiendo Don Antonio, cuyos poderes trajo Don Tomás Alonso Fernández, vecino del Puerto de Santa María".<sup>56</sup>

El caso del General Antonio de Rueda,<sup>57</sup> Corregidor del Pueblo de Santiago de Cotagaita (Provincia de Chichas) y apoderado y socio de Manuel de Escalada Bustillo,<sup>58</sup> es también suficientemente relevante. En 1750 Juan Antonio Bustillo Cevallos,<sup>59</sup> Manuel de Escalada y Antonio de Rueda celebraron una compañía o contrato social por \$300.286, en efectos que vinieron corriendo riesgo en el Navío Juan, María y José. Una vez introducidos dichos efectos en Buenos Aires,

"...Rueda internó muchos de ellos en el Perú para su venta y beneficio, y condujo una considerable porción a la Provincia de Chichas, en que fue provisto Corregidor a influjo y por interés de la sociedad",<sup>60</sup>

quedando en Buenos Aires Escalada, para recibir las remisiones de plata y dirigirlas a Cádiz. En Cádiz, quedaba Bustillo para poder continuar las negociaciones.

Pero en las cabeceras de provincia, la presencia de comerciantes, peninsulares o porteños, y/o de sus habilitados no siempre era bien recibida.<sup>61</sup> En Potosí, las deudas que el azoguero José de Ascasubi,<sup>62</sup> --dueño del Ingenio Pampa y de la Labor Arenas, uno de los privilegiados del azogue y de la mita-- había contraído con el comerciante porteño Francisco Alvarez Campana,<sup>63</sup> provocaron una profunda como prolongada crisis política, que expresaba la nunca resuelta contradicción entre los intereses mineros y regionales y los intereses puramente comerciales, y que alcanzó a reflejarse en una compleja actuación judicial.<sup>64</sup> En ella se vieron envueltos los principales funcionarios reales de

entonces, incluídos los Oidores de las Reales Audiencias, los Corregidores, los Visitadores Generales y los Jueces Comisionarios enviados por el Virrey de Lima.<sup>65</sup> Rafael de los Reyes y Serrano,<sup>66</sup> apoderado de Alvarez Campana, se vió obligado a recurrir a la Real Audiencia de Charcas pidiendo con éxito en 1761 que una Real Provisión inhibiera como Alcalde electo a uno de los testaferros de Ascasubi, el porteño Felipe Santiago de Arce,<sup>67</sup> para que

"...no entendiéndose en causa mía ni de ninguno de mi fama, cuya Providencia así como de cajón se mandó librar a mi favor".<sup>68</sup>

Lamentablemente para Reyes la gestión se empantanó en Lima, porque "...allí entretuvieron por los empeños contrarios, el tiempo".<sup>69</sup> Sin embargo, la gestión habría logrado un éxito parcial, pues para 1762 Arce fué designado Contador Interino de la Real Casa de Moneda de Potosí.<sup>70</sup> Ocho años después, en 1769, el Juez Comisionario enviado a Potosí por el Virrey del Perú Manso de Velazco le embargó a Ascasubi "...todo lo que había en su casa [a lo] que decía era ajeno".<sup>71</sup> Toda esta parafernalia burocrática muestra el poder de un Cabildo local y su Real Audiencia más próxima, en este caso la de Charcas, para resistir las presiones de acreedores provenientes de la metrópoli Virreinal y sus correspondientes autoridades, en un período en que Buenos Aires carecía de Consulado propio así como de sus respectivos Diputados. Pero aún posteriormente, cuando Buenos Aires ya contaba con su propio Consulado de Comercio, sus Diputados en Potosí pasaban peripecias propias de Caín. En 1797, el Juez Diputado en Chuquisaca del Consulado de Comercio Manuel Fernández de Alonso,<sup>72</sup> solicitó amparo a la Real Audiencia de Charcas en el incidente que tuvo --por cuestiones de jurisdicción y competencia mercantil-- con las autoridades concejiles.<sup>73</sup> La misma actitud excluyente que mantuvo el Cabildo de Chuquisaca con los comerciantes matriculados en el Consulado de Buenos Aires, la sostuvo la Diputación Potosina con los comerciantes matriculados en el Consulado de Chile. En efecto, en 1798 el Juez Diputado en Charcas Fernández de Alonso procesó y ordenó la detención de dos comerciantes matriculados en Chile, Miguel de Elizalde y Fermín Gastelu, quienes se habían negado a solicitar a la Diputación Potosina del Consulado de Buenos Aires permiso para abrir sus casas de comercio en el lugar.<sup>74</sup> Más aún, respecto a los deudores fraudulentos que los Diputados del Consulado solían enviar presos, Tjarks (1962) nos refiere los casos en que el Diputado Matías Texerina y Hurtado denuncia como los presos en el cuartel de milicias eran inmediatamente liberados.<sup>75</sup>

### **Alianzas inter-étnicas.**

Tan odiados eran estos comerciantes provenientes de la submetrópoli porteña, que los endeudados azogueros de áreas periféricas como Oruro, perteneciente a la Gobernación-Intendencia de Charcas, que no gozaban del privilegio de la mita o del azogue, no dudaron en aliarse a los indígenas en los primeros momentos de la rebelión encabezada por Túpac Katari. A tal extremo llegó este odio, que los grandes comerciantes y comisionistas peninsulares provenientes de Buenos Aires, como José de Endeyza y Alvear,<sup>76</sup> el Corregidor de Paria Manuel de la Bodega y Llano,<sup>77</sup> y Pedro de Lagrava,<sup>78</sup> en oportunidad de dicha conflagración, ocurrida en 1782, fueron ajusticiados por los indígenas.<sup>79</sup> Apremiados por la presión fiscal que ejercía la burocracia borbónica y por la presión mercantil y financiera que imponían los acreedores peninsulares como Endeyza y Bodega, azogueros tales como el Regidor Decano Manuel Serrano,<sup>80</sup> los Procuradores Generales Manuel de Aurrecoechea,<sup>81</sup> y Clemente José Menacho,<sup>82</sup> y los Alcaldes Domingo Urquieta,<sup>83</sup> Isidro de la Riva,<sup>84</sup> Domingo de Herrera y Galleguillos,<sup>85</sup> Jacinto Rodríguez de Herrera,<sup>86</sup> y Juan de Dios Rodríguez de Herrera,<sup>87</sup> se solidarizaron con la revuelta, coaligándose con los indígenas.<sup>88</sup> Esta actitud les significó, cuando se produjo la derrota indígena, que sus bienes fueran secuestrados y sus personas fueran remitidas presas a Buenos Aires.<sup>89</sup>

## Regiones subsidiarias del Alto Perú.

El extremo noroeste del actual territorio argentino, constituido por Jujuy, Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja operó como región subsidiaria del Alto Perú. El aluvión inmigratorio o presión demográfica externa varió notablemente de una provincia a otra, alterándose de esa forma su repercusión política. Para medir esa variación hemos elaborado un ranking de la inmigración, tomando como supuesto que los comerciantes peninsulares estaban compuestos por los varones españoles adultos solteros, entendiendo por españoles a los varones blancos. Dicho ranking fué elaborado en base a las transacciones notariales de los comerciantes que se internaban al interior del cono sur del Virreinato Peruano, en el tercer período comprendido entre la Paz de París (1763) y la Paz de Versailles (1782), y al Cuadro D-X, fundado en el padrón de 1776, publicado por Larrouy (1927), correspondiente a un año de paz. Su proporción sobre el total de la población masculina adulta daría un índice de la importancia relativa de dichos varones españoles adultos solteros. En efecto, en el Cuadro D-XI, encabezan el ranking de posiciones aquellas ciudades de provincia que contaban con comerciantes procedentes de Buenos Aires, como Santiago del Estero con el 25,8%, Tucumán con el 23,4%, Córdoba con el 13% y Salta con el 12%.<sup>90</sup> Postreras en el ranking figuran aquellas ciudades de provincia escasas de comerciantes procedentes de Buenos Aires como La Rioja con el 10,3%, Jujuy con el 9,9% y Catamarca con el 5,75%.<sup>91</sup>

Entre el primer período (1713-48) y el segundo período (1748-62) Tucumán, según el Cuadro D-VI, triplicó el número de comerciantes, multiplicó siete veces el número de las operaciones concertadas, y trece veces el monto de las mismas. En el tercer período (1763-82), pese a la profunda retracción registrada en el comercio del Alto Perú, Tucumán duplicó el giro registrado en el segundo período. Durante el cuarto período (1783-90) y el quinto período (1791-1810), Tucumán, en lugar de repuntar su giro, con motivo de la aplicación del Reglamento de Libre Comercio, redujo su giro a la mitad de lo registrado en el tercer período. Según Tjarks (1962), en el último período en la Diputación Tucumana del Consulado de Comercio de Buenos Aires se matricularon 15 individuos, sin discriminar el ramo.<sup>92</sup> Pero, a diferencia de las Diputaciones de las provincias Arribeñas, de los 15 individuos matriculados, casi la mitad se endeudó en Buenos Aires.<sup>93</sup> Salta, que le seguía los pasos a Tucumán, entre el primer período (1713-48) y el segundo período (1748-62) duplicó el número de comerciantes y operaciones y triplicó el monto de estas últimas. En el tercer período (1763-82), Salta cuadruplicó el giro registrado en el segundo período (1748-62). En el quinto y último período (1791-1810) se mantuvo esta cifra registrándose un total de 63 deudores del fiado de Castilla. Según Tjarks (1962), en el quinto período (1791-1810), en la Diputación del Consulado de Comercio de Salta se matricularon 38 mercaderes de efectos de Castilla y 18 mercaderes de mulas, o un total de 56 mercaderes.<sup>94</sup> Pero también, a diferencia de las provincias Arribeñas, y coincidiendo con Mata de López (1994), de los 38 mercaderes residentes en Salta, casi el 70% de los mismos, se había endeudado en Buenos Aires.<sup>95</sup> Asimismo, de la veintena de comerciantes matriculados en Jujuy, nueve de los mismos se habían endeudado en Buenos Aires.<sup>96</sup> En estas regiones, estos mismos comerciantes buscaban asegurar su posición comercial adquiriendo venal o electoralmente varas en los Cabildos del lugar. En Santiago del Estero, una facción compuesta por comerciantes se adueñó del Cabildo por vía venal.<sup>97</sup> En el quinto y último período (1791-1810) se registraron en Santiago del Estero 14 deudores del fiado de Castilla. Y según Tjarks (1962), en el quinto período (1791-1810), en la Diputación Santiagueña del Consulado de Comercio de Buenos Aires, se matricularon 22 comerciantes, sin discriminar el rubro.<sup>98</sup> De ese número, sólo una minoría, el 27%, nunca se había endeudado en Buenos Aires.<sup>99</sup> En Salta, la estrategia adoptada por algunos grandes comerciantes, habilitados por los comerciantes porteños, pero radicados

en el lugar, era la de adquirir los cargos concejiles electoralmente y no venalmente.<sup>100</sup> Por último, el noroeste, específicamente Catamarca y La Rioja, en virtud de su desfavorecida ubicación con relación a las rutas mercantiles, registró los guarismos comerciales más bajos. En el quinto y último período (1791-1810) se endeudaron en Buenos Aires sólo 10 comerciantes residentes en Catamarca y 3 en La Rioja. Según Tjarks (1962), en el quinto período (1791-1810), en la Diputación del Consulado de Comercio de Catamarca, se matricularon 25 comerciantes, en el de Ancasti uno y en el de Belén otro, es decir quince comerciantes más de los que se endeudaron en Buenos Aires.<sup>101</sup> Pero de los 25 comerciantes matriculados, la mayor parte, casi un 60%, se habían endeudado en Buenos Aires.<sup>102</sup>

En los cinco períodos computados en la región, se registraron, según los Apéndices B-III al B-VIII, un total de 511 comerciantes, que se endeudaron en Buenos Aires; de los cuales 201 eran residentes en Tucumán, 148 en Salta, 71 en Santiago del Estero, 50 en Jujuy, 33 en Catamarca, y 9 en La Rioja. De los mismos, según el Cuadro D-VII, 207 o el 40%, alcanzaron la operatividad mínima de un sólo año; 89 o el 15%, de 2 a 5 años; 103, o el 20%, de 6 a 20 años; y el 25%, 21 o más años. El record máximo de operatividad lo habría llevado Manuel Vicente Solá con 46 años de actividad, seguido por Gregorio Antonio Zegada con 44 años, y Tomás Rodríguez con 42 años. El parentesco también constituía una valiosa herramienta de continuidad mercantil.<sup>103</sup> En estas regiones subsidiarias del Alto Perú, también se dieron casos en que los comerciantes se hallaban mortificados por las autoridades locales. Tjarks (1962) señala como el Administrador de Tabacos Manuel de Castro insultaba al Diputado del Consulado.<sup>104</sup> Asimismo, en estas regiones se practicaban los llamados repartos de mercancías. En La Rioja, el Administrador de la Renta de Tabacos y Naipes y Capitán de Milicias José Antonio Mercado, fué arrestado en 1781 bajo la acusación de haber esquilmado a sus propios soldados con la venta forzada de bebidas espirituosas.<sup>105</sup> Mercado estaba al frente de las tropas que guarnecían la frontera de San Fernando del Río del Valle.<sup>106</sup> En Salta, Julián Gregorio de Zegada,<sup>107</sup> denunciaba la estafa a la que se veían sujetos los milicianos denominados partidarios,<sup>108</sup> a diferencia de los llamados ordenanzas,<sup>109</sup> pues el pago de sus sueldos se demoraban tanto en llegar que los milicianos al no tener

"...con que apersearse de cabalgaduras, y demás cosas que deben tener para el desempeño de su ejercicio,...las necesidades que les ocurren las remedian recibiendo al fiado en ocho lo que no vale dos por la poca esperanza, que tiene el que las fía de recoger su dinero".<sup>110</sup>

Más aún, trayendo boletos de sus Comandantes

"...para que se les dé algún socorro por el tiempo que han servido sin sueldo, se les obliga a recibir cuatro pesos en jéneros si quieren ver uno en dinero".<sup>111</sup>

Entre los proveedores de los Fortines figuraban los comerciantes más prósperos de la región.<sup>112</sup>

### **El mercado del reino de Chile.**

La región que le siguió al Alto Perú, en importancia estadística, en cuanto al volumen comercial, fué el reino de Chile. Contrariamente a lo expresado por Villalobos (1968, 1990), los comerciantes de Chile poseían válvula de escape hacia otras regiones, donde le disputaban los mercados a los comerciantes Limeños, tales como Arica, Arequipa y Moquegua.<sup>113</sup> Entre el primer período (1713-1748) y el segundo período (1748-62), según el Cuadro D-VI, Chile duplicó el número de comerciantes, casi triplicó el número de operaciones, y dobló en exceso el monto total de las operaciones. En el tercer período (1763-82) experimentó una tremenda retracción, aunque no tan

acentuada como la experimentada por el Alto Perú, habiéndose reducido a la tercera parte de lo girado en el primer período. Pero lo atípico de esta región se registró en el cuarto período (1783-90) y en el quinto período (1791-1810), cuando a diferencia del Alto Perú, en lugar de repuntar su giro, con motivo de la aplicación del Reglamento de Libre Comercio, retrajo el mismo a la mitad del registrado en el tercer período (1763-82). Esta retracción debe haberse producido por el auge del tráfico comercial por la ruta del Cabo de Hornos.<sup>114</sup> Otra eventualidad, es que en estos dos últimos períodos la mayor parte de los comerciantes Chilenos no se endeudaron con comerciantes porteños, sino que muy probablemente lo hicieron con comerciantes Cuyanos. Sin embargo, Villalobos (1968) confirma estas cifras, al denunciar que de una lista confeccionada en 1806 de 81 comerciantes solamente 43 tenían capital en giro.<sup>115</sup> La Lista A-XIII trae la nómina de las autoridades del Consulado de Comercio de Santiago de Chile. En los cinco períodos se registraron, según el Apéndice B-XIII, un total de 332 comerciantes residentes en Chile, que se endeudaron en Buenos Aires. De los mismos, según el Cuadro D-VII, 183 o el 55%, alcanzaron la operatividad mínima de un sólo año; 83 o la cuarta parte, de 2 a 5 años; 49, o el 14%, de 6 a 20 años; y el 6%, 21 o más años. El record máximo de operatividad lo habría llevado Bartolomé Montaner con 40 años de actividad, seguido por Tomás Antonio de Vicuña,<sup>116</sup> con 34 años, y Matías Grimau con 31 años. Otros comerciantes se perpetuaban sanguíneamente.<sup>117</sup>

### **El mercado Cuyano.**

La región intermedia entre Buenos Aires y Chile fué Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis). Entre el primer y segundo período Cuyo duplicó el monto total de las operaciones. Lamentablemente, sus cifras de población, que nos provee el Marqués de Sobremonte y el Pbro. Domingo García,<sup>118</sup> al no estar desagregadas entre casados y solteros, como las que trae el Cuadro D-X, fundado en los datos proporcionados por Larrouy (1927), para las provincias del norte, no nos permite en este caso inducir una aproximación numérica, en la proporción de población patricia respecto de la población mercantil forastera.<sup>119</sup> En el tercer período (1763-82) Cuyo experimentó una retracción, aunque no tan acentuada como la experimentada por Chile, habiéndose reducido a la mitad de lo girado en el primer período. En el cuarto período (1783-90) y en el quinto período (1791-1810), al igual que en el Tucumán y Chile, en lugar de repuntar su giro, con motivo de la aplicación del Reglamento de Libre Comercio, Cuyo retrajo el mismo a la mitad del registrado en el tercer período (1763-82). Esta retracción debe haberse producido también por el auge del tráfico comercial por la ruta del Cabo de Hornos, que le habría restado volúmen al tráfico trasandino.<sup>120</sup> En el quinto y último período (1791-1810) se endeudaron en Buenos Aires sólo 27 comerciantes residentes en Mendoza. Según Comadrán Ruiz (1984), en el quinto período (1791-1810), en la Diputación Mendocina del Consulado de Comercio de Buenos Aires, actuaron 38 comerciantes, es decir once comerciantes más de los que se endeudaron en Buenos Aires.<sup>121</sup> La Lista A-XI trae la nómina de los Diputados Mendocinos. Y según la Lista A-XII, formulada por los Alcaldes Tadeo Cano de Carbajal y Mateo Cano y Ramírez, entre 1808 y 1810, los candidatos a Diputados Sanjuaninos del Consulado de Buenos Aires alcanzaron a una docena de comerciantes, entre los cuales figuraban un par de parientes.<sup>122</sup> En los cinco períodos se registraron, según los Apéndices B-X al B-XII, un total de 321 comerciantes residentes en Cuyo que se endeudaron en Buenos Aires. De los mismos, según el Cuadro D-VII, 175 o el 54%, alcanzaron la operatividad mínima de un sólo año; 70 o la quinta parte, de 2 a 5 años; 58, o el 18%, de 6 a 20 años; y el 4%, 21 o más años. El record máximo de operatividad lo habría llevado Juan Gregorio Molina con 33 años de actividad, seguido por Pedro Gamboa con 30 años, y Félix Correas con 30 años. Otros comerciantes se perpetuaban siguiendo la vía del parentesco.<sup>123</sup> También en esta región subsidiaria del Reino de Chile, se practicaban los llamados repartos de mercancías. Al igual que en las regiones mineras de Chile, en Mendoza, el Teniente Corregidor de Lagunas y Corocorto Manuel Martínez Caballero, extorsionaba en 1782 a los Pueblos de Indios de Asunción y San Miguel con cargas de vino y aguardiente;<sup>124</sup> y en San

Juan, el Administrador de la Renta de Tabaco y Ministro de Real Hacienda Juan Manuel de Castro Carreño,<sup>125</sup> era denunciado en 1793 por su pariente el Comandante de Milicias José Xavier Jofré por el

"...delincuente proceder de vender públicamente por su cuenta los azogues del Rey al precio de 12 reales cada libra y 2 pesos a Mineros pobres de aquellas jurisdicciones, [y] a los excesivos valores en que expendía los Sumarios de Bulas e indultos".<sup>126</sup>

Procedimientos coactivos semejantes a los anteriormente relatados, mediante las llamadas tiendas volantes y las denominadas pulperías de campaña, eran practicados por los Alcaldes de Hermandad y los Comandantes de Armas en las campañas Rioplatenses, Cordobesas y Cuyanas.<sup>127</sup> Garavaglia (1983), Gelman (1985), Moutoukias (1988), Saguier (1989), Birocco (1993) y Pérez (1993) hallaron que los funcionarios civiles y militares practicaban el reparto de mercancías entre las propias milicias, los pueblos de indios de Paraguay, Corrientes y Buenos Aires, las peonadas de las estancias de Buenos Aires y las tropas de las vaquerías de la Banda Oriental, respectivamente.

### **El mercado cordobés.**

El tercer mercado en importancia, según el Cuadro D-VI, fué Córdoba, verdadero nudo de todas las rutas comerciales del interior. En el Cuadro D-XI, Córdoba figura tercera, con el 13%, en el ranking de posiciones de aquellas ciudades de provincia que contaban con comerciantes procedentes de Buenos Aires, siguiendo a Santiago del Estero que contó con el 25,8%, y a Tucumán que contó con el 23,4%, y precediendo a Salta que contó con el 12%.<sup>128</sup> Entre el primer período (1713-48) y el segundo período (1748-62) Córdoba triplicó el número de comerciantes, y multiplicó seis veces el número y monto de las operaciones concertadas. En el tercer período (1763-82) Córdoba, a diferencia del Alto Perú y de Chile, prolonga en exceso el auge del segundo período (1748-62), aunque en ello es superada ampliamente por Tucumán. A juzgar por Punta (1992), Córdoba pudo sortear la retracción de la demanda Alto Peruana merced a sus ya desarrollados vínculos con otras regiones del espacio colonial. Paradigma de esta estrategia de supervivencia fueron las actividades del comerciante Juan Bautista Carvallo, quien importaba ropa de la tierra desde Chile, y aguardiente desde San Juan y La Rioja, e introducía yerba desde el Litoral.<sup>129</sup> Durante el cuarto período (1783-90) y el quinto período (1791-1810), Córdoba, a semejanza de Chile y Tucumán, redujo su giro a la mitad de lo registrado en el tercer período (1763-82), endeudándose sólo un total de 47 comerciantes. Según Tjarks (1962), en el quinto período (1791-1810), en la Diputación Cordobesa del Consulado de Comercio, se matricularon 53 comerciantes de efectos de Castilla, 14 de efectos del campo, 26 de mulas al por mayor, y 38 los "...que han abierto tiendas de abasto o pulperías".<sup>130</sup> De los 53 individuos matriculados como comerciantes de efectos de Castilla, sólo una minoría de 15 comerciantes nunca se habían endeudado en Buenos Aires.<sup>131</sup> Como en Salta y Tucumán, en Córdoba, estos comerciantes buscaban asegurar su posición comercial adquiriendo venal o electoralmente varas en los Cabildos del lugar. Francisco Antonio Díaz,<sup>132</sup> y Bernabé Gregorio de Las Heras,<sup>133</sup> quienes contaban con un intenso giro comercial que se extendía desde Buenos Aires hasta Salta, extremos por donde viajaban asiduamente, lograron ser designados Alcaldes de Primero y Segundo Voto, respectivamente.<sup>134</sup> En los cinco períodos se registraron, según el Apéndice B-IV, un total de 304 comerciantes residentes en Córdoba que se endeudaron en Buenos Aires. De los mismos, según el Cuadro D-VII, 127 o el 40%, alcanzaron la operatividad mínima de un sólo año; 77 o la cuarta parte, de 2 a 5 años; 80, o el 26%, de 6 a 20 años; y el 9%, 21 o más años. El record máximo de operatividad lo habría llevado Juan Francisco de la Bárcena con 42 años de actividad, seguido por José Martínez con 39 años, y Pedro García Posse con 31 años. Otros comerciantes se perpetuaban sanguíneamente.<sup>135</sup> En esta provincia, también subsidiaria del Alto Perú, se dieron asimismo casos en que los comerciantes se hallaban mortificados por las autoridades



locales. Tjarks (1962) señala como el Diputado Francisco Antonio Bulnes fue humillado por el Cabildo por no haber aceptado su condición de Juez Real.<sup>136</sup>

### **El mercado litoraleño.**

El Litoral, compuesto por Paraguay, Santa Fé, Corrientes y la Banda Oriental registró, según el mismo Cuadro D-VI, el cuarto lugar en importancia. Lamentablemente, las cifras de población que nos provee el Fraile Pedro José de Parras, al no estar desagregadas entre casados y solteros, como las que trae el Cuadro D-X para las provincias del norte, no nos permite tampoco en este caso inducir una aproximación cuantitativa al monto de la población patricia ni al de la población mercantil forastera. Entre el primer período (1713-48) y el segundo período (1748-62) Paraguay triplicó el número de las operaciones concertadas, y multiplicó cuatro veces el monto de las mismas. En el tercer período (1763-82), Paraguay, a semejanza del Alto Perú y de Chile --aunque a una intensidad mucho menos acentuada-- disminuyó su giro a la mitad. Durante el cuarto período (1783-90) y el quinto período (1791-1810), Paraguay, redujo su giro a la tercera parte de lo registrado en el tercer período. Muy probablemente, en estos dos últimos períodos, la mayor parte de los comerciantes Paraguayos no se endeudaron con comerciantes porteños, sino que lo hicieran con comerciantes Correntinos y Santafesinos. En los cinco períodos se registraron en la región, según los Apéndices B-XVII al B-XXI, un total de 663 comerciantes que se endeudaron en Buenos Aires, 303 residentes en el Paraguay, 138 en Santa Fé, 123 en Corrientes y 99 en la Banda Oriental. En esta región, también se dieron casos en que los comerciantes se hallaban mortificados por las autoridades locales. Tjarks (1962) señala como el Juez de Comercio de la Villa Real de Concepción Francisco de Quevedo no fue respetado en la magistratura que investía por el Subdelegado José Espínola.<sup>137</sup>

En la región litoraleña, Santa Fé ocupaba un lugar clave. Según Tjarks (1962), en géneros de Castilla traficaban de 6 a 8 mercaderes y en efectos de la Tierra de 10 a 12 mercaderes.<sup>138</sup> La Lista A-XIV trae la nómina de los Diputados Santafesinos del Consulado de Buenos Aires. En Montevideo, según Falcao Espalter (1926), existían 250 casas comerciales, tiendas y pulperías, y en el interior de la Banda Oriental 151 comercios.<sup>139</sup> En este sentido, Tjarks (1962) tuvo que discrepar con Pivel Devoto (1952), respecto a la veracidad del Informe que en 1803 elevara el Virrey del Pino.<sup>140</sup> En todo el Litoral, según el Cuadro D-VII, 406 o el 61% alcanzaron la operatividad mínima de un sólo año; 101 o el 15%, de 2 a 5 años; 134, o el 20%, de 6 a 20 años; y el 4%, 21 o más años. El record máximo de operatividad lo habría llevado Antonio Sánchez con 51 años de actividad, seguido por Policarpo Aguirre con 35 años, y por José Francisco Tarragona con 34 años. Otros comerciantes se perpetuaban sanguíneamente.<sup>141</sup>

También en Paraguay se registró el reparto forzoso hasta fechas muy tardías. En 1797, el Gobernador del Paraguay Lázaro de Rivera otorgó al Subdelegado del Departamento de Santiago licencia "...para que pusiese un beneficio de yerba, por cuenta de los cinco pueblos de su cargo, en los yerbales recientemente descubiertos en Villa Real".<sup>142</sup> El objeto de este último proyecto, al que se opuso el Teniente Coronel José del Casal y Sanabria,<sup>143</sup> era "...fomentar a los cinco pueblos [de indios de Misiones], para que pudiesen pagar el reparto de géneros que acababa de hacerles el Gobernador en la Visita".<sup>144</sup> En cuanto a la naturaleza de estos Repartos, según una Noticia de los indios del Chaco y del Paraguay, el Administrador General de las Misiones "...jamás envía lo que se les pide y necesita el pueblo".<sup>145</sup>

La relación entre comerciantes mayoristas y minoristas también seguía un curso teñido por la naturaleza compulsiva del comercio colonial. Mientras los comerciantes mayoristas porteños sostenían

que la mera habilitación no podía ser equiparada a una compañía o sociedad, los minoristas del comercio Paraguayo alegaban que la participación en las utilidades como consecuencia de una habilitación, les confería derecho a retener el principal (capital) y ser tenidos por socios o compañeros. Pero un mayorista dueño de tienda preferirá un habilitado a un compañero. En el conflicto que se suscitó en 1788 con motivo de la rendición de cuentas exigida a Félix David,<sup>146</sup> comerciante en el Paraguay, por Pedro García Rodríguez, el primero exclamaba desde Asunción

"...!Rara solicitud! ¿acreditó acaso, el trato de compañía que supone? ¿justifica haberme hecho alguna habilitación para ello? ¿documenta algún pacto escrito, o de algún modo estipulado, que pronostique tal compañía? ¿hay en autos acto alguno positivo que arguya compañía entrambos fuera de la pulpería? nada menos: luego es preciso confesar que es un delirio contemplarse socio, en aquellos negocios y es una maliciosa y punible temeridad, quererme pedir cuentas quien debe estudiar y afanarse por dárme las como está obligado de uno y otro manejo".<sup>147</sup>

En un litigio entre un comerciante minorista Luis Cecilio Collantes,<sup>148</sup> que traficaba con Cuyo, y un mayorista Juan Carlos Wright,<sup>149</sup> este último alegaba que un contrato que interese al habilitado en las ganancias de lo que produjese un capital, como se hace con cualquier dependiente, a quien se pretende fomentar atendido su trabajo, y su buen procedimiento; no puede llamarse Contrato de Sociedad o Compañía porque para que lo haya entre dos o más personas,

"...se requieren por las Leyes otras circunstancias que no se encuentran en la habilitación siendo la más principal la designación del término o plazo; porque no hay alguna sin tiempo determinado".<sup>150</sup>

Supuesto pues que la negociación de los intereses que puso Wright en manos de Collantes, no ha sido jamás ni podido llamarse Compañía, sino una habilitación, Wright se preguntaba

"...¿habrá quien diga que no tengo acción para pedirle mi principal [capital] cuando me parezca conveniente, para obligarle a que me de cuenta y razón de estos intereses; mucho más teniendo poderosos fundamentos para persuadirme y convencerme de su mala versación?".<sup>151</sup>

Fundado en que leyes, se preguntaba también Wright, pretende Collantes

"...impedirme el libre uso de mis intereses, ¿no teniendo otra representación que la de un habilitado y favorecido? Por esta regla debían todos los dependientes entablar pleito con su habilitador, siempre que éste por justos motivos quisiese disponer de sus intereses. De modo que después de haberse manejado en estos términos,...no pueda separarme de esta habilitación a la que ha querido darle el nombre de compañía sólo porque suela tener derecho a las utilidades, cuando no hay habilitación que se haga, de cualquiera dependiente, en que no se le interese en ellas, sin que por esto se diga que el Patrón o Habilitador hace compañía con el Dependiente a quien protege".<sup>152</sup>

Dentro de las provincias litorales, a juzgar por el Cuadro D-VI, Corrientes igualó entre el primer período (1713-48) y el segundo período (1748-62) el número y monto de las operaciones concertadas. En el tercer período (1763-82), Corrientes duplicó su giro. Esta duplicación del giro comercial, en un período cuando las demás regiones registran una profunda retracción, obedeció a que a partir de la caída de Portobello (1742) la economía del litoral se entró a dinamizar con la exportación de cueros. Corrientes contaba para 1751 con 440 familias, para 1753 con 300 vecinos, para 1760 con

1.440 milicianos, y para 1769 con 1.021 milicianos.<sup>153</sup> Los linajes patricios comenzaron a enfrentarse entre sí por el derecho a corambrear las haciendas realengas y a competir con el circuito de la exportación de ganado en pie al Paraguay y las Misiones y con la comercialización de la yerba mate, controlada por los Jesuitas. Ello sería el principal motivo por el cual a la facción ajesuitada del patriciado local le surgió una anti-élite con fuertes elementos anti-jesuiticos. Durante el cuarto período (1783-91), Corrientes, redujo su giro a la mitad de lo registrado en el segundo período (1748-62), y en el quinto período (1791-1810) repuntó igualando al tercer período (1763-82). Y en el quinto período (1791-1810), Tjarks (1962) registró en Corrientes solo una decena de comerciantes. Y según Maeder (1981), en el quinto período (1791-1810), en la Diputación Correntina del Consulado de Comercio de Buenos Aires, se matricularon 62 comerciantes de efectos de Castilla y de la tierra. De estos 62 mercaderes, sólo una decena se habían endeudado en Buenos Aires.<sup>154</sup> Muy probablemente, en los dos últimos períodos, la mayor parte de los comerciantes Correntinos se endeudaron con comerciantes Santafesinos. En los cinco períodos se registraron, según el Apéndice B-XX, un total de 123 comerciantes residentes en Corrientes que se endeudaron en Buenos Aires. De los mismos, según el Cuadro D-VII, 68 o algo más de la mitad, alcanzaron la operatividad mínima de un sólo año; 20 o el 16%, de 2 a 5 años; 34, o el 26%, de 6 a 20 años; y el 8%, 21 o más años. El record máximo de operatividad lo habría llevado Gregorio Tomás Sáinz de Cavia con 44 años de actividad, seguido por Francisco Ximénez con 27 años, y Sebastián de Casajús con 25 años.

### **El caso de los viáticos.**

En aquellas regiones, donde el comerciante debía internarse con sus propias mercaderías, sin contar con habilitación alguna, debía afrontar los viáticos con sus propios ingresos. Por viáticos se entendía los gastos de vivienda, comida, vestuario, calzado, lavado, planchado, peluquería y barbería. Por cierto estos gastos eran más altos en la carrera altoperuana que en la del litoral. En el caso del comercio paraguayo, con ser mucho más económico que el del Alto Perú, los gastos alcanzaban, a juzgar por la correspondencia del comerciante Félix David, de paso por Asunción en 1788 con su compañero Pedro García Rodríguez, la suma de 13 a 14 pesos mensuales.<sup>155</sup> David le expresaba con alguna interesada exageración a García Rodríguez que la demora en ser surtido con nuevos renglones de mercaderías era la causa de que no hubiera ganancias, y que en tanto eran irremediables los gastos, pues

"...para una comida que es la que hago al día gasto \$6, \$3 de la casa, \$2 de lavar la ropa, 8 reales de velas, y 2 reales de agua sin el pan, que nunca lo como, sólo con maíz y mandioca, cuando la ai, y con todo no se puede dexar de gastar de 13 a 14 pesos todos los meses, y el negocio no lo dexa..."<sup>156</sup>

### **El mercado de la Banda oriental.**

El quinto y último lugar en el score le correspondió a la Banda Oriental. Lo atípico de esta región se registró en el segundo y tercer períodos, cuando a diferencia de las otras regiones, redujo y repuntó su giro respectivamente. En el segundo período (1748-62) redujo el giro a la quinta parte de lo registrado en el primer período (1713-48), y en el tercer período (1763-82) multiplicó su giro en forma inverosímil. Este boom obedeció a la acentuada demanda Europea de cueros. En los cinco períodos se registraron un total de 99 comerciantes residentes en la Banda Oriental, que se endeudaron en Buenos Aires. De los mismos, según el Cuadro D-VII, 70 o el 70%, alcanzaron la operatividad mínima de un sólo año; 7 o el 7%, de 2 a 5 años; 21, o el 21%, de 6 a 20 años; y el 2%, 21 o más años. El record máximo de operatividad lo habrían llevado José Durán y Tomás Fernández con 22 años de actividad

cada uno, seguidos por Luis Miralles y Juan Porcel de Peralta con 17 años cada uno, y Bartolomé Cuenca y Manuel Correa Morales con 16 años cada uno.

Para terminar, podemos afirmar, sobre la base de las numerosas listas, cuadros y apéndices aquí producidos, que si bien el trato con las casas monopolistas de Cádiz había fortalecido el poder económico y social de algunas casas mercantiles porteñas; la movilidad del comercio generado a través de Buenos Aires, que alcanzó una de las intensidades más altas de la América Latina colonial, había logrado articular las regiones más apartadas del espacio colonial. Esa articulación fué desigual, por cuanto al menos en el último período (1791-1810), en las provincias arribeñas la mayor parte de los comerciantes registrados en la Diputación del Consulado de Buenos Aires no se endeudaban con comerciantes porteños, sino que muy probablemente con comerciantes Salteños y Tucumanos. De la misma manera, en Chile, la mayor parte de los comerciantes no se endeudaban con comerciantes porteños, sino que muy probablemente lo hacían con comerciantes Cuyanos. Por el contrario, en las provincias abajeñas, sin duda alentados por la proximidad geográfica, la mayor parte de los comerciantes registrados en la Diputación del Consulado se endeudaban en Buenos Aires.

## NOTAS

<sup>1</sup> Assadourian, 1983, 127.

<sup>2</sup> Con relación al seguro marítimo, ver De Roover, 1945; y Wedovoy, 1966; con relación a la contabilidad, ver Yamey, 1949; y con relación a la evolución de la jurisdicción comercial en el Río de la Plata, ver Nortman, 1952.

<sup>3</sup> Ver Saguier, 1993a, y 1993c.

<sup>4</sup> Puiggrós, 1940; Wedovoy, 1960, 1966; Tjarks, 1962; Villalobos, 1968; Socolow, 1978; Garavaglia, 1983, 1985; Malamud, 1985; Müller, 1987; Amaral, 1990; Fernández de Amicarelli y Ciriza, 1990; Punta, 1992; y Tandeter, 1992.

<sup>5</sup> los que se otorgaban en Buenos Aires a aquellos comerciantes que se internaban al interior del espacio colonial.

<sup>6</sup> por lo general peninsulares, o a comerciantes en viaje al lugar de residencia del deudor.

<sup>7</sup> por las que los cesionarios de cesiones de créditos se embarcaban en nuevas operaciones de cesión de créditos.

<sup>8</sup> El énfasis que Tandeter (1993) otorga a los estudios fundados en fuentes fiscales, entre las investigaciones interrumpidas por las dictaduras militares (Tandeter, 1993, 805), va en desmedro de aquellas investigaciones centradas en las fuentes notariales y judiciales, que también se vieron frustradas por dichas dictaduras y por la desidia con que fueron y son tratados los Archivos históricos.

<sup>9</sup> Levene, 1962, 262; y Marilúz Urquijo, 1987, 61.

<sup>10</sup> un comerciante flamenco.

<sup>11</sup> Apéndices IV y V de Bernal (1992), y Bernal, 1992, 420.

<sup>12</sup> En el cómputo del Apéndice A-I tengo registrados 183 comerciantes gaditanos.

<sup>13</sup> seleccionados bajo el triple criterio del mayor número de escrituras de riesgo acreditadas, mayores cuantías invertidas en la financiación y mayor permanencia temporal (Bernal, 1992, 458).

<sup>14</sup> Existen trabajos sobre algunas casas comerciales gaditanas como el de Ruiz Rivera (1976) sobre los Ustáriz y San Ginés y el de Molas Ribalta (1975) sobre Juntas y corporaciones mercantiles, y otros sobre casas comerciales sevillanas, como los de Alvarez Pantoja (1986, 1989) sobre el Marqués de Palomares de Duero y sobre Juan Pedro Jacave.

<sup>15</sup> Borchart de Moreno, 1984, 118; y Bernal, 1992, 483.

<sup>16</sup> Natural de la Higuera o Vigueras, La Rioja, Arzobispado de Calahorra, hijo de Diego del Arco y de Catalina de Soldevilla; marido de Magdalena Trillo, hija de Domingo Trillo y de Micaela Cárdenas (Fernández de Burzaco, I, 141; y Jáuregui Rueda, 1987, ítem 3307). Socio de Pedro de Lea.

<sup>17</sup> marido de María Moreno, viuda del Capitán Manuel Pellicer (JR, 1987, ítem 4032). Socio de Manuel del Arco.

<sup>18</sup> Hermano de Julián de Arriaga y del gran comerciante monopolista de Cádiz Pedro Arriaga, el mismo que fuera en la década del 50 Corregidor y Justicia Mayor de Azángaro, y más luego fuera Teniente Gobernador Interino de Córdoba.

<sup>19</sup> Capitán y Regidor, marido de Gerónima Isabel de San Martín, hija de Juan Ignacio de San Martín y de María Rosa Avellaneda; y cuñado del gran comerciante Roque San Martín (FB, II, 273; y VI, 40; y JR, 1987, ítem 2632).

<sup>20</sup> socio de Juan Bautista de la Sala o Lasala.

<sup>21</sup> Barba, 1980, 59.

<sup>22</sup> natural de Cádiz; hijo de Bernardo Alvarez Campana y de Josefa Manuela de la Vega; y marido de Isabel Gil, hija del comerciante Nicolás Gil, asesinado por los indios en la travesía del sur de Córdoba, y de Bartola Rodríguez Osorio (FB, I, 98; y JR, 1989, ítem 5161).

<sup>23</sup> Marido de Sabina Sorarte, viuda de Adrián Pedro Warnes; hija de Diego de Sorarte y de Juana Báez de Alpoin; concuñado del Tesorero Oficial Real General Alonso de Arce y Arcos; y padre del célebre abogado Mariano Pérez de Saravia y Sorarte (FB, I, 140; y V, 199; y JR, 1987, ítems 3147 y 3305).

<sup>24</sup> Hijo del Maestre de Campo Juan Ignacio de San Martín y de María Rosa de Avellaneda; cuñado de Juan de Eguía y de Marcos José de Riglos; y socio de Pedro de Arriaga (FB, VI, 40).

<sup>25</sup> natural de Palmá, Obispado de Coimbra, Portugal; marido de María Antonia Malaver, natural de Buenos Aires, hija de Andrés Valentín Pacheco Malaver y de Petrona Peralta y Muga; concuñado de José Gómez de los Santos (natural de Lisboa), Agustín Gerardo Marín, Nicolás de Arribí, y Matías Nicolás de la Fuente Samaniego (FB, III, 95 y 219; IV, 240; V, 105; y VI, 74; y JR, 1987, ítem 3001).

<sup>26</sup> probablemente primo del comerciante Blas Antonio Benito Ximénez Braga.

<sup>27</sup> Lamentablemente no me ha sido posible aún volcar en cada asiento el nombre del asegurador de cada operación.

<sup>28</sup> Según el Apéndice A-VI este grupo también mantenía estrechos vínculos con clientes residentes en las cabeceras de las provincias de las carreras del Alto Perú y de Chile.

<sup>29</sup> Borchart de Moreno, 1984, 92; y Kicza, 1986, 111.

<sup>30</sup> AGN, Sala IX, Comerciales, Leg. 44, Exp. 14; y Hacienda, Leg. 12, Exp. 235. Según Moreno Cebrián (1976), el precio con que se beneficiaron los corregimientos no resultó estable. Más aún, el ritmo del valor en que se vendieron los corregimientos creció muchísimo, teniendo en cuenta la depreciación y la baja del poder adquisitivo, haciendo aún mayor el desfase existente entre los sueldos y los gastos inherentes al cargo (Moreno Cebrián, 1976, 228).

<sup>31</sup> Entre los gastos a los que estaban sujetos los funcionarios que arribaban a América estaban aquellos referidos a la financiación de sus viajes, estadías en los Puertos, etc. Para alcanzar sus destinos, los funcionarios peninsulares debían endeudarse con comerciantes que les adelantaban dinero sencillo, a cambio de escrituras donde se comprometían a devolver las habilitaciones en plazos muy breves y con moneda dura o fuerte. En la diferencia entre la moneda dura y la sencilla los comerciantes les cargaban premios exorbitantes. El premio oscilaba según en qué momento o lugar se concertaba. El premio de la moneda doble, a la inversa de las tasas de interés, era más alto en los puertos de salida, y más bajo en tiempo muerto (tiempo de ausencia de navíos en los puertos) y cerca de las Casas de Moneda. Durante el tiempo muerto en Buenos Aires el premio que se estilaba alcanzaba al 3%, y en tiempos de navíos oscilaba entre el 5 y el 15%. En Chile, en 1737, el premio de la moneda doble alcanzaba al 2% y en Potosí, donde había más abundancia de moneda doble el premio debió haber sido menor. En igual fecha, en Buenos Aires, el premio llegó al 6%, en 1778 en la Colonia del Sacramento alcanzó al 17%, y en Brasil al 25%. Entre la moneda doble (o de ocho y cuatro reales) y la sencilla (de 2, 1, 1/2, o 1/4 real) no había diferencia de fino o ley ni tampoco de peso salvando la proporción, pero si existió una diferencia de volumen, siendo mayor en moneda sencilla. Tal fue el abuso en los premios que recién en 1790 la corona decidió poner coto a ello habilitándolos de su cuenta y riesgo acudiendo los que necesitaban al Ministerio de Guerra y Hacienda de Indias donde se les otorgaban libranzas a pagar en Cádiz o en la Coruña en las cantidades proporcionales a las clases de empleos y sueldos que llevarán. Para más detalles ver el Apéndice D-I.

<sup>32</sup> No hemos podido constatar las operaciones de fiado que los Corregidores de Indios del Alto Perú puedan haber contraído en ciudades como Córdoba, Tucumán y Salta.

<sup>33</sup> Saguier (1992).

<sup>34</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. R-8, Exp. 8, fs. 47.

<sup>35</sup> El endeudamiento coactivo o reparto forzoso y el adelanto fiado de géneros a los que van a los verbales es explicado por Garavaglia, 1983, 376-377.

<sup>36</sup> Los juicios de residencia a los gobernadores del Paraguay por traficar con mercancías durante el

ejercicio de su mandato era de vieja data (Garavaglia, 1983, 461, nota 136).

<sup>37</sup> Assadourian, 1983, 127.

<sup>38</sup> casado con Agustina Tirado, hija de Juan Tirado y de María de Castro, y padre del comerciante Francisco de Carvajal y Tirado (FB, II, 75).

<sup>39</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. C-8, Exp. 9, fs. 10.

<sup>40</sup> Idem.

<sup>41</sup> para el comercio interno del Alto Perú y sus comerciantes de géneros de la tierra, ver Saguier (1993d).

<sup>42</sup> Tjarks, 1962, 193.

<sup>43</sup> En efecto, cruzando la Lista A-III, de los matriculados en la Diputación de La Paz, con el Apéndice B-I sólo Francisco Guimará y Puyol y Manuel Inocencio Villegas otorgaron escrituras de fiado en Buenos Aires (AGN, División Colonia, Consulado de Buenos Aires, Libro XIV, Sala IX, 4-6-14, fs.181, cit. por Tjarks, 1962, 193).

<sup>44</sup> En efecto, cruzando la Lista A-IV, de los matriculados en la Diputación de La Plata, con el Apéndice B-I, sólo Sebastián Antonio de Arana y Manuel de Entrambasaguas otorgaron escrituras de fiado en Buenos Aires (AGN, División Colonia, Consulado de Buenos Aires, Libro XIV, Sala IX, 4-6-14, fs. 181, cit. por Tjarks, 1962, 193).

<sup>45</sup> Casado con Manuela de Urrejola, hija de Estéban de Urrejola y de Josefa Peñaloza, y nieta del Teniente Gobernador de Santiago del Estero General Gerónimo de Peñaloza y de Isabel Alfaro. Concuñado de José Antonio Gorostiaga (Figuerola, 1927, 32).

<sup>46</sup> Bautizado en mayo de 1663, hijo del Capitan Juan Miguel de Arpide, natural de Guipúzcoa, y de Estefanía de Borda y Videla, cuñado del Capitán Antonio Meléndez de Figuerola, del Capitán José de Valdivia y Alderete, y del Sargento Alonso Suárez (Fernández de Burzaco, 1986, I, 161; y Pico, 1987, ítem 128).

<sup>47</sup> Tjarks, 1962, 87.

<sup>48</sup> La Lista A-II demuestra, fundado en numerosos Apéndices, como en Jujuy, a Manuel de la Quintana, Diputado entre 1794 y 1796, le sucedió en 1800 el conculado de su cuñado, José de Alvarado y del Ribero. En Tucumán, a José Velarde, designado Diputado en 1800, le sucedió en 1808 su pariente político Domingo Villafañe, y a este último su cuñado Cayetano Rodríguez. En Santiago del Estero, a Manuel de Palacios, designado Diputado en 1796, le sucedió en 1805, su cuñado José Domingo Iramain. En Catamarca, a Francisco de Acuña, designado Diputado en 1803, le sucedió en 1805 su yerno Gregorio Ruzo, y en 1806 su pariente político Feliciano de la Mota Botello. En Córdoba, a Ambrosio Funes, designado Diputado en 1794, le sucedió en 1797 su cuñado Pedro Lucas de Allende, y en 1798 su pariente político Agustín Igarzábal. En Mendoza, a Bernardo Ortíz, Diputado en 1803, le sucedió su conculado Francisco Segura; y a Manuel Silvestre Videla, Diputado en 1804, le sucedió su cuñado Reymundo Pelliza Morales. En San Juan, de la decena de candidatos presentada en

1808 y 1810 por los Presidentes de la Diputación Tadeo Cano de Carvajal y Mateo Cano y Ramírez, uno es pariente carnal: Juan José Cano; y otro es un pariente político: Isidro Zavalla, por estar casado con Justa Cano de Carvajal. Los candidatos a Diputados Sanjuaninos del Consulado de Buenos Aires fueron en 1808: Juan José Cano; José de Contreras; Mateo Antonio Domínguez; Pedro Ignacio Flores; Hilarión Furque; Martín Gómez; Dionisio Navarro; Mariano Sanmillán; Juan Antonio Uriburu e Isidro Zavalla (Videla, 1962, 727). En Santa Fé, a Juan Francisco de Larrechea, designado Diputado entre 1796 y 1798, le sucedió en 1800 su conuñado Manuel Ignacio Díez de Andino; a Quirce Pujato, designado Diputado en 1802, le sucedió en 1804 su sobrino político José Arias Troncoso, y a este último le sucedió en 1808 su pariente político Francisco Alzogaray. En Corrientes, a Manuel de Bedoya y Cossio, Diputado entre 1794 y 1796, le sucedió en 1796 su conuñado Juan García de Cossio, en 1800 su otro conuñado Isidro Martínez y Cires, y en 1802 su pariente Manuel Gómez Cossio (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.147, Exp. 8, fs.7). Y en 1806 de la decena de candidatos a Diputados presentados por la Diputación Correntina se encontraban nuevamente los mismos conuñados: Juan García de Cosio, e Isidoro Martínez Cires. En 1806 se presentaron como candidatos a Diputados: Juan García de Cosio, Isidoro Martínez Cires, Manuel Gómez de Cosio, Miguel de Ferragut, Antonio Queto, Francisco Alvarez Valdés, Angel Vedoya, José Luis de Madariaga, Fernando de la Torre y Domingo Real de Asúa (AGN, División Colonia, Consulado de Buenos Aires, Libro IV, fs.230, Sala IX, 4-6-4). Y en Montevideo, a diferencia de las demás provincias y ciudades del Virreinato, no se registraron parentescos en su elite Consular, debido a la formación más reciente de su población.

<sup>49</sup> Entre 1798 y 1801, el Cónsul y luego Conciliario Manuel de Arana y Torrezuri habría influido para que se eligiera como Diputados en Salta, Córdoba y Jujuy a quienes fueran en 1787 y 1784 sus consignatarios Lino de Rosales y Francisco Antonio Bulnes, y a José de Alvarado, yerno de quien también fuera su consignatario en 1784 Manuel Sánchez de Bustamante, respectivamente (AGN, Protocolos, Registro 1, año 1787, fojas 234v.; Reg. 1, 1785, fs.102; R.1, 1787, fs.66; y R.1, 1784, fs.375). Entre 1798 y 1802, el Conciliario Tomás de Balansátegui habría influido para que se eligiera como Diputados en Mendoza, Santiago del Estero, Corrientes y Villa Real de Concepción, a quienes fueran entre 1792 y 1800 sus consignatarios Raymundo Pelliza, Pedro Carol, Angel Manuel Fernández Blanco y Francisco Quevedo, respectivamente (AGN, Protocolos, R.1, 1797, fs.424; R.1, 1792, fs.2; y R.1, 1797, fs.639; R.1, 1795, 545v.; R.1, 1799, fs.484v.; y R.1, 1800, fs.85). En 1796, el que luego fuera Consiliario Francisco Castañón habría influido para que se eligiera como Diputado en Cochabamba a Juan Carrillo de Albornóz (AGN, Protocolos, R.6, 1790, fs.116). En 1796, el Síndico Vicente Antonio Murrieta habría influido para que se eligiera como Diputado en Salta a quien fuera en 1796 su consignatario Pedro de Ugarteche (AGN, Protocolos, R.6, 1796, fs.107). En 1797, el Consiliario Pedro Duval habría influido para que se eligiera como Diputado en Santa Fé a Juan Francisco de Larrechea, conuñado de quien fuera en 1795 su propio consignatario José Teodoro Larramendi (AGN, Protocolos, R.2, 1795, fs.351). En 1798, quien luego fuera el Conciliario Román Ramón Díaz habría influido para que se eligiera como Diputado en Tucumán a quien fuera su consignatario José Ignacio Garmendia (AGN, Protocolos, R.1, 1793, fs.512v.). En 1798, quien luego fuera el Conciliario Martín de Alzaga habría influido para que se eligiera como Diputados en Jujuy y Santa Fé a quienes fueran en 1793 sus consignatarios Martín de Otero y Agustín de Iriondo (AGN, Protocolos, R.6, 1793, fs.78; R.4, 1788, fs.21v.; R.1, 1790, fs.67; y R.6, 1791, fs.77v.). En 1802, el Consiliario Cecilio Sánchez de Velasco habría influido para que se eligiera como Diputado en Catamarca a quien fuera en 1786 su consignatario Francisco de Acuña (AGN, Protocolos, Registro 6, 1786, fs.75). Entre 1802 y 1805, el Consiliario Anselmo Sáenz Valiente habría influido para que se



eligiese como Diputados en La Plata, Mendoza y Cochabamba, a quienes fueran en 1802 sus propios consignatarios o parientes de los mismos: Manuel de Entrambasaguas, Manuel Silvestre Videla (medio hermano de Juan Agustín Videla) y Mariano Antezana, respectivamente (AGN, Protocolos, R.6, 1802, fs.404; R.6, 1802, fs.553v.; R.6, 1802, fs.254; y R.6, 1804, fs.56v.). Y en 1806, el Consiliario José Martínez de Hoz habría influido para que se eligiera como Diputado en Salta a quien fuera en 1791 su propio consignatario Mateo Gómez Zorrilla (AGN, Protocolos, Registro 1, 1785, fs.416v.; y Registro 5, 1791, fs.74v.).

<sup>50</sup> Cuando en 1796 se convocó a elecciones, José Martínez de Hoz, reclamó contra las propuestas que entonces se hicieron de Juan Viola, para Cónsul y de Agustín Antonio de Erézcana, para Síndico,

"...por estar estos casados, el primero con prima [María Ignacia de Echavarri], y el segundo con hermana [María Eugenia Azcuénaga] de la mujer de Don Gaspar de Santa Coloma [Flora Azcuénaga], que sólo era entonces Teniente del Conciliario Juan Estéban de Anchorena" (AGN, Sala IX, Comerciales, Leg. 22, Exp.6, fs. 16v.).

Y cuando en 1801 se reclamó contra la propuesta de José Martínez de Hoz por hallarse casado con [Josefa de Castro Almandoz] sobrina carnal de Francisco Castañón Reina, "...no Teniente de Conciliario sino Consiliario actual como Cónsul saliente", el Oidor Juez de Alzadas dió lugar al planteo (AGN, Sala IX, Comerciales, Leg. 22, Exp.6, fs. 16v.).

<sup>51</sup> ver Saguier, 1993a.

<sup>52</sup> En el Alto Perú, a Francisco Cueto le siguió su yerno Ignacio Gorrity. A Diego Barrón y Hontañón, le siguió su yerno Domingo Antonio de Achával. A Sebastián José de Ocampo y Guerra le siguió su hijo Manuel José de Ocampo y Navia. A Francisco Rodríguez de Vida, le siguieron sus yernos José de Astuena y Manuel Alfonso de Sanginés. A José Estévez le siguió su yerno Marcos Beeche Goytía. Y a Xavier Saturnino de Saraza le siguió su yerno Francisco Casimiro de Necochea (notas del Apéndice C-I)..

<sup>53</sup> vino en los registros de Francisco de Alzaybar, fué designado Corregidor de Omasuyos, y concertó entre 1731 y 1742, con Francisco de Alzaybar, Pedro de Aoíz, Tomás Hilson, y Miguel G. Ruiz, cuatro operaciones de crédito por valor de \$3.441 (AGN, Protocolos, Reg.3, 1731, fs. 234; Reg. 3, 1738, fs. 589; Reg. 3, 1742, fs. 5; y Reg. 1, 1742, fs. 353).

<sup>54</sup> pariente del gran comerciante de Cádiz Don Juan Agustín de Ustáriz. Probablemente fuere el padre de Ramón Urtizberea, quien en 1789 formalizó con su hermano una compañía con Juan Gelly, para la explotación de un mineral en Aullagas (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 56, Exp. 1442, fs. 194). Esta compañía terminó cuando Gelly --cuyo ingenio fué embargado, luego de haber sido suspendido por no dar la ley de los metales-- vació del azogue a la misma, contraviniendo las leyes que prohibían su comercio (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 56, Exp. 1442).

<sup>55</sup> Francisco de las Heras a Nicolás de la Quintana, 20-I-1755 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

<sup>56</sup> *Ibidem*.

<sup>57</sup> casó en 1751 con Sabina Gallegos, hija del gran comerciante Antonio Gallegos, nacido en la Villa

de Santadilla, Obispado de Burgos, y de Sabina de Rámila (Fernández de Burzaco, III, 115; y V, 427).

<sup>58</sup> Nacido en las Montañas de Burgos, Valle de Castañeda, Santander, tuvo con Luisa de Sarria, natural de Santiago de Chile, un par de hijos naturales a quienes reconoció:

a) Francisco Antonio de Escalada, marido de María Gertrudis Bustillo de Cevallos;

y b) Antonio José de Escalada, marido en primeras nupcias de Petrona de Salcedo y Silva, y en segundas nupcias de Tomasa Francisca de la Quintana y Aoíz (Fernández Burzaco, II, 285 y 286)

<sup>59</sup> Oriundo de las Montañas de Santander, casado con Isabel Nicolasa Marín, hija de Antonio Pablo Marín y de Antonia Rian; suegro de Francisco Antonio de Escalada (Fernández de Burzaco, I, 326); y tío carnal de José Manuel Bustillo de Zevallos, marido de Juana María Ibáñez Basavilbaso; y célebre por el público amancebamiento que cultivó en Oruro con Manuela Camacho y Pinto, la hija del Maestre de Campo Sebastián Martínez Camacho (Socolow, 1987, 219-220).

<sup>60</sup> AGN, Sala IX, Comerciales, Leg. 44, Exp. 14.

<sup>61</sup> Para el Canadá, Miquelon (1978) relata como los importadores franceses estaban en la gestión de sus cobros a merced de la buena o mala voluntad de los funcionarios criollos (Miquelon, 1978, 104).

<sup>62</sup> Casado con María Josefa de Ortega y Lunel, hija de Cristóbal de Ortega y de María Lunel y Samorano. Su viuda nombra por su heredero al R.P. Rafael de Arregui y Ortega, Cura Rector de la Parroquia de San Benito, en Potosí (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.97, Exp.2). El parentesco que José de Ascasubi pudo haber tenido con Marcos Ascasubi, suegro del General José de Allende y Losa, avicinado en Córdoba, aún no lo he podido detectar.

<sup>63</sup> hijo de Bernardo Alvarez Campana y de Josefa Manuela de la Vega, nacidos en Cádiz, marido de Isabel Gil, hija de Nicolás Gil, gallego, muerto por los indios en la travesía de Chile, y de Bartola Rodríguez Osorio; y conuñado de Pascual Mariano Basallo (Fernández de Burzaco, I, 98; y III, 171; y Jáuregui Rueda, 1989, ítem 5161).

<sup>64</sup> Este pleito, que litigaba Rafael de los Reyes y Serrano en Lima, era por 200 almadanetas, valuadas en la suma de \$38.000, procedente de dos escrituras que Ascasubi otorgara en Buenos Aires en 1752 a favor de Alvarez Campana (AGN, Sala IX, Protocolos, Reg. 4, 1752, fs.126v. y 337). Habiendo Reyes reconvenido a Ascasubi por la deuda, en 1759, año en que llegó a Potosí, éste se limitó a escribir a Campana que él no debía dicha suma y que las almadanetas las había entregado al difunto Coronel Miguel Antonio Ezcurrechea, cuñado de Pedro Francisco Iribarren, ex-dueños de un Banco de Plata, competidor del de Joaquín Herboso e Isidro J. Navarro, que el Corregidor y Visitador General Ventura de Santelices y Venero no tuvo más remedio que cerrar. Ezcurrechea había sido Alcalde de la Santa Hermandad en 1729, Alcalde Ordinario en 1733, Situadista en 1735, auxiliar del Corregidor Santelices en sus proyectos de reforma, y había concertado en 1750 conjuntamente con Nicolás del Valle en Cádiz, con destino a Buenos Aires, 23 operaciones por valor de \$575.460 (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. E-3, Exp. 9). También concertó en Buenos Aires con destino a Salta entre 1732 y 1752 doce operaciones por valor de \$110.819, entre las que descuellan las tres operaciones que contrajo con Francisco Alvarez Campana en 1752 por valor de \$21.000 más el valor correspondiente a cien almadanetas, para luego pasar a ser propietario del Ingenio Chaca en la Ribera de Potosí, falleciendo en 1756 y dejando por única heredera a su hija Josefa, mujer de Joaquín José de Otondo, tercer Marqués de Santa María de Otavi (AGN, Protocolos, Reg.3,1732, fs.309; Reg.3, 1735, fs.366; Reg.1, 1741, fs.

280v.; Reg.3, 1741, fs.558; Reg.3, 1742, fs.466 y 378v.; Reg.4, 1752, fs.152v. y 126v.; Reg.2, 1752, fs.335v. y 337).

<sup>65</sup> Lamentablemente Burkholder y Chandler (1984) no nos brindan información acerca de Visitadores y Jueces Comisionarios. En cuanto al lugar de nacimiento de los Oidores, de 25 Oidores de la Audiencia de Charcas enumerados entre 1741 y 1800, 7 eran originarios de Lima y uno sólo de Buenos Aires (Burkholder y Chandler, 1984, Apéndice X, 318-320).

<sup>66</sup> marido de Juana Francisca Conti, hija del Capitán José Conti y de Francisca Isidora Bermudez; y concuñado de Diego Tejedor y Solórzano (FB, II, 149; y VI, 343; y JR, 1987, ítem 3289).

<sup>67</sup> Hijo del General Alonso de Arce y Arcos, nacido en Guaraz, Perú, y de María Báez de Alpoyn y Labayén; marido de María Juana de Arráez, hija de Martín de Arráez y de Tomasa de Larrazábal; concuñado del poderoso comerciante Juan de Vargas Macías, del Oficial de las Reales Cajas Blas Gascón Cervellón de Arze y de Manuel Antonio Warnes; y primo hermano del célebre abogado Mariano Pérez de Saravia y Sorarte (Fernández de Burzaco, I, 137, 162 y 222; y III, 163).

<sup>68</sup> Rafael de los Reyes y Serrano a José Antonio de Alzaga, 7-III-1769, (AGN, Tribunales, Sucesión 8125, Incidente sin Cuerpo Principal de la Sucesión de Rafael de los Reyes y Serrano, fs.52). Arce terminó siendo Contador Interino de la Real Caja de Moneda de Potosí.

<sup>69</sup> Idem.

<sup>70</sup> AGN, Tribunal de Cuentas de Lima, Nombramientos de Oficiales Reales, Libro 3, fs.61-63).

<sup>71</sup> Rafael de los Reyes y Serrano a José Antonio de Alzaga, Potosí, 7-III-1769 (AGN, Sucesiones, Leg. 8125, fs. 53)

<sup>72</sup> Regidor de la Villa de Potosí. En 1795 pide permiso para pasar a Potosí (AGN, Licencias y Pasaportes, Libro 6, f.197). En 1800 es procesado por injurias y calumnias (AGN, Criminales, Leg.46, Exp.9). En 1802 le prohíben votar en las elecciones concejiles (AGN, Interior, Leg.52, Exp.18). Ver en Morales (s/f) según Quesada (1988). Giró entre 1785 y 1802 mercadería fiada en 17 operaciones por valor de \$198.211 de manos de Francisco Xavier de Riglos, Tomás de Valanzátegui, Roque Sánchez, Juan Antonio de Lezica, Isidro José Balbastro, José Martínez de Hoz, P. Cor., J. Elg., J. Ar., Diego Agüero, Vicente Antonio Murrieta, José Ramón de Ugarteche, LJIB, Joaquín de Aguirre Zavalaga y Anselmo Sáenz Valiente (AGN, Protocolos, Reg.2, 1785, fs.575v.; R.1, 1786, fs.7v.; R.2, 1786, fs.8v.; R.6, 1786, fs.5 y 16; R.4, 1792, fs.58v.; R.1, 1795, fs.416 y 433; R.6, 1795, fs.241v., 249v., 281v., y 297v.; R.2, 1802, fs.597v.; R.3, 1802, fs.393, 343v., y 466; y R.6, 1802, fs.495).

<sup>73</sup> Actas del Consulado, III, 233-238; y IV, 35-38.

<sup>74</sup> Actas, Consulado, III, 105-113; y Bermúdez Miral, 1962.

<sup>75</sup> Tjarks, 1962, 88.

<sup>76</sup> Yerno de José de Lezica y Torrezuri (FB, 1986-90, IV, 144); y probable primo hermano del Capitán Diego de Alvear y Ponce de León. Contrajo deudas en 1772 y 1777 con Xavier Saturnino Saraza, Agustín Casimiro de Aguirre, y Pablo Tompson (AGN, Protocolos, Reg.3, año 1772, fs.206v.;

Reg.5, 1772, fs.183v.; y Reg. 5, 1777, fs.281v.).

<sup>77</sup> Corregidor de Paria. Contrajo matrimonio con Rosa Ayala (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.56, Exp.10).

<sup>78</sup> representante del comerciante porteño Juan Martín de Pueyrredón (Saguier, 1989b, 314, nota 107).

<sup>79</sup> Cajías de la Vega, 1983, 413; y 1986, 73-74.

<sup>80</sup> Uno de los Reos de Oruro, casado con María Josefa Urquieta (AGN, División Colonia, Sublevación de Oruro, Leg.1, N.12; Leg.4, N.11; Hacienda, Leg.79, Exp.2070; y Criminales, Leg.48, Exp.3). Probablemente pariente de Domingo Urquieta, también implicado en la sublevación de Oruro (AGN, División Colonia, Sublevación de Oruro, Leg.2, N.8).

<sup>81</sup> Procurador General en 1772 (Cajías de la Vega, 1987, Cuadro 2). El Comisionado del Virrey de Lima José Álvarez Nava le siguió una causa criminal por malversación de los fondos pertenecientes a la Renta de Correos de Oruro. Aurrecoechea le había adelantado al Alférez Real Diego Antonio Flores (marido de María Josefa Galleguillos), en 1777, \$72.000, procedentes de las rentas del Correo, para el trabajo de sus minas e ingenios (AGN, División Colonia, Interior, Leg.3, Exp.9a; y Hacienda, Leg.10, Exp.192).

<sup>82</sup> Procurador General en 1782 (Cajías de la Vega, 1987, Cuadro 2). Sobre su defensa, excarcelación y conducción a España (AGN, División Colonia, Sublevación de Oruro, Leg.4, Exp.13; e Interior, Leg.39, Exp.14). Sobre su embargo (AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.29, Exp.750). Sobre su testamentaría (AGN, División Colonia, Juzgado de Bienes de Difuntos, Leg.40, Exp.12).

<sup>83</sup> Alcalde de segundo voto en 1781 (Cajías de la Vega, 1987, Cuadro 2). Probablemente pariente de María Josefa Urquieta, mujer del Regidor Decano Manuel Serrano, también implicado en la sublevación de Oruro (AGN, División Colonia, Sublevación de Oruro, Leg.2, N.8); y de Manuela Gallardo y Urquieta, mujer de Joaquín Mariano de León y de José Antonio Ramallo (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.176, Exp.2).

<sup>84</sup> Alcalde de segundo voto en 1782 (Cajías de la Vega, 1987, Cuadro 2). Se encuentra en una lista de declarantes complicados en la sublevación de Oruro (AGN, División Colonia, Sublevación de Oruro, Leg.1, N.1). En 1784 se le embargan sus bienes (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.225, Exp.23). En 1807 sus herederos presentan quejas contra el Comisionado de Visita de Oruro (AGN, División Colonia, Interior, Leg.62, Exp.8).

<sup>85</sup> Alcalde de segundo voto en 1772 (Cajías de la Vega, 1987, Cuadro 2). Probablemente pariente de María Josefa Galleguillos, mujer de Diego Antonio Flores, uno de los reos de Oruro, y heredera de José de Galleguillos, dueño de los Ingenios de Sora Sora (AGN, División Colonia, Sublevación de Oruro, Leg.1, N.6; y Hacienda, Leg.61, Exp.1559).

<sup>86</sup> Alcalde Ordinario de primer voto en 1767, 1770, 1777 y 1778 (Cajías de la Vega, 1987, Cuadro 2). Dueño de los Minerales de Poopó, Antequera y Abicaya, y de los Ingenios Alantaña y Guariguari, en las riberas de Sora Sora y Sepolturas.

<sup>87</sup> Alcalde Ordinario de segundo voto en 1766, y Alcalde Ordinario de primer voto en 1769, 1772 y 1779 (Cajías de la Vega, 1987, Cuadro 2). Dueño de los Minerales de Poopó, Antequera y Abicaya, y de los Ingenios Alantaña y Guariguari, en las riberas de Sora Sora y Sepolturas.

<sup>88</sup> Cornblit, 1972, 137.

<sup>89</sup> Lewin, 1957, 564-565. Debe destacarse que en Buenos Aires fueron defendidos por el abogado Mariano Pérez de Saravia y Sorarte (AGN, División Colonia, Interior, Leg.32, Exp.1).

<sup>90</sup> Santiago del Estero, que dependía de la Gobernación-Intendencia de Salta, contaba con una población de 17 comerciantes y 82 varones españoles adultos solteros, sobre un total de 318 varones adultos, o el 25,8%. Tucumán que también dependía de la Gobernación-Intendencia de Salta, contaba con 93 comerciantes y 271 varones españoles adultos solteros, sobre un total de 1158 varones adultos, o el 23,4%. La ciudad de Córdoba contaba con 108 comerciantes y 447 varones españoles adultos solteros, sobre un total de 3459 adultos varones, o el 13%. Y la ciudad de Salta, contaba con 45 comerciantes y 416 varones españoles adultos solteros, sobre un total de 3.427 adultos varones, o el 12%.

<sup>91</sup> La Rioja que dependía de la Gobernación-Intendencia de Córdoba, contaba con 80 varones españoles adultos solteros, sobre un total de 772 adultos varones, o el 10,3%. Catamarca, que dependía de la Gobernación-Intendencia de Salta, contaba con una población de 123 varones españoles adultos solteros sobre un total de 2139 varones adultos, o el 5,75%. Por último, Jujuy contaba con 64 varones españoles adultos solteros, sobre un total de 644 varones adultos, o el 9,9%.

<sup>92</sup> Tjarks, 1962, 196.

<sup>93</sup> En efecto, cruzando la Lista A-VII, de los matriculados en la Diputación de Tucumán, con el Apéndice B-V, Bernabé Aráoz, Manuel Reboredo, Cayetano Rodríguez, Antonio Terri, Francisco Monteagudo, y Manuel y José Pose otorgaron escrituras de fiado en Buenos Aires (AGN, División Colonia, Consulado de Buenos Aires, Libro IV, fs. 76 y 80, Sala IX, 4-6-4, citado por Tjarks, 1962, 196).

<sup>94</sup> Tjarks, 1962, 196.

<sup>95</sup> En efecto, cruzando la Lista A-VI, de los matriculados en la Diputación de Salta, con el Apéndice B-IV, los comerciantes Antonio Aguela, Juan Francisco Alvarado, Pedro Binueza, Domingo Cardo, Manuel Cordero, Fructuoso Figueroa, Ermenegildo Hoyos, Santiago Maceira, Antonio Martínez de San Miguel, Leandro Ravago, José Ramírez Herrero y Santiago Urien Valle, que constituían el 30% de los comerciantes, no alcanzaron a endeudarse en Buenos Aires (AGN, Consulado de Buenos Aires, Libro VII, Sala IX, 4-6-7, fs.86-87, citado en Tjarks, 1962, 196).

<sup>96</sup> En efecto, cruzando la Lista A-V, de los matriculados en la Diputación de Jujuy, con el Apéndice B-III, los comerciantes José Aguiriano, José Antonio Malluquiza, Félix Echeverría, Andrés Mangudo, Vicente José Mota, Manuel de la Quintana, Andrés Ramos, Diego Rodríguez y Gregorio Antonio Zegada, que constituían casi el 50% de los comerciantes, alcanzaron a endeudarse en Buenos Aires (AGN, Consulado de Buenos Aires, Libro VIII, Sala IX, 4-6-8, fs.56, citado en Tjarks, 1962, 196).

<sup>97</sup> En efecto, Juan José de Erquicia, Nicolás de Villacorta, y Bartolomé Francisco de Maguna, se adueñaron del Cabildo. Erquicia reunía en su persona la condición de Diputado Interventor del Ramo de Sisa, la de Defensor General de Bienes de Difuntos, la de Regidor Fiel Ejecutor Propietario, y la de Alcalde Ordinario de Primer Voto. Como en ausencia del Alférez Mayor, el Regidor Propietario debía hacerse cargo de la vara, el Dr. Juan José Castelli sostenía que Erquicia "...jamás podía pretenderlo hallándose implicado con la vara 1a. de Alcalde y así se ve una monstruosidad en haber reunido en sí las dos jurisdicciones ordinarias independiente de la de Fiel Ejecutor, quando la ley del Reino [Real Provisión de 29 de Noviembre de 1774 expedida por la Real Audiencia de Charcas] establece sean separadas...para bien de la administración de justicia" (AGN, División Colonia, Interior, Leg.40, Exp.13, fs.41). En los Cabildos de las Capitales, esta práctica se confirma, según Castelli, "...en donde faltando o enfermado los Alcaldes no recaen las dos varas en el Regidor Alférez Mayor o Decano si no una, y la 2a. en otro" (Ibídem). La acumulación de varas fué tan comprobada "...que desde luego se sirvió este Superior Gobierno anular la elección mandando que repuestas las cosas al Estado en que las deturbó Erquicia se procediese a nueva Elección" (AGN, División Colonia, Interior, Leg.48, Exp.12). Tan aguda fué esta concentración de poder que en 1789 el Alférez Real José Bravo de Rueda, el mismo que siete años después fuera asesinado, denunciaba que en el Cabildo

"...se hacían muchas iniquidades, y que sólo los hijos de España querían y gobernaban estos parajes, sin atender a que los criollos y patricios eran más beneméritos y debían ser mucho más atendidos, pues tenían más lealtad a sus tierras, por ser naturales de ellas, y no ningún hijo de España, pues según se veía eran éstos los que cometían las mayores maldades" (Actas Capitulares de Santiago del Estero (Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia, 1942-1946), IV, 461, citado por Acevedo, 1965, 349).

<sup>98</sup> Tjarks, 1962, 196.

<sup>99</sup> En efecto, cruzando la Lista A-VIII, de los matriculados en la Diputación de Santiago del Estero, con el Apéndice B-VI, los comerciantes Alonso Araujo, Eusebio Arrieta, Pablo Basso, Francisco y Antonio Nprote, Lorenzo Unzaga y Marcos Ybarra no habían otorgado escrituras de fíado en Buenos Aires (AGN, Consulado de Buenos Aires, Libro VII, Sala IX, 4-6-7, fs.214, citado en Tjarks, 1962, 196).

<sup>100</sup> En las elecciones concejiles de 1795, cuando se lo eligió de Alcalde a Francisco Antonio Gonsález de San Millán, quien había contraído nupcias con la hija de un patricio, nieto de encomenderos, y era socio y amigo del Regidor Perpetuo y Fiel Ejecutor Mateo de Saravia y Jáuregui, el Gobernador-Intendente Tadeo Fernández Dávila, impugnó las elecciones, so pretexto de "...haber votado a su favor un cuñado [Figueroa y Toledo Pimentel] y un conculnado [Apolinario Xavier Usandivaras y Allende]" (AGN, División Colonia, Interior, Leg.36, Exp.4, fs.38). Asimismo, los parentescos de su mujer agravaban el nepotismo. En efecto, la mujer de San Millán, María Antonia de Figueroa y Toledo Pimentel, era sobrina carnal de la mujer del Alcalde de segundo voto Roque de

Avila; y el Regidor Don Apolinario Xavier Usandivaras era concuñado de San Millán y del comerciante Pedro José de Ibazeta, por ser sus respectivas mujeres hermanas de los Figueroa y Toledo Pimentel.

<sup>101</sup> Tjarks, 1962, 193.

<sup>102</sup> En efecto, cruzando la Lista A-IX, de los matriculados en la Diputación de Catamarca, con el Apéndice B-VII, sólo los comerciantes Bernardino Aumada, Juan Manuel Correa, Saturnino Maubezín, Francisco Romy, Fernando Soria, José Luis Segura, Antonio Viso, Joaquín Espinosa, Andrés de Herrera, y Juan y Ramón García, que constituían el 40% de los comerciantes Catamarqueños, no habían otorgado escrituras de fiado en Buenos Aires (AGN, Consulado de Buenos Aires, Libro VII, Sala IX, 4-6-7, citado en Tjarks, 1962, fs.135-135v.).

<sup>103</sup> En Jujuy, a Manuel Sánchez de Bustamante le sucedieron sus yernos José de Alvarado, Félix de Echeverría y Manuel de Tezanos Pintos. En Salta, a Sinforoso Rioja le sucedió su yerno José Domingo García Torres. Y a José Estévez le siguió su yerno Marcos Beeche Goytía. En Tucumán, a Fermín Vicente de Texerina y Barreda, le sucedieron sus yernos Manuel Posse y Manuel Fernández Carranza (Avila, 1920, 69; AGN, Tribunales, Leg.142, Exp.9, capítulo 379). A Juan García Cárdenas, le sucedió su yerno Miguel Pérez Padilla. A Adrián Aramburu Zavala, le siguió su hijo Ramón. A Martín León García, le sucedió su yerno Miguel Viaña. Al Coronel Gregorio Antonio de Zegada y Velloso, le sucedió su yerno Diego José de Pueyrredón. A Juan José de las Muñecas, le siguió su hijo o nieto Juan Manuel Muñecas, registrado como empleado en las milicias. Y en Santiago del Estero, a Pedro Bautista Lami, le siguió su yerno Pedro Antonio de Zavalía. A Gregorio Beltrán le sucedió su hijo o hermano Mariano Beltrán. Y a Francisco Ybarra le sucedió su hijo o nieto Marcos Ybarra (Notas de los Apéndices C-II al C-IV).

<sup>104</sup> Tjarks, 1962, 89.

<sup>105</sup> A ello respondió Mercado, que "...los soldados no podían seguir su destino por falta de cabalgaduras, los juegos fueron con el Cap. Pedro de Villegas y otro oficial, las bebidas que llevó fueron dos cargas de vino y aguardiente y la venta que hizo dellas fué no sólo entre los soldados si también entre otros independientes que ocurrían a comprarle, lo cual sucedió cuando Mercado recibió el orden para regresarse en que ya no necesitaba de aquellos caldos de que se había proveído para su gasto" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp 9, fs. 249v).

<sup>106</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp. 9, fs.248v.

<sup>107</sup> Hijo del Coronel Gregorio de Zegada, antiguo Situadista, y de María Mercedes Rubianez y Liendo Argañaráz; marido de Ana María del Carmen Gorriti; hermano del R.P. José Miguel de Zegada; y padre del R.P. Escolástico Zegada y de Fortunata Zegada, mujer de Gabriel Graz. Era dueño de las fincas de San Lorenzo de Calilegua y El Remate (Cutolo, VII, 801).

<sup>108</sup> Cabos de partidas que obraban separadamente del ejército con determinado número de soldados que él mismo juntaba o elegía.

<sup>109</sup> Llamábase así al soldado pronto y destinado para ejecutar lo que se pudiese ofrecer al oficial que manda y para las ordenes y avisos.

<sup>110</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg.96, Exp.2510, fs.3v.

<sup>111</sup> *Ibídem*. En un resumen de pagos mensuales de los Regimientos de Dragones de Chulumani, pagados por el Corregidor José de Albizuri, un Capitán ganaba \$70, un teniente \$60, un subteniente \$50, los sargentos \$30, los tambores \$25, los cabos primero \$28, los cabos segundos \$25, y los soldados \$15 y 4 reales (Valle de Salinas, 1990, 420).

<sup>112</sup> Hasta el momento en Salta hemos podido detectar sólo a Francisco Antonio González de San Millán (AGN, Sala IX, Interior, Leg.43, Exp.6). Fueron proveedores de las Tropas Veteranas destinadas a pacificar las provincias del Perú Antonio Sáenz de Texada, Ramón Ballivián, José Antonio Sanjurjo, y Martín José de Ochoteco (AGN, División Colonia, Guerra y Marina, Leg.7, Exp.18).

<sup>113</sup> Villalobos, 1968, 1990, 204.

<sup>114</sup> Villalobos, 1990, 105.

<sup>115</sup> Villalobos, 1968, 1990, 206.

<sup>116</sup> Hijo de Fermín de Vicuña y de María de Berroeta, bautizado en Aranaz en febrero de 1689, Regidor de Santiago en 1721, Alcalde en 1733, y Corregidor de Melipilla en 1739, casado en julio de 1719 con Josefa Hidalgo, hija de Gaspar Hidalgo y de Nicolasa Zavala, y ambos padres de Tomás Vicuña, casado con Carmen Madariaga, dueños de la estancia Putaendo; de Francisco Vicuña, Alcalde de Santiago en 1776, casado con María del Carmen Larraín, hija de Martín José de Larraín; de María Petronila Vicuña, casada con Joaquín de Guerola e Ibáñez, Oficial Real de Chucuito; y de María Josefa Vicuña, casada con Pascual de León (Espejo, 1967, 848).

<sup>117</sup> A Martín José de Larraín le siguió su yerno Joaquín Trucios. Y a Matías Felipe de Idoate le siguió también su yerno Manuel Rodríguez Zorrilla (Espejo, 1967, 703).

<sup>118</sup> para 1802 Mendoza figuraba tercera en el ranking de mestizaje, pues contaba con 4.092 mestizos, 1.841 negros y mulatos esclavos, 2.301 criados libres, y 5.148 españoles, por sobre un total de 13.382 personas (información publicada por Caillet-Bois, 1930).

<sup>119</sup> Con referencia a las tres ciudades de Cuyo, Sierra (1960) les asigna en 1777 -sobre la base de un documento del Marqués de Sobremonte que concuerda con las cifras dadas a conocer por José Torre Revello- una población de 23.411 habitantes, de los cuales 9.834 eran blancos, o el 43%; 5.487 mestizos, o el 20%; 4.168 indios empadronados, o el 17%; y 3.922 negros y mulatos, o el 16%. A un promedio de 5 habitantes blancos por unidad doméstica podemos calcular entonces aproximadamente la existencia de 1966 vecinos. A la jurisdicción de San Luis correspondían 6.956 habitantes, de los cuales 3.708 eran blancos, o el 50%; 1.388 mestizos, o el 20%; y 1.860 indios y negros, o el 25%: 3.684 en la ciudad de San Luis propiamente dicha, de los cuales 1908 eran blancos, o el 51%; y 987 mestizos, o el 27%; y 3.272 en Renca, de los cuales 1800 eran blancos, o el 55%; y 401 mestizos, o el 12% (Sierra, 1956, IV, 48; y Díaz Couselo, 1985, 265).

<sup>120</sup> Villalobos, 1990, 105.

<sup>121</sup> Comadrán Ruiz, 1984, 434.



<sup>122</sup> Videla, 1962, 727.

<sup>123</sup> En Mendoza, al comerciante Nicolás Gil, asesinado por un malón indígena al sur de Córdoba, le sucedió su yerno Pascual Mariano Basallo; a José Sebastián Sotomayor le suceden sus yernos Félix Correas, Domingo Corvalán, José Clemente Benegas, Isidoro Sáinz de la Maza, y Francisco Xavier de Molina; a Francisco Videla y Aguiar le suceden su hijo Juan Agustín Videla y Aguiar, y su yerno Raymundo Pelliza Morales; a Fernando Jurado su yerno Francisco Vargas; a Francisco Borja Corvalán su yerno Cruz Vargas; y a Fernando Güiraldez le sucedió su yerno Rafael Bargas. Y en San Juan, a Tomás Miguel Blanco Jofré le sucedió su yerno Pedro Fernández Maradona; a Vicente Sánchez de Loria Jofré le sucedió su hijo Vicente Sánchez Jofré y su yerno Nicolás Riberos Sarmiento; al Maestre de Campo Juan Luis de Funes y Ruiz de la Cuesta le sucedió su yerno Alonso Isidoro Rodríguez Peña; a Fernando Torres le sucedió su hijo José Matías de Torres y Funes; a Francisco Xavier Garramuño le sucede su hijo José Xavier Garramuño; a Francisco Alfonso Pereira le sucede su conuñado Remigio Albarracín; a Juan de Dios Furque le sucede su hijo Hilarión Furque; a Francisco Flores su hijo o sobrino Pedro Ignacio Flores; y a Fernando Tadeo de la Rosa le suceden sus yernos Pedro Carril, José Godoy Oro y Domingo Vásquez Carril (Notas de los Apéndices C-VI al C-VIII).

<sup>124</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.15, Exp.5.

<sup>125</sup> Hijo del Administrador de la Renta de Tabaco de Tucumán Coronel Manuel Estéban de Castro y de Dominga Carreño Bazán, hija a su vez del General Gregorio Carreño de Lozada, natural de España, y de Teodora Bazán de Cabrera. Era sobrino de Francisca Carreño Bazán, mujer de Juan Lucas de la Colina (Martínez Villada, 1940, 68), y yerno del comerciante Juan de Lahoraia (AGN, Tribunales, Leg.115, Exp.19, fs.366). Era también pariente político por vía de su mujer con el Comandante de Armas José Xavier Jofré (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 115, Exp. 19, fs. 197).

<sup>126</sup> AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.136, Exp.3427, fs.33.

<sup>127</sup> León Solís, 1989-90, 181.

<sup>128</sup> Santiago del Estero, que dependía de la Gobernación-Intendencia de Salta, contaba con una población de 17 comerciantes y 82 varones españoles adultos solteros, sobre un total de 318 varones adultos, o el 25,8%. Tucumán que también dependía de la Gobernación-Intendencia de Salta, contaba con 93 comerciantes y 271 varones españoles adultos solteros, sobre un total de 1158 varones adultos, o el 23,4%. La ciudad de Córdoba contaba con 108 comerciantes y 447 varones españoles adultos solteros, sobre un total de 3459 adultos varones, o el 13%. Y la ciudad de Salta, contaba con 45 comerciantes y 416 varones españoles adultos solteros, sobre un total de 3.427 adultos varones, o el 12%.

<sup>129</sup> Punta, 1992, 14 y 19.

<sup>130</sup> Tjarks, 1962, 193.

<sup>131</sup> En efecto, cruzando la Lista A-X, de los matriculados en la Diputación de Córdoba, con el Apéndice B-IX, los comerciantes Pedro Altamira, Luis y José Escobar, Juan Francisco y Juan Bautista Echevarría, Juan Fernández Abregu, Julián Freytes, Francisco Ynocente Gache, Bernardo y Francisco Maceda, Florencio García, Justo Mendoza, Juan Paz, Mariano Rodríguez, Francisco Solar y Francisco

Vaz no habían otorgado nunca escrituras de fíado en Buenos Aires (AGN, Sala IX, Consulado de Buenos Aires, Libro VI, 4-6-6, fs. 101, 117 y 121, citado en Tjarks, 1962, 193).

<sup>132</sup> Español, casado con María del Carmen Albornoz y Carranza, hija de José de Albornoz y Guevara y de Francisca Carranza Echenique, padre del que fuera Gobernador de Córdoba, José Xavier Díaz, quien a su vez estaba casado con Jenuaria Allende y Mendiolaza; de Juana Isabel Díaz, mujer del comerciante de mulas Gaspar Sáenz Bravo; y de María Clara Díaz, mujer del Fiel Ejecutor José García Piedra (Calvo, I, 203). Era socio de su primo Juan Pérez de Bulnes. Adquirió de las Temporalidades la que fuera la hacienda Jesuítica de Santa Catalina. Mantuvo en vida un largo litigio con un esclavo de su propiedad (AGN, Tribunales, Leg.202, Exp.16). En 1792 solicitó que se lo releve a su hijo Jose Javier Díaz (Alcalde de Segundo Voto) de ejercer el empleo de Alcalde de Primer Voto (AGN, Tribunales, Leg.91, Exp.3).

<sup>133</sup> Fiador del Gobernador Gerónimo Matorras (Acevedo, 1969, 137). En 1780 solicita del Censor Eclesiástico la aprobación de sus conclusiones Escolásticas en latín (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.23, Exp.654). Bautizado en Velbis de la Jara, Toledo, en agosto de 1738, hijo de Francisco Plácido Gregorio y de Catalina García de las Heras, y casado con María Eugenia Arias de Cabrera, hija del Cap. Juan Luis Arias de Cabrera y Gutiérrez y de Rosa de Ceballos y Losa Bravo. Era concuñado del comerciante Jacinto Díaz de la Fuente (Espejo, 1967, 444). Bernabé Gregorio de las Heras era hermano de María Gregorio de las Heras (mujer de Juan de Tejerina, y madre de Gregorio Tejerina y Gregorio de las Heras, marido de Josefa de Usandivaras y Allende); y de Bernardo Gregorio de las Heras, bautizado en Velbis en agosto de 1749, Alférez Real de Buenos Aires en 1773, Regidor, Defensor de Menores, Tesorero en 1783, casado con María Rosalía Ursula de la Gacha, hija de Juan Ignacio de la Gacha, nacido en la Villa de Guetaria, Guipúzcoa, y de Juana María de Rojas y Acevedo. Don Bernardo era el padre del prócer de la independencia de Chile General Juan Gualberto Gregorio de las Heras (LC, II, 15 y 20; FB, 1988, III, 99).

<sup>134</sup> Las Heras llevaba contraídas entre 1766 y 1804 una treintena de transacciones crediticias con Juan Tomás Echever, Domingo Belgrano Pérez, Pablo Ruiz de Gaona, Domingo de Basabilbaso, Manuel del Arco, Phelipe Santiago del Pozo, Diego Casero, José de San Pedro Lorente, Pedro Manuel Beruti, Ventura L Lorente Romero, Manuel Antonio Barquin, Gaspar de Santa Coloma, Tomás de Valansátegui, Juan José Lezica, Casimiro Francisco de Necochea, Cristóbal Avecilla, Martín de Alzaga, y Diego de Agüero, por la suma total de \$163.969 (AGN, Protocolos, R.2, 1766, fs.35v.; R.6, 1766, fs.47; R.2, 1767, fs.248, 222, y 256v.; R.3, 1767, fs.254v.; R.5, 1767, fs.294; R.2, 1768, fs.222v.; R.6, 1768, fs.273, y 275; R.3, 1774, fs.520v.y 466v.; R.5, 1774, fs.201; R.6, 1774, fs.339; R.3, 1776, fs.305v.; R.5, 1778, fs.47; R.1, 1782, fs.337; R.6, 1782, fs.186; R.1, 1783, fs.321; R.4, 1783, fs.353v.; R.6, 1784, fs.259; R.4, 1786, fs.259 y 263v.; R.6, 1786, fs.35 y 45v.; y R.3, 1804, fs.192).

<sup>135</sup> A Domingo de Castro, le siguió su yerno Melchor Otero. A Claudio Durán Espinosa, le siguió su yerno Andrés Paz de Codecido. A Juan Francisco Alberro, le sucedió su yerno Juan Antonio de Saráchaga, y a este último su propio yerno Bernardo Básquez Maceda. A Antonio del Castillo, le siguió su yerno Lorenzo Recalde y Cano. A Juan Bautista de Isasi le sucedieron sus yernos Estéban Montenegro y Miguel de Learte y Ladrón de Zegama. A Bruno Martínez le sucedió su yerno Benito Rueda. A Miguel del Corro su yerno Antonio Benito Fragueiro. A Lorenzo Cavallero, le siguió su yerno José de Isasa y Ponce de León. Y a Francisco Antonio Díaz, su yerno José García Piedra (ver Lazcano Colodrero y notas del Apéndice C-V).

<sup>136</sup> Tjarks, 1962, 89.

<sup>137</sup> Tjarks, 1962, 89.

<sup>138</sup> Tjarks, 1962, 196.

<sup>139</sup> Falcao Espalter, 1926, 39, citado por Tjarks, 1962, 194.

<sup>140</sup> Tjarks, 1962, 803, nota 4.

<sup>141</sup> En Santa Fé, a Lázaro Umeres y Basauri, le siguió su yerno Gabriel de Quiroga, y a este su yerno Salvador Ignacio Amenábar. A Francisco Piedrabuena, le sucedió su yerno el Regidor Decano Juan Francisco Roldán. Y a Antonio Candiotti y Muxica, le sucedieron su hijo Francisco Antonio Candiotti y su yerno Juan Francisco Aldao (Ver Crespo Naón, 1983 y notas del Apéndice C-X).

<sup>142</sup> AGN, División Colonia, Criminales, Leg.42, Exp.10, fs.89.

<sup>143</sup> hijo de José del Casal y Sanabria y de Rosa Fernández de Valenzuela; y marido de Rosa Agustina Gamarra y Caballero de Añasco, hermana del héroe de Paraguarí y Tacuarí, Comandante Juan Manuel Gamarra, e hija del Comandante Juan José Gamarra y Mendoza (Albarenga Caballero, 1978, 207).

<sup>144</sup> AGN, División Colonia, Criminales, Leg.42, Exp.10, fs.89.

<sup>145</sup> BRAH, Colección Mata Linares, t.56, cit. en Carbonell, 1992, 295.

<sup>146</sup> Nacido en Puerto Real, Andalucía, hijo de Juan David y de Juana Josefa de Pereio, y marido de María Sabina Villagra Morales (FB, II, 207). Es posible que fuera pariente del comerciante José David, fuerte comerciante que giraba en el comercio entre Manila y México (Borchart de Moreno, 1984, 69, 71 y 89).

<sup>147</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. D-6, Exp. 4, fs. 36.

<sup>148</sup> nacido en Montevideo, hijo de José de Collantes y de Petrona Cevallos, marido de Juana Illanes (Fernández de Burzaco, II, 143).

<sup>149</sup> hijo de Carlos Wright y de María Martina Prans (FB, VI, 298).

<sup>150</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 73, Exp. 1939, fs. 12.

<sup>151</sup> *Ibídem*.

<sup>152</sup> *Ibídem*.

<sup>153</sup> Maeder, 1981, 105.

<sup>154</sup> En efecto, cruzando la Lista A-XV, de los matriculados en la Diputación de Corrientes, con el Apéndice B-XX, los comerciantes Pedro Antonio Almeyda; Francisco Javier Barberán; José Ignacio Beláustegui; Antonio Bens; Agustín Casar; Angel M. Fernández Blanco; Agustín Jiménez; Isidoro

Martínez y Cires; Raymundo Molinas; e Ignacio Velando, habían otorgado escrituras de fíado en Buenos Aires (AGN, Sala IX, Consulado de Buenos Aires, Libro IV, 4-6-4, fs. 230, citado en Maeder, 1981, 318).

<sup>155</sup> Félix David a Pedro García Rodríguez, Asunción, 1788 (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. D-6, Exp. 4, fs.90.).

<sup>156</sup> Idem.

## TOMO XI

### CAPITULO 5

# **La Crisis Mercantil. La lucha contra el monopolio comercial español en los orígenes de la Revolución de Independencia. El caso de Buenos Aires en el siglo XVIII.**

(fue publicado en parte en 1993 en la Revista Complutense de Historia de América [Madrid: Universidad Complutense de Madrid], 19, pp.149-194);

La naturaleza inconclusa de la revolución de independencia en el Río de la Plata, o en otras palabras, la no resolución de sus contradicciones económicas, políticas, sociales y culturales, habría estado íntimamente vinculada con las sucesivas crisis económicas, políticas, militares, sociales y eclesiásticas que la precedieron. Entre las crisis económicas, las que más habrían incidido en la quiebra de la estructura estamental del Antiguo Regimen (privilegios del fuero, y nepotismo consulares, y del estamento mercantil), habrían sido las crisis comerciales. En cuanto a la historiografía de las crisis comerciales propiamente dichas, estas giraron tradicionalmente alrededor de las tesis que sostienen el rol determinante que jugaron en las mismas factores externos tales como la demanda internacional de plata y cueros y el doble sometimiento del capital comercial local al capital comercial metropolitano, sufrido por el Río de la Plata, desde las metrópolis mercantiles monopolistas de Lima y de Cádiz.<sup>1</sup> El error de las tesis acerca de las plazas mercantiles, mineras y rurales coloniales, ha sido no tomar en cuenta que pese a la circulación transitoria del crédito escriturario y la diferente velocidad de ajuste de demandantes y oferentes, la impotencia política para equilibrar los desfases crónicos de la balanza comercial habría frustrado una movilidad y monetización de sus mercados y una capacidad de engendrar una burguesía comercial autónoma.

La exposición que parcialmente explicaría el porqué de la existencia en las colonias de una marcada impotencia para combatir eficazmente las instituciones del Antiguo Régimen (nepotismos, racismos, patrimonialismos y fueros), y engendrar una burguesía comercial autónoma, habría que buscarla entonces en la naturaleza compulsiva o autónoma de los mercados coloniales y en la diferente velocidad de ajuste de demandantes y oferentes, muchos de ellos de naturaleza especulativa. Según Chaunu (1969) y Mauro (1964), siguiendo la Teoría Cuantitativa del Dinero, existe una concordancia entre los niveles de precios y las fases expansivas y depresivas experimentadas por Europa y los niveles y fases experimentados por el mundo colonial.<sup>2</sup> A la depresión y caída de la tasa de ganancia en la metrópoli correspondía entonces casi siempre, una expansión del colonialismo, que habría desmoronado toda autosuficiencia y pluralidad de actividades en las colonias. La crisis minera en el

siglo XVII y comienzos del XIX carecería, para esta interpretación, de motivaciones propias referidas a la geología del Cerro y al comportamiento del mercado interno colonial, y sería más bien un efecto de la caída de la demanda Europea de metálico.

Por otro lado, debido a la naturaleza del colonialismo mercantilista, cuando en la América colonial regía una fase depresiva, las embrionarias burguesías comerciales locales estaban impedidas, salvo excepciones o permisos reales especiales, de vender sus excedentes no sólo en el mundo Europeo sino incluso en el resto del mundo colonial español y no español. Como las crisis de los desequilibrios negativos no podían ser entonces resueltas con devaluaciones monetarias ni con la manipulación de las tasas de interés ni con degravaciones impositivas que promovieran la sustitución de importaciones,<sup>3</sup> las únicas acciones que le quedaban a un gobierno local colonial para corregir el desequilibrio comercial eran incrementar la producción exportable o reducir el volumen bruto de las importaciones. Las caídas bruscas de los precios internacionales de los productos de exportación no podían ser atenuadas entonces por medio de una devaluación de la moneda nacional y tampoco las ganancias de los exportadores podían ser multiplicadas automáticamente por igual recurso.

El alto costo de la mercancía importada, las altas tasas de interés, la prohibición de envilecer (devaluar) la moneda, y la imposibilidad de discriminar mediante un proteccionismo tarifario la índole de la mercancía importada, estaban íntimamente vinculados con la expansión del crédito mercantil y de las cesiones de crédito. Precisamente, el boom del crédito mercantil se produjo porque existía dinero mercancía o moneda dura y yerba y cueros crudos para extraer y remesar al interior del espacio colonial y a la metrópoli, en pago de la mercancía importada.

La inyección de medios de pago escriturarios privados, descrita en el primer tomo de esta obra, debe haber alentado una reducción relativa de las tasas de interés, comparadas con las vigentes a comienzos del siglo XVIII y con las vigentes en el Alto Perú, aunque siempre superiores a las prevalecientes en Cádiz y los demás puertos de Europa. En cuanto a los productos del mercado interno colonial, impuestos por las burguesías comerciales regionales (dueños de curtiembres y obrajes textiles Tucumanos, de bodegas y viñedos Sanjuaninos, de plantaciones Paraguayas y Misioneras, y de estancias de cría de mulas del litoral), al participar del excedente económico explotado por la burguesía minera, es difícil pensar que el nivel de sus precios de venta siempre permaneciera estancado.

La velocidad diferenciada en el ajuste entre la oferta y la demanda de las partes que concurrían a los mercados dependía de la situación socioeconómica de dichas partes, condicionada en el comercio por el azar político, gobernado este último factor a su vez por los períodos de paz o guerra, o los llamados tiempo muerto y tiempo de navíos. De aquí que la parte, ya fuere demandante u oferente, que pudiese elegir el tiempo o momento para vender o comprar se encontraba en mejor posición negociadora que aquella otra que se veía en la obligación de vender o comprar forzada por la necesidad.<sup>4</sup> Fué Melchor de Soria, un economista del siglo XVI, quien primero distinguió la velocidad de ajuste según fueren oferentes o demandantes quienes la practicasen. Según Gómez Camacho (1986), Soria hablaba de la velocidad con que los oferentes reducían su precio, y de la velocidad con que los demandantes decidían pagar un precio mayor. Cuanto más rápida fuera la velocidad de ajuste asumida por los oferentes, más lenta podía ser la asumida por los demandantes, y viceversa. Cabe entonces preguntarse si las crisis comerciales se hallaban o no relacionados con los procesos de estamentalización y movilidad de la sociedad colonial. Asimismo, en este trabajo nos preguntamos si durante las crisis comerciales aumentó el margen de autonomía de embrionarias burguesías comerciales, por cuanto fué durante las épocas de bonanza que la metrópoli arreció con reformas destinadas a reducir el margen de autonomía de las élites locales. Para estudiar las crisis comerciales y

su impacto en las instituciones del Antiguo Régimen, deberemos de analizar entonces las balanzas comerciales, las remesas de plata a España, y el comportamiento de los mercados de bienes de inversión o de renta, de los precios de los productos de la tierra, de la mano de obra esclava, de los predios urbanos, y del dinero escriturario.

Los desequilibrios positivos en la balanza comercial, al poner en evidencia la escasez de mercancía importada y la abundancia y escaso costo de producción de la mercancía-plata exportada testimoniaba situaciones inflacionarias. Según la Teoría Cuantitativa del Dinero, formulada por Fisher (1911), la inflación o encarecimiento de las mercancías importadas y su impacto en la estructura de precios relativos, no es la producida por el deterioro o envilecimiento de un medio de pago (de metal o papel), sino la producida por la alteración de la relación cuantitativa entre la oferta de moneda y la de bienes importados. La alteración de la oferta de moneda podía ser provocada tanto por un aluvión de metálico como por excesivas emisiones, descuentos y redescuentos de crédito privado. La alteración de la oferta de mercancías importadas podía a su vez ser provocada por cambios en las circunstancias del comercio exterior y en las condiciones crediticias otorgadas. Cuando el monto de lo importado y luego fiado al interior excedía el monto de lo remesado al exterior los precios caían, y cuando por el contrario el monto de lo remesado excedía el monto de lo importado y luego fiado los precios sufrían un proceso inflacionario.

### **Balanza comercial positiva o activa.**

Una balanza comercial, positiva o activa, podía significar atraso y decadencia, si lo que se importaba eran efectos de consumo improductivo y no bienes de capital, y si lo que se exportaba fueren materias primas sin manufacturar y no productos con alto valor agregado.<sup>5</sup> Por lo general, las balanzas comerciales positivas, favorables, o activas en la América Latina colonial, revelaban empobrecimiento y no prosperidad. En el caso del Cono Sur las balanzas comerciales ocultaban el monto y valor de las importaciones clandestinas de mercancía Europea, Africana y Lusitana, así como el monto de las remesas de plata clandestinas exportadas al Brasil y Portugal. Es preciso tener en cuenta para analizar estas balanzas comerciales que antes del Reglamento de Libre Comercio de 1778 las autoridades virreinales autorizaban la extracción de metálico del Alto Perú al Río de la Plata sólo a cambio de licencias de internación de mercadería importada, una suerte de guía, procedentes de permisos de registro autorizados por la corona y de licencias de internación de productos de la tierra (mulas, yerba, textiles, y aguardiente). Sólo a partir de 1778 la relación se invierte, y el Virrey del Río de la Plata prohíbe la extracción del metálico del Alto Perú a Lima o Arica. Asimismo, estas balanzas ocultaban el monto de las remesas destinadas a la corona como consecuencia de su poder fiscal absoluto. La plata de estas últimas remesas no funcionaría como mercancía que salda importaciones sino como divisa que se tributa compulsivamente a un gobierno metropolitano. Por otro lado, la balanza comercial ocultaba el monto total de tabaco brasileiro introducido en el mercado colonial al margen del Estanco Real. Revelan estas balanzas comerciales positivas o activas empobrecimiento porque además ocultaban la baja retribución de la mano de obra en la producción de la materia prima exportada y la inversa en la producción de los artículos importados. De aquí que los saldos positivos reales obtenidos por la metrópoli española, como consecuencia del intercambio desigual con sus colonias americanas al no reinvertirse en las mismas, le permitía saldar la crónica balanza comercial deficitaria que mantenía con la Europa nor-occidental (Francia, Inglaterra, Países Bajos).<sup>6</sup>

### **Balanza comercial negativa.**

Una balanza comercial "desfavorable", negativa, o pasiva podía significar el propósito de

alterar radicalmente la estructura económica y social del Antiguo Régimen, si lo que se importaba fueren bienes de capital y no efectos de consumo improductivo y lo que se exportara fueren productos con un alto valor agregado y no simplemente materias primas sin manufacturar. Este último propósito era el único que podía legitimar desequilibrios negativos en la balanza comercial. Es evidente que en la situación colonial que vivía el Río de la Plata al exportar sólo moneda metálica y materias primas como la yerba y el cuero sin curtir, por serle legalmente vedada la manufactura, e importar predominantemente artículos suntuarios que le eran inducidos compulsivamente por el monopolio comercial, las balanzas "desfavorables" sólo podían significar crisis, desempleo y profundización de la economía natural.

### **Déficits comerciales externos.**

Un déficit comercial externo acarreaba necesariamente asfixia monetaria pues había fuga del dinero-mercancía (circulante primario) y las tasas de interés se disparaban hacía arriba. Debido a que las crisis de los desequilibrios negativos no podían ser resueltas con devaluaciones monetarias ni con la manipulación de las tasas de interés ni con desgravaciones impositivas que promovieran la sustitución de importaciones, en virtud de que por su condición colonial el Río de la Plata carecía de soberanía monetaria y fiscal, las únicas acciones que le quedaban para corregir el desequilibrio eran incrementar la producción exportable o reducir las importaciones.<sup>7</sup> Las caídas bruscas de los precios internacionales de los productos de exportación tampoco podían ser atenuadas por medio de devaluaciones.<sup>8</sup> La única oferta monetaria interna posible dependía entonces de la producción minera nacional y/o del balance superavitario del comercio exterior.<sup>9</sup> El único tipo de equilibrio de la balanza comercial que podía interesar a países coloniales como el nuestro era entonces aquel que lograra transformar la estructura económica colonial. Ello requería, necesariamente, la expansión de la inversión por encima del ahorro, para lo cual se necesitaba reducir drásticamente las altas tasas de interés vigentes o, de lo contrario, contraer empréstitos en los mercados de capital foráneo, como recién se pudo concretar con resultados escandalosos en los inicios de la república independiente.

La explicación de las balanzas deficitarias en las colonias y de su consecuencia la escasez de metálico, se la suele hallar en el carácter privilegiadamente monopolístico del nuevo grupo exportador, que le permitiría a la metrópoli colonialista pagar precios demasiados bajos a cambio de los frutos del país colonizado. Mediante la sobrevaluación de los productos importados y la subvaluación que le fijaba a las materias primas coloniales, el monopolio comercial español impuso a sus colonias una balanza comercial deficitaria. Estas balanzas deficitarias eran la expresión más genuina de la intensa transferencia de valor sufrida por las colonias y del deterioro de los términos del intercambio experimentado por las mismas.<sup>10</sup>

### **La lucha contra el monopolio mercantil.**

Sin embargo, en las antesalas o prolegómenos de la independencia, a desemejanza del macizo andino, el control que en el Río de la Plata la metrópoli española ejercía de su aparato estatal y su comercio distaba de ser monopolístico. Es decir, para Malamud (1985) y Cooney (1986) el monopolio español habría dejado de ser en tiempos de las guerras napoleónicas algo actual pasando a ser sólo algo puramente eventual. La lucha contra el monopolio convirtiéndose entonces, en los prolegómenos de la Revolución de Independencia, en lucha contra una amenaza puramente potencial, pues en la realidad histórica prevalecía en virtud de las franquicias del comercio con colonias extranjeras y el transporte en buques neutrales, un libre cambio cuasi internacional. A tal extremo eran distintas las condiciones en esta coyuntura bélica que Don Juan de la Rosa, apoderado de la Real Compañía Marítima, manifestaba en el expediente sobre faenar ganado orejano en los campos yermos de la banda oriental del Río de la



Plata que

"...en tan calamitosa época no han decaydo los frutos y cueros...como en otras guerras, pues en la anterior [guerra] fueron abandonados [los cueros] por lo difícil de su conservación, por no sufragar con el valor de los ganados los costos que impendían en su conservación [almacenamiento]".<sup>11</sup>

Es recién después del Reglamento de Comercio Provisorio de 1809, cuando se decreta el Libre Cambio en el comercio exterior, que la lucha contra el monopolio se transfiere del comercio exterior al comercio interno. Halperín (1979), nos advierte cómo, a partir de 1809, los comerciantes españoles ligados al Consulado buscaban preservar el monopolio del comercio interno, vedando la participación de los extranjeros.<sup>12</sup>

### **La contradicción entre terratenientes y burguesía comercial.**

La contradicción entre terratenientes y burguesía comercial nativa era de una naturaleza ambigua. Dicha ambigüedad estribaba en la presencia amortiguadora del mercader-estanciero, una suerte híbrida que conjugaba ambas realidades.<sup>13</sup> La burguesía comercial buscaría en los terratenientes apoyo contra la gran burguesía consignataria del capital monopolista, aliada del capital minero, a fin de controlar una cuota mayor del comercio ultramarino. De manera tal que el resultado de las reformas borbónicas y de la revolución de independencia en el comercio no sería la liquidación de los agentes de los monopolistas, sino la atribución de un estatuto legal al pequeño comercio, y su ampliación.

El simple cotejo entre importaciones y exportaciones y su consiguiente deducción dá lugar a lo que se dió en llamar balanzas comerciales. Estas últimas podían alcanzar superavits o déficits. A partir de 1783, en que se firmó la Paz de Versailles, se registró en Buenos Aires un marcado superávit de la balanza comercial, que hizo caer los precios de los productos foráneos, la importación alcanzó algo más de un millón de pesos y la exportación de plata, liberada de las restricciones Limeñas, excedió los tres millones. Los Agentes de las Casas comerciales de Cádiz vuelven a enviar sus remesas a España.<sup>14</sup> Aquí corresponde que hagamos un compás y nos formulemos la misma pregunta que se hace Bakewell (1976) para el caso de Nueva España ¿a que podía obedecer esta discrepancia en la Balanza Comercial si la plata era el producto que más contribuía al equilibrio del comercio exterior de las colonias? Para responder a su propio interrogante, Bakewell se formuló tres explicaciones hipotéticas: la primera, de que este comercio no hubiera decaído tanto en valor como en volumen; la segunda, la que más se ajustaría a la realidad colonial sufrida en el Río de la Plata, de que con tan abundante plata a su disposición la Nueva España hubiere regresado a su antiguo sistema comercial pagando sus importaciones principalmente con metal precioso y menos con otros productos; y en tercer lugar, de que el incremento de las exportaciones de plata habría obedecido al aumento de las remesas oficiales de plata amonedada dirigidas a la corona y no al aumento de las remesas privadas destinadas a cancelar los adelantos de mercadería fiada en Cádiz.<sup>15</sup> Un par de años más tarde, en 1785, la balanza comercial se vuelve deficitaria, montando lo importado más de 6 1/2 millones de pesos y lo exportado en plata apenas a 4 1/2 millones, registrándose como consecuencia una mayor caída de los precios. En los dos años siguientes los precios se equilibraron porque las importaciones y las exportaciones oscilaron alrededor de los cuatro millones anuales. Es en 1788 que la balanza se vuelve a desequilibrar en cerca de 1 1/2 millones de pesos por haberse reducido las exportaciones de plata a sólo 2 1/2 millones, provocándose como secuela una rápida inflación de los precios. El Cuadro P-A nos ilustra los precios de los textiles en Chuquisaca, Cochabamba, y en San Lorenzo de la Barranca, en el año de 1788, un año de paz en el comercio Atlántico, así como también los precios en Buenos Aires según el aforo asignado por la Aduana. De la diferencia de dichos precios y sin computar los gastos en transporte y

gabelas, el mismo Cuadro nos ilustra acerca de la ganancia obtenida entre ambos mercados. Mientras que con la vara de chamebote se obtenía el margen de ganancia más bajo, entre el 60% y el 140%, con la pieza de breña angosta superfina y la bayeta de Castilla se lograban los márgenes más altos, entre el 220% y el 300% respectivamente. También con productos locales como la yerba, las mulas, el vino, y el tabaco se obtenían grandes márgenes de ganancia. Si una arroba de yerba comprada en Paraguay a 5 reales, costaba 20 reales cuando arribaba a Buenos Aires; 28 reales cuando era introducida en Córdoba, y 75 reales en Santiago de Chile, podemos comprobar que la tasa de ganancia, sin computar los fletes, comisiones, y seguros, alcanzaba al 1500%.<sup>16</sup> De igual modo, si por una mula de tres años comprada en Buenos Aires a \$6, e introducida en el Alto Perú, alcanzaba entre los \$24 y los \$35 podemos estimar que la tasa de ganancia cuadruplicaba los costos iniciales.<sup>17</sup> Pero es evidente que no es el mismo individuo quien hace la compra y quien se beneficia más tarde de la venta: los gastos de transporte, los impuestos y los riesgos de la operación deben ser computados. En el caso del tabaco del Paraguay, relatado por Arias Divito (1976), como en el del vino de Cuyo, al sufrir la competencia externa, sus precios en Buenos Aires no producían beneficio alguno, sino pérdidas.<sup>18</sup>

### **Las declaraciones de guerra.**

Con las declaraciones de guerra, no todos los productos de la tierra o frutos del país sufren una caída en sus precios. Ciertos productos que no eran de exportación, como el aguardiente, sustituto de algunas bebidas que en tiempos de paz se importaban, experimentan alzas hasta del 50%. En efecto, mientras que antes de promulgarse la guerra corría la venta de aguardiente en Buenos Aires a \$14 y 2 reales cada barril, una vez declarada la guerra en 1779 la unidad llegó a costar en Buenos Aires \$20, más \$7 de flete.<sup>19</sup> Don José Aguilar, un vecino de Mendoza, manifiesta en un litigio que sostuvo en 1739 en Buenos Aires con un Alférez de Navío llamado Luis D'Orselles "...no hallar conveniencia de comprar caldos por estar adelantado el tiempo cuando llegue a Mendoza".<sup>20</sup> Si se compraba algún vino al fiado "...era exponerse a perder cuando menos la mitad" por estar cercana la vendimia. Si se compraba de los caldos añejos se reportaba solo pérdidas "...por los subidos precios a que se venden en Mendoza".<sup>21</sup> Guardada la proporción del costo principal y las pérdidas por las quiebras y mermas "...suele valer la botija de vino o aguardiente más en Mendoza que aquí [Buenos Aires]".<sup>22</sup> Es público y notorio, según Aguilar,

"...que la botija de vino añejo y electo...no se sacará [de Mendoza] por menos de 9 o 10 pesos y la de aguardiente por menos de \$12, que con \$2 de sisa el aguardiente, y \$1 el vino, y \$5 de flete, mermas, y quiebras, no baja el vino de \$18 o \$19, y el aguardiente viene a costar más de los \$20".<sup>23</sup>

Casi cuarenta años después, en 1778, un año de paz en Europa, Facundo Prieto y Pulido, en nombre y como apoderado de Pedro Giráldez, infiere en un juicio que la botija de vino no podía valer en Mendoza \$8 cada una, como lo sostiene Alexandro Suárez, "...a influjos de Escalada", pues sumados a este precio "...el flete de cada botija de \$5 y 4 1/3 reales; la alcabala de 2 reales; el derecho de mojón de 1 real; y los de comisión, venta, y almacenaje de 5 reales, ascendería el costo de una botija en Buenos Aires a \$16 y 1/3 reales, cuando "...aquí nunca se ha vendido el vino por más precio, si no por menos", y allá "...no vale la botija de vino si no \$5 cuando más...que es el precio sentado [en Mendoza] para graduar los réditos de las capellanías".<sup>24</sup> Este precio era, según Pulido, más que público,

"...porque en la provincia de Cuyo, no pueden cambiar sus frutos, a otros [frutos], de que necesitan para la vida humana, ni tienen facilidad de adquirirlos, sino extrayendo de allí sus cosechas".<sup>25</sup>

Extrayendo sus frutos de Mendoza, y remitiéndolos a Buenos Aires, lograrían, si no un lucro, al menos "...verían en moneda el precio [de su vino]", con el cual adquirir los otros frutos necesarios para subsistir.<sup>26</sup> No todos los frutos de la tierra producidos en provincias apartadas alcanzaban entonces los mayores precios en los puertos de salida, como el de Buenos Aires. En muchos casos la demanda era mayor, y por ende, su precio, en regiones o ciudades que no eran, precisamente, puertos de salida. Tal era el caso, por ejemplo, con el lienzo de algodón, los ponchos cordobeses, el aguardiente riojano y catamarqueño, el azúcar, la cera y la coca.

También el sebo ofrecía oscilaciones cíclicas por arroba. En 1781 los hacendados apenas lograban por arroba de sebo el bajísimo precio de 3 reales

"...en que no es posible que se costeen, por esta causa desmayan en el fomento de sus estancias y haciendas y las que podían rendir pingüísimos emolumentos para enriquecer a sus dueños y aún a las Provincias se reputan de ordinario como un depósito de caudales muertos sin giro y sin utilidad alguna".<sup>27</sup>

Lo que se ve palpablemente en el mismo precio de 3 reales a que corre el sebo en 1781, es que

"...si antes, en un tiempo regular en que no había luminarias ni Malvinas, ni Poblaciones Patagónicas ni el numerosísimo concurso de gentes que diariamente consumen mucha porción de sebo, su precio corriente era el de dos reales y medio: ahora que sólo ha subido a medio real más de valor desde luego es incomparablemente mayor la abundancia serbaia proporcione".<sup>28</sup>

No obstante el dinamismo del comercio en períodos de paz, no todos los mercaderes salieron airoso de la competencia reinante. Con la intensa competencia existente en los períodos de paz los productos procedentes de Europa sufrieron una innegable tendencia a la baja. Tan era así que a fines de esa época, en 1789, el comerciante Manuel Riesco, vecindado en Santiago de Chile, según revela Villalobos (1968,1990), se quejaba de la abundancia de mercaderías.<sup>29</sup> El poderoso comerciante Gaspar de Santa Coloma le escribía a Agustín Arrivillaga,<sup>30</sup> informándole de la quiebra "maliciosa" de Juan Costa el Catalán,<sup>31</sup>

"...en la que me coxe 3.000 pesos que perderé por ser Balista y si fuere escriturario me sucedería cuasi lo mismo pues de 75.000 pesos que debe ni se han de recoger 25 y si en ésta no se hace un egemplar con estas quiebras maliciosas y de ninguna fé han de seguir muchos este camino",<sup>32</sup>

Como consecuencia de estas quiebras maliciosas Santa Coloma declaró haber perdido 12.000 pesos, pero Juan Antonio de Lezica y Francisco Ignacio de Ugarte y Arrivillaga, este último con cuñado de Santa Coloma,

"...tendrán mucho mas [de pérdida] por los crecidos caudales que tienen en el Perú y malas cuentas que ban dando nuestros inquilinos, en fin paciencia y bamos cubriendo nuestro crédito que es lo principal".<sup>33</sup>

Asimismo, Santa Coloma declaraba que su con cuñado Ugarte y el yerno del mismo, Ignacio de Rezabal,

"...están llorando la baxa de la moneda y más aflixidos que el pobre más mísero que a la berdad me dá berguenza oyrllos con que así no extraño pretendan que Vm. los sirva de balde".<sup>34</sup>

Las Tablas P-I y P-II revelan que Ugarte y su socio y suegro Vicente de Azcuénaga habían concertado en tiempos mejores, entre 1752 y 1787, más de un centenar de operaciones (115) de fiado por valor de \$1.209.135. Pero a fines de 1787, Ugarte otorga fiadas a Juan Francisco de Echechipia mercaderías por la increíble suma de \$182.663, la cual sin duda debe haber sido la causante de su ruina.

Mas aún, el antiguo mozo de tienda de Santa Coloma, Martín de Alzaga,

"...camina para el Perú porque su hermano [Francisco Ignacio Alzaga] no le socorre con nada, y contemplo terminarán un pleito en este negocio según beo aparejadas las cosas, y otros varios de esta capital me recelo también tengan que tomar este partido".<sup>35</sup>

A fines de 1789 la actividad comercial se recuperó, dejando un tendal de víctimas, de aquellos que quedaron atados a créditos de compra especulativa. Durante los nueve años que restaron hasta 1797, año de la Guerra de la segunda Coalición contra la Francia revolucionaria, la balanza fué altamente favorable por fluctuar las importaciones en alrededor de dos millones anuales mientras que las exportaciones superaban el promedio de los tres millones anuales y registrándose como reflejo de la misma una prolongada caída de los precios. Sin embargo, los saldos favorables o superavits de la balanza comercial porteña no debe ilusionarnos --como a Levene (1952)-- acerca de la salud económica del virreinato. Una balanza comercial "favorable" puede ser el síntoma de un aumento de la riqueza, pero también puede ser, según lo constata Schumpeter (1984), el síntoma de un proceso de empobrecimiento.<sup>36</sup>

El estudio de la balanza comercial deberá continuar con el de la participación que tuvo Buenos Aires en la renta minera procedente del Alto Perú y Chile, ilustrada por el total de la plata y oro exportada según la información brindada por la recaudación fiscal (Cartas Cuentas) y los registros de caudales. En los años del Asiento Inglés (1720-40), el Gráfico P-III, fundado en la Tabla P-III, demuestra que el porcentaje de plata legalmente enviado a España a través de Buenos Aires alcanzó al 12.2%, a través del Callao al 67.6% y a través de Cartagena al 20.2%, sobre un total de 40 millones de pesos exportados de toda la Sudamérica hispana. Si en su lugar, consideramos a toda la América Latina, de un total de 131 millones, el Gráfico P-IV, fundado en la Tabla P-IV, demuestra que sólo 3.2% fueron enviados a través de Buenos Aires, 17% a través del Callao, 5.7% a través de Cartagena, y 58.9% a través de Veracruz, Acapulco, y Valparaíso.

### **Las exportaciones legales de plata.**

Durante la tercera década de los buques de registro (1740-49) el porcentaje promedio de las exportaciones legales de plata a España a través de Buenos Aires crecieron al 15.3% de un total de 13 1/2 millones para toda Sudamérica excluyendo a Caracas, con Cartagena contando con el 20.2%, y el Callao con el 64.5% (Gráfico P-III fundado en la Tabla P-III). Con los envíos promedio de plata anuales caídos a la mitad (de 2 millones a 1 millón) debido a la Guerra del Rey Jorge o de la Sucesión de Austria (1739-48), entre España e Inglaterra, el incremento relativo de envíos a través de Buenos Aires debe haber tenido, obviamente, un impacto negativo en los comerciantes de Lima. Como resultado de la Real Orden de 1749 y la condiciones de post-guerra en la década del 50, el porcentaje de exportaciones de plata a través de Buenos Aires creció 14 puntos, alcanzando al 29.3% sobre un total de 33 millones para toda Sudamérica, y 5 puntos, o el 7.7% de un total de 126 millones para toda la América Hispánica, habiendo Cartagena caído 7.7 puntos (12.5% y 3.3% respectivamente) y el Callao 6.3% (58.2% y 15.4% respectivamente) mientras que Veracruz, Valparaíso y Acapulco alcanzaban al 60.5% para toda la América Hispánica (Gráfico P-IV fundado en la Tabla P-IV). En la misma década, el porcentaje de exportaciones de oro subió en Buenos Aires al 4.6% y en Cartagena al 55.9% de un total

de 27 1/2 millones en oro para toda la América Hispana (Gráfico P-V fundado en la Tabla P-V).

En la década del 60, como consecuencia de las hostilidades militares con las colonias portuguesas del Brasil, el comercio exterior se vió afectado. El porcentaje de plata a través de Buenos Aires cayó 9.5 puntos, alcanzando al 19.8% de un total de 48 millones para toda Sudamérica, y al 8.3% de un total de 113 1/2 millones para toda la América Hispana. En forma similar, las exportaciones de plata desde Cartagena cayeron 10 puntos, alcanzando al 2.4% y 1% respectivamente, y desde Veracruz y Acapulco alcanzaron al 30% de todas las remesas de la América Hispana, mientras que las exportaciones desde el Callao subieron 19.6 puntos alcanzando al 77.8% y 32.8% respectivamente. En la misma década, las exportaciones de oro desde Buenos Aires subieron 4.6% y desde Cartagena 48% de un total de 26 1/2 millones para toda la América Hispana (Gráficos P-V y P-VI, fundados en las Tablas P-V y P-VI).

Para conocer qué porcentaje de las acuñaciones de Chile y Potosí fueron remesadas a Buenos Aires será preciso desagregar dichas remesas entre las partidas procedentes de ambas regiones citadas. Sabemos que para el período 1757-75, del total de remesas a España \$3.272.624 en monedas de oro y plata vinieron de Chile y \$14.465.624 del Alto Perú. Si promediamos anualmente este total alcanzamos la cifra de \$181.812 extraídos anualmente de Chile y \$803.611 del Alto Perú. En la hipótesis de que estas cifras fuesen fijas para todo el período 1757-75, obtenemos de la cifra total brindada por Romano (1965) y Sierra (1956-59) los porcentajes anuales de las monedas acuñadas en Chile y el Alto Perú que fueron remitidas a Buenos Aires, y de ellas alcanzamos un número promedio de 36% y 12% respectivamente. Consecuentemente, encontramos que de 4 millones de pesos en mercaderías introducidas en Chile desde Buenos Aires, los comerciantes retornaron a Buenos Aires algo más de 3 millones en moneda dura, es decir, dejaron un déficit de casi un millón de pesos. Por el contrario, de un total de 13 millones de pesos en mercaderías introducidas en el Alto Perú desde Buenos Aires, el Gráfico P-VII, fundado en la Tabla P-VII, nos informa que los comerciantes retornaron a Buenos Aires 14 1/2 millones en moneda dura, o un excedente de \$1.350.000. La única explicación posible para tan bajos volúmenes de extracción, es que los comerciantes ocultaban sus remesas de plata y oro a Buenos Aires debido a las extremadamente altas tasas fiscales que tenían que erogar para remesar dichos caudales a España. Estas tasas alcanzaron al 6% para el oro y el 13% para la plata. Amén de las altas tasas fiscales, este período fué golpeado por una depresión general causada, en parte, por términos crediticios más cortos otorgados por el capital comercial inglés en Cádiz y el bloqueo militar de la Colonia del Sacramento.

### **La amenaza militar Portuguesa.**

La amenaza militar Portuguesa impuso un drenaje de plata de tal magnitud a las autoridades españolas en Buenos Aires, que absorbía las ganancias de la clase productora e incluso de la clase intermediaria, atentando así contra la posibilidad del estado colonial de perpetuar su dominación.<sup>37</sup> Los \$130.000, o 12% de la plata acuñada, enviada hasta 1761 como subsidio o situado real, creció considerablemente durante el gobierno de Ceballos, doblando el subsidio Peruano al Panamá. Los ingresos fiscales de la Aduana de Buenos Aires en ese período eran ínfimos. En 1767, con el objetivo de ayudar a la gobernación del Río de la Plata, la corona ordenó enviar además del situado Potosino, el de Oruro y La Paz.<sup>38</sup> En 1770, los ingresos de la Caja de Chucuito tuvieron que ser incorporados con el Situado Real alcanzando un monto de mas o menos un millón de pesos o el 33% de la producción minera del Potosí.

Como consecuencia de la paz firmada entre España y Portugal en San Ildefonso en 1777, y de

la reducción impositiva de las remesas de metálico a España del 5% al 2% en el oro, y del 10% al 5 1/2% en la plata, las remesas de plata se incrementaron. En efecto, en la década que sigue a la inauguración de las Ordenanzas de Libre Comercio (1779-89) y como consecuencia de la prohibición virreinal de extraer metales del Alto Perú vía Lima, el porcentaje promedio de las exportaciones anuales de plata a través de Buenos Aires subieron 19 puntos, o el 34% de las remesas de plata Callao-Buenos Aires, y a través del Callao cayeron 19 puntos, al 66%.

Sabemos también que para el período 1776-1804, del total de remesas enviadas a España 14 1/2 millones de pesos en monedas de oro y plata vinieron de Chile, o un promedio de 1/2 millón de pesos anual, y 44 millones vinieron del Alto Perú, o un promedio de 1 1/2 millón anual. Asumiendo la hipótesis de que el 100% de la mercancía introducida al Alto Perú y Chile (incluidos los esclavos) fué sobre la base de consignaciones otorgadas en Buenos Aires, y que el 76% de la mercadería adelantada notarialmente en Buenos Aires entre 1776 y 1804, fue enviada al Alto Perú y el 24% a Chile a cambio exclusivo de oro y plata y nada a las ciudades intermedias, podríamos concluir que 20 1/2 millones fueron enviados al Alto Perú y 6 1/2 millones a Chile, totalizando 27 millones. De aquí descubrimos que, de 6 1/2 millones de pesos en mercadería presumiblemente introducida en Chile, los comerciantes retornaron a Buenos Aires 14 millones en moneda dura, o un excedente de 8 1/2 millones; y de 20 1/2 millones introducidos en el Alto Perú los comerciantes retornaron a Buenos Aires 47 millones en moneda dura, o un excedente de 23 1/2 millones.

Del sumario general de la Real Hacienda registrado en las Cartas Cuentas enviadas al monarca, sabemos que para el período 1776-1804, 39 millones fueron enviados de Potosí a Buenos Aires como fondos públicos, es decir, el 34.7% de la acuñación potosina. Aún sin tomar en cuenta las remesas privadas de Potosí a Buenos Aires, observamos que lo que el Tesoro de Buenos Aires embarcó para España (47 millones), apenas excedió lo que públicamente recibió de Potosí a través del Real Situado (39 millones). Por lo tanto, aquellos fondos privados recibidos por Buenos Aires por encima del Real Situado (5 millones), constituyen tal como Santamaría (1982) lo ha expresado, la acumulación mercantil interna de Buenos Aires.

En resumen, reconocemos, en el siglo XVIII, la existencia de siete períodos de expansión seguidos por siete crisis comerciales. Los períodos de expansión ocurrían cuando se concretaban Tratados de Paz. Estos fueron los de Alfonso (1701), Utrecht (1715), Madrid (1750), París (1763), Versailles (1783), Basilea (1795) y Amiens (1802). Las crisis comerciales ocurrieron en Buenos Aires cuando en Europa se producían las declaraciones de Guerra. Ello ocurrió en 1705, cuando en España se produce --al morir sin herederos Carlos I el Hechizado-- la Guerra de Sucesión; en 1740 cuando tras la caída de Portobello España entró en la guerra de la Oreja de Jenkins; en 1760, cuando entró en la Guerra de los Siete Años, en coalición con Francia y contra Inglaterra; en 1781, cuando volvió a entrar en guerra con Inglaterra por la Independencia de Estados Unidos; en 1794 y 1798, cuando España entró en coalición con Inglaterra contra la Francia Revolucionaria; y en 1804 cuando entró en coalición con la Francia Revolucionaria contra Inglaterra. En estas crisis comerciales muchos comerciantes quedaron atados a créditos de compra especulativa, cuando las mercaderías se sobrevaloraban, motivo por el cual entraban en quiebra cuando comenzaban los procesos de desvalorización o liquidación del capital mercantil sobrante. Si bien las crisis comerciales pudieron haber erosionado las estructuras políticas del Antiguo Régimen no he hallado elemento alguno que me permita afirmar que las mismas incidieron en la transformación de las relaciones de producción vigentes. Esto me lleva a reconocer con Stern (1985) la precedencia de las crisis sociales como motor de la transformación de aquellas.

## NOTAS

<sup>1</sup> ver Saguier, 1992.

<sup>2</sup> Mauro, 1964, 307.

<sup>3</sup> por su condición colonial el Río de la Plata carecía de la soberanía monetaria necesaria para fijar la oferta dineraria interna, para envilecer la moneda de plata con cobre, y para reducir la tasa de interés de los censos contraídos; así como carecía de la soberanía fiscal necesaria para sustituir mediante un proteccionismo tarifario las importaciones de mercancías con alto valor agregado por mercancías con menor valor agregado, y para desgravar la producción de manufacturas.

<sup>4</sup> Gómez Camacho, 1986, 45.

<sup>5</sup> Torres Gaytán, 1972, 381, 390, 394, y 398.

<sup>6</sup> Wilson y Parker, 1985, cap. II.

<sup>7</sup> Halperin Donghi, 1979, 109.

<sup>8</sup> Kalmanovitz, 1983, 69.

<sup>9</sup> Idem, p. 68.

<sup>10</sup> Vitale, 1986, 15.

<sup>11</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 97, Exp. 2521, fs. 87.

<sup>12</sup> Halperín Donghi, 1979, 74.

<sup>13</sup> Balmori, 1979.

<sup>14</sup> Mastías de Abaroa y Barrena remesa \$82.576; Diego de Agüero \$37.791; Cristóbal de Aguirre \$29.422; Jaime Alsina \$24.489; Joaquín de Arana \$17.853; Manuel de Arana y Torrezuri \$101.551; Vicente de Azcuénaga \$18.839; Isidro J. Balbastro \$10.401; Manuel de Basavilbaso \$66.567; Francisco J. Díaz Vèlez \$12.943; Pedro Díaz e Vivar \$11.317; Juan Bautista de Euba \$14.850; Juan Bautista de Gainza \$15.301; Antonio García López \$30.285; Luis Gardeazabal \$41.842; Jose González de Bolaños \$55.807; Pedro González de Cueto \$27.860; Bernardo Gregorio de las Heras \$14.435; Bernardo Sancho Larrea \$67.468; Eugenio Lerdo de Tejada \$67.238; Casimiro Francisco de Necochea \$29.393; Manuel de Nobales y Aspiunza \$28.212; Antonio de Obligado \$44.259; Pablo Ruiz de Gaona \$35.361; Miguel Sàenz \$17.335; Gaspar de Santa Coloma \$18.200; Martín de Sarratea \$57.744; Francisco Ignacio de Ugarte \$87.914; Manuel J. Zapiola \$17.748; Miguel de Zuviría \$28.813; y Joaquín Pinto, Agustín Casimiro de Aguirre, Juan Estèban de Anchorena, Juan Antonio de Lezica, Manuel Rodríguez de la Vega, y Francisco de Segurola las increíbles sumas de \$149.320, \$124.865, \$103.413, \$271.745, \$177.643, \$107.621 respectivamente (Fuente: Cuadro A-III del Tomo I de esta obra).

<sup>15</sup> Bakewell, 1976, 319.

<sup>16</sup> de Ramón, 1978, 170, 172.

<sup>17</sup> En conducir sus muebles a Potosí Rafael de los Reyes y Serrano le relata a José Antonio de Alzaga en marzo de 1769, "...hice una gran ventaja porque gané un 100%, pues habiéndome costado las sillas a \$13 1/2 y servídomé de ellas más de 10 años,...las vendí a \$26 1/2 a Don José de Elorga; que la cuja que costó \$200 la vendí al dicho por \$400; que los espejos que me costaron \$300 los vendí por \$500 a Alvarez; que el Relox de Cuerpo entero que me costó con su caja \$100, por ser de pesas con cuerda de 24 horas, lo vendí a Velarde en cambalache en cosa que valía \$300; y a este tenor todo lo demás con que antes fué negocio favorable a mí, el tren que me supone; y así siempre que yo conociese que de un lugar a otro había de reportar tan crecidas ventajas llevaría triplicado y cuatriplicado tren, a cualquier parte que fuese mas que me expusiera a la censura de Warnes y todo el mundo" (AGN, Sucesiones, Leg. 8125, fs. 50v.).

<sup>18</sup> Arias Divito, 1976, 10

<sup>19</sup> AGN, Sala IX, Interior, Leg. 7, Exp. 6, fs. 54v.

<sup>20</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. H-1, Exp. 11.

<sup>21</sup> Idem.

<sup>22</sup> Idem.

<sup>23</sup> Idem.

<sup>24</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. Q-2, Exp. 8, fs. 61.

<sup>25</sup> Idem.

<sup>26</sup> Idem.

<sup>27</sup> AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 18, Exp. 430.

<sup>28</sup> Idem.

<sup>29</sup> Villalobos, 1990, 110.

<sup>30</sup> tío o primo de Francisco Ignacio de Ugarte.

<sup>31</sup> En viaje al Paraguay y Corrientes había contraído deudas en 1756 con Juan Antonio Ximenez Braga (AGN, Protocolos, Reg.1, año 1756, fs.39). y en 1768 con Manuel Antonio Warnes (AGN, Protocolos, Reg.2, año 1760, fs.213; y Reg.2, 1760, fs.220).

<sup>32</sup> Gaspar de Santa Coloma a Agustín de Arrivillaga, Buenos Aires, 1-V-1789 (AGN, Archivo Santa Coloma, Leg.647, Sala VII, 6-5-14).

<sup>33</sup> Gaspar de Santa Coloma a Agustín de Arrivillaga, Buenos Aires, 1-V-1789 (AGN, Archivo Santa Coloma, Leg.647, Sala VII, 6-5-14).



<sup>34</sup> Gaspar de Santa Coloma a Agustín de Arrivillaga, Buenos Aires, 21-V-1789 (AGN, Archivo Santa Coloma, Leg.647, Sala VII, 6-5-14).

<sup>35</sup> Gaspar de Santa Coloma a Agustín de Arrivillaga, Buenos Aires, 1-III-1789 (AGN, Archivo Santa Coloma, Leg.647, Sala VII, 6-5-14).

<sup>36</sup> Schumpeter, 1984, 326.

<sup>37</sup> Céspedes del Castillo, 1946, 806.

<sup>38</sup> Idem, p.133.

## TOMO XI

### Capítulo 6

# **El mercado de mano de obra indígena, liberta y mestiza y su impacto en la estabilidad del estado colonial. El caso de las encomiendas del interior del espacio colonial Rioplatense.\***

\* (publicado en 1993 en Cuadernos de Historia [Santiago de Chile: Universidad de Chile], 13, 1993, pp.69-140);

A diferencia del Perú, donde según Paz Soldán (1868-74) --tomando de una carta que Félix Durán había escrito a Tomás Guido-- la impotencia para colaborar con la redención Americana y la necesidad que tenía de una fuerza extraña para su redención la atribuía a "...la abundancia de castas índica y etiópica y a la dificultad que había de reunir los sentimientos que puedan ser uniformes entre los americanos blancos y los indios";<sup>1</sup> en Chile y el Río de la Plata, Mitre (1887), fundado en Lastarria (1844) y Barros Arana (1854-58), sostenía que un intenso y prolongado mestizaje había engendrado una raza criolla. Asimismo, la tradición historiográfica había advertido en el pasado colonial una contradicción muy aguda entre la clase de los vecinos encomenderos, que vivían de extraer el excedente a sus indios encomendados, a través del tributo, y los residentes comerciantes no-encomenderos. El más fuerte obstáculo que la mayoría de los colonos peninsulares tenía para obtener mano de obra indígena y desarrollar sus propias empresas de producción lo constituían en el mundo andino los ayllus (comunidades),<sup>2</sup> y en el mundo subandino los encomenderos.<sup>3</sup> A su vez, para Schwartz (1979), los Americanos percibían el status de vecino encomendero como más relevante que la mera condición estamental de noble.<sup>4</sup> No obstante estas posiciones, Golte (1980) le asigna equivocadamente al estamento encomendil la connotación de clase social, enfrentada a otra supuesta clase social constituida por los Corregidores. La imposición en el siglo XVIII del sistema de Corregimiento de Indios, al desplazar del poder a un estamento encomendil --ya por cierto bastante erosionado por la galopante inflación, la crisis demográfica y la prohibición del servicio personal-- habría significado para Golte un embrión de burguesía mercantil; así como su posterior abolición habría implicado la frustración de dicho embrión.<sup>5</sup> La devaluación del dinero metálico y la correlativa inflación o alza de los precios significó una profunda erosión de la base material de la élite encomendil, la cual recibía de sus encomiendas de indios y de la propiedad de sus inmuebles urbanos y rurales rentas fijas, todo lo cual la inhabilitaba para participar de la venalidad, o como suele denominarse hoy, la privatización de los oficios públicos. Por último, la historiografía más reciente ha señalado que la

presencia a comienzos del siglo XVII del mercader-encomendero, una suerte híbrida que conjugaba ambas realidades, habría amortiguado la contradicción entre mercaderes y encomenderos, señalada por la historiografía liberal, por lo que la misma y la tesis de Golte carecerían de sustento.

No obstante la tesis apuntada al comienzo, el estado colonial padeció de una crónica y cíclica inestabilidad, debido fundamentalmente a la desigual oferta de tierra y trabajo existente en las diversas regiones del espacio colonial. A juicio de Pastore (1990,1991), fundado en Domar (1970), la escasez de mano de obra indígena en el Paraguay, combinada con la abundante oferta de tierras, condicionó el desarrollo de mecanismos coactivos de extracción del excedente, como la encomienda mitaria y la encomienda yanacona u originaria.<sup>6</sup> Más aún, según Pastore (1991), a la luz de las teorías de Baysinger (1981), estos mecanismos coactivos le garantizaban al estado colonial mercantilista, la maximización de sus rentas y la disminución de sus costos de transacción.<sup>7</sup> Siguiendo estos argumentos, la escasez de mano de obra indígena en el Alto Perú combinada con la alta oferta de yacimientos mineros condicionó asimismo el desarrollo de mecanismos coactivos de extracción del excedente como la mita y la encomienda. Asimismo, la escasez de mano de obra rural en las campañas de Cuyo, Córdoba y Buenos Aires, combinada con la alta oferta de tierra libre, condicionó el desarrollo de mecanismos coactivos de circulación de la mano de obra, como la papeleta de conchavo.<sup>8</sup> González (1973) prueba la existencia de esta institución ya en tiempos del Gobernador-Intendente de Córdoba Rafael de Sobremonte. Profundizando previas investigaciones de mi autoría acerca de los conciertos de indios celebrados en el siglo XVII entre regiones geográficamente apartadas, y otras investigaciones de diversos autores, los indios encomendados, los vecinos encomenderos y la mano de obra rural en general revelarían una intensa movilidad y mestizaje y una profunda inestabilidad social.<sup>9</sup> Para corroborar esta tesis me he servido tanto de los conciertos de indios registrados notarialmente en Buenos Aires a comienzos del siglo XVII como de la información brindada por los padrones de población, los numerosos procesos judiciales, y las nóminas proveídas por Larrouy (1927), Ravignani (1932), Doucet (1980), Mora Mérida (1973), Lorandi y Ferreiro (1991), y Spangenberg (1992). No obstante que el trabajo de Mora Mérida se refiere a la mitad del siglo XVII, el de Ravignani al año 1674, el de Doucet a 1695, el de Larrouy a los años 1702 y 1718 y el de Spangenberg a 1754, sus proximidades cronológicas para con el período correspondiente a los datos reproducidos por mí (1620-1654) en la Tabla F-I los han vuelto inestimables. Para completar los datos biográficos me he servido también de los trabajos de Figueroa (1927), Cornejo (1945), Luque Colombres (1948), Solveyra (1974), Crespo Naón (1976) y Doucet (1984).

### **Naturaleza amortiguadora del mercader-encomendero.**

Confirmando la tesis de la naturaleza amortiguadora del mercader-encomendero, a mediados del siglo XVII, en Buenos Aires, un numeroso grupo de vecinos encomenderos, se coaligó estrechamente con comerciantes criollos, portugueses y peninsulares. La burguesía comercial residente en Buenos Aires habría buscado entonces en los encomenderos del interior apoyo contra la gran burguesía Limeña, consignataria del capital comercial monopolista de Sevilla, aliada de los azogueros,<sup>10</sup> y del capital minero; a fin de controlar por métodos legales o ilegales una cuota mayor del comercio ultramarino. Asimismo, como estrategia para evitar el descenso social, los encomenderos se involucraron como fiadores u apoderados en el comercio a larga distancia con el Alto Perú y Chile. En la Tabla F-II compruebo la estrecha relación que se dió entre encomenderos del interior y comerciantes residentes en Buenos Aires y en un trabajo de mi autoría ilustro la nómina de mercaderes encomenderos que se dieron en Buenos Aires a comienzos del siglo XVII.<sup>11</sup>

Si bien las fuentes primarias elegidas para esta investigación difieren entre sí cronológicamente

desde un cuarto de siglo hasta un siglo, el cotejo entre las mismas permite comprobar que la alta movilidad de la mano de obra encomendada y la intensa fragmentación territorial de los Pueblos de Indios generó una pronunciada inestabilidad en la elite patricia. Para esta comprobación contamos con una información casi completa sólo para los casos de Santiago del Estero y Tucumán. Sólo una docena de encomenderos Santiagueños existentes en la primera mitad del siglo XVII, sobre un total de 33 encomiendas, es decir casi una tercera parte, ilustrada en la Tabla F-III, mantuvo una cierta continuidad hasta comienzos del siglo XVIII. Y de otra docena de encomenderos Tucumanos existentes en la primera mitad del siglo XVII, sobre un total de 33 encomiendas, ilustrada en la Tabla F-III, ocurre algo semejante. Para las demás provincias, y específicamente la de Córdoba, las Tablas F-IV y F-V confirman el acerto.

### **La vinculación de los encomenderos con los empresarios.**

La vinculación de los encomenderos del interior con los empresarios no encomenderos de Buenos Aires siguió un patrón muy desigual. En aquellas provincias donde la población indígena había sufrido a mediados del siglo XVII una erosión demográfica y una fragmentación territorial muy intensa, que generó una corriente migratoria indígena y mestiza hacia el sur, el número de encomenderos vinculados con Buenos Aires fué porcentualmente mayor. En efecto, en Santiago del Estero, 52 encomenderos, o 17 más de los registrados en 1674, habían alquilado sus indios en Buenos Aires a comienzos del siglo XVII; en Santa Fé, 16 encomenderos, o sea 2 encomenderos más de los registrados en 1674, alquilaron sus indios; y en Córdoba, 51 encomenderos, o sea 35 encomenderos más de los registrados en 1674, alquilaron sus indios. Por el contrario, en aquellas provincias donde la población indígena había sufrido una caída demográfica menos intensa, el número de encomenderos vinculados con Buenos Aires y por consiguiente la corriente migratoria indígena y mestiza fué porcentualmente menor. En efecto, en La Rioja sobre 51 encomenderos existentes en 1674, 14 encomenderos, o el 27%, habían alquilado sus indios en la primera mitad del siglo XVII a los empresarios de Buenos Aires; en Jujuy, sobre 9 encomenderos, 2 de ellos, o el 22%, alquilaron indios; en Salta, sobre 20 encomenderos, 5 de ellos, o el 25%, alquilaron indios; en Corrientes, sobre 41 encomenderos sólo 4 de ellos, o el 10%, alquilaron indios a los empresarios porteños; y en Tucumán, sobre 38 encomenderos, 29 de ellos, o el 76%, alquilaron sus indios.

### **Los Pueblos de Indios.**

El despojo de las tierras del dominio de los indios, o en palabras de Carmagnani (1988), la fragmentación territorial de los Pueblos de Indios, operó como un verdadero mecanismo de expulsión de los mismos que alteró el equilibrio demográfico que mantenía con la población liberta. Asimismo, como gran parte de las facturas o memorias de mercancías importadas desde Buenos Aires eran repartidas a los moradores de Pueblos de Indios y a los milicianos de fortines o guardias de frontera, los Gobernadores en sus Visitas y Revisitas fomentaban las licencias para beneficiar cueros en las Entradas al Desierto o yerba en los yerbatales silvestres del norte paraguayo, con el objeto que los indios y los milicianos pudieran hacerse de dinero con que pagar los repartos de mercancías a que estaban sujetos.<sup>12</sup> En el Paraguay, el beneficio de los yerbatales silvestres del norte mediante la llamada mita yerbera fué uno de los mecanismos que más contribuyó a la despoblación de los Pueblos de Indios.<sup>13</sup> Gaspar Rodríguez Francia, en su cruel gestión al frente del Pueblo de Indios llamado Yaguarón,<sup>14</sup> hizo que Pedro Juan Motatí, natural del mismo, se dirigiera al Virrey, para denunciar que

"...desde el principio de su Ministerio empezó a oprimir con todo género de trabajos a sus naturales, ejercitando con ellos una crueldad inaudita; de tal suerte que amenazaba la última

desolación a aquel afligido Pueblo con tan cruel dominación...Quien podría pensar que las violencias se extendiesen hasta despojarnos de nuestras propias hijas y mujeres, cometiendo con ellas el más horrendo crimen que la malicia humana puede escojitar: de este modo ha aglomerado el Administrador delito sobre delito, y se ha fabricado por sus propias manos instrumentos para su maior ruina. Otros tantos Administradores y enemigos de su libertad reconocen los Indios, quantos hijos tiene consigo dicho Francia, en una palabra hambre, sed, desnudez, pobreza, trabajo, vexaciones, violencia, y maltratamientos ha sido lo que este Pueblo ha experiemntado sin intermisión de su Administración".<sup>15</sup>

### **La Mita, el Tributo y el Yanaconazgo.**

Y en el Alto Perú, la Mita de Potosí, el aumento de los tributos y el yanaconazgo en las haciendas fueron los mecanismos que alimentaron la despoblación de los ayllus de indios originarios (tributarios) y los que generaron una inmensa población de mingas y forasteros, legítimos e ilegítimos.<sup>16</sup> Las clases de tributarios eran variadas, registrándose en Tarija, los originarios con tierras, los forasteros sin ellas, churumatas, tendarunas, y yanaconas de chacras. Los Churumatas, que pagaban de tributo ocho pesos y cinco reales,

"...se suponen con tierras, pues aunque no las tienen propias, por no componer esta clase de contribuyentes cuerpo de comunidad, se dejaban franquear los Dueños o Amos sus Haciendas a que estan afectos, como a los yanaconas de chacras a cuya especie se asemejan".<sup>17</sup>

Los Tendarunas, que contribuían también la tasa de ocho pesos y cinco reales, se aplicaban

"...al servicio de los Gefes y Oficiales Militares en campaña y fuera de ella, quienes estaban obligados a mantenerlos, vestirlos, pagar su tributo, casamientos, entierros y darles tierras como a los demas Indios que con nombre de yanaconas se aplicaron a los Dueños de chacras".<sup>18</sup>

Más luego, el Tendaruna prefirió sustraerse al servicio de Milicia y pagar por sí el tributo para gozar de libertad, pero

"...se mantiene y arrienda tierras como un mero Forastero, aunque por otra parte se halla libre de servicio personal; pero su tasa es la mayor que se satisface [ocho pesos y cinco reales], y hacen los muy vivos esfuerzos para eximirse ausentandose o mezclándose con los Forasteros que pagan siete y medio, siendo esta la causa de la minoración de esta especie de contribuyentes en cada Revisita".<sup>19</sup>

### **La crisis minera colonial.**

Lo que más engendró la fuga de los Indios fue el aumento de los tributos y la crisis minera colonial.<sup>20</sup> Tord Nicolini y Lazo (1981) nos revelan que en el Alto Perú los tributos aumentaron en la década de 1780 un 40%.<sup>21</sup> En 1792, en el partido de Larecaja, Provincia de La Paz, a cambio de la derogación del salario,<sup>22</sup> y de la llamada tasa de especies,<sup>23</sup> les fue impuesto a los Indios, bajo el eufemismo de uniformidad, el aumento de los tributos, de cinco pesos al año a seis y siete pesos, tal como "...se benía entablando con los de comunidad, matriculando a unos con nombre de originarios, y carga de siete pesos al año, y a otros con la denominación de forasteros, y pensión de seis pesos anuales".<sup>24</sup> En la Intendencia de Salta, el tributo representaba el 23% de los recursos fiscales.<sup>25</sup> Y en

Tarija, para libertarse del tributo, los Indios Forasteros

"...que recalán de otras Provincias llamados por la fertilidad del terreno, y sebo del vicio Dominante de la chicha, siendo desconocidos y encontrando varias clases libres con que confundirse se injieren en ellas, y se prestan voluntarios a la Lista de Soldados".<sup>26</sup>

Al abrigo de la condición de soldado los Indios sufragán muchas causas:

"...la mas poderosa, el universal fastidio que comprenden al moderado tributo que se exige, y por otra parte el provecho de muchos particulares Asendados o Labradores que protejen a los que pueden servirlos, o arrendar sus tierras; de modo que como se miran con indiferencia los intereses de Su Magestad por los que no tienen particular encargo de promoverlos propenden a la libertad del que quiere eximirse de la contribución, certificando el Capitán por su soldado, y los demás atestiguando la calidad de libre de que quieren rebestir al pretendiente".<sup>27</sup>

Como las expediciones militares eran poco frecuentes, y cuando ocurrían los Indios podían ocultarse, o ausentarse durante la convocatoria, "...les aprovecha mas el título de soldado que el de Tributario expuesto en cada tercio a la recompención del Curaca o Cobrador".<sup>28</sup> Vemos entonces que a pesar de las Reformas Borbónicas, el tributo siguió representando aquí el elemento central de la sociedad y la economía.<sup>29</sup>

### **Las Revisitas Indígenas.**

Para la confección de las Revisitas, sobre cuya base se calculaba el monto del tributo, se acudía a los Libros Parroquiales. Pero la fe que estos merecían inducía a una prudente desconfianza. Como por los Bautismos no se llevaban derechos, "...y en cuanto a ellos son iguales las condiciones se inclinan a la que mejor les indemnice en lo futuro, y los distinga respectivamente del Indio, cuya calidad (excepto la del negro) se reputa erroneamente la mas inferior: con todo, en favor del interes pecuniario, renuncian el pundonor, y como los derechos del Indio en los casamientos son mucho menos que de las demas clases, quando se presentan al Matrimonio confiesan y aun alegan ser Indios".<sup>30</sup> Pero aun supuesto este desorden involuntario de los Libros Parroquiales en perjuicio de la casta tributaria, "...todavía arreglándose a ellos y por sus cotejos deberían ser muchos mas los contribuyentes del Partido".<sup>31</sup> Por ejemplo, en el curato de la Villa de Tarija, la Revisita del quinquenio de 1705 rindió 260 bautizados de origen tasero o tributario,

"...sin contar los que no se apuntan por descuido, o se ponen por mestizos,...debiéndose de estos rebajar mas de la mitad naturales de otras Doctrinas, y algunos de estraña Provincia; de manera que solo se deben contar ciento cincuenta o sesenta tributarios Parroquianos por su nacimiento".<sup>32</sup>

Formándose los cálculos políticos y combinaciones mas congruentes y se descubrirá una gran deformidad y desproporción en este Punto, prueba evidente de que

"...cuando van llegando a la edad de poder contribuir degeneran maliciosamente de su natural condición, y se meten soldados confundiéndose con las demás castas libres, seguros de poder ser descubierto por un prolijo escrutinio que jamás se practica y deja un camino franco a las usurpaciones y sucesibas quiebras del Ramo que apenas se podrá remediar, por que el que su puso de soldado en calidad de mestizo, mulato o pardo se ampara de esta posesión, induciendo doble dificultad para rebertirlo a su verdadero estado: tampoco se puede negar el que esta

misma confusión puede perjudicar a algunos de condición libre grabándolos con el tributo".<sup>33</sup>

Como en el quinquenio se han ausentado muchos, muerto y reservado algunos por su edad, los Curacas "...se ven en la precisa necesidad de remplazarlos con otros que descubren en el Partido Naturales o Forasteros advenedizos, cuyos nombres no aparecen en la anterior Revisita".<sup>34</sup> Con respecto a estos Forasteros, y para que fuesen oídos en Justicia, y ordenanza, se añadió en el Bando

"...la citación que se les hace para que expongan, y aleguen personalmente lo conducente a su libertad, o a la satisfacción de cualesquiera agravio que se les haya inferido, dandoles por termino perentorio todo el tiempo de la Revisita, el que pasado les perjudicaría para continuar en la satisfacción del Tributo que han satisfecho dentro del quinquenio: los que nos han parecido haber padecido injusticia segun lo que han representado y provado, no hallandose asentados en la anterior Revisita, se han restituído a su libertad y continuado en la pención los que nada han reclamado".<sup>35</sup>

Para que la Orden de que no se alistasen en la Milicia los que deben ser taseros, los Regidores Tarijeños Pedro Francisco del Valle y Francisco Xavier Arballo, propusieron que la formación de las Listas Militares, o el reemplazo de las Plazas Vacantes se hiciere con intervención del Subdelegado (o recaudador del Ramo), para que

"...registre los Padrones que rijen la cobranza y advierta si el individuo que se pretende alistar, se halla empadronado, o aunque no lo esté deba estarlo mediante las indagaciones o justificaciones que así lo convenzan; y por que puede suceder que los oficiales Militares reemplazen sus compañías sin noticia del Subdelegado, que pueda este siempre que lo sospeche, pedir las Listas y estén obligados a franquearlas para que se registren y cotejen con los Padrones de Revisita".<sup>36</sup>

Asimismo, en atención a que el Indio Legítimo

"...siempre trae consigo la genealogía exterior de su condición, sea igualmente necesaria la asistencia del Subdelegado en las Revistas anuales que deben practicarse, para que ocularmente adviertan las personas que por su aspecto y demas accidentes induzcan sospecha, y puedan practicarse las diligencias y averiguaciones conducentes hasta haber calificado su verdadero origen".<sup>37</sup>

Respecto a la escrupulosidad que se observaba en los Libros Parroquiales, con relación a la calidad de los bautizados y casados, que se ponen difiriendo al dicho de los interesados, y para que revistiesen mayor crédito

"...convendría el que precediese al acto de asentar la partida averiguación de dos testigos desinteresados presentados por los Padres o contrayentes que atestiguasen bajo juramento la calidad verdadera de estos con distinción y fundamento, para discernir la exaltación o degradación de las sucesiones con que se apartan o revierten a la condición Taseras".<sup>38</sup>

### **La corriente migratoria indígena.**

La corriente migratoria indígena, mestiza y liberta, voluntaria o forzada, y la articulación del régimen encomendil con la submetrópoli mercantil porteña, no se detiene en el siglo XVII, sino que se

perpetúa y aún acentúa en el siglo XVIII. Susnik (1965) y Cooney (1990) hacen referencia al caso del Paraguay, donde los dueños de barcas, para la carrera de navegación río abajo del Paraná, debían dar fianzas de restitución por los peones embarcados.<sup>39</sup> Barrios Pintos (1973), en su descripción de la Banda Oriental hace mención de los arrieros y faeneros de las vaquerías o corambres, los cuales en su mayoría provenían de Santa Fé.<sup>40</sup> Robinson (1974) destaca que en los casos de Jáchal, Valle Fértil y Nueva Orán, ubicadas en San Juan, Mendoza y Salta, respectivamente, sus poblaciones fueron ciertamente menos Europeas que las de las ciudades más antiguas.<sup>41</sup> Amén de los indios Quilmes, originarios de los Valles Calchaquíes y reducidos en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en el pago de la Magdalena, luego de la Gran Rebelión acontecida a mediados del siglo XVII; se dio también en Buenos Aires la reducción de los indios Malbalaes, originarios del Chaco Salteño, habitantes de la margen derecha del Río Bermejo. Estos indios Malbalaes fueron encomendados en 1711, en número de 500, por el Gobernador Estéban de Urizar y Arespacóchaga a su paisano el Maestre de Campo José de Arregui, quien los trasladó a su chacra, ubicada en el pago de la Matanza, provincia de Buenos Aires, actual localidad de Tapiales.<sup>42</sup> Es muy probable que en este fenómeno haya jugado algún rol la creciente despoblación de las reducciones indígenas. Estas últimas, antiguamente en manos de los Jesuitas, entraron en una profunda decadencia en gran medida debido al proceso de dilapidación de sus tierras y útiles de labranza, fruto de la codicia de sus sucesivos Administradores.<sup>43</sup> Finalmente, con la Expulsión de los Jesuitas, en 1767, la diáspora de indios alcanzó niveles insospechados.<sup>44</sup>

### **Corrientes migratorias forzadas.**

También hubo corrientes migratorias forzadas compuestas por cautivos, presidiarios y condenados. En 1793, el Comandante de Armas de Mendoza José Francisco Amigorena rescató de manos de los Indios Pehuenches el inverosímil número de 300 cautivos.<sup>45</sup> El yacimiento de Famatina, en La Rioja,<sup>46</sup> los minerales de oro de La Rinconada, en Jujuy,<sup>47</sup> y de La Carolina, en San Luis, fueron provistos con mano de obra forzada. Asimismo, el empedrado de Buenos Aires fué practicado con mano de obra carcelaria, proveniente de la Isla Martín García, la cual a su vez se componía en gran medida de cuatros y/o bandoleros apresados en las serranías Cordobesas. La lista de los reos aprehendidos en 1795 por los Jueces Pedáneos de Córdoba, registrada en la Tabla F-VI, lamentablemente no revela la casta de cada uno de los reos. De 67 presidiarios (sobre un total de 93) cuyo lugar de aprehensión fué registrado, el 38% (26 casos) fué aprehendido en el partido de Traslasierra; 5 en el Valle de las Palmas; 5 en la Punilla; 4 en Tulumba; 4 en San Luis; 3 en Piquillín; y 2 en Calamuchita. La mayor parte de los mismos fueron remitidos a los bajeles surtos en el puerto de Montevideo. El resto de los presidiarios cuyo destino no se detalla muy probablemente hayan ido a parar a las minas de Famatina y a la construcción del Acueducto para abastecer de agua a la ciudad de Córdoba. Inmediatamente de arribados a la cárcel real de Buenos Aires, varios de ellos caen enfermos, siendo necesario pasarlos al Real Hospital para su curación.<sup>48</sup>

### **El desequilibrio demográfico.**

Fué en el Obispado de Tucumán, donde el equilibrio demográfico entre las poblaciones indígena, mestiza y liberta, alcanzó en oportunidad de la fundación del Virreinato (1776) la desigualdad e inestabilidad más notoria.<sup>49</sup> En 1776, en Jujuy y La Rioja, la población indígena superaba ampliamente a la población liberta. En Jujuy, los Curatos de la Capital, Tumbaya, Humaguaca, Cochinoca, Rinconada, Yavi, Santa Catalina y Río Negro, sumaban --según las Tablas F-VII y F-VIII-- algo más de 8.000 indios y casi 1.500 mulatos, zambos y negros libres. Los Protectores de Naturales debieron extremar sus recursos para defender a las numerosas comunidades indígenas aún subsistentes.



Los indios de Pulares, Cachi y Paiogasta, en la Quebarada de Humahuaca, se vieron por ejemplo precisados a litigar con las Juntas de Temporalidades.<sup>50</sup> En La Rioja, mientras los Curatos de la Capital, Los Llanos, Guandacol, Arauco y Famatina sumaban en 1776, según las Tablas F-VII y F-VIII, algo más de 4.000 indios y casi 500 mulatos, zambos y negros libres; los Pueblos de Indios de Sanagasta, Machigasta, Aimogasta, Sauces, Pituil, Famatina, Malligasta, Anguinan, Sañogasta, Vichigasta y Olta, quienes tributaban al Rey en lienzo de algodón, sumaban según Torre Revello (1946) a fines del siglo XVIII apenas un centenar de indios.<sup>51</sup>

Pero en Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y Córdoba, la población liberta superaba ampliamente a la población indígena. En Salta, los Curatos de la Capital, el Rosario, Chicuana, Calchaquí, Perico y Río del Valle, alcanzaban en 1776, según las Tablas F-VII y F-VIII, algo más de 2.000 indios y casi el doble de mulatos, zambos y negros libres (4.000). En las Reducciones indígenas del Chaco Salteño, los Protectores de Naturales debieron también extremar sus recursos para defender a los indios pertenecientes a las pocas comunidades indígenas aún subsistentes.<sup>52</sup> Específicamente, el Protector de Naturales, a nombre de los indios Huracaraes, reclamó contra el despojo perpetrado por María Luisa Aguirre.<sup>53</sup> La Reducción de Balbuena, una de las cuatro Reducciones del Chaco Salteño, debió litigar con el poderoso hacendado Mateo de Saravia y Jáuregui.<sup>54</sup> En Santa Fé, las naciones Guaycurúes, Mocovíes, Abipones y Charrúas, que fueron reducidas en los Pueblos de Indios de Cayastá, San Javier y San Gerónimo, así como luchaban contra la dominación colonial, se embarcaron también en cruentas luchas fratricidas.<sup>55</sup> En Santiago del Estero, mientras los Curatos de la Capital, Salavina, Soconcho, Sumampa, Tuama, Guañagasta y Salado, sumaban en 1776, según las Tablas F-VII y F-VIII, algo más de 3.000 indios y casi el doble de mulatos, zambos y negros libres (5.500); la veintena de Pueblos de Indios, entre los cuales se contaban Tuama, Matará, Mopa, Soconcho y Guañagasta, sumaban cerca de 3.500 indios.<sup>56</sup> En Tucumán, los Curatos de la Capital, Chiquiligasta, Chorromoros y Marapas, totalizaban en 1776, según las Tablas F-VII y F-VIII, algo más de 3.500 indios y casi el triple de mulatos, zambos y negros libres (12.000). Los Protectores de Indios, como Salvador Alberdi, también debieron extremar sus recursos para defender del acoso de las autoridades seculares y de los mayordomos de estancias a los integrantes de las comunidades indígenas aún subsistentes.<sup>57</sup> Por ejemplo, el Alcalde de Hermandad Miguel Aráoz fué procesado por despojar a los comunidades indígenas de sus muchachos indios y mestizos.<sup>58</sup> Los pocos indios aún sobrevivientes en 1800, de la encomienda de Aligilán, pertenecientes en el siglo XVII al encomendero Martín de Savala,<sup>59</sup> fueron despojados de sus tierras por Juan Gregorio Rizo Patrón;<sup>60</sup> y el pueblo de indios de Choya, de sus aguas, por el Pbro. Pedro Ignacio de Arce.<sup>61</sup> Rizo Patrón alegaba que el Pueblo de Aligilán había vendido por escritura pública en 1720 parte de su territorio y luego había quedado yermo "...por haber fallecido todos los naturales".<sup>62</sup> En Catamarca, mientras en los curatos de la Capital, Belén, Ancaste y el Alto la población indígena reunía en 1776, según las Tablas F-VII y F-VIII, casi 3.000 indios, la población liberta alcanzaba a 7.000 mulatos, zambos y negros. A comienzos del siglo XVIII, sobre las tierras de indios de Singuil, se mantuvo un prolongado litigio del cual fué protagonista el terrateniente García Roldán.<sup>63</sup> En Mendoza, los naturales de Lagunas y Corocorto fueron ultrajados por el Teniente Corregidor Manuel Martínez Caballero.<sup>64</sup> Y en Córdoba, mientras los curatos de Tulumba, Punilla, Pocho, Río Segundo, Río Tercero, Río Cuarto, Río Seco, Soconcho e Ischilín, sumaban en 1776, según las Tablas F-VII y F-VIII, 3.000 indios y más del doble de mulatos, zambos y negros libres (8.000); los Pueblos de Indios de Toma, Cosquín, San Jacinto, San Antonio Nonsacate, Nono, Quilino, Soto y Pichanas vieron a fines de siglo sus poblaciones gradualmente diezmadas.<sup>65</sup> Para la formación de los padrones concernientes a los indios que residían en los ocho Pueblos de Indios de Córdoba, el Gobernador-Intendente Rafael de Sobremonte no se detuvo, a juicio de Ambrosio Funes, en escrúpulos de legitimidad racial, pues en ellos "...están incorporados blancos, mulatos, mestizos, zambos, y aún los negros mismos".<sup>66</sup> Los dueños de estancias no estaban

exentos de responsabilidad en la despoblación de los Pueblos indígenas de Córdoba. En 1810, por ejemplo, el Protector de Naturales, en representación del Pueblo de Quilino, se quejaba de los perjuicios causados por el hacendado Anselmo Moyano.<sup>67</sup> En el Pueblo de San José, en los Ranchos del Río Segundo, el Protector de Naturales reclamó en 1800 por las tierras de sus indios, los cuales eran procedentes de los Valles Calchaquies.<sup>68</sup>

Para el Litoral, lamentablemente carecemos de cifras combinadas acerca de la población indígena y liberta. En el Paraguay, al no ser posible retacear las Licencias para conchabarse en la marinería de los barcos "...cada día se va aumentando el número de embarcaciones, piraguas, garandumbas y otros buques que ocupan un considerable número de marineros".<sup>69</sup> De estos, muchos procedentes de los Partidos de Tapúa y Costa Abajo, se establecían en Buenos Aires y sus campañas, "...porque siendo excelentes nadadores y diestros en el manejo del caballo encuentran conchabo fácilmente con lucro y ventaja".<sup>70</sup> De los Pueblos de Misiones, se establecían en la Banda Oriental, "...en los trabajos de Santa Teresa, y demás puestos con que los ocupan, estos, muy lejos de regresarse a sus respectivos Pueblos, se quedan desertados".<sup>71</sup> Y en Paysandú, más precisamente en el Rincón de San Francisco, Manuel del Cerro Sáenz obtuvo en 1797 como realengas tierras de indios.<sup>72</sup> En cuanto al Pueblo de Santo Domingo Soriano, si bien se denominaba Pueblo de Indios, por haberse situado en él en sus comienzos un "...corto número de familias de esta naturaleza", en 1779 se redujo "...a una Asamblea o junta de varias naciones entre las que prevalece la Portuguesa, con motivo de las fértiles campañas de ganados".<sup>73</sup> También los Curas Párrocos se complicaron en la represión de los Pueblos de Indios aún subsistentes. En Santa Fé, el Protector de Naturales, en representación del Pueblo de Indios de Cayastá presentó en 1782 quejas contra el Cura de dicho Pueblo.<sup>74</sup> En Corrientes, el Protector de Naturales Juan Gregorio Zamudio, en representación del Pueblo de Itatí, pidió en 1780 la remoción del Cura Miguel Pereira, aparentemente el mismo que dos años después fuera procesado por emparedar a cuarenta (40) mujeres del Pueblo de Santa Lucía.<sup>75</sup> Y en Buenos Aires, en el Pueblo de Indios del Baradero, sus habitantes también litigaron contra el despojo de sus tierras.<sup>76</sup>

### **Proceso de decadencia de las reducciones indígenas.**

Con la expulsión de los Jesuitas, el proceso de decadencia de las reducciones indígenas se acentuó. Esta situación hizo más necesaria que nunca la fundación de fuertes y fortines. Según el Dr. Mariano Gordaliza,<sup>77</sup> quien luego fuera Gobernador de Jujuy --en un interesantísimo como ignorado Memorial, redactado en 1804-- las Reducciones indígenas

"...se fundaban a espaldas de los Fuertes, y para entrar a ellas se pasaba por el Fuerte. Así estuvo la [Reducción] de Miraflores en donde hasta el día perseveran los simientos del quadro del Fuerte en frente de la puerta del Colegio. Con los soldados a la puerta los indios son obedientes a quanto se les mande, pero sin ellos que podrá hacer un solo Religioso, ni un Administrador en un despoblado de Christianos y circundado de puros indios? Claro está que nada más que contemplarlos por no exponer su vida".<sup>78</sup>

La frecuente mudanza que se experimentaba entre los Misioneros, trasladándolos de unos Pueblos a otros, era objeto de reparos por parte de José de Santa Cruz Villavicencio. Estas mudanzas ofrecían no pocos inconvenientes, siendo uno de ellos, a juicio del Capellán Gregorio Francisco, Obispo de La Paz, en carta dirigida en 1785 al Gobernador-Intendente Sebastián de Segurola "...el de que no es regular que con este método se puedan instruir los Religiosos en el idioma propio de cada Pueblo a que se agrega la extrañeza que causará a los Neófitos el berse gobernados por Doctrineros de diversos genios".<sup>79</sup>

La frecuente mudanza de los Misioneros y el desconocimiento de las lenguas indígenas por parte de los nuevos Administradores hizo aún más crítica la situación de abandono en que yacían las antiguas reducciones.<sup>80</sup> Cada Reducción se componía

"...de distintas Naciones, y cada Nación tiene distintos idiomas, y estos tan guturales, que no se pueden reducir a alfabeto para escribirlos y aprehenderlos. Si entre las parcialidades de una Reducción no se entienden como entenderían al Administrador ni este como les entenderá? Mas ¿Cómo los Padres podrán predicar a quien no les entiende, y cómo entenderán los Indios a quien no les predica en su Idioma?"<sup>81</sup>

La necesidad de intérpretes se hizo imprescindible. Pero si bien en los pueblos de indios, donde regía una homogeneidad lingüística, un solo administrador o religioso que dominara el dialecto podía hacerse cargo de la situación con relativo éxito, en las reducciones indígenas, donde la heterogeneidad lingüística era la norma, se requerían multitud de intérpretes. Se preguntaba entonces Gordaliza

"...¿cual era la causa por qué se han reducido con tanta facilidad por un solo Religioso Fr. Francisco del Pilar once Pueblos de Indios Chiriguano en la Frontera de Santa Cruz a Tarija? ¿Cual es la causa por que me dice el Padre Prefecto de Misiones Fr. Estéban Primo Ayala, que mas quiere lidiar con 19 Pueblos nuevos de Chiriguano, que con solas las dos Reducciones que tiene a su cargo en Nuestra Jurisdicción cuales son los Matacos en el Río Seco, y la de Bejoses en Orán? No es otra cosa que los Chiriguano como hablan un idioma sólo, que lo sabe el Padre Prefecto, lo entienden a él, y el los entiende. Pero como los del Chaco, tienen diversidad de idiomas cada nación, no pueden amonestarse sino por Intérpretes, y estos tan perversos que explican lo que quieren".<sup>82</sup>

La decadencia de las reducciones y las rivalidades étnicas generaron en algunos casos resistencias generalizadas seguidas de crueles matanzas que afectaron la colonización agrícola-ganadera. En el Paraguay, en 1796, el Comandante Luis Bernardo Ramírez y el Sargento Mayor José Miguel Ibáñez, incurrieron en la muerte de 75 indios Mbayás que se hallaban prisioneros.<sup>83</sup> Con motivo de esta matanza, el Alcalde de Asunción José del Casal y Sanabria fué detenido y remitido con escolta a Montevideo, y en mayo de 1799, con la defensa del Dr. Mariano Zavaleta y dictámen del Lic. Tomás Antonio Valle, fué absuelto de culpa y cargo.<sup>84</sup> Según un testimonio de época, dichos indios

"...fueron atados por Don Juan Manuel Gamarra [el héroe de Paraguarí y Tacuarí, y cuñado de José del Casal y Sanabria] y seguidamente vueltos a atar por la cintura con lazos, cuyos extremos se tiraron por caballos sincheros, y en esta forma le dieron muerte cruel con palos, macanas, y otras armas".<sup>85</sup>

Asimismo, este tipo de resistencia se dió en la Banda Oriental. En su estrategia para derrotar a los indios charrúas, escondidos en sus impenetrables montes, el Comandante de Frontera Jorge Pacheco,<sup>86</sup> sostenía en 1803 que "...ojos y no armas consiguen aquí el triunfo".<sup>87</sup> El método consistía en asaltar

"...los enemigos después de bien espíados, quienes buscarán su acostumbrado asilo, y entonces veinte y cinco hombres correrán seis u ocho quadras monte arriba, otras tantas bajarán igual distancia monte abajo, ambas partidas se introducirán por sus frentes dentro, y luego que se hallen así cortados atrás y adelante se practicará el registro por el todo de la Expedición, y habiendo destinado antes en uno y otro costado del Bosque dos pequeños Destacamentos que giren de continuo en observación de si algunos pretenden salir serán apresados con este sencillo método".<sup>88</sup>

En conclusión, podemos afirmar, sobre la base de los numerosas tablas aquí producidos, que si bien la inestabilidad social colonial, manifestada en la inestabilidad de la encomienda, alcanzó uno de los niveles más altos de la América Latina colonial, la estabilidad social --expresada en la perpetuidad encomendil-- vigente en ciertas regiones como Jujuy y el Paraguay, asfixiaba a las fuerzas vitales de la sociedad colonial. En efecto, los Cabildos debían representar a las fuerzas vivas de la sociedad, pero por efecto de mecanismos discriminatorios y anti-democráticos sólo participaban los vecinos feudatarios, quedando la mayor parte de la población activa discriminada de la actividad capitular. Los obstáculos encontrados en cada uno de los Cabildos contribuyó a frenar la movilidad social existente así como a obstaculizar la transición hacia formas de sociedad más próximas al tipo de una sociedad burguesa, alimentando por consiguiente las condiciones del proceso revolucionario que se dió a comienzos del siglo XIX.

## NOTAS

<sup>1</sup> M. P. Félix Durán a Tomás Guido, 4-II-1820, citada por Paz Soldán, 1868-74, I, 27; y por Mitre, 1887, II, cap.XXV, 389.

<sup>2</sup> Spalding, 1974; Murra, 1987; Saignes, 1987; Stern, 1987; y Zulawski, 1987.

<sup>3</sup> Assadourian, 1979, 284.

<sup>4</sup> Schwartz, 1979, 19.

<sup>5</sup> Golte, 1980, 206.

<sup>6</sup> "...las Encomiendas en esta Provincia se dividen en dos clases, según el principio que trahen desde los tiempos de la Conquista: unas que forman Pueblos, viviendo en Comunidad, con tierras propias al cargo de un Ecónomo que dirige sus temporalidades que se llaman de indios mitayos o mitarios, y las otras de Indios que sin formar Población, ni tener tierras propias pasan de unos a otros feudatarios, morando siempre en las Estancias, Chacras y Casas de estos, intitulándose originarios; los primeros pagan el tributo con un vimestre de servicio personal al año, a saber, los varones desde la edad de 18 años hasta los 50, sin más retribución de parte del Encomendero, que el escaso sustento con que los sufragan en los dos meses; los segundos son verdaderamente esclavos, porque no tienen libertad, con sola la diferencia de no poderlos vender, ni dejar por herencia, lo cual hace aún de peor condición la constitución de los indios originarios que sirven toda la vida al Encomendero, de quien reciben un moderado alimento, y un vestuario muchas veces escaso, no siendo menos la asistencia de que carecen en lo Espiritual, según me hallo informado" (Joaquín Alós al Virrey Nicolás Arredondo, Asunción 19 de Enero de 1793 [AGN, División Colonia, Interior, Leg.30, Exp.28, fs.36v.-37]).

<sup>7</sup> ver Pastore, 1990, y 1991, 6.

<sup>8</sup> suerte de pasaporte interno requerido por los Alcaldes de Hermandad y los Jueces de Paz para autorizar a los habitantes la circulación de pago en pago.

<sup>9</sup> Halperín Donghi, 1963, 105; y Saguier, 1986. Larson (1979) cosechó el crédito de haber investigado la diferenciación de la estructura social de las comunidades indígenas del Alto Perú; Endrek (1966, 1967) tuvo el mérito de haber investigado en fuentes censales el mestizaje producido en Córdoba y Tucumán; Caillet-Bois (1966) y Robinson (1974) la composición étnica de las nuevas poblaciones fundadas durante las Reformas Borbónicas; Cruz y Blanco (1990) la despoblación

indígena del Tucumán; Punta (1990) la desaparición de la encomienda en Córdoba; Susnik (1965, 1990-91, 1993) y Cooney (1990) la deserción de los peones de las barcazas provenientes de Asunción en los siglos XVII y XVIII; Carbonell (1992) la fuga de indios de los Pueblos de Misiones; Salvatore (1991, 1992) el reclutamiento militar y la proletarianización de la campaña Bonaerense de comienzos del siglo XIX; y Halperín Donghi (1963) el origen geográfico de la mano de obra rural de Tandil en el siglo XIX.

<sup>10</sup> titulares de los repartimientos de indios mitayos.

<sup>11</sup> Saguier, 1984, 54, Tabla 5.

<sup>12</sup> Los juicios de residencia a los gobernadores del Paraguay por traficar con mercancías durante el ejercicio de su mandato era de vieja data (Garavaglia, 1983, 461, nota 136).

<sup>13</sup> Garavaglia, 1983, 314-317.

<sup>14</sup> antiguamente dado en encomienda a Cristóbal Domínguez.

<sup>15</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.28, Exp.1.

<sup>16</sup> ver Sánchez Albornóz, 1978; y Anexo A-I.

<sup>17</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.30, Exp.890, sin foliar.

<sup>18</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.30, Exp.890. Ver también, Presta, 1989, 50.

<sup>19</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.30, Exp.890.

<sup>20</sup> permítaseme citar mi trabajo, Saguier (1989).

<sup>21</sup> Tord Nicolini y Lazo, 1981, 207.

<sup>22</sup> contribución anual de un peso de ocho reales servida a los curas por los indios casados.

<sup>23</sup> proveniente de cuatro pedazos de tierras, que las sembraban los indios con este destino para su Cacique. En el partido de Larecaja, Provincia de La Paz, dichas cahacras se denominaban la chacra del Molino; la de Lambramani; la de Mansanani; y la de Achabaya (AGN, Justicia, Leg.28, Exp.845).

<sup>24</sup> AGN, Justicia, Leg.28, Exp.845, citado en Anexo A-I.

En la Doctrina de Songo, Partido de Larecaxa, "...las clases de Originarios, Forasteros Legítimos y forasteros ylegítimos que satisfacían los primeros a doce pesos un real y un quartillo reales, y los terceros a cinco pesos dos y tres quartillos reales por año, y su mitad por tercio las redujo unicamente a la de Originarios a razón de siete pesos al año, y su mitad por tercio" (AGN, Justicia, Leg.28, Exp.845, citado en Anexo A-I).

<sup>25</sup> Klein, 1973, citado en Sánchez Albornoz, 1978, 194, nota 12.

<sup>26</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.30, Exp.890.

<sup>27</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.30, Exp.890.

<sup>28</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.30, Exp.890.

<sup>29</sup> Sánchez Albornoz, 1978, 194, nota 12.

<sup>30</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.30, Exp.890.

<sup>31</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.30, Exp.890.

<sup>32</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.30, Exp.890.

<sup>33</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.30, Exp.890.

<sup>34</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.30, Exp.890.

<sup>35</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.30, Exp.890.

<sup>36</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.30, Exp.890.

<sup>37</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.30, Exp.890.

<sup>38</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.30, Exp.890.

<sup>39</sup> Susnik, 1965, 135.

<sup>40</sup> Barrios Pintos, 1973, 53-55.

<sup>41</sup> Robinson, 1974, 19.

<sup>42</sup> Lozano, 1731, 380 y 385; Charlevoix, 1910-1916, IV, 254-295; Gandía, 1929, 175; y Furlong, 1941, 44-45. Diecisiete años más tarde, en 1728, su sobrino carnal, Juan de Armaza y Arregui, produce una Información de Testigos con la cual abonar la solicitud de Confirmación Real de la encomienda, quienes aseveran el buen estado y tratamiento recibido por dichos indios, asistidos por los Franciscanos Fr. Pedro Quintana y Fr. Francisco de Alcàntara y por el Capellàn Fr. Juan de Arregui. Fueron testigos el Mayordomo Bernardino Rodríguez, el Procurador General Nicolàs de Echeverría y Lerchundi, el General Josè Ruiz de Arellano, y los Regidores Matías Solana y Luis Navarro (AGN, División Colonia, Guerra y Marina, Leg.1, Exp.3). Otros quince años después, en 1744, son empadronados en la misma Chacra, ahora perteneciente a Juan Antonio de Arozarena y Armaza, sobrino carnal de Juan de Armaza y Arregui, designado en 1767 Alcalde de Hermandad de los pagos de Magdalena y Matanza. veintidos (22) varones y diecinueve (19) hembras mayores de 18 años, que portaban los apellidos Arregui, Almanza y Gutiérrez, y 38 menores entre varones y hembras, totalizando 79 almas (Documentos para la Historia Argentina, 1955, X, 258). Lamentablemente, en los padrones posteriores practicados en el lugar no han quedado rastros de esta población.

<sup>43</sup> Acevedo, 1965, 81.

<sup>44</sup> Poenitz, 1984a, 17; 1984b, 161-162; y 1994.

- <sup>45</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Interior, Leg.34, Exp.17.
- <sup>46</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.217, Exp.9, fs.29-45.
- <sup>47</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.82, Exp.16; y Leg.175, Exp.8, fs.46-47v., y 81-84; e Intendencia de Salta-Santiago del Estero, 1734-1810, Sala IX, 5-7-7.
- <sup>48</sup> AGN, División Colonia, Justicia-Real Cárcel, 1761-1807 [Sala IX, 26-7-12].
- <sup>49</sup> Lorandi, 1992, 158-159.
- <sup>50</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.254, Exp.5.
- <sup>51</sup> Torre Revello, 1946, 49; y AGN, División Colonia, Interior, Leg.22, Exp.21.
- <sup>52</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.213, Exp.2.
- <sup>53</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales Administrativos, Leg.3, Exp.89. Hija del Maestre de Campo Francisco de Aguirre y Chavarría y de Bárbara Felipa Martínez de Iriarte y Ramírez de Baquedano, y mujer del Fiel Ejecutor Miguel de Indaburu e Iturralde (Zenarruza, 1991, 467). Habitaban los Pueblos de Yuracaraes en la Cordillera de los Nuevos Yungas, inmediata al Pueblo de Totorá (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.28, Exp.830).
- <sup>54</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.212, Exp.6, fs.80-91v.
- <sup>55</sup> ver Saeger, 1985.
- <sup>56</sup> Figueroa, 1924; y Farberman, 1992.
- <sup>57</sup> contra el Alcalde de Segundo Voto de Tucumán Pedro Antonio de Zavalía, por mal trato a los Indios (AGN, Tribunales, Leg.62, Exp.20; Leg.159, Exp.53; y Leg.160, Exp.9).
- <sup>58</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.99, Exp.11, fs.11-12.
- <sup>59</sup> Asimismo encomendero de Mopa, Santiago del Estero.
- <sup>60</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.189, Exp.4, fs.92-94; y 181-189. Juan Gregorio era marido de María Inès de Agüero y cuñado del Maestro Casimiro de Agüero.
- <sup>61</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.93, Exp.5, fs.54-58, 79-81v., y 91-93v.
- <sup>62</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.189, Exp.4, fs.182.
- <sup>63</sup> Bustos Argañaráz, 1987, 175-202.
- <sup>64</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.15, Exp.5.
- <sup>65</sup> ver Beltramini, 1978.
- <sup>66</sup> AGN, División Colonia, Tribunales Administrativos, Leg.3, Exp.94, fs.106v. Una de las indias de

estos Pueblos fué la madre del poeta revolucionario y prócer de la independencia Cubana José Antonio Miralla.

<sup>67</sup> AGN, División Colonia, Tribunales Administrativos, Leg.33, Exp.1195.

<sup>68</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales Administrativos, Leg.3, Exp.94, citado por Ferreyra Videla, 1940, 1943 y 1946.

<sup>69</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.230, Exp.2, fs.14v.

<sup>70</sup> *Ibídem*.

<sup>71</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.12, Exp.278.

<sup>72</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.142, Exp.34.

<sup>73</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.8, Exp.136.

<sup>74</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.12, Exp.277. Para la historia de Cayastá, ver Bruno, 1993, 214-215.

<sup>75</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.8, Exp.4; y Tribunales, Leg.225, Exp.22, fs.1-2.

<sup>76</sup> AGN, División Colonia, Criminales, Leg.46, Exp.14.

<sup>77</sup> hijo de Lorenzo Gordaliza y de Isabel de Hoyos, sobrino de Jose de Uriburu, y cuñado del Encomendero de los Molinos Félix Ventura de Isasmendi (Cornejo, 1937, 579 y 619; y Calvo, II, 32-33).

<sup>78</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.127, Exp.6, fs.63.

<sup>79</sup> AGN, División Colonia, Interior, Leg.28, Exp.3 (sin foliar).

<sup>80</sup> ver Pinto Rodríguez, 1993, 679-680.

<sup>81</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.127, Exp.6, fs.60v.

<sup>82</sup> *Idem*.

<sup>83</sup> Ferrer de Arréllaga, 1985, 109; Susnik, 1990-91; y Santamaría, 1992, 144-145.

<sup>84</sup> AGN, División Colonia, Criminales, Leg.42, Exp.10; y Tribunales, Leg.121, Exp.15.

<sup>85</sup> AGN, Interior, Leg.40, Exp.3, fs.101.

<sup>86</sup> hijo de Francisco Pacheco y Cevallos y de Joaquina Camacho Narvona, y por consiguiente nieto del fundador de la estancia de la Hermandad de la Caridad (Morquio Blanco, 1990, 134); marido de Dionisia Obes; y consuegro de Benito Chain.

<sup>87</sup> AGN, División Colonia, Comerciales, Leg.20, Exp.17, fs.64v.



<sup>88</sup> AGN, División Colonia, Comerciales, Leg.20, Exp.17, fs.64v.

## TOMO XI

### CAPITULO 7

# **El mercado de mano de obra esclava y el endeudamiento contraído por los libertos para su manumisión.**

(parte del mismo fue publicado en 1989 con otro título en la Revista Paraguaya de Sociología [Asunción del Paraguay: Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos], 26 (74), pp.45-54);

En el Río de la Plata, se suscitó con respecto a la movilidad social de los esclavos un debate aún inconcluso. Las investigaciones de Besio Moreno (1939), fundadas en censos y padrones, sostuvieron que el desarrollo de la población de color libre fué función de la elevada incidencia de la manumisión en esa región. Más luego, Johnson (1974) probó que el fácil acceso a los oficios artesanales para los miembros de las castas, especialmente para los inmigrantes negros del Brasil, permitió a estos últimos un potencial para la seguridad económica que les hubiera sido negada dentro de la forma corporativa tradicional. Posteriormente, Johnson (1978) argumentó que no fué la cantidad de manumisiones, sino el sexo de los esclavos liberados lo que explicaba ese crecimiento, para concluir que este último crecimiento en realidad obedecía a la creciente capacidad de los esclavos para percibir mayores ingresos.<sup>1</sup> En esta misma línea de pensamiento, Rosal (1988) probó que el frecuente acceso de los negros libres a la propiedad inmueble urbana, permitió a estos últimos un potencial para la movilidad social que les hubiera sido negada dentro de la estructura estamental tradicional. No obstante estas evidencias, McCaa, Schwartz y Grubessich (1979), y McCaa (1984) concluyen que la expansión capitalista en América Latina en lugar de acelerar la erosión del régimen estamental lo reforzó. Sin embargo, para el Brasil, Viotti da Costa (1966) probó que las relaciones entre señores y esclavos podían variar conforme al nivel de desarrollo de las diversas áreas: se humanizaban en momentos de crisis, cuando la economía comercial retrocedía a los niveles de subsistencia; y se agravaban cuando el carácter capitalista de la empresa agraria se acentuaba y las fazendas se especializaban.<sup>2</sup>

En este trabajo nos hemos limitado a indagar el mercado de mano de obra esclava y el rol jugado por el estamento esclavo en la actividad laboral. En ese sentido nos preguntamos si la vigencia de los estamentos se hallaba o no relacionada con los obstáculos para la formación de una clase social subordinada (peonaje urbano). El pasaje de estamento (esclavo) a clase social (peón o proletario) encontraba en el estado colonial límites difíciles de remontar, que comenzaron a superarse recién durante la crisis revolucionaria de comienzos del siglo pasado. Sin embargo, a diferencia de Bahía

(Brasil) y la costa del Perú, donde regía una esclavitud de plantación, en las grandes ciudades como Lima, Buenos Aires, Montevideo, Popayán y Asunción, regía en la producción artesanal y en el servicio doméstico, una esclavitud estipendiaria.<sup>3</sup> Por esta última entendemos aquella donde los amos obligaban a sus esclavos a contribuir con un tributo individual llamado jornal. Este era un gravámen pagado individualmente en moneda a un amo en particular. El tributo en moneda obligaba al esclavo estipendiario a alquilar o conchabar su fuerza de trabajo fuera del dominio del amo, o bien producir mercancías (bienes o servicios) para la venta en el mercado colonial. El valor de cada esclavo se estimaba según el precio de cambio que alcanzaba el producto-tributo en el mercado. De esta forma, el tributo en dinero obligaba a los esclavos a incorporarse al mercado colonial y significaba que los dueños de obrajes, panaderías, ataonas, hornos de ladrillo, etc. contaran con más mano de obra que si el tributo no se cobrara. La incorporación forzada al mercado de trabajo colonial no lo privaba al esclavo de cierta fuerza de negociación propia con que extraer concesiones y limitar el control que sus amos ejercían sobre ellos, inexistentes en las economías de plantación, tales como la libertad de trabajar y pernoctar fuera de la casa de su amo, el derecho de reclamar la venta de sí mismo (papel de venta) cada vez que no se hallaba con su actual amo y encontraba otro amo alternativo que le ofrecía mejores condiciones de vida y trabajo, la facultad de acumular un peculio propio, y el derecho a endeudarse y rescatar su propia libertad y la de sus parientes próximos.<sup>4</sup> La suerte de un esclavo difería también según que fuere ladino o bozal, negro o mulato, joven o viejo, varón o hembra, con oficio o sin oficio, o de origen urbano o rural. También difería según en qué momento histórico se había concretado su incorporación a la sociedad porteña.

Para el análisis diacrónico que aquí nos propusimos hemos procesado la información de diversos padrones de época, y de centenares de cédulas catastrales, aún inéditas, reconstruidas por mí a partir de miles de escrituras notariales, todas ellas depositadas en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires. También nos hemos servido de la información genealógica que nos proveen diversos tratados,<sup>5</sup> así como de los testamentos protocolizados en Buenos Aires.<sup>6</sup>

### **El mercado de mano de obra esclava (MMOE).**

La inversión de comerciantes, hacendados y artesanos en mano de obra esclava revelaba la movilidad social existente. Durante el siglo XVIII el mercado de mano de obra esclava (MMOE) del litoral del Río de la Plata se mantuvo en una tónica por demás contradictoria. Mientras en Corrientes, desde 1771 hasta 1809 se registraron en total sólo 78 compra-ventas de esclavos,<sup>7</sup> en Buenos Aires, en igual período se registraron 8.466 compra-ventas y 864 manumisiones, y desde 1701 hasta la misma Revolución de 1810 se registraron un total de 16.318 compra-ventas y 1.932 manumisiones. El Gráfico F-I, fundado en la Tabla G-I, ilustra las fluctuaciones del MMOE. Durante la primera confiscación del Real Asiento de Inglaterra (1718-22) el MMOE creció de un promedio de 15 operaciones anuales por valor de \$4.000 en el bienio 1716-17 a un promedio de 45 operaciones anuales por valor de \$14.000 en el quinquenio 1719-23. Durante la segunda confiscación (1727-30), el MMOE creció casi un 100%, de un promedio de 33 operaciones anuales por valor de \$10.000, en el trienio 1724-26, a un promedio de 68 operaciones anuales por valor de \$18.000 en el cuatrienio 1727-30. Asimismo, mientras que en la década previa a la caída de Portobello (1730-40) se registraron un promedio de 66 operaciones anuales por valor de \$15.000, en la década posterior (1741-49), se registraron un promedio de 213 operaciones anuales por valor de \$49.000. Con la Guerra de los Siete Años (1756-63) el MMOE creció de un total de 111 operaciones por valor de \$25.000 en 1756 a un total de 165 operaciones por valor de \$32.000 en 1758. El MMOE creció un 34% en cantidad de esclavos comercializados y un 14% en valor. Esta última disparidad en porcentajes era debida a la inflación de precios experimentada por la mano de obra esclava, que alcanzó al 23% (Tabla G-I). No siempre la oferta de mano de obra esclava procedía de

ultramar. En múltiples ocasiones los esclavos procedían del interior del espacio de influencia porteño. La Tabla G-II nos revela para 1776 el número de mulatos, zambos y negros esclavos, correspondientes al Obispado del Tucumán, discriminados por sexo y estado civil, muchos de los cuales provenían de Buenos Aires, y otros que procedentes de Lima o Santiago de Chile, terminaron su carrera de esclavos en Buenos Aires. Cuando en 1776 se remataron en Santiago de Chile 609 esclavos de la Compañía de Jesús, 127 de los mismos se enviaron a Buenos Aires por ser su precio superior en ésta última plaza.<sup>8</sup> En la década inmediata a la inauguración de las Ordenanzas de Libre Cambio (1779-89) los mercados de bienes de renta experimentaron un movimiento alcista, el MMOE creció tres (3) puntos logrando un promedio del 7% (Tabla G-I). Como consecuencia de las Guerras de la Revolución Francesa, los mercados de bienes de renta de la periferia colonial española, experimentan un impacto aún mayor que en la guerra precedente debido al éxodo de comerciantes españoles de Cádiz y su consiguiente reflejo en la actividad notarial porteña. El período de paz que siguió al Tratado de Amiens y que concluyó la segunda Coalición contra Francia (1802-03) se reflejó igualmente en los mercados de bienes de renta. El precio promedio del esclavo cayó un 2% en 1802 y un 9% en 1803 (Tabla G-I). Con la reiniciación de la guerra entre Inglaterra y España en 1804, los mercados de bienes de renta vuelven a recobrar la espiral expansiva. Con relación al MMOE, este experimentó un alza del 13% (Tabla G-I). Una vez reconquistada Buenos Aires de manos inglesas y sellada la paz con Inglaterra a resultas de la invasión de España por los Franceses, el mercado de bienes de renta experimentó las consecuencias del arribo en aluvión de mercadería inglesa. El MMOE creció de \$59.176 en 1807 a \$80.800 en 1808, o el 27% (Tabla G-I). Por último, para explicar con mayor precisión las alzas y bajas del volumen y valor de las transacciones en los mercados de bienes de inversión o renta, sería necesario elaborar nuevas tasas. En nuestro caso particular, la tasa del mercado de mano de obra esclava debería medir la relación entre las operaciones de compra-venta de esclavos y las importaciones de esclavos.

### **La rotación sufrida por cada esclavo en forma individual.**

Amén del estudio del mercado de mano de obra esclava es preciso también estudiar la rotación sufrida por cada esclavo en forma individual. A sólo 1.564 esclavos, varones y mujeres, que transcurrieron su vida útil en el Buenos Aires del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, se les pudo reconstruir parcialmente su historia dominial. Estos 1.564 esclavos correspondían a 1.217 escrituras, sobre un total de 15.246 compraventas protocolizadas entre 1736 y 1820. Sobre la base de esta reconstrucción parcial, unos 780 esclavos, correspondientes a 520 escrituras, casi la mitad de los 1.564 esclavos, sufrieron cuatro (4) amos o tres transacciones, la primera de ellas en papel simple sin protocolizar; casi medio millar de esclavos, más precisamente 507 esclavos, o la tercera parte del total de la muestra, sufrieron tres (3) amos o dos transacciones; 170 esclavos, o el 10% del total de la muestra, sufrieron cinco (5) amos o cuatro transacciones; y 40 esclavos, experimentaron entre seis (6) y siete (7) amos o cinco o seis transacciones.<sup>9</sup> Aparentemente, la rotación de los amos era más común entre los pulperos, pues "...haber sido esclavo de un pulpero y después de otro no media ninguna incompatibilidad; pues por lo común los esclavos (y más si son de la buena condición de Sebastián) mensualmente pasan de amo en amo".<sup>10</sup>

### **La sobrevalorización de la mano de obra esclava.**

La sobrevalorización de la mano de obra esclava, producto de la especulación, es factible también de ser mensurada mediante la información notarial o fiscal (alcabala), sólo cuando tomamos los casos de los esclavos sanos y no calificados. El cálculo de la sobrevalorización y desvalorización de la mano de obra esclava en los esclavos calificados por un oficio artesanal o descalificados por vicios o tachas, se complica por cuanto para lograrlo sería menester descontar el costo del aprendizaje y agregar

la depreciación provocada por los vicios y las tachas. Por otro lado, la sobrevalorización y desvalorización del esclavo no es uniforme en todas las edades, sino que, por el contrario, existió un proceso de diferenciación biológica (sexo y edad) del esclavo, que sugiere la existencia de rentas diferenciales por razones de sexo, edad, y ladinización. Es así que tomando como período base las últimas décadas del siglo XVII y como dimensión a mensurar los varones negros sanos y sin calificar de entre 18 y 22 años de edad su precio llegó a alcanzar en Buenos Aires una media de 700 pesos plata y en Lima un promedio de 1000 pesos plata. Pero en las décadas previas a las Reformas Borbónicas (1760-78), el precio medio cayó en más de un 70% por cuanto tocó un piso del orden de los 200 pesos plata. Sólo con posterioridad a las Reformas Borbónicas (1782-90) el mercado de mano de obra esclava comenzó a repuntar. Experimentando en la década del 80 un alza que llegó al 50% del precio alcanzado en las décadas precedentes. A juzgar por la información recogida en los protocolos notariales de Buenos Aires un negro esclavo de las características mencionadas se cotizó en una media de 300 pesos plata.

### **Las restricciones extra-económicas.**

Pero el mercado de mano de obra esclava operaba, sobre la base de restricciones extra-económicas que impedían la libre concurrencia o competencia de los capitales, inhibiendo el desarrollo del mercado interno. Los esclavos que padecieron una persistencia en su dominio que los alcanzara toda su vida fueron muy escasos. Una prueba de la persistencia en el dominio estaba dada por la costumbre del derecho de abolengo, manifestado a través de las prácticas del tanteo,<sup>11</sup> y el retracto.<sup>12</sup> En 1732 Pedro Bautista Casajús, vecino de Corrientes, vendió al Lic. Juan Manuel de Arce el mulato Domingo de 20 años, que "...hube de los bienes de Juan de Toledo en virtud del derecho de preferencia en el tanto que me hizo en su testamento".<sup>13</sup> La gran necesidad que tenían los arrendatarios y maestros artesanos de contratar fuerza de trabajo en el mercado de mano de obra esclava, por la escasez existente de mano de obra libre implicaba, necesariamente, el encarecimiento del alquiler del esclavo.

Con respecto a la naturaleza específica de la esclavitud, una circunstancia era haber llegado a Buenos Aires antes de 1778 vía la Colonia del Sacramento, y otra muy distinta haber arribado como consecuencia del permiso para comerciar con colonias extranjeras (1791). A juzgar por las palabras del Dr. Francisco Pombo de Otero en los autos judiciales celebrados en 1778, entre Fermín Peña y el Pbro. Juan Antonio Guzmán, sobre el valor de una capellanía que mandó fundar su tío Juan Antonio Peña, a los esclavos estipendiarios "...les permiten los amos trabajar donde quieran, con la precisión de darles un tanto cada semana, reservando lo demás para sí".<sup>14</sup> En estos casos lo que sucedía es que "...los esclavos estipendiarios, después de dar al amo lo que corresponde, depositen en ellos lo suyo, o para libertarse de esclavitud o para otros infinitos fines".<sup>15</sup>

### **La esclavitud estipendiaria.**

La esclavitud estipendiaria venía a equivaler a un trabajo a destajo o por piezas, es decir a una suerte de etapa previa a la libertad condicionada. Cuando Juan Francisco Castro y Careaga se vió precisado en 1793 a litigar las condiciones reclamadas por el pardo zapatero Ceferino José Glacé, exclamaba a través de su abogado el Dr. José Darregueira,<sup>16</sup>

"...le concedí que viviese fuera de mi casa y que cuanto adquiriese con su trabajo pudiese hacerlo suyo, siempre que su proceder fuese arreglado, con sola la pensión de que había de venir dos veces cada día a servirme y hacerme dos pares de zapatos importe de \$4 todos los meses".<sup>17</sup>

Similar permiso al que Careaga concediera a Ceferino le había otorgado precedentemente su anterior amo: el Virrey Nicolás Arredondo

"...deducido el jornal que le entregaba a S.E., hacía suyo lo restante para su manutención y otros objetos que a él pudieran acomodarle, y en iguales términos logran idénticos permisos todos los criados de esta capital, que tienen oficio, y viven fuera de la casa de su amo".<sup>18</sup>

En otro caso suscitado por el esclavo zapatero Julián contra el Administrador de Correos de Asunción del Paraguay Don Nicolás de Igareda Barreda, este último manifestaba en 1802 que "...Julián me daba siete pesos al mes de jornal [es decir el equivalente a tres pares de zapatos] con calidad de que lo demás que ganase de su trabajo lo aplicase a su [propio] vestuario y alimento".<sup>19</sup> En el mismo escrito Igareda reconocía que él contaba con que siendo el oficio de su esclavo Julián el de zapatero

"...podía ganar diez y ocho pesos al mes cuando menos, y así le quedaban a su veneficio once pesos, y que por cierto es de su propia confesión que le quedan cuatro y medio pesos libres por mes ganando tan sólo once y medio pesos en su trabajo".<sup>20</sup>

El objetivo que Igareda y gran parte de los amos perseguían con esta política de incentivo hacia sus esclavos era, según lo manifestaba su letrado patrocinante el Dr. Juan José Castelli, la de que "...se estimulase al esclavo al trabajo, con el aliciente de su propio provecho, y que jamás se distrajese ni decayese en flojedad y vicios que trae la holgura".<sup>21</sup> De haberle Igareda por el contrario exigido a su esclavo Julián el cumplimiento de un horario y haberle asegurado alimentación y vestuario, como el jornal de siete pesos mensuales con que tributaba a su amo podía hacerse con sólo semana y media o dos de trabajo, "...bien fácil es comprender que el restante tiempo del mes lo malgastaría".<sup>22</sup> Pero si para evitar este desaprovechamiento el amo sugetaba a su esclavo "...a dar el todo de lo que trabajase mensualmente", Igareda razonaba con acierto que el peligro residía en que su esclavo se corrompiese, "...viéndose sin interés suyo", aunque él le diese todo lo necesario en materia de vestuario y alimentación. Del modo acordado, que consistía en no garantizar dichas prestaciones y en no exigir una prestación horaria o por tiempo, su esclavo Julián reportaba "...el beneficio de vestirse a su gusto y alimentarse a su modo, restándole algún líquido con cuyo interés se anima a el trabajo".<sup>23</sup> Pero cuando el esclavo dejaba de contribuir con el jornal establecido, era común la denuncia policial seguida de su encarcelamiento. Cuando en 1784, Nicolasa Olivares vendió su esclavo Manuel, un oficial carpintero, a Raymundo Mariño, este se hallaba "...actualmente en prisión donde el comprador lo recibió, cuya prisión era debida a la licenciosidad en la que vivía, no dando ni pagándome los jornales diarios".<sup>24</sup> La tragedia para un amo era que la prisión en lugar de mejorar su comportamiento lo empeoraba. Ese fue el caso de Vicente Garate, quien emancipó condicionalmente de la esclavitud en 1808 a su esclavo mulato Agustín, de 18 años de edad. Agustín solía fugarse tan a menudo que Garate lo puso en la cárcel por una temporada, para hallar al cabo de un tiempo que

"...en teniéndolo en prisión el vicio y la vagancia lo atrapaban en tal grado que finalmente le propuso su manumisión para dentro de diez años bajo la condición que si fugaba de la zapatería o cometía otro cualquier exceso que mereciera castigo, esta libertad no tendría efecto".<sup>25</sup>

El peculio o beneficio que resultaba del permiso que los amos concedían a sus esclavos estipendiarios no sólo se difundió ampliamente en las zonas urbanas, sino que también alcanzó a extenderse a las relaciones sociales prevalecientes en las zonas rurales. Este fue el caso en Montevideo, en 1792, del negro Domingo, quien según el Dr. Mariano Zavaleta, adquirió simuladamente su libertad, pues algunos testigos producidos por el vendedor Andrés Yáñez, en litigio con los compradores Pedro Segovia y Eusebio González, afirmaban "...que alquilaba caballos los días festivos, que tenía compañía

con un esclavo de la Mariscalá, que hacía riendas y estribos de palo y vendía".<sup>26</sup> Y en 1796 del esclavo José, jornalero en el pago de la Magdalena, a quien su amo, Juan Ximénez de Paz, hacendado de dicho pago, le había permitido hacer algunas crías "separadas" de caballos con "facultad de beneficiarlas" pero sin darles la propiedad de ellas, para que invirtiese el producto en su alimento y vestuario "con el disfrute de mayor comodidad".<sup>27</sup> Con todo, el esclavo José no se conformó con sólo dicho permiso, sino que alegó el derecho de propiedad de dichas crías. En el litigio que se suscitó, Ximénez de Paz argumentaba que dicho permiso no podía extenderse a formar cría de mulas "...porque lo demás sería constituirle en clase de propietario, dueño y Señor de lo mismo mío, cuando no tenía capacidad, ni tenía libertad".<sup>28</sup> Estas consideraciones de Ximénez de Paz fueron rubricadas por su abogado, el Doctor Juan José Castelli, para quien

"...Estos actos en los amos no dan propiedad en el esclavo, porque el contrato no es entre capaces de ambas partes, y por eso es que llevan implícita la reserva del dominio pleno en el Señor; así como cuando este mejora el trato de la vida del siervo con vestuario, habitación y muebles no es visto hacerlo dueño de todo, ni se priva el amo de quitarle cuando quiera lo que le permitió usar".<sup>29</sup>

De no ser así, y dejar de ser el negro José su esclavo, saliendo de su señorío, Ximénez de Paz le preguntaba al Defensor de Pobres

"...¿Estoy obligado yo a alguna prestación en favor de los esclavos ajenos? ¿debo yo alimentar los que fueron y ya no son míos? ¿Debe un amo dar a el esclavo que vende todo lo que tenía cuando estaba en su señorío?"<sup>30</sup>

En el caso del negro Antonio, capataz de la Quinta de Felipe Castilla, quien para 1796 se había fugado en repetidas oportunidades, su amo declaraba que

"...tuvo la osadía de adquirir un terreno que aún ignoro en que términos lo ubo y formar una quinta propia en el Bañado, construyendo en ella un ranchito muy grande con las maderas que cortaba en lo interior de el Monte de mi quinta, labrando y zanjeando toda la dicha quinta con los bueyes, arado, y demás herramientas de la mía, valiéndose para esta obra de los otros mis esclavos, y conchabando algún otro peón de su cuenta, teniendo abandonada la mía al cuidado de un solo negro viejo todo el tiempo que se ocupó en fundamentar aquella".<sup>31</sup>

El permiso o facultad para adquirir dominio con el trabajo propio, fuera de la casa del amo, se extendía al derecho de presentarse en juicio para todos los efectos civiles. Negarle esto último a un esclavo estipendiario no era posible sin hacer, a juzgar del Dr. Pedro Medrano, "...un manifiesto agravio a nuestro Estado, y dar una interpretación violenta y nada decorosa a las leyes que tratan de la materia".<sup>32</sup> Acaso, se preguntaba Medrano,

"...¿vivimos en un tiempo en que reynaba la tiranía y la ambición, y en el que la mayor parte de los hombres, se reputaban como una especie distinta de los Romanos, a quien la fuerza, hizo señores árbitros y despóticos de los que oprimía su injusticia?"<sup>33</sup>

El origen de la servidumbre era atribuída por Medrano en 1794, fecha de este litigio, a la tiranía, y en su principio "fué un efecto de ambición". Pero la naturaleza atenuada de la misma, al hacerse admisible en el día, era caracterizada por Medrano como "...moderada y reducida a ciertos límites que se le han prescripto".<sup>34</sup> Si bien en otros tiempos un esclavo, no obstante "...de que la naturaleza lo había dotado al igual de los demás hombres,...era incapaz de recibir injuria", a fines del siglo XVIII en Buenos Aires,

según Medrano, "...ya no tiene lugar este sistema de la tiranía".<sup>35</sup> Aunque el derecho reputaba a los esclavos por muertos para los efectos civiles, "...esta voz no debe entenderse con tan rigurosa propiedad que por ello quiera excluirse de los juicios a los esclavos".<sup>36</sup> Ellos están muertos para todos los efectos civiles "...si sus amos no les permiten gozar de ellos". Al igual que las leyes que permitieron el que se pudiera libentar enteramente a los esclavos de la servidumbre, Medrano concluye que los amos podrían otorgarles libertades parciales. De este derecho procede, según Medrano, "...que los esclavos con permiso de sus dueños, puedan adquirir dominio y propiedad en aquellos lucros que les proporciona su trabajo".<sup>37</sup> Estos lucros pertenecían por la servidumbre al señor del esclavo, pero Medrano se preguntaba

"...¿no podrá él renunciar de este derecho? ¿no podrá hacerlo a favor del mismo esclavo? ¿hay ley o razón que niegue a los dueños de esclavos esta facultad que su dominio les concede?",<sup>38</sup>

La libertad condicionada de la esclavitud estipendiaria se entiende mejor cuando en el anterior litigio, protagonizado por el pardo zapatero Ceferino Glacé, el Dr. Darregueira advertía que "...la palabra servir no siempre indica ni supone dominio, porque un siervo ajeno en quien no se tiene [dominio] y aún el hombre libre sirve,...y con todo no es esclavo, sino que se denomina criado".<sup>39</sup> Según el Derecho Real de entonces, el pardo Glacé servía al Dr. Careaga,

"...mas este obsequio no le es debido por razón de dominio, sino por el gravámen, y condición de servirle algún tiempo; la cual se convierte en modo por ser la libertad pura y simple, como lo insinúa el Padre Paz".<sup>40</sup>

### **El derecho a pedir papel de venta.**

La crónica disputa del esclavo con su amo acerca del derecho a pedir papel de venta y acerca del monto del jornal a tributar daba lugar también a reiterados litigios judiciales. En el caso juzgado en 1803 ante el Alcalde de segundo voto, entre el esclavo Mariano y el Dr. Agustín Pío de Elía, este último expuso que su esclavo

"...no le quería servir en su casa, ni en otra cualesquier parte, y que para vencer la repugnancia de su esclavo le había propuesto remitirle conchabado a la estancia de su hermano Angel Mariano ["Potrero de San Lorenzo"] respecto a que le acomodaba mas la vida campestre y de estancia en que se había criado pero que tampoco había querido acceder a esta racional propuesta, añadiendo que más que todo quería que le vendiese".<sup>41</sup>

Los jueces José Riera y José Vicente Carrancio, antes de tomar una decisión oyeron al esclavo Mariano, quien

"...después de haber expuesto que no quería servir a dicho Dr., sino que más bien le vendiese a un estanciero para trabajar en la estancia, se le hizo presente que su amo no le podía vender, y que solo queriendo él, podía ser vendido, pues no quería dicho su amo privarse del beneficio que le había hecho su amo antiguo Don Estéban García de Zúñiga".<sup>42</sup>

Enterado de estas razones, el esclavo Mariano

"...resueltamente volvió a repetir que no quería servir a su amo, ni que este le conchabase, y que ni quería servir a ninguno de los García de Zúñiga, y que lo más breve tratase de venderle su amo a un



estanciero u otro que tuviese ejercicio de campaña, porque era lo que le acomodaba".<sup>43</sup>

Y en el caso entablado en 1799 por el esclavo barbero Manuel Antonio de Heredia contra su amo Tiburcio López de Heredia, solicitando papel de venta por la sevicia con que lo venía tratando, éste último dirigía todos sus esfuerzos para probar que su esclavo era un ladrón pues de 26 personas que por once años venía afeitando por orden suya "...sólo le contribuye lo que pagan seis, y se queda con lo que contribuyen veinte, que asciende a más de cuarenta pesos en cada mes", por lo que su tienda de barbería se arruinaba quedando "en estado que sólo le produzca siete pesos mensuales".<sup>44</sup> En su descargo, el esclavo barbero manifiesta no concebir que su amo sufriera con paciencia durante once años "...un robo tan considerable, y no quiera echar de sí un ladrón de esta clase, y procure mantenerlo en las mismas proporciones que continúe sus hurtos, lo que no se puede creer del más insensato".<sup>45</sup> Como de la lista de clientes de la barbería que el juez mandó confeccionar, el amo reconoció que sólo recibía lo que pagaban seis de los 26 manifestados por el esclavo Manuel, éste último se preguntaba si era creíble que su amo tolerase

"...que yo me quedase con tanta cantidad de pesos cada mes, y fuese tan sufrido que por tantos años disimulase este hurto, y no pasase a preguntarles [a sus clientes] si me pagaban, y se mantuviese [su amo] tan indolente contra sus mismos intereses que me dejase robar quieta y pacíficamente y arruinarlo".<sup>46</sup>

Por el contrario, el esclavo Manuel probaba la sevicia con que su amo lo trataba y el excesivo jornal que tomaba de su trabajo, declarando que no se le daba el menor descanso ni de día ni de noche,

"...siendo obligado en invierno y verano a andar por las calles muchísimas veces hasta las doce de ellas de casa en casa afeitando, y por la mañana hasta la una, levantándome en todo tiempo antes de venir el día, desnudo sin la ropa precisa de abrigo, aún en lo rígido del invierno".<sup>47</sup>

Y por si esto fuera poco para probar la sevicia, el esclavo Manuel denuncia que Francisco Ruiz Quevedo por orden de su amo lo encerró "...en un cuarto húmedo, inhabitable, atado a un madero con una cadena, azotado cruelmente, y privándome del alimento". Estos hechos, fueron reconocidos por López de Heredia, pero disimulados "...con un disfraz despreciable, pues los azotes los nombra papiotes, y la dura prisión y terrible castigo correcciones paternas".<sup>48</sup>

En otro caso singular, acontecido en 1764, la esclava Martina Esquivel demandó a Ramón Esquivel, hijo y albacea testamentario de Doña Lorenza Ocampo Saavedra, viuda del Alférez Bartolomé Esquivel, le pagase los 20 años de servicio que en vida de su madre practicó.<sup>49</sup> Alegaba la esclava Martina,<sup>50</sup> que dicha difunta Doña Lorenza

"...no me hubo porque la justicia me entregase a ella, sino al contrario por que ella me pidió a la justicia con la denominación de nieta, y a no ser así le hubiera obligado a mi madrina para que me entregase. Lo que podré a V.S. asegurar es que hasta ahora no he oydo decir que para coger a una chinita, qualquier persona lo honeste con decir que es su parienta, y que como tal la dé a conocer a sus propios hijos".<sup>51</sup>

En aquel tiempo, según la esclava Martina,

"...Doña Lorenza no tenía más criada que yo para la calle y para las ocupaciones que tenía adentro dándome la crianza para [la] que me había quitado del poder de mi madrina, en que vendiese todos los días pasteles, y empanadas, y todas las tardes empanaditas, cosinando y

labando para afuera los días que no salía a la calle".<sup>52</sup>

Al argumento del abogado de la demandada, de que entre Doña Lorenza y su esclava Martina "...no hubo concierto, salario ni escritura para en su fuerza cobrar dicho servicio",<sup>53</sup> la esclava Martina le pedía al Juez que reflexionara si ella podía haber tenido acaso

"...advertencia para pedir dicha escritura o contrata quando desde seis años me llevó a su casa, y aunque después de estar allí viése desnuda y sirviendo es claro que por tenerla como abuela y madre de mi padre no me atrevería a concertarme",<sup>54</sup>

Esta inadvertencia, agregaba Martina, también le habría sucedido con su propio padre, en el caso en que este

"...me hubiese quitado....aduciendo para esto que yo era su hija, es evidente que conociéndole por tal no le pidiese la paga de mi servicio, pues es derecho establecido por el mismo Dios en el cuarto precepto del decálogo: honora Patrem, et matrem".<sup>55</sup>

Pero si después mi padre, alegaba Martina, "...me negase, que no era su hija, y que por tal no me reconocía es evidente le cobrase mi trabajo, del cual se había aprovechado con la denominación de hija".<sup>56</sup> Por vivir en la fé de que la finada Lorenza Ocampo me había tenido por nieta, Martina sostenía tener "...derecho a cobrar mi trabajo y por consiguiente a demandarla por el engaño con que me había entretenido".<sup>57</sup> Martina se preguntaba si la buena fé de la difunta

"...consistió en criar con la denominación de nieta a fin de servirse de mí todo el tiempo de 20 años? No se que me responda la parte contraria sino es que salga con la pariedad del irracional a quien se quiere y se estima quanto más aún racional; yo bien sé y no es ageno de duda, que si hubiera de cuidar del mantenimiento y vestuario con los irracionales menos estimación haría de ellos aún la parte contraria, que los trae a consideración".<sup>58</sup>

Por lo general, a medida que los esclavos envejecían se veían en dificultades de abonar a sus amos los jornales acostumbrados. El pago de estos jornales sufría asimismo de oscilaciones estacionales, pues en los meses de invierno, al arreciar las enfermedades propias de dicha estación, los esclavos solían mermar sus tributos o contribuciones. Frente a las dificultades que la edad y las enfermedades de los esclavos generaban, los amos preferían optar por recluir a estos esclavos en panaderías, lugares donde se los forzaba al trabajo y cuyos dueños se responsabilizaban por remesar con puntualidad los jornales a los amos respectivos. Este fué el caso del negro Bernardo, una vez que falleció su amo Saturnino Saraza. Su viuda, Doña Juana Josefa Tirado, la cual quedó de albacea,

"...no atendiendo al prolongado tiempo de 25 años en que fielmente he servido pues en ellos no he faltado con mis jornales, ahora por no poderlo practicar con la actividad que en aquellos tiempos, pues ya por el peso de mi edad me hacen mucha impresión los rigores del invierno por cuyo motivo he hecho algunas faltas con los jornales, por lo que se me amenaza que me pondran en una panadería de donde puedan percibir mensualmente sin contingencia sus jornales y esto con la mayor indolencia".<sup>59</sup>

Las actitudes que los amos incriminaban como delito, bajo diversas figuras jurídicas (robo, hurto, latrocinio, receptación) y estigmas sociales registrados notarialmente (ladrón, ratero, huidizo, bandido, etc.) habrían constituido una fase clave en el ciclo de vida del esclavo y una forma de resistencia a la creciente comercialización de la mano de obra esclava, lo cual contribuyó hondamente a

la formación de la conciencia de este grupo social. Estos estigmas debían estar consignados en la escritura de cambio de dominio por cuanto de descubrirse una tacha o vicio con posterioridad a la venta, el contrato respectivo era susceptible de caer en la figura de la redhibitoria. Entre los estigmas más comúnmente atribuidos a las esclavas mujeres figuraba el de enamoradiza. Dicho estigma se daba con mayor frecuencia entre las esclavas mulatas. Francisco Xavier Conget,<sup>60</sup> un conocido escribano de Buenos Aires, en su litigio con su primo el pardo libre Víctor de Aguirre sobre el derecho al tanto o tanteo,<sup>61</sup> en las casas de sus abuelos,<sup>62</sup> negaba en 1745 que este fuera hijo de su tío Mateo de Aguirre "...pues es constante en esta ciudad que las mulatas viven por lo general de trato ilícito con diferentes galanes".<sup>63</sup> En forma semejante, el Maestro albañil Juan de los Santos, concluía en 1762, en términos indignados e irrespetuosos por demás, que la sentencia negativa recaída en los autos sobre salarios en las obras de reparación de la Plaza de la Colonia solo se podía atribuir a la circunstancia de que "...las mulatas briosas y de buen talle tienen tanta aceptación que cuando no logran trastornar al Juez, consiguen y facilitan invertir el orden del proceder judicial".<sup>64</sup> Pero la connotación de enamoradiza en las escrituras de compraventa de esclavas no siempre era tenido por defecto para que diera mérito a las acciones redhibitorias. Joseph Bermúdez,<sup>65</sup> el vendedor de una esclava acusada de tal por el comprador Mariano Echaburu, exclamaba en 1784 en las acciones redhibitorias iniciadas por este último, que "...el amor es una pasión inherente a nuestra naturaleza, que comprende no sólo a los esclavos sino a todo viviente".<sup>66</sup> Para que esta calificación connotase defecto capaz de fundar redhibitoria Bermúdez sostenía que era necesario que la esclava tuviera por costumbre la fuga motivada en el amor.

Por otro lado, estos estigmas estaban destinados a ejercer también un control social individual en cada esclavo más propios de una estructura patriarcal o señorial que de una mera sociedad esclavista. Apparently, el control social que los amos ejercían sobre sus esclavas era mas estricto cuando en el pueblo o villa había plaza o zócalo donde los amos pudieran medirles el tiempo que tardaban en hilar o tejer. En Corrientes, de donde provenía la negra María del Rosario, Ramírez le contaba a la compradora Usín que como no hay Plaza "...es indispensable anden todo el día en la calle, y por esta razón no podemos los amos medirles el tiempo".<sup>67</sup>

El tener a las esclavas convenientemente amancebadas era considerado como el mejor antídoto contra la indisciplina y el desorden individual. Mas no todos los amos se preocupaban porque sus esclavos llevaran vida maridable. En el caso litigado en 1784 entre Bermúdez y Echaburu, acerca de una esclava, manifestaba el primero "...que si Don Mariano hubiese procurado casarla como lo prometió según lo testifica el mismo Cáseres, ella jamás se hubiera huído".<sup>68</sup> En otro caso ocurrido veinte años después, las recomendaciones de un amo correntino que vende su esclava ilustran las preocupaciones sociales de un provinciano aparentemente ajenas al *modus vivendi* vigente en Buenos Aires. En efecto, José Ramírez exclamaba en 1804:

"...Dios le de a ella Amos que la sepan tener midiando el tiempo, las oras y momentos, y la tengan en reclusión para que se junte con su marido, y haga vida con él, que en este caso será la negra singular de tesón en el trabajo, y vivirá su espíritu con tranquilidad, lo que no aora que vive desasosegada, cabilando, noche y día la sutileza de la iniquidad, como experimentará Vm. en ella, que parece un caballo pajarero como anda, sospechando lo que se le pone en el majín".<sup>69</sup>

### **La manumisión esclava.**

Con los jornales los esclavos acumulaban un peculio que les permitía a algunos lograr su propio rescate o manumisión, o el de sus parientes o allegados. La Tabla G-III revela la nómina de 385

rescatadores de esclavos, donde 133 casos delatan la identidad étnica, y en muchos casos los parientes directos de los esclavos manumitidos. La asociación entre rescatador y etnia era muy estrecha, detallándose en 133 casos la identidad étnica de los mismos: 69 morenos (negros) o el 51%, 54 pardos o mulatos o el 40%, y 10 indios o el 1%. La casi totalidad de los rescatadores pardos y morenos eran libres. No obstante su condición de libres, dichos rescatadores debían acreditar una habilitación, la cual debían obtener de un Juez competente.<sup>70</sup>

La relación de parentesco entre rescatadores y manumitidos era también muy fluída, detallándose en 155 casos el tipo de parentesco que los unía: 74 maridos o el 50%, 33 padres o el 21%, 28 madres o el 18%, y 6 hermanos, 4 madrinas, 3 abuelos, 3 cuñados, 2 tíos y 2 novios. En algunos casos los padres que rescataban a sus hijos naturales preferían mantener el anonimato.<sup>71</sup> En otros casos la manumisión era el instrumento por el cual se reconocía la paternidad natural.<sup>72</sup> No siempre la manumisión era absoluta, pues en muchos casos venía condicionada. Estas condiciones eran de todo tipo y color. En algunos casos se trataban de ventajas materiales. El negro José Ramírez, fué manumitido en 1786 por Domingo Belgrano Pérez,

"...con la condición de que a de acompañar y servir como tal esclavo a mi hijo José Gregorio Pérez, que se halla próximo a viajar al Perú con mi dependiente Pedro Antonio de Zavalía".<sup>73</sup>

El mulato José Domingo Sotelo, de 14 años, hijo de Damacia, fué manumitido en 1808 por María Gertrudis Tejerina

"...con la condición que siga dándole los \$6 cada mes que gana de soldado a donde le a puesto y en saliendo de dicho servicio le ha de contribuir según y conforme pueda adquirir con su corto trabajo".<sup>74</sup>

En otros casos las condiciones eran más carnales. La mulata Antonina, de 36 años, fué manumitida en 1809 por Martín de Sarratea en \$380 "...que me entregó en mayo de 1799 el pardo Juan José Avalos con la condición que había de contraer matrimonio con él".<sup>75</sup>

En muchos casos la manumisión era posible debido a la intercesión del préstamo usurario de un tercero. La Tabla G-IV enumera una pequeña muestra de 27 operaciones de préstamo destinadas a manumitir esclavos, registrados en Buenos Aires, alfabetizadas por el nombre del acreedor. De las 27 operaciones, solo dos repiten el acreedor, que lo fueron el dueño de panadería Francisco Moreno de Tejada y Doña María del Pilar Rodríguez Flores.<sup>76</sup> En muchos casos el acreedor o prestamista era el mismo que lo conchababa, y la suma adeudada era reembolsada con los mismos jornales que el deudor ganaba. El pardo Gregorio de Rojas y sus hijos Blas Mateo Miguel y Gregorio de Roxas, quienes ganaban de jornal \$5 mensuales cada uno, se endeudaron en 1750 con el Hospital Betlemítico en \$250, equivalentes a diez meses de trabajo, suma que se obligaron a "...pagar con nuestro trabajo personal".<sup>77</sup> Basilio Baldés y Alberto Quevedo, el primero de oficio sangrador, barbero y amolador, para redimirse de la esclavitud se endeudaron en 1772 con Andrés Ros, en \$500, que "...hemos de contribuir con los jornales que tenga a bien imponerme".<sup>78</sup> El pardo José Mariano Valle, vaquero contratado a \$11 mensuales, y su mujer Joaquina Navarajo, se endeudaron en 1806 con José Antonio Pereira de Melo, vecino del Espinillo, en \$286

"...para libertarse de su amo Francisco Xavier Alonso y satisfacer dicha cantidad con su servicio personal en la faena que tiene en su estancia en la otra banda a donde a de pasar con el sueldo de \$11 cada mes".<sup>79</sup>

El moreno Antonio Vezo, esclavo de Antonio Isla, se endeudó en 1808 con Lorenzo Balaró y Cía., dueño del Café llamado de Monserrat, en \$300 con el fin de libertarse, y con el compromiso de cancelar la deuda "...con mi servicio personal durante cuatro años en el Ramo de confitería sin reportar salario alguno por mi dicho trabajo".<sup>80</sup> El pardo libre Mariano Arias, de oficio panadero, se endeudó en 1810 con el dueño de panadería Francisco Moreno de Tejada en \$280 a reembolsar en tres años.<sup>81</sup> Y en igual año el pardo Juan Vicente se endeudó con el mismo Moreno de Tejada en \$300 con el compromiso de reembolsar dicha suma "...con su trabajo personal en la casa panadería trabajando 30 meses".<sup>82</sup> Por último, la negra Rita, de 60 años, que servía a razón de \$4 mensuales, fué manumitida en 1811, en \$154, equivalentes a 38 meses de trabajo, que le prestó la santafesina Mercedes Correa de Melo,

"...bajo la condición de que ella y su hija Benedicta de estado libre habían de ir a servirle abonándole a dicha Señora \$4 cada mes hasta tanto quedase cubierta la deuda y en caso de fallecer la Rita había de ser de cuenta de Benedicta su hija el servir hasta completar dicho pago".<sup>83</sup>

### **Los plazos de amortización en las manumisiones.**

Los plazos de amortización con que los acreedores se resarcían de las sumas adeudadas por los esclavos artesanos variaba con el precio tasado al esclavo y el monto de los jornales diarios ganados por éste. Pablo José Lorenze, oficial herrero, quien ganaba siete reales diarios o \$10 mensuales, una de las rentabilidades más altas en plaza, se endeudó en 1801 en \$215, equivalentes a 21 meses de trabajo, con el maestro herrero Agustín Mosquera, para libertar a la parda María Josefa, suma que se obligaba "...a ir satisfaciendo de los jornales que dicho Agustín me a de dar", y que pudo cancelar sólo seis años después, en octubre de 1807, cuatro años y cuatro meses más tarde que lo previsto si hubiera cancelado la deuda con el 100% de sus jornales.<sup>84</sup> El moreno libre Antonio Brin, de oficio aserrador, quien ganaba de jornal a razón de 8 reales diarios, se endeudó en 1801 con el vasco Juan Bautista Zelaya, en \$360, equivalentes a un año calendario de trabajo, para con dicho importe libertar a su mujer Tomasa, esclava que era de María Magdalena Torres, descontándole para ello lo "...que me quede libre [después de pagar los vicios de yerba y tabaco] de un peso diario que me abona de jornal".<sup>85</sup> Y el negro libre José Gómez, de oficio sastre, debe haber ganado de jornales más de \$11 mensuales, si tenemos en cuenta que en enero de 1810 canceló una deuda de \$269, contraída dos años antes, en 1808, resto de \$300 que debía al gallego Francisco Pombo, por "...pagar mi libertad otorgada en diciembre de 1807".<sup>86</sup>

El reembolso era por lo general establecido en cuotas, pagaderas mensualmente con el trabajo de su oficio. El carpintero Pedro Regalado Chene se endeudó en 1801 en \$300 con Juan Antonio Moris para libertar a su mujer María Pascuala, esclava de José Ignacio Uriarte, "...dándole mensualmente lo que pudiese adquirir con mi oficio de carpintero".<sup>87</sup> El moreno libre Pedro Pizarro y su mujer María se endeudaron en 1802 con Francisco Marín y O'Brian en \$200, comprometiéndose a pagar \$10 cada mes.<sup>88</sup> El negro libre Joaquín Correa se endeudó en 1804 en \$284 con su patrón Juan Ignacio Ezcurra, para con dicha suma obtener su libertad, pagando "...en cada mes lo que gane con mis jornales".<sup>89</sup>

En caso de faltar el liberto al reembolso debido se establecía por cláusula la obligación de trabajar para el acreedor hasta cancelar la deuda. El negro Manuel de la Cruz, de oficio panadero, fué manumitido en 1801 por el dueño de panadería Francisco Moreno de Tejada, en \$350 que obtuvo en préstamo de Pedro González Cortina, bajo la condición de que

"...se lo ha de reintegrar con el que ganare mensualmente en su oficio de panadería y si por su

culpa no lo berificase bolberá otra vez a la servidumbre que tenía quedando esclavo del dicho Pedro González Cortina por la misma cantidad sin que pueda ser vendido por mayor cantidad".<sup>90</sup>

La morena libre María Lucrecia de la Paz se endeudó en 1805 con María del Pilar Rodríguez Flores, en \$65 para obtener su libertad y en "...el interín no se los satisfaga integralmente es condición de que le a de servir como si fuera efectivamente esclava".<sup>91</sup> La parda libre Juana Echevarría se endeudó en 1805 con el Dr. Mariano Moreno en \$140 para la manumisión de su hijo Faustino, de 6 a 7 años, estableciendo que si cumplido el plazo de dos años

"...no hiciese el pago confiese y declare que está convenida con el dicho acreedor en que por la misma cantidad haya de tener facultad dicho Doctor en venderlo al dicho muchacho o quedarse con él si le acomodare".<sup>92</sup>

### **Las fronteras raciales.**

Por último, con motivo del clima igualitario generado por la ola revolucionaria de fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, podemos aseverar que las fronteras raciales sufrieron una esporádica erosión,<sup>93</sup> similar a las que ocurrían durante los Carnavales Latino-medievales y las Saturnalias que se celebraban en la antigüedad Romana,<sup>94</sup> y que a juzgar por el libreto de Tomás Gutiérrez Alea, acerca de la apasionante película cubana *La Última Cena*, acontecían también en la Cuba dieciochesca.<sup>95</sup> En efecto, cuando el más luego General Manuel Corvalán,<sup>96</sup> estuvo al frente del Fuerte de San Carlos, en Mendoza, entre 1810 y 1812, Bernardo, esclavo de Francisco Aragón, incriminado en un levantamiento de esclavos, manifestó en julio de 1812, que el Coronel le mandó

"...se sentase a la mesa, a comer con él, y los demás expresando que lo hacía porqué siendo Patriotas los había de sentar a la mesa aunque fueran negros y que sin duda por esto habrán levantado el falso testimonio de que Don Manuel Corvalán estaba mezclado en el asunto de los esclavos".<sup>97</sup>

Asimismo, en 1825, cuando con motivo de la batalla de Ayacucho, el Gobernador de Salta General Juan Antonio Álvarez de Arenales,<sup>98</sup> celebró el triunfo definitivo de la Independencia, ordenó que los festejos se hicieran

"...corriendo sobre el mismo mantel, así los más engreídos y de rango, que formaban en su partido, como los señalados por distinguidos de la plebe, deseando que en los regocijos se unieran todos los hijos de la república, sin distinción de sangre".<sup>99</sup>

Luego, con la restauración provocada por los regímenes despótico-confederados, dichas fronteras raciales volvieron a su antiguo cauce.<sup>100</sup>

La prohibición de arribo que padecía la mano de obra libre extranjera, también contribuía fuertemente a este encarecimiento. Al ser el capital comercial monopolista, distribuidor de producción de mano de obra esclava creada en África o Brasil, mal podían tener sus beneficiarios interés alguno en el desarrollo de la inmigración extranjera. Este encarecimiento, reducía los beneficios y retardaba la formación de capital al dilatar la velocidad de rotación del capital circulante. El alto precio que tenía que pagar quien alquilaba mano de obra esclava, obedecía a la necesidad de tener que abonarle al dueño del esclavo, una renta que le permitiera a éste, cancelar el interés del precio de compra más una alta cuota de amortización por la brevedad del ciclo de vida del esclavo. Por otro lado, la dificultad del

propietario esclavista o feudal, en convertirse en un explotador capitalista, era debida a la esterilización de dinero-mercancía en capital fijo; a la escasez crónica de mercancía-dinero o iliquidez, con el cual invertir en los otros insumos necesarios para valorizar la producción; y a la extrema lentitud de rotación del capital circulante, que acentuaba aún mas las restricciones económicas del mercado laboral.

Además, la esclavitud actuaba como una de las condiciones restrictivas que impedían la transformación en capital del excedente económico, por cuanto negaba las posibilidades de un crecimiento auto-sostenido de la demanda interna de mercancías.<sup>101</sup> Estas restricciones impedían la gestación de excedentes; la formación de la ganancia comercial, frenando así el ritmo de la reproducción; la tasa de acumulación y la elevación del grado de conformación de las fuerzas productivas agrarias, o sea la tasa marginal de sustitución entre los factores productivos. En una palabra, las relaciones sociales de producción tradicionales, entre las cuales se contaba con una suerte de mita o repartimiento agrario, se habían convertido en un obstáculo para la expansión del capital comercial y el desarrollo de las fuerzas productivas agrícolas. En efecto, en temporadas agrícolas críticas los artesanos esclavos y libertos, amén de los indios y mestizos, eran compelidos por la fuerza pública y convenientemente repartidos para cumplir con la cosecha. El reclutamiento estacional coactivo de fuerza de trabajo esclava y su reparto entre las chacras por parte del estado colonial, en una suerte de mita agraria, era entonces un medio a través del cual el grupo social dominante de los comerciantes españoles concertaban una alianza con los terratenientes agrícolas transfiriendo valor a esta esfera de la producción. Por otro lado, al asegurar el estado un sistema de reparto estacional de la energía esclava valorizaba las tierras de chacra como medio de producción en una economía mercantil.<sup>102</sup> Pero esto no bastó para asegurar la expansión del capital comercial, y fué necesario entónces impulsar nuevas relaciones sociales de producción, entre las cuales descolló la esclavitud estipendiaria.

## NOTAS

<sup>1</sup> Johnson, 1978, 645.

<sup>2</sup> Viotti da Costa, 1966, 254-256 y 442, cit. en Hunold Lara, 1988, 101.

<sup>3</sup> Para el caso de Lima, ver Hünefeldt, 1979; para el de La Habana, ver Deschamps Chapeaux (1969); para el de Buenos Aires, ver Johnson (1978); para el de Popayán ver Rodríguez J. (1980), y para el de Asunción del Paraguay, ver Williams (1974, 1987).

<sup>4</sup> La frecuencia con que se daba esta realidad lo atestigua la capacidad de los libertos de adquirir bienes inmuebles. Ver Rosal, 1988.

<sup>5</sup> entre ellos los trabajos de Calvo, Cornejo, Luque Colombres, Crespo Naón, Vásquez Mansilla, Jáuregui Rueda, y Avellá-Cháfer, estos tres últimos identificados de ahora en más con las siglas VM, JR y A-CH, respectivamente.

<sup>6</sup> El fichaje de los testamentos porteños de los siglos XVII y XVIII fueron facilitados por mí al Sr. Hugo Fernández de Burzaco, --por intermedio del investigador y colega Jorge Zenarruza-- quien los aprovechara con mi autorización para su valiosa obra denominada "Aportes Biogenealógicos para un Padrón de habitantes del Río de la Plata", la cual identificaremos de ahora en más con las siglas FB.

<sup>7</sup> Maeder, 1981, 313.

<sup>8</sup> Bravo Acevedo, 1986, 31.

<sup>9</sup> Fuente; Saguier, Eduardo R.: Catastro de Mano de Obra Esclava de Buenos Aires (1736-1820) [Obra inédita].

<sup>10</sup> AGN, División Colonia, Justicia, Leg.14, Exp.323, fs.22v.

<sup>11</sup> facultad que por ley o costumbre jurídica tiene una persona para adquirir algo con preferencia a los compradores y por el mismo precio. Se distingue del retracto por el momento de su ejercicio, que en el tanteo es previo a la enajenación de la cosa (Ossorio y Florit, 1968, XXV, 1055).

<sup>12</sup> Derecho establecido en favor de los parientes colaterales para que en el caso de venderse una finca familiar o un esclavo de la familia a una persona extraña, pudiesen retraer esa finca o ese esclavo. Estas instituciones trabaron la formación de la renta y el salario, fuente material de la gestación de la burguesía (debo esta reflexión a mi amigo y colega Ezequiel Raggio).

<sup>13</sup> AGN, Protocolos, Reg.2, 1732, fs.8v.

<sup>14</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. G-12, Exp. 14, fs. 104.

<sup>15</sup> *Ibídem.*

<sup>16</sup> Ver su biografía en Lux-Wurm, 1979.

<sup>17</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. G-16, Exp. 1, fs. 108.

<sup>18</sup> *Idem*, fs. 127v.

<sup>19</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.128, Exp.1, fs.40v.

<sup>20</sup> *Ibídem.*

<sup>21</sup> *Ibídem.*

<sup>22</sup> *Ibídem.*

<sup>23</sup> *Ibídem.*

<sup>24</sup> AGN, Protocolos, Registro 5, año 1784, fs.111).

<sup>25</sup> AGN, Protocolos, Registro 4, 1808, fs.102.

<sup>26</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.11, Exp.16, fs.40 y 49v.

<sup>27</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. G-17, Exp. 15, fs. 20.

<sup>28</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. G-17, Exp. 15, fs. 20.

<sup>29</sup> *Idem.*



<sup>30</sup> Idem.

<sup>31</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.202, Exp.8.

<sup>32</sup> Sucesión de María Dolores Sebicos, AGN, Sucesiones, Leg. 8418, fs. 50.

<sup>33</sup> Idem.

<sup>34</sup> Idem.

<sup>35</sup> Idem.

<sup>36</sup> Idem.

<sup>37</sup> Idem.

<sup>38</sup> Idem,

<sup>39</sup> Idem.

<sup>40</sup> Idem.

<sup>41</sup> Venta del Dr. Agustín Pío de Elía a Agustín Wright (AGN, Protocolos, Reg.5, 1803, fs.183).

<sup>42</sup> Ibídem.

<sup>43</sup> Ibídem.

<sup>44</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. O-4, Exp. 23.

<sup>45</sup> Idem.

<sup>46</sup> Idem.

<sup>47</sup> Idem.

<sup>48</sup> Idem.

<sup>49</sup> AGN, Sucesiones, Leg.7261, fs.31-34v.

<sup>50</sup> con el asesoramiento de un abogado cuya identidad no me ha sido posible obtener.

<sup>51</sup> AGN, Sucesiones, Leg.7261, fs.31-34v.

<sup>52</sup> Ibídem.

<sup>53</sup> Ibídem.

<sup>54</sup> Ibídem.

<sup>55</sup> *Ibídem.*

<sup>56</sup> *Ibídem.*

<sup>57</sup> *Ibídem.*

<sup>58</sup> *Ibídem.*

<sup>59</sup> AGN, Tribunales, Sucesiones, Leg. 8418, fs. 12.

<sup>60</sup> hijo de Gonzalo Conget y de Ana María Aguirre, y sobrino político de Gaspar de Bustamante y de Juan Antonio Verdún de Villaysán (FB, I, 47).

<sup>61</sup> facultad que por ley o costumbre jurídica tiene una persona para adquirir algo con preferencia a los compradores y por el mismo precio. Se distingue del retracto por el momento de su ejercicio, que en el tanteo es previo a la enajenación de la cosa (Ossorio y Florit, 1968, XXV, 1055).

<sup>62</sup> Antonio José de Aguirre y Juana Leal de Ayala (FB, I, 47).

<sup>63</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. C-5, Exp. 12, fs. 47v.

<sup>64</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. B-4, Exp. 8, fs. 42.

<sup>65</sup> Gallego, natural de San Tenjo, marido de María Tadea de la Quintana, viuda de Manuel González, e hija de Pedro José de la Quintana y de Juana Bautista Dunda y Hernández (FB, I, 279).

<sup>66</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. G-14, Exp. 5, fs. 42.

<sup>67</sup> *Idem.*

<sup>68</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. G-14, Exp. 5, fs. 42.

<sup>69</sup> AGN, Protocolos, Reg. 5, 1804, fs. 54v.

<sup>70</sup> AGN, Protocolos, Reg.6, 1785, fs.255v.

<sup>71</sup> María de la Paz y su hijita fueron manumitidos en 1804 por Antonio José Da Silveyra en \$350, recibidos de manos de dos bienhechores (AGN, Protocolos, Reg.3, 1804, fs.90). La mulatilla María del Carmen, hija de Atanasia, fué manumitida en 1801 por María Luisa Igarzábal en \$180, recibidos "...de manos de su padre, cuyo nombre se omite por súplica de este mismo" (AGN, Protocolos, Reg.1, 1801, fs.322v.).

<sup>72</sup> La mulata Francisca, de 10 años, fué manumitida en 1783 por Felipe Cevallos "...atendiendo a que la reconoce por mi hija natural" (AGN, Protocolos, Reg.1, 1783, fs.149). El mulato Cayetano José, de 7 años, hijo de la mulata María Antonia, fué manumitido en 1766 por María Beresosa y Contreras "...en atención a que Benito Ximénez dice ser su hijo natural" (AGN, Protocolos, Reg.6, 1766, fs.327). Juan León, de 20 años, y Paula, de 16, fueron manumitidos por Mauricio Almirón, vecino de la Pesquería, "...por cuanto he tenido una negra Ana y con ella he vivido en ilícita amistad" (AGN, Protocolos, Reg.3, 1796, fs.337v.).

<sup>73</sup> AGN, Protocolos, Reg.6, 1786, fs.148v.

<sup>74</sup> AGN, Protocolos, Reg.6, 1808, fs.106v.

<sup>75</sup> AGN, Protocolos, Reg.4, 1809, fs.288.

<sup>76</sup> mujer de Miguel Lara (VM, 1988, ítem 1357).

<sup>77</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Escribanías Antiguas, tomo 81, fs.216.

<sup>78</sup> AGN, Protocolos, Reg.2, 1772, fs.44.

<sup>79</sup> AGN, Protocolos, Reg.6, 1806, fs.145v.

<sup>80</sup> AGN, Protocolos, Reg.7, 1808, fs.293v.

<sup>81</sup> AGN, Protocolos, Reg.7, 1810, fs.11v.

<sup>82</sup> AGN, Protocolos, Reg.7, 1810, fs.198v.

<sup>83</sup> AGN, Protocolos, Reg.6, 1811, fs.127.

<sup>84</sup> AGN, Protocolos, Reg.7, 1801, fs.81v.

<sup>85</sup> AGN, Protocolos, Reg.6, 1801, fs.166v.

<sup>86</sup> AGN, Protocolos, Reg.2, 1808, fs.32.

<sup>87</sup> AGN, Protocolos, Reg.7, 1801, fs.27.

<sup>88</sup> AGN, Protocolos, Reg.6, 1802, fs.9v.

<sup>89</sup> AGN, Protocolos, Reg.5, 1804, fs.139.

<sup>90</sup> AGN, Protocolos, Reg.1, 1800/01, fs.245.

<sup>91</sup> AGN, Protocolos, Reg.6, 1805, fs.90v.

<sup>92</sup> AGN, Protocolos, Reg.3, 1805, fs.387v.

<sup>93</sup> Lynch, 1987, 427.

<sup>94</sup> Frazer, 1951, 658; y Caro Baroja, 1965.

<sup>95</sup> Canby, 1978.

<sup>96</sup> Hijo de Domingo Reje Corvalán y Chirinos y de María Manuela Sotomayor y Videla, casado en primeras nupcias en 1800 con Benita Merlos y Basavilbaso, y en segundas nupcias con Manuela Ramos Mexía Ross (FB, II, 171)..

<sup>97</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.263, Exp.4, fs.55. Antonio María, esclavo de Doña Juana María Martínez de Rosas declaró en Mayo de 1812 que Bernardo, esclavo de Francisco Aragón, le propuso "...que de Buenos Aires había venido declarada la libertad de los esclavos y que esta la tenían usurpada [retenida] aquí los Sres. Jueces, de lo que él tenía constancia por unos papeles que tenía en su poder, y que era preciso para el alivio de ellos hacer que se les declarase, para lo cual convenía juntarse todos, abanzar el cuartel, y Sala de Armas, tomar éstas, y dar un avance a los Sarracenos, quitándoles el dinero, y género que tuviesen y prenderles, y luego presentarse a las Justicias para que les declarase la libertad, y sino querían ocurrir a Buenos Aires al Superior Gobierno" (Ibídem, fs.43).

<sup>98</sup> Héroe de Pasco y La Florida, dueño de la estancia de Pampa Grande, suegro del Gobernador de Salta Evaristo Uriburu y Hoyos, de Baltazar Usandivaras, y del Dr. Martínez (Fernández Lalanne, 1989, 54). Fué testigo de los escandalosos abusos y vejámenes, con que los gobernadores y los párrocos agobiaban a la población indígena, y elevó circunstanciados informes al Virrey que le atraieron el odio del Gobernador Intendente de Cochabamba Francisco de Viedma (Cutolo, I, 211).

<sup>99</sup> Frías, 1971, 80.

<sup>100</sup> Andrews, 1980, chapter 6.

<sup>101</sup> Córdova, 1972, 274.

<sup>102</sup> Por ejemplo, el 22 de diciembre de 1718 el Cabildo resuelve que el Alguacil Mayor notifique a "...los indios, mulatos, y mestizos zapateros, sastres, y carpinteros para que baian a segar trigo a las chacras pena de que seran castigados con todo rigor y también que se les obligue a que traigan boleta de la persona con que hubieren segado". El 24 de diciembre de 1720 hay citación general "...para que tomen parte en la siega a los negros, mulatos libres, mestizos, zapateros, sastres, y carpinteros que no fueren españoles para que ayuden a ella y en particular a las pobres viudas. Cometieren esta diligencia a dicho Sr. Alguacil Mayor para que los cite para el 30 de diciembre que ocurran a esta sala para repartirlos". El 12 de enero de 1752 y el 11 de diciembre de 1792 el alcalde de primer voto y el síndico procurador general, respectivamente, propusieron que en atención a ser tiempo de siega y que por falta de gente que hay en las chacras para el trabajo y por esta causa se pueden perder los trigos, se le suplique al Sr. Gobernador mande romper bando, para que cesen todas las obras, y oficios que hay en esta ciudad, y que so pena de meses de presidio les compela a todos salgan a trabajar en las cosechas" (Halperín Donghi, 1961, 38).

TOMO XI

CAPITULO 8

## **El mercado inmobiliario urbano y la movilidad social en la ciudad Rioplatense (siglo XVIII).**

(ha sido publicado en 1995 en la revista Ciencias Sociales [Santa Fé, Argentina], año V, n.8, pp.77-100);

La tradición historiográfica había señalado repetidamente que la movilidad social en la América Latina colonial padecía de una estabilidad asfixiante.<sup>1</sup> Sin embargo, admitida la inevitable movilidad social existente en el comercio, numerosos trabajos, referentes a las ciudades de Buenos Aires, Lima, La Paz, Santiago de Chile, Guatemala, Córdoba, Corrientes y Salta han proveído de materiales que nos permiten suponer, que en algunas ciudades Latinoamericanas se había dado en tiempos coloniales una intensa movilidad social.<sup>2</sup> Ultimamente, para Pastore (1991), a la luz de las teorías de Baysinger (1981), los mecanismos compulsivos en el comportamiento de los mercados le garantizaban al estado colonial mercantilista, la maximización de sus rentas y la disminución de sus costos de transacción.<sup>3</sup> Siguiendo estos argumentos, la escasez de tierra urbana habría requerido, aunque infructuosamente, de restricciones en su circulación, mediante el derecho de abolengo (tanteo y retracto),<sup>4</sup> y el régimen capellánico, a los efectos de impedir el excesivo fraccionamiento de los inmuebles urbanos.

La inversión en casas y solares urbanos revelaba para un comerciante, hacendado, artesano o liberto la fuente más importante de movilidad social vigente en ese entonces. Blackmar (1980) y Jensen (1963), hallan en el caso de las ciudades de Nueva York y Filadelfia; De Vries (1984), Hart (1989), García-Baquero (1979), Gonsález de Molina y Gómez Oliver (1987) y Cruz (1990), en el caso de las ciudades Europeas, y en los tres últimos en los casos específicos de Cádiz y Madrid, que el mercado inmobiliario urbano del Antiguo Régimen no fué tan estático como se lo solía pintar, y que la propiedad cambiaba de dueños en espacios de tiempo muy cortos.<sup>5</sup> Pero lo particular de los casos que se dieron en el mundo colonial Americano es que los vecinos propietarios constituían una clase étnicamente heterogénea. Había en el Río de la Plata, a diferencia de Europa, tal como lo prueba Rosal (1988), pequeños propietarios que eran mulatos y negros libres.

Para el análisis diacrónico que aquí nos propusimos hemos elaborado un Cuadro y numerosas Tablas, y procesado la información de diversos padrones de época, y de centenares de cédulas catastrales, aún inéditas, reconstruídas por mí a partir de miles de escrituras notariales, todas ellas

depositadas en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires.<sup>6</sup> También nos hemos servido de la información genealógica que nos proveen diversos tratados,<sup>7</sup> así como de los testamentos protocolizados en Buenos Aires.<sup>8</sup>

### **El mercado inmobiliario urbano (MIU).**

La inversión de comerciantes, hacendados y artesanos en bienes inmuebles urbanos (casas, sitios y solares) revelaría entonces, a semejanza de la inversión en bienes inmuebles rurales, la crónica inestabilidad de la estructura social existente, es decir lo intenso de la movilidad social ascendente y descendente vigente en ese entonces. Durante el siglo XVIII el mercado inmobiliario urbano (MIU) del litoral del Río de la Plata se mantuvo con algunos altibajos en una tónica por demás contradictoria. Mientras en Corrientes, desde 1771 hasta 1809 se registraron en total sólo 419 operaciones notariales, sobre sitios y casas,<sup>9</sup> en Buenos Aires, en el mismo período se registraron 6.554 operaciones notariales, y desde 1700 hasta la misma Revolución de 1810 se registraron un total de 12.831 operaciones sobre sitios y casas. El Gráfico D-I, fundado en la Tabla E-I, ilustra las fluctuaciones del MIU. Durante la primera confiscación del Real Asiento de Inglaterra (1718-22), el MIU creció de un promedio de 25 operaciones anuales por valor de \$9.000 en el trienio 1716-18, a un promedio de 45 operaciones anuales por valor de \$17.000 en el bienio 1719-20. Durante la segunda confiscación (1727-30), el MIU creció de un promedio de 51 operaciones anuales por valor de \$14.000 en el bienio 1726-27, a un promedio de 74 operaciones anuales por valor de \$40.000 en el trienio 1728-30. En tiempos de paz, estos indicadores sufrían un relativo descenso en virtud de la cristalización provocada por otras alternativas de inversión más lucrativas. Gran parte de la baja experimentada por el MIU debió haber sido ocasionada por el loteo del ejido que se iniciara en 1730 y durara hasta 1744. Es luego de la caída de Portobello en 1740 y el consiguiente cambio de las rutas del comercio español del Caribe al Pacífico a través del Cabo de Hornos, que el MIU experimenta un boom sostenido del que no habrá de retornar. En efecto, mientras en la década previa a la caída de Portobello (1731-40), se registraron un promedio de 53 operaciones anuales por valor de \$17.000, en la década posterior (1741-49) el MIU se duplicó alcanzando un promedio de 88 operaciones anuales por valor de \$34.000. Con la Guerra de los Siete Años (1756-63) los mercados de bienes de renta también experimentaron un fuerte impacto. Según la Tabla E-I, el MIU creció de un total de 59 operaciones por valor de \$48.000 en 1756, a un total de 106 operaciones por valor de \$83.000 en 1758 y 85 operaciones por valor de \$87.000 en 1762. Esta última disparidad en porcentajes era debida a la inflación de precios experimentada por la tierra urbana, que alcanzó al 37%.<sup>10</sup> También durante la Guerra de la Revolución Americana (1776-83), luego que España toma partido a favor de Francia y la emancipación norte-americana, el MIU saltó de un total de 122 operaciones por valor de \$82.000 en 1780, a 214 operaciones por valor de \$162.000 en 1781, y 147 operaciones por valor de \$236.000 en 1782. En la década inmediata a la inauguración de las Ordenanzas de Libre Cambio (1779-89) los mercados de bienes de renta experimentaron un movimiento alcista, el MIU creció 10 puntos de porcentaje, alcanzando un promedio del 19% del mercado crediticio, y el MH (mercado hipotecario) creció 3 puntos alcanzando el 8%. Como consecuencia de las Guerras de la Revolución Francesa, los mercados de bienes de renta de la periferia colonial española, experimentan un impacto aún mayor que en la guerra precedente debido al éxodo de comerciantes españoles de Cádiz y su consiguiente reflejo en la actividad notarial porteña. El MIU creció de un total de 118 operaciones por valor de \$54.000 en 1794, el año de más baja actividad desde la Paz de Versailles (1783), a un total de 143 operaciones por valor de \$136.000 en 1795. La tendencia alcista en el MIU fue sostenida a lo largo de lo que resta del siglo XVIII y se prolonga al inicio del siglo siguiente. El breve período de paz entre 1799 y 1802 afectó también el comportamiento de estos mercados. El MIU creció un 21% en 1799, 33% en 1800, y 55% en 1801. La tendencia alcista sufre una aguda crisis con motivo de las Invasiones Inglesas. En efecto, de un total de 211 operaciones por

valor de \$295.000 en 1806, el MIU cayó el año siguiente un 50%, a un total de 131 operaciones por valor de \$157.000. El breve período de paz entre 1799 y 1802 afectó también el comportamiento de estos mercados. El MIU creció un 21% en 1799, 33% en 1800, y 55% en 1801. Con la reiniciación de la guerra entre Inglaterra y España en 1804, los mercados de bienes de renta vuelven a recobrar la espiral expansiva. El MIU subió de \$157.022 en 1807 a \$413.018 en 1808 o el 263%, y a \$629.579 en 1809 o el 400%. Por último, para explicar con mayor precisión las alzas y bajas del volumen y valor de las transacciones en los mercados de bienes de inversión o renta, sería necesario elaborar nuevas tasas. En nuestro caso particular, la tasa del mercado inmobiliario urbano (MIU) debería medir la relación entre las operaciones de compra-venta de casas, solares y sitios, y el incremento de la inmigración masculina adulta.

### **Rotación sufrida por cada predio en forma individual.**

Amén del estudio del mercado inmobiliario urbano es preciso también estudiar la rotación sufrida por cada predio en forma individual. A sólo 313 predios del mercado inmobiliario urbano, pertenecientes a cinco barrios del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, que experimentaron más de una transacción, se les pudo reconstruir parte de su historia dominial. Las operaciones correspondientes a dichos 313 predios pertenecían a 1.307 escrituras, sobre un total de 11.662 compraventas, protocolizadas entre 1736 y 1820. Sobre la base de esta reconstrucción, en el barrio de Concepción, 71 parcelas experimentaron cuatro propietarios o tres rotaciones o transacciones; 32 parcelas cuatro transacciones; y 20 parcelas cinco transacciones; totalizando 123 parcelas y 441 transacciones, o casi la tercera parte del total de parcelas y transacciones. El Cuadro C-I ilustra como el barrio con el menor promedio de transacciones por parcela fué el del Socorro, con un promedio de 1,5; totalizando 53 parcelas y 190 transacciones, o la sexta parte del total de parcelas y transacciones; y el de mayor promedio el barrio de la Piedad, con una media de 14 transacciones; totalizando 47 parcelas y 174 transacciones. En el barrio del Retiro, la media alcanzó a 9; totalizando 45 parcelas y 329 transacciones. Y en el barrio de San Miguel, la media alcanzó a 8; totalizando 45 parcelas y 173 transacciones.

### **La persistencia en el dominio urbano.**

Las propiedades que padecieron una persistencia en el dominio que sobrepasara la de una sola generación fueron muy escasas. Las pruebas de la persistencia en el dominio estaban dadas por el régimen del derecho de abolengo, manifestado a través de las prácticas del tanteo, y el retracto, y el régimen capellanico. Es de presumir que el derecho de abolengo, institución típicamente feudal, prevaleciera más en el campo que en la ciudad. Sin embargo, en Buenos Aires, Pedro Caro, marido de Antonia Martínez Aguirre, inició juicio de retracto a Miguel Antonio Requejo, por la venta de un sitio que fuera de su suegro Pedro Martínez Basualdo, natural de Corrientes, y de su suegra Luisa Aguirre, que le vendieran Juan Pérez y Antonio Pita, marido éste último de Francisca Martínez Aguirre.<sup>11</sup> El Cap. Baltasar de Quintana Godoy inició a comienzos del siglo XVIII juicio de tanteo al Cap. Francisco de la Cámara y Anastasia de Quintana, por la venta de las casas de su padre Francisco de Quintana.<sup>12</sup> En 1715, el Cap. Francisco de Merlo pidió por el tanto el sitio que perteneciera a sus padres, el Cap. Alejandro de Merlo de Lafuente y María Ardiles de la Mota, vendido por su sobrino el Alf. Francisco López al Cap. Pedro de León.<sup>13</sup> En 1793, el Dr. Mariano Zavaleta inició juicio de retracto a su tío materno carnal Toribio de Aramburu por la casa que fuera de sus abuelos maternos el Cap. Bartolomé de Aramburu y María Ruiz de Ocaña.<sup>14</sup> En 1816, Manuel de Arribáizaga dedujo una acción de retracto a favor de Francisca Pereyra, mujer de Pedro José de Arroyo, contra su coheredero Ilario Niquilson.<sup>15</sup>

## El régimen capellánico y la propiedad urbana.

El régimen capellánico, con sus instituciones de la primogenitura, el grado, la línea sucesoria y el sexo, esgrimidas en los litigios por la sucesión de los Patronatos y los beneficios capellánicos, era otro mecanismo que favoreció la perpetuidad y la concentración de la propiedad urbana. En La Paz, Alto Perú, se siguió en 1780 un dilatado pleito, que llegó a la Real Audiencia de Lima, entre Marcelina de las Cuentas y Sayas y el Lic. Fernando Valverde de Contreras y Ampuero, sobre la propiedad del Patronato de las memorias pías, que fundó en el siglo XVII el Deán de la Catedral de La Paz Don Pedro de las Cuentas y Valverde, tío abuelo de Marcelina.<sup>16</sup> El patronato se fundó, entre otras numerosas propiedades, sobre una casa fronterera a la del Sr. Dr. Miguel Núñez de Sanabria, Oidor que fué de la Real Audiencia de Charcas, por el principal de \$4.000.<sup>17</sup> Dicho Patronato quedó en manos del Obispo de Popayán Don Basco de Valverde, con facultad de nombrar a quienes lo sucediesen, para lo cual nombró al Maestre de Campo y Caballero de Santiago Francisco de Balverde Contreras y Solórzano, y este a su vez nombró a sus cuatro hijos. Habiéndose extinguido la línea correspondiente a los dos primeros hijos José y Sebastián, pasó la sucesión a la línea que al momento del pleito se hizo primera, que era la de Francisca de Balverde y Contreras, quien tuvo por hijo mayor a Francisco de Balverde y Ampuero, quien casó en el Cuzco con María Teresa de Balverde y Costilla, padres del Lic. Fernando de Valverde y Ampuero.<sup>18</sup> De resultas del pleito, el Tribunal de Lima declaró que el Patronato pertenecía al Lic. Fernando Valverde y mandó que a Doña Marcelina se le enterasen \$3.000 con descuento de lo que había percibido.<sup>19</sup> En Córdoba, la crisis desatada en su Cabildo en 1766 obedeció en parte a una causa judicial por el Patronato de una Capellanía de \$2.100 de principal, que servía Fr. Pablo de Allende, afincados en unas casas propiedad de su hermano Santiago de Allende y Loza, y cuyo patronato retenía Catalina de Arrascaeta.<sup>20</sup> Dicho patronato lo hubo Arrascaeta por herencia de Francisco de las Casas y Manuela Soberón y Salas, sus suegros, y había sido fundado en 1737 por Doña Josefa de Salas, abuela de Manuela Soberón.<sup>21</sup> Fallecido, Fr. Pablo de Allende, la nueva patrona de la capellanía María Ana Rodríguez, mujer de Francisco Soberon, reclamó la capellanía para su nieto José Ignacio de las Casas.<sup>22</sup> Pero como el General Tomás de Allende, como apoderado de Santiago Allende, había vendido las casas sobre las cuales estaba impuesta la capellanía, su Patrona insistió hasta lograr el reembolso de la suma correspondiente.<sup>23</sup> En Buenos Aires, Don Ambrosio del Casal y Sanabria, hijo de Don Pedro del Casal y nieto de Pedro del Casal y Sanabria,<sup>24</sup> compareció en 1795 ante el Alcalde de segundo voto y dijo que conforme al testamento instituido por Ana del Casal y Sanabria,<sup>25</sup> a comienzos del siglo XVIII, se designó por su albacea a su pariente el Deán de la Catedral de Buenos Aires Francisco de los Ríos y Gutiérrez,<sup>26</sup> para que fundara dos capellanías laicas destinadas para clérigos --entendiéndose por estos generalmente a los seculares-- de dos mil pesos de principal cada una.<sup>27</sup> Fundadas ambas capellanías en 1768, sobre las casas antigua y nueva de Nicolás de Acha y Juana Tirado, los patronos llamados a éstas lo fueron en el primer caso los hijos y descendientes de sus legítimos hermanos Pedro y José del Casal y Sanabria,<sup>28</sup> vecinos del Paraguay,

"...primero a los de la línea de Don Pedro que a los de la línea de Don José; y por su falta a los hijos y descendientes legítimos de la línea de mi prima hermana Doña Ana [Domínguez] Rabanal y Don Ignacio Bustillo Cevallos; y por la de estos a los hijos y descendientes legítimos de las líneas de mis primas hermanas Doña Francisca Rivarola y Don Pedro Arismendi, y de Doña Rosa Rivarola y Don Lázaro Umeres [y Basauri], vecinos de Santa Fé, entendiéndose primero los de la línea de dicha Doña Francisca que los de la de Doña Rosa".<sup>29</sup>

Para su puesta en práctica, el albacea estableció que los Patronos entrarán al goce de su Patronato

"...según su orden y clase, siempre el que fuere mayor, y en caso que el mayor fuere mujer, pase



al varón aunque sea menor, porque mi mira es que en cada línea se conserve dicho Patronato con la preferencia del varón a la mujer".<sup>30</sup>

En 1773, el Provisor y Vicario General Juan Baltasar Maciel, a pedimento del Capellán de la Iglesia de San Isidro, trabó embargo a la fundadora de la correspondiente capellanía, Tomasa Acasuso, por los \$2.000 que estaban afincados sobre su casa.<sup>31</sup> Quince años después, en 1787, el Mro. Narciso Cabral puso demanda en Buenos Aires al Cap. Francisco Piera,<sup>32</sup> propietario de una casa gravada con una capellanía por valor de \$2.020, por adeudarle los réditos caídos "...correspondientes a 17 años en que no se dignó avisarme de mi derecho".<sup>33</sup> A fines de siglo, en 1799, el Cura colado y Vicario de la Doctrina de Carasa Pbro. Juan José Rodríguez Pestaña reclamó en Buenos Aires de su tío materno el Capitán de Dragones Juan Amaro Pestaña,<sup>34</sup> los intereses recaudados pertenecientes a una capellanía de \$2.000, fundada en 1784 por el Teniente Francisco Sánchez, sobre las casas de su tía Josefa Gabriela Rodríguez,<sup>35</sup> existentes en Montevideo.<sup>36</sup> En vísperas de la revolución de independencia, en 1809, el Dr. Pedro José Denis,<sup>37</sup> demandó en Buenos Aires a Miguel Planes,<sup>38</sup> dueño de una casa-panadería, por el cobro de los réditos de una capellanía fundada por su tío abuelo el Dr. Francisco de Cossio y Terán,<sup>39</sup> situada o fundada en la casa de Planes.<sup>40</sup> Una década más tarde, en 1819, el hijo de Miguel Planes, el Pbro. Dr. Saturnino Planes,<sup>41</sup> le inició a su propio padre una acción ejecutiva por los réditos vencidos de una capellanía impuesta a su favor sobre la casa-panadería de su propiedad.<sup>42</sup> En represalia, su padre alegaba, con el patrocinio letrado del Dr. Miguel García de la Huerta, que estando

"...en una edad avanzada, cerca de ochenta años, sin entretenimiento ni ejercicio lucrativo alguno ni en aptitud de poderlo practicar, debiendo el referido mi hijo por tan dobles obligaciones, respetarme, atenderme, y alimentarme, cumpliendo con el 4o. precepto del Decálogo",<sup>43</sup>

no sólo como hijo legítimo "...sino también como eclesiástico y de conocimientos en la moral",<sup>44</sup> tan lejos de llenar estos deberes, "...es el que más se interesa en mi destrucción, en mi ruina, en mi oprobio, y en las continuas afrentas, con que sin intermisión me dilacera".<sup>45</sup> En 1812, como el Pbro. José Reyna,<sup>46</sup> reclamaba los réditos de su capellanía, el Gobierno se la suprimió otorgándosela en su lugar al Dr. José Luis Planchón.<sup>47</sup>

### **Indivisibilidad y alta rotación de la propiedad inmueble urbana.**

Asimismo, los censos y reconocimiento de censos coadyuvieron al proceso de indivisibilidad y la alta rotación de la propiedad inmueble urbana. En el caso de Buenos Aires, por cuanto la mayoría de los censos y reconocimientos de censos celebrados en Buenos Aires fueron practicados simultáneamente con las compraventas o trasposos de dominio de los inmuebles, la cifra del total de estas operaciones no refleja el número real de las mismas. De estas últimas operaciones dobles o combinadas (compraventas y reconocimientos) hemos podido ubicar sólo unas 65 operaciones sobre bienes inmuebles urbanos, los cuales se hallan incluídos en la Tabla E-II. Una veintena de comerciantes contrajo censos y reconocimientos de censos con más de un par de instituciones religiosas.<sup>48</sup> Con los años muchas casas fueron tan desmedidamente gravadas que toda la renta proveniente de sus alquileres iba para el pago de los réditos debidos a los censos contraídos. Quince ricos vecinos, detallados en la Tabla E-II, formalizaron a lo largo del siglo XVIII 55 operaciones de censo con instituciones eclesiásticas por valor de \$134.392, sobre un total de 1.063 operaciones con instituciones de igual índole por valor de \$1.094.332, es decir el 13%. Cuando el comerciante Francisco Alvarez Campana contrajo entre 1752 y 1758 cuatro operaciones de censo por valor de \$24.000, y entre 1751 y 1763 tomó fiado en una docena de operaciones mercadería por valor de \$86.056, adelantó entre estos últimos

años un total de 173 operaciones de fiado por un monto de \$159.041. En el caso del comerciante Juan Antonio Albarracín, mientras entre 1769 y 1777 había adelantado una docena de operaciones por valor de \$33.171, entre 1793 y 1796, una vez retirado del comercio activo, contrajo un par de operaciones de censo por valor de \$10.000. Francisco Pérez de Saravia, un comerciante conocido por sus proclividades intérlopes, cuando entre 1762 y 1769 adelantó media docena de operaciones de fiado por valor de \$9.132, el año de la Paz de París (1763) contrajo un par de operaciones de censo por valor de \$3.000. Francisco Rodríguez de Vida, cuando entre 1747 y 1757 contrajo cuatro operaciones de censo por valor de \$6.900, y en 1760 tomó en una sola operación de fiado mercadería por valor de \$31.200, entre 1743 y 1762 adelantó 73 operaciones de fiado por valor de \$355.865. Y Pablo Tompson, cuando en 1763 y 1767 contrajo dos operaciones de censo por valor de \$5.500, y entre 1760 y 1761 tomó fiado en tres operaciones mercadería valuada en \$13.740, entre 1759 y 1761 adelantó una veintena de operaciones de fiado por valor de \$46.860, y entre 1764 y 1778, 64 operaciones por valor de \$164.760.

### **La sobrevalorización inmobiliaria urbana.**

La sobrevalorización inmobiliaria urbana, producto de la especulación, es factible de ser estimada. Esto puede lograrse mediante la información notarial o fiscal sólo cuando tomamos la información de los predios despoblados. El cálculo de la sobrevalorización fundiaria en los predios edificados se complica por cuanto se debería descontar el precio de las mejoras (ladrillo, madera, albañilería, carpintería, herrería, etc.).<sup>49</sup> Pero los predios edificados sufren también de un proceso de sobrevalorización por el simple juego de la oferta y demanda de habitación o vivienda en una ciudad donde el volumen de la población huésped, con relación a la anfitriona o residente, es abismal en períodos de paz o tregua. No contenta Doña Lucía Saravia con haber subido el arrendamiento de su tienda en la calle de las Torres de \$8 a \$9 cada mes, Juan Antonio Magariños, su inquilino, denuncia en 1785 que Doña Lucía "...me quiso hacer la subida exorbitante y extraña de \$12 cada mes previniéndome que de no pasar por ella me mudase pues tenía sujeto que se los daba".<sup>50</sup> Como Magariños se resistiera, la Saravia acudió al Alcalde de primer voto Don José Antonio Ibáñez, el cual luego de llamarlo, le requirió que se mudase en el término de ocho días.<sup>51</sup> Diez años mas tarde, en un incidente de nulidad contra el remate de una finca gravada con una capellanía a favor del Pbro. Lorenzo Gorostidi, Francisco Piñero alega contra Nicolasa Sotelo que "...es tal la rebaja que han padecido los alquileres desde el año de 1788 al presente [1794] que lo menos que puede darse es [un descuento] de un 25%, y este quebranto ocasiona forzosamente el de las casas que lo producen, porque no se han de estimar lo mismo cuando podían redituvar veinte que cuando sólo dan doce".<sup>52</sup> Empecinada la propietaria Sotelo en sostener que los sitios y casas en 1794 poseían mayor valor que en 1779 y 1780, Piñero insiste en que la Sotelo "...se engaña o pretende engañarnos, porque es un hecho que lo saben hasta los que no tienen casas propias por el menor alquiler que ahora [1794] les cuestan las que toman para vivir".<sup>53</sup> Sin embargo, dos años más tarde, en 1796, en un intento por elevar el arrendamiento de los cuartos de su finca, Don Santiago Saavedra,<sup>54</sup> trata de explicarle con criterios puramente mercantiles a Don Santiago de la Prida y demás inquilinos que las casas de alquiler "...son más o menos apreciables según el mayor o menor número de gentes transeúntes y sin arraigo".<sup>55</sup> Para avalar su aserto Saavedra se preguntaba y respondía a sí mismo "...¿que extraño será que en el día tengan un triple valor las casas de alquiler del que tenían 25 años antes?".<sup>56</sup> Siendo muy raras las embarcaciones que llegaban a Buenos Aires en 1770-71 y, de consiguiente, muy escaso el número de gentes transeúntes, y sin arraigo, era comprensible que, desde que abundaron éstos transeúntes, por la mayor concurrencia de buques provocada por el Reglamento de Libre Comercio de 1778 y la proclamación de la Paz de Versailles de 1783, Saavedra afirmara en 1796 que los propietarios

"...ya tuvieron derecho...para subir el precio a sus fincas de alquiler ¿y qué duda [cabe] que en

el día son sin comparación mucho mayor el número de gentes transeúntes y que tienen precisión de abitar en casa alquilada? ¿y por qué no podrán los propietarios subir de precio sus fincas a proporción de que se ha aumentado la población?"<sup>57</sup>.

Por otro lado, la sobrevalorización inmobiliaria urbana no fué uniforme en todos los barrios de la ciudad, sino que por el contrario existió un proceso de diferenciación espacial del suelo urbano, que sugiere la existencia de rentas diferenciales por razones de localización y mejoras. Es así que, tomando como período base las décadas inmediatamente posteriores a la Paz de Utrecht (1720-40) y como dimensión a mensurar los cuartos de solar (17 1/2 varas de frente por 70 varas de fondo), el valor de la tierra en la década del 50 se dobló y en las décadas previas a las Reformas Borbónicas (1760-78), se cuadruplicó en los barrios de San Pedro, Recio, y San Nicolás (\$100), y se mantuvo constante en el barrio de San Juan (\$50).

Con posterioridad a las Reformas Borbónicas (1782-90), la sobrevalorización inmobiliaria urbana sufrió un "boom" mayor aún. Tomando igual período base (1720-40), vemos que mientras en el barrio de San Pedro el valor de la tierra se multiplicó seis veces (\$150) y en el de San Juan se cuadruplicó (\$200), en los barrios Recio y San Nicolás su valor se multiplicó ocho veces (\$200). Es así que la diferenciación espacial del suelo urbano, reflejada en los precios alcanzados en el mercado inmobiliario, confirman la sospecha de la existencia de rentas diferenciales. En tanto que en el período previo a las Reformas Borbónicas el precio de los predios ubicados en los barrios del Retiro y San Juan doblaban el alcanzado en el barrio de la Concepción (\$25), el precio de los predios localizados en los barrios Recio y San Nicolás doblaban los de San Juan y Retiro (\$50).

### **Diferencia espacial en el valor venal de la tierra urbana.**

Con el correr del tiempo, el mercado inmobiliario se fué homogeneizando y la diferencia espacial en el valor venal de la tierra entre barrios distintos fué disminuyendo. En efecto, en las décadas posteriores a las Reformas Borbónicas, mientras que los predios ubicados en los barrios de San Pedro, Santa Catalina y Concepción excedían en un 25% el precio del solar en el barrio del Retiro, los localizados en los barrios Recio, San Nicolás y San Juan excedían en un 33% el valor de los ubicados en los barrios de San Pedro, Concepción y Santa Catalina.

Esta diferenciación espacial indica, a simple vista, la existencia de oscilaciones cíclicas en la posición relativa de cada barrio con referencia a los demás barrios. Así tenemos, por ejemplo, que si bien el barrio de la Concepción, habitado por libertos y miembros de las castas,<sup>58</sup> fué en el período previo a las Reformas Borbónicas (1760-78), el que más bajo se cotizara (\$25), por debajo del de Retiro, en las décadas posteriores a las Reformas Borbónicas (1783-90), el barrio de la Concepción se cotizó superando al de Retiro. En forma similar, si bien el barrio de San Juan, también habitado por libertos y artesanos, se cotizó en el período previo al Reglamento del Libre Cambio por debajo de los barrios Recio y San Nicolás, poblados generalmente por comerciantes y hacendados ausentistas, en las décadas siguientes a la equiparación de Buenos Aires a los demás puertos americanos (1783-90), el barrio de San Juan igualó su jerarquía mercantil con la de los barrios Recio y San Nicolás.

Para terminar, podemos afirmar, sobre la base de las tablas y el cuadro aquí producidos, que si bien la perpetuidad y consolidación dominial subsistente en algunos predios urbanos, había fortalecido el poder económico y social de algunas familias; la rotación y la fragmentación hereditaria de la propiedad urbana, que alcanzó uno de los niveles más altos de la América Latina colonial, había vulnerado la hegemonía y la estabilidad de los sectores más tradicionales.

## NOTAS

<sup>1</sup> Ingenieros, 1918; y Bagú, 1952.

<sup>2</sup> Para Guatemala, Langenberg (1989); para Lima, Galdames (1964) y Molestina (1992); para La Paz y Potosí, Escobari de Querejazu (1990); para Santiago de Chile, De Ramón (1974-75, 1978); para Buenos Aires, Melo (1959, 1963, y 1964); para Córdoba, Robinson (1979) y Luque Colombres (1980); para Corrientes, Maeder (1981); y para Salta, Martínez (1982) y Caretta de Gaufrin y Marchionni (1993).

<sup>3</sup> ver Pastore, 1990, y 1991, 6.

<sup>4</sup> el tanteo era la facultad que por ley o costumbre jurídica tiene una persona para adquirir algo con preferencia a los compradores y por el mismo precio. Se distingue del retracto por el momento de su ejercicio, que en el tanteo es previo a la enajenación de la cosa (Ossorio y Florit, 1968, XXV, 1055). El retracto era el derecho establecido en favor de los parientes colaterales para que en el caso de venderse una finca familiar o un esclavo de la familia a una persona extraña, pudiesen retraer esa finca o ese esclavo. Estas instituciones trabaron la formación de la renta y el salario, fuente material de la gestación de la burguesía (debo esta reflexión a mi amigo y colega Ezequiel Raggio).

<sup>5</sup> Cruz, 1990, 261. Para el caso de Boloña, ver Bocchi (1979); para Nápoles, ver Placanica (1983), Colletta (1985) y Derosas (1991); para la Lombardía, ver Zaninelli (1986); para Padua, Pavanello (1977); y para Venecia, Pavanello (1981). La Fundación Benetton está actualmente financiando una extensa investigación sobre la campaña Trevigiani, bajo la supervisión científica de Gaetano Cozzi y la dirección de Danilo Gasparini (Derosas, 1991, 728).

<sup>6</sup> Actualmente un equipo de tesis de la Facultad de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, bajo mi dirección, se halla restaurando el catastro histórico de la ciudad de Buenos Aires. El equipo está constituido por Silvia Magrino, Fabiana Pouso, Silvia Albornoz, Alejandra Mancuso, Lucía Ruiz, Claudia Devesa, Liliana Suárez y María Rivas.

<sup>7</sup> entre ellos los trabajos de Calvo, Cornejo, Luque Colombres, Crespo Naón, Vázquez Mansilla, Jáuregui Rueda, y Avellá-Cháfer, estos tres últimos identificados de ahora en más con las siglas VM, JR y A-CH, respectivamente.

<sup>8</sup> El fichaje de los testamentos porteños de los siglos XVII y XVIII fueron facilitados por mí al Sr. Hugo Fernández de Burzaco, --por intermedio del investigador y colega Jorge Zenarruza-- quien los aprovechara con mi autorización para su valiosa obra denominada "Aportes Biogenealógicos para un Padrón de habitantes del Río de la Plata", la cual identificaremos de ahora en más con las siglas FB.

<sup>9</sup> Maeder, 1981, 313.

<sup>10</sup> Jensen (1963), Blackmar (1980) y Salinger y Wetherell (1985) comprueban para los casos de Filadelfia y Nueva York fenómenos inflacionarios semejantes (Jensen, 1963, 126-127; Blackmar, 1980, 131-148; Salinger y Wetherell, 1985, 829; citados por Nash, 1987, 130).

<sup>11</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.R-15, Exp.7.

<sup>12</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.255, Exp.41, fs.11.

<sup>13</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.M-3, Exp.4.

<sup>14</sup> AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.Z-4, Exp.5.

<sup>15</sup> AGN, Tribunal Civil, Leg.A-11, fs.20.

<sup>16</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.20, Exp.15, fs.89.

<sup>17</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.54, Exp.7, fs.3.

<sup>18</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.54, Exp.7.

<sup>19</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.20, Exp.15, fs.89.

<sup>20</sup> hija de Martín de Arrascaeta y de Urbana de las Casas; mujer de Pedro Ramos; hermana de Manuel, Mateo, Matías, Dámaso y Manuela Arrascaeta, mujer de Juan Gutiérrez; y madre de José Isaac de la Trinidad Ramos. Martín de Arrascaeta era el escribano de Córdoba hasta 1771, natural de Guipúzcoa, hijo de Francisco Arrascaeta y Manuela Soberón; marido de Urbana de las Casas y Soberón, hija de José Francisco de las Casas y Funes, y de Manuela Soberón y Rodríguez; y primo hermano del Regidor Gregorio Arrascaeta (Romero Cabrera, 1973, 27; Lazcano, II, 143). Martín de Arrascaeta hizo entrega del Registro de escribano a Clemente Guerrero en 1771 (Archivo Histórico de Córdoba (AHC), Escribanía N.2, Leg.41, Exp.5).

<sup>21</sup> AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.1, Sala IX, 5-9-3; citado en Saguier, 1992, nota 48. Josefa Salas era hija de Tomás Salas y Catalina Maldonado; nieta del fundador de la Capellanía Pedro de Salas; y mujer de Pascual Juan Rodríguez (Archivo de la Arquidiócesis de Córdoba, Libro de Capellanías, Leg.31, t.I [Microfilm 2680, del Centro de Historia Familiar]).

<sup>22</sup> hijo de Francisco de las Casas y de Manuela Soberon y Salas.

<sup>23</sup> AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.I, fs.28 [Microfilm 2680, del CHF].

<sup>24</sup> Familia de origen santafesino.

<sup>25</sup> hija de Pedro del Casal Verón y Andrada y de Maria Gómez de Sanabria, viuda del Teniente de Rey Baltasar García Ros, y Abadesa del Monasterio de Santa Teresa de Jesús de Carmelitas Descalzas de la ciudad de Córdoba.

<sup>26</sup> hijo del Capitán Juan de los Ríos y Gutiérrez, burgalés, y de Ana Delgadillo y Atienza, natural de Santa Fé (Avellá-Cháfer, I, 153).

<sup>27</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.L-10, Exp.7, fs.8.

<sup>28</sup> Para su descendencia ver Alvarenga Caballero, 1978.

<sup>29</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.L-10, Exp.7, fs.8. Para la descendencia de Lázaro Umeres ver Crespo Naón, 1983 y 1984.

<sup>30</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.L-10, Exp.7, fs.8.

<sup>31</sup> AGN, Protocolos, Registro 1, 1773/74, fs.63v.

<sup>32</sup> nacido en Valencia, marido de Angela Pestaña, hija del Capitán Manuel Pestaña y de Josefa Gregoria Rodríguez; y padre de los dos Tenientes de Dragones muertos por los indios en la Costa Patagónica (FB, V, 202).

<sup>33</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.116, Exp.16, fs.1.

<sup>34</sup> hijo de Manuel de Pestaña, natural de Portugal, bautizado en 1734, y de Gregoria Rodríguez, natural de Santa Fé; hermano de Angela y María Ana Pestaña; marido de Josefa Rodríguez Cardoso; padre de 11 hijos y suegro de Policarpo Rodríguez Campomanes (Apolant, 1966, ítem 513).

<sup>35</sup> mujer del Capitán Manuel Pestaña (Apolant, 1966, ítem 513).

<sup>36</sup> AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.20, Exp.8, fs.4.

<sup>37</sup> hijo del Regidor Bernabé Denis y de Juana Paula de Giles y Cossio Terán (FB, II, 214; y A-Ch, I, 101).

<sup>38</sup> viudo de Ciriaca Aguilera, Don Miguel había contraído segundas nupcias, y engendrado nuevos hijos (AGN, Tribunal Civil, Leg.P-8, "Planes, Saturnino y otro s/capellanía"). Era tío materno carnal del autor de la letra del Himno Nacional Argentino Vicente López y Planes.

<sup>39</sup> hijo del Capitán Mateo de Cossio y Terán y de María Rodríguez de Figueroa, marido de María Rodríguez de Figueroa (A-Ch, I, 98).

<sup>40</sup> AGN, Tribunal Civil, Leg.D, N.2, "Denis, Pedro J. c/Planes, Miguel p/cobro de réditos de una capellanía situada en casa de Planes".

<sup>41</sup> hijo de Miguel Planes y Ciriaca Aguilera (A-Ch, I, 288; y FB, I, 46).

<sup>42</sup> AGN, Tribunal Civil, Leg.P-8, "Planes, Saturnino y otro s/capellanía".

<sup>43</sup> Idem, fs.159v.

<sup>44</sup> Idem, fs.158.

<sup>45</sup> Idem. fs.159v.

<sup>46</sup> hijo del Teniente Coronel de Artillería Vicente Antonio Reyna Vázquez y de María Josefa Teresa de Cáceres (FB, VI, 345).

<sup>47</sup> Acuerdos, IV Serie, t. IV, 503; y t. V, p.68.

<sup>48</sup> Matías de Abaroa y Barrena, José de Arroyo, Vicente de Azcuénaga, Domingo Belgrano Pérez, Lucas Manuel Belorado, Cristóbal Cabral de Melo, Francisco Conget Cordobés, Lorenzo Fernández de Agüero, Juan de Lezica y Torrezuri, Manuel López, Isidro Lorea, Antonio Meléndez de Figueroa, Francisco Miranda, Andrés Pacheco de Malaver, Andrés Pinazo, Juan José de Rocha, Alonso Rodríguez de la Peña, José Francisco Vidal y Juan Agustín Videla de Aguiar (Ver Apéndice I).

<sup>49</sup> Este proceso de valorización fundiaria es factible de ser mensurado también si contamos con la superficie total comercializada. Conociendo el valor venal del lote y multiplicado éste por el de la superficie total comercializada nos dará una cifra que deducida del volumen total de las operaciones inmobiliarias, indicará el valor venal de la construcción y mejoras. Las tasaciones de los bienes inmuebles en los pleitos capellánicos solían ser en extremo detalladas. En 1800, cuando Bernarda Abreu dotó a su hijo Félix José Pérez con una capellanía, incluyó en la escritura una tasación que prescribía para la pared de cocido de 3/4 vara de grueso, a 12 reales cada vara de largo; la pared sencilla de cocido, de 1/2 vara de grueso, a 6 reales vara; la pared doble de crudo, a 4 reales vara; la pared sencilla de crudo, de 1/2 vara de grueso, a 2 reales vara; y para la pared de cocido y crudo, de 3/4 vara de grueso, a 6 reales vara (AGN, Protocolos, Registro 3, 1800, fs.18). Igualmente, cuando se vendió judicialmente en el mismo año de 1800 la casa de María Dolores Asco, viuda de Martín J. de Gainza, a Francisco Barros, se incluyó una tasación que establecía para la pared doble de tapial y ladrillo crudo, 4 reales vara; la pared sencilla de ladrillo crudo, 2 reales vara; la sencilla de ladrillo cocido, 6 reales vara; el texado con cañas y texas, 2 reales vara; el enladrillado en el patio y vivienda, 1 1/2 real vara; el embostado y blanqueo 1 1/2 real vara; la vereda a la calle, 2 reales vara; y una parra \$4 (AGN, Protocolos, Registro 2, 1800, fs.270v.). Seis años mas tarde, en 1806, los herederos de María Inocencia Guzmán venden a Manuel Tovar una casa en el barrio de Monserrat, en la cual incluían una tasación donde consta que el muro de ladrillo cosido estaba en ese año a 7 reales vara, un real más caro que en 1800, o sea con un 15% de aumento; el texado con texas y cañas a 4 reales vara, o el doble de caro que en 1800; el muro de crudo y cocido a 3 reales vara; y las palamas de 5 varas cada una a 1 1/2 real vara (AGN, Protocolos, Registro 2, 1806, fs.127v.).

<sup>50</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. M-14, Exp. 2, fs. 5.

<sup>51</sup> Idem.

<sup>52</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. P-13, Exp. 3, fs. 42. Igualmente, en los autos que seguía en 1789 contra Carlos García Perea, Juan Golovardes manifestaba que "...no se puede dudar que de algunos años [1779] a esta parte han perdido de su valor las fincas más de un 40%,...pues la casa comprada en 1779, estaban algo caras, por qué con la Guerra de los Ingleses había más abundancia de plata" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. U-1, Exp. 21, fs. 230).

<sup>53</sup> Idem.

<sup>54</sup> padre del Brigadier Cornelio Saavedra.

<sup>55</sup> AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. L-10, Exp. 8, fs. 31.

<sup>56</sup> Idem.

<sup>57</sup> Idem.

<sup>58</sup> ver Rosal, 1988.



## TOMO XI

### Capítulo 9

# **La Banca como lugar de lucha en las "Situaciones" Provinciales. El caso de las Gerencias y los Directorios en la Argentina del siglo XIX.**

La vinculación entre la burocracia estatal y la estructura política y social ha sido siempre materia de preocupaciones teóricas entre los científicos sociales del mundo. Sin embargo, el caso de las burocracias financieras no siempre ha merecido el interés correspondiente.<sup>1</sup> En la Argentina, autores como Gallo (1972), Páez de la Torre (1988), Bragoni (1993) y Converso (1993) encararon el estudio de la banca de las provincias en su relación con la metrópoli porteña. Por otro lado, autores como Jones (1983), Marichal (1984) y Regalsky (1987) tomaron en cuenta las vinculaciones de la banca extranjera con la nacional. Pero ninguno de estos autores tuvo en cuenta las relaciones propiamente políticas (desviaciones, desajustes) entre la banca y las autoridades políticas nacionales y provinciales,<sup>2</sup> ni la íntima conexión que se dió en ese entonces entre los regímenes bancarios y la naturaleza de los regímenes electorales, judiciales, educativos y comunicacionales (periodismo y telegrafía).<sup>3</sup>

Cabe entonces preguntarse si esta innovación de la banca fué asimilada positivamente por el resto del aparato del estado, operando funcionalmente en la consecución del consenso entre las elites o si, por el contrario, alimentó la fractura entre las mismas al ponerse al servicio de los intereses y los resabios de un Antiguo Régimen, aún inconcluso, y reproducir las miserias de lo que se dió en llamar un estado oligárquico. Este interrogante responde al principio de que cuánto más homogénea es una elite, más alta es la probabilidad de su éxito; y, por el contrario, cuánto más heterogénea más probable su fracaso.<sup>4</sup> La aparición de la república moderna hizo necesario contemplar entonces la influencia de la banca en las luchas periodísticas, electorales, judiciales y parlamentarias.<sup>5</sup> Asimismo, el análisis de la República moderna hizo necesario implementar la noción de la creciente gestación de la esfera pública, como desglosada de lo puramente privado, comprendiendo en la misma las incompatibilidades bancarias.

En este trabajo no nos propusimos un análisis empírico de contenido temático, cuantitativo o cualitativo, de las Memorias bancarias, sino que nos hemos impuesto el análisis de:

- a) el rol de las gerencias de los bancos oficiales como agentes de formación y destrucción de hegemonías políticas (e.g.: soborno del periodismo);
- b) la diferenciación de funciones del estado moderno;
- c) el mecanismo de elección de los gerentes;
- d) la programación de cobros, plazos y renovaciones;
- e) la quiebra de la banca privada;
- f) su instrumentación para el favoritismo y la discriminación política;
- y g) su utilización como botín de guerra al servicio de los gobiernos de turno;

Para este estudio, hemos aplicado el análisis intersticial o residual,<sup>6</sup> del que nos habla Marcello Carmagnani, seleccionando numerosos textos de época hallados en la correspondencia presidencial de Julio A. Roca, Miguel Juárez Celman y Victorino de la Plaza, y la provincial del Dr. Dardo Rocha, depositados en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires. El Apéndice B nos revela la información familiar y burocrática de gerentes, miembros del directorio y síndicos de los Bancos nacional y provinciales con sus apellidos maternos así como el de sus respectivas esposas y los cargos políticos detentados.

### **La diferenciación de funciones del estado moderno.**

La diferenciación de funciones ocupaba un rol relevante en el esquema de racionalización del estado moderno.<sup>7</sup> La aparición de los Bancos oficiales en la panoplia de la república moderna hizo necesario contemplar sus relaciones con los otros fragmentos de la burocracia civil; la influencia de los gerentes de bancos en el periodismo político y su influencia en la lucha parlamentaria.<sup>8</sup> En dicho esquema, las incompatibilidades bancarias ocupaban un lugar crucial. Los gerentes que paralelamente detentaban un cargo público (ya sea en un Colegio Nacional, en la Justicia, o en el Correo), eran los más expuestos a la extorsión practicada por los poderes públicos.

La extorsión generalizada, vigente entonces en las prácticas bancarias, e íntimamente ligada a los intereses políticos, tal como lo denunciara Aristóbulo del Valle,<sup>9</sup> hizo que a poco de producida la Revolución del 90, el Presidente del Banco de la Provincia Carlos Casares dictara una resolución -- semejante a las vigentes cuando la refundación del Banco en la década del cincuenta,<sup>10</sup> y a las Circulares que habían emitido diez años antes, la Inspección General de Armas y el Ministerio de Instrucción Pública-- prohibiendo

"...a los Gerentes mezclarse en asuntos políticos y desempeñar puestos públicos provinciales, debiendo optar por estos o la Gerencia, por juzgarlos incompatibles".<sup>11</sup>

Sin embargo, dos años después, en el saqueo del Banco Provincial de Catamarca "...estaban complicados los miembros del directorio o de la administración de aquel establecimiento, que eran a la vez senadores provinciales".<sup>12</sup> En Salta, el ex-Diputado Nacional y entonces Gerente del Banco Nacional Francisco J. Ortiz le pide en 1878 al Ministro de Hacienda Victorino de la Plaza que interceda para que no le acepten su renuncia a dicha gerencia

"...y si la aceptan que nombren por lo menos una persona que no sea de la familia Uriburu porque si nombran uno de estos se llevará la trampa (sic) los fondos del Banco".<sup>13</sup>

Casi dos años más tarde, en 1879, el Diputado Provincial Marcos Figueroa Aráoz le confiesa a Plaza que "...la gerencia del banco en manos de Ortiz nos ha vencido".<sup>14</sup> Compuesta la Legislatura en su

mayor parte de comerciantes y hombres de escasa posición,

"...parece estaban con obligaciones contraídas en el banco y naturalmente, cuando se hace un arma política de esta clase de establecimiento es poderosa como Vd. muy bien lo comprenderá".<sup>15</sup>

### **El mecanismo de elección de los gerentes.**

A fines de 1879 el Diputado Marcos Figueroa le pasa a Victorino de la Plaza una factura aún más gravosa al aspirar para él la vacante del puesto de Gerente de la sucursal salteña del Banco Nacional. Con ese motivo le confiesa

"...cuanto vale este puesto para servir a los amigos, y no está muy lejos el tiempo en que nos han hecho valer esa posición para derrotarnos, en fin, esta última parte es reservada para Vd.". <sup>16</sup>

Doce años después, en 1892, el Gerente del Banco Nacional y futuro Gobernador de Salta Pío Uriburu Castro le advierte a Roca que

"...dejar el Banco es esponerse a que caiga en poder de un Modernista, pues [Carlos] Casares, como Vd. Sabe, está en esa corriente y al ofrecerme la Diputación lo que querían era alejarme y quitarse de encima mi influencia".<sup>17</sup>

En Tucumán, a juicio del ex-Senador Provincial por Córdoba y futuro Senador Nacional José Vicente de Olmos, los Padilla no se han satisfecho con que el Gobernador Próspero García los dejara elegir como Síndico del Banco Provincial "...a quien quisieren", ni con que se les acordara "...repetidos plazos para el pago de sumas hasta insignificantes, por Contribución Directa y Patentes", ni con que el Gobierno evitara "...que el Banco les cobre hasta ahora sus deudas".<sup>18</sup>

En San Juan, la participación de los Nacionalistas Mitristas en el gobierno de la provincia se ha de medir, según estimaba el Gobernador Carlos Doncel, en "...el Banco de la Provincia según el ruido que hagan".<sup>19</sup> Los billetes del Banco de la Provincia

"...se reparte entre individuos de todos los colores y lo han recibido algunos que pasan por mis amigos pero que nada valen. Gastarán en poco tiempo el precio que se han asignado y [se] abandonarán el encanto comprador".<sup>20</sup>

En 1885, el Sr. Ortiz, a causa de "...su actitud política manifiestamente contraria a los fines del gobierno", había recibido "...insinuaciones que son una amenaza a su crédito en el Banco Nacional".<sup>21</sup> Y en 1888, el ex-Gobernador Rosauo Doncel cambia de resolución "...por ceder al empeño de algunos amigos que insisten en que me presente como candidato a la Gerencia del Banco Nacional en esta".<sup>22</sup> Dicha Gerencia, según esos mismos amigos,

"...reclama una modificación en su personal dirigente en provecho del mismo Banco; y como para solicitar ese puesto es indispensable emplear influencias poderosas, yo le ruego a Vd. tenga la amabilidad de emplear la suya en mi favor si en ello no encuentra Vd. observación que hacer".<sup>23</sup>

En Entre Ríos, los pocos dineros que habían quedado en el Banco Provincial, eran destinados en 1896, según Benito E. Pérez [Colman], "...a satisfacer las comodidades y la molicie de unos cuantos favoritos [del primer magistrado Salvador Maciá]".<sup>24</sup>

En Córdoba, en 1885, Benjamín Castellanos le transmitía a Dardo Rocha que los compromisos que muchos de sus correligionarios tenían con el Banco Nacional "...les impide hacer manifestaciones de adhesión a favor de su candidatura, porque inmediatamente les cerrarán sus créditos y les exigirán el pago íntegro de ellos".<sup>25</sup> Para proteger a sus correligionarios, "...hostilizados en sus intereses por la situación de Córdoba", Ramón F. Moreno propuso establecer en Córdoba un Agente del Banco de la Provincia de Buenos Aires "...que no teniendo ostensiblemente el valor de una Sucursal sea tal con carácter privado y mediante un contrato, cuyos términos quedan a fijar".<sup>26</sup> Y cinco años después, en septiembre de 1890, frente a la negativa de los Cívicos en aceptar cargos públicos, el ex-Ministro de Gobierno Felipe Díaz le escribe a Roca para notificarle que a los principales miembros de la Unión Cívica que vinieron a pedirle que no aceptara el puesto de Director del Banco Provincial, les manifestó:

"...a mi juicio han debido y debían proceder por aceptar los puestos que el Gobierno les ofrecía, que esa era la manera de ir ascendiendo por grados hasta llegar a apoderarse de la situación de Córdoba".<sup>27</sup>

Esa actitud de rechazo, es confirmada por una carta de Benjamín Domínguez, fechada dos días después, en la que le informa que la vocinglería desatada por el hecho de haberse nombrado sólo Roquistas para el Directorio del Banco, obedecía a que

"...se ofrece el puesto a los Cívicos y no lo aceptan; no se quiere nombrar a los Juaristas, entónces no queda mas que los Roquistas, fracción del partido nacional, que por ser de más dignidad resistió las influencias de los Juárez, y tuvo bastante decisión en su partido para no pasarse al enemigo".<sup>28</sup>

Dos años más tarde, Dermidio A. de Olmos le informaba a Roca que en el periódico La Libertad, órgano del Civismo recalcitrante, se registraba un suelto, en el número del 23-V-1893, donde se defendía sin que nadie lo ataque al Gerente del Banco Nacional en Liquidación Sr. Juan Ramón Muñoz Cabrera,<sup>29</sup> por cuanto Julio Astrada trataba de sustituirlo por el hecho de haber conminado a José María Bouquet,<sup>30</sup> "...a arreglar sus cuentas".<sup>31</sup> La lucha política se había vuelto en Córdoba muy desigual, a juicio de Olmos, por cuanto en el Banco Nacional se daban "...un Gerente Cívico-Pizarrista [Muñoz Cabrera] y un Consejo de Pizarro", y en el Banco de la Nación "...un Directorio Cívico-Radical en su totalidad...agregado a otro Directorio totalmente Pizarrista en el Banco Provincial".<sup>32</sup>

Y en Mendoza, a comienzos de este siglo, en oportunidad del gobierno Lencinista, pasaron a detentar cargos en el aparato financiero miembros de los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Entre los que fueron parte del Poder Legislativo figuraban:

"...Juan A. Dufau, senador, intendente, y actual miembro del Banco de la Provincia, uno de los radicales de fuste al lado del Sr. Lencinas;...Jorge Céspedes, senador, diputado, actualmente miembro del Banco de la Provincia; Rufino Ortega (h), diputado durante las épocas de Civit y Galigniana Segura, que fué después Gobernador, dejado por Civit, y ahora es Presidente del Crédito Público;<sup>33</sup>

Entre los que integraron el Poder Ejecutivo:

"...Eduardo Evans, que fue Comisario de Ordenes en el gobierno anterior, es actualmente Secretario del Banco de la Provincia;<sup>34</sup>

Dicha voluntad había repartido los puestos más importantes de la administración pública entre todos sus parientes y allegados, entre los cuales

"... uno de los primos Sr. Videla Bougat, gerente del Banco de la Provincia.<sup>35</sup>

Las impugnaciones de los gerentes de bancos se extendieron a la órbita municipal. En Mendoza, cuando los Cívicos le exigieron al Gobernador Rufino Ortega que el Gerente del Banco Nacional Alberto Beceyra renunciara a su banca de la Municipalidad, Ortega alegó que dicha incompatibilidad no existía,

"...por lo especial de las funciones municipales, que no son de carácter político, ni ofrecen el carácter de un puesto o empleo, puesto que no son remunerados".<sup>36</sup>

Finalmente, las impugnaciones de los gerentes de bancos que detentaban cargos políticos se extendieron en este siglo a la órbita privada. El que los Directores de Bancos privados, que ocupaban cargos legislativos, estuvieren presentes en las Comisiones que trataban temas de índole bancaria, fué puesto en tela de juicio durante la llamada década infame por un político conservador.<sup>37</sup>

### **La programación de cobros, plazos y renovaciones.**

La elección de los gerentes, los miembros del Directorio o Consejo consultivo de los bancos, y de sus Síndicos, y la programación de los cobros, los plazos, y las renovaciones de las deudas impagas eran parte de la corrupción y el teatro político. En la composición del Directorio de los bancos se fraguaban las alianzas y coaliciones políticas. En Corrientes, el dirigente Autonomista Rodolfo Alurralde lo prevenía al Ministro de Hacienda Victorino de la Plaza que los liberales (Mitristas) "...trabajan por traer acá como Gerente [del Banco Nacional] a un Sr. Silva, actual Gerente de Santa Fé y yerno de Nicolás Ferré".<sup>38</sup> Esto sería, a juicio de Alurralde, "...sumamente perjudicial porque desde luego seríamos excluidos de los beneficios del Banco todos los Autonomistas".<sup>39</sup> Un año más tarde, el Gobernador Manuel Derqui le informaba al Gobernador de Córdoba Juárez Celman que el cambio anunciado se produjo.<sup>40</sup> Desde Santiago del Estero, en 1881, el Gerente del Banco Nacional Rafael de la Plaza,<sup>41</sup> le informaba a su hermano el Ministro de Hacienda Victorino de la Plaza que Absalón Rojas "...ha manifestado aquí que tiene seguridad completa de obtener este puesto (que ocupo) para su cuñado Lídoro Quinteros [aquel Coronel que se destacara en Belgrano]".<sup>42</sup> Sin embargo, la sólo mención de Quinteros, despertó la inmediata oposición de Miguel Nougués, Eudoro Avellaneda y Sisto Terán. Este último aseguraba que Quinteros

"...está mal con la inmensa mayoría si no con casi la totalidad de nuestros amigos, encontrándose en idéntico caso respecto de los que no lo son y de aquellos que podemos llamarlos indiferentes".<sup>43</sup>

Dos años más tarde, en 1883, el Gobernador Luis G. Pinto, quien a su vez dirigía la principal Casa de comercio de Santiago, le aconsejaba a Roca

"...cambiar a la mayor brevedad el Consejo Consultivo y el Gerente de la Sucursal del Banco

Nacional, pues aquél está representado por [Francisco] Olivera y [Mariano] Santillán, y aunque el Gerente [Sr. Voget] tiene alguna relación conmigo, es cuñado de Olivera y por consiguiente el Banco tiene sus fondos a disposición de nuestros enemigos políticos, que los usan en perjuicio de nuestra administración".<sup>44</sup>

Un par de meses después, el mismo Pinto insistía ante Roca que la mala voluntad del Banco Nacional

"...para conmigo y todos los amigos políticos por mas que la responsabilidad supere a los créditos que se traten de abrir, mientras que con los parciales de Olivera se procede en sentido contrario. Estos tiene créditos ilimitados a pesar de no tener responsabilidad de ningún género".<sup>45</sup>

Y pasado algo más de un año, Pinto le revelaba a Juárez Celman que Rojas trabajaba activamente "...por hacer saltar al Gerente de esta sucursal del Banco Nacional para tomarse por completo el Banco pues ya tiene el Consejo consultivo".<sup>46</sup> Como en enero de 1885, el Ministro de Hacienda Dr. Wenceslao Pacheco,<sup>47</sup> no aceptó el candidato propuesto por Rojas, este último le sugirió nombrar a su concuñado Martín Posse o a su cuñado Octavio Sosa.<sup>48</sup> Nombrados este último y Cayetano Carbonell, para el Rochista Félix Cordero el Banco "...apreta a todo Rochista, nuestra firma es abiertamente rechazada de manera que no podemos servir ya a nadie".<sup>49</sup> Diariamente, dice Cordero, "...nos hacen muchos amigos pedidos para atender estas exigencias que los coloca en condiciones horribles".<sup>50</sup>

En La Rioja, en 1879, el Gobernador Jamín Ocampo se engañaba, a juicio de Joaquín Acuña, si creía que el Gerente del Banco Nacional "...pueda seguir sus insinuaciones, pues sigue ciegamente las de sus cuñados el Senador Dr. Abel Bazán y el Juez Federal de La Rioja Dr. Mardoqueo Molina".<sup>51</sup> Seis años después, en 1885, el dirigente Bustista,<sup>52</sup> y futuro Ministro de Gobierno Olímpides E. Pereyra le transmitía a Juárez Celman el miedo que se quisiera convertir el Banco "...donde imperaba la familia Luna y Bazán...en elemento de lucha para meter en danza al [Dr. Abel Bazán] cuñado de [Benjamín] Sastre".<sup>53</sup> En Catamarca, a fines de 1882, el candidato a Gobernador de la Provincia Manuel F. Rodríguez le reportaba a Roca que el Gerente y el Cajero de la Sucursal del Banco Nacional, que eran a su vez Diputados a la Legislatura, "...son los que con más empeño han trabajado en contra de mi candidatura".<sup>54</sup> Para ello utilizaban la propia sede del Banco, "...comprometiendo seriamente de esta manera el crédito de una institución".<sup>55</sup> Dos años más tarde, Francisco Caracciolo Figueroa le reprochaba al Ministro de Hacienda Victorino de la Plaza que insistiera en colocar de Gerente de la Sucursal del Banco Nacional "...a un cuñado de [Fidel] Castro...removiendo al Sr. Don José María Pare sin otro pretexto, sin duda, que ser este Sr. pariente mío".<sup>56</sup> Y al año siguiente, en 1885, el Gobernador José Daza le sugería a Roca que era

"...menester de contar con el Banco...no para derrochar sino para que ciertos amigos poseedores de bienes raíces puedan ser atendidos con algunas consideraciones, sin quebrantar las disposiciones bancarias".<sup>57</sup>

Y otro año más tarde, en 1886, Daza le clamaba a Roca "...que se cambie el Directorio de esta Sucursal principiando por el Gerente, me hacen una guerra de vida o muerte".<sup>58</sup> Y en agosto de 1890, el ex-Diputado Nacional por Catamarca Francisco Caracciolo Figueroa le confiesa a Roca que

"...algunos Cívicos de esta que desean agarrarse el Banco Nacional a toda costa, han fraguado una entrega para trabajar a [Gustavo] Ferrary prevalidos de que en el nuevo Directorio del Banco Nacional nadie conoce a este, y como yo no tengo mas amigos que Vd., se lo comunico

para que evite el golpe si hubiera de hacerse".<sup>59</sup>

Dos años después, al prometer el Gobernador Gustavo Ferrari inspeccionar "...aquel banco provincial de Catamarca, que era una especie de ministerio de Eleusis, y sobre el cual recaían tantas acusaciones",<sup>60</sup> se desencadenó un clima golpista que finalmente provocó un golpe de estado, seguido por la intervención federal, y por la reinstalación del Gobernador Ferrari en el cargo.<sup>61</sup> Pero el Banco Provincial no quedó inmune al golpe de estado, pues la Junta Revolucionaria había sacado doce mil y tantos pesos del banco.<sup>62</sup> En el Banco de Córdoba, en 1890, el Ministro de Gobierno B. Domínguez le informaba a Roca que el Síndico José Rodríguez del Busto, nombrado por el Gobernador Marcos Juárez,

"...emplearía su puesto en beneficio de la política y contra toda la circunspección que debe tenerse en tales puestos, llevando como ya lo ha hecho al conocimiento del público el estado de los negocios particulares de las personas que no le son afectas".<sup>63</sup>

Y un Inspector del Banco Nacional enviado a San Luis para inspeccionar la conducta del Gerente de la sucursal Ruperto Aguilera, "...abrió los libros del banco y se encontró con que el candidato [a reemplazar al gerente] era el mayor deudor y el único que no servía sus débitos".<sup>64</sup>

Amén del Banco Provincial, para el salteño Francisco J. Ortíz, la Jefatura de la Frontera, los Senadores Nacionales, el Juzgado Federal, el Rectorado del Colegio Nacional, y la Aduana Nacional, eran lo que para Gramsci la extensa red de trincheras y casamatas de la sociedad civil,

"...otros tantos castillejos desde nos hacen fuego cuando se presenta la ocasión, porque todos estos empleos les pertenecen hoy y es necesario irlos desalojando poco a poco de estas posiciones que han atrapado durante el gobierno de Sarmiento y de las que se valen sin miramiento alguno para sus fines políticos".<sup>65</sup>

Los bancos oficiales llegaron a ser calificados con acierto, por Aristóbulo del Valle, de "planta de corrupción y de ruina".<sup>66</sup> Con respecto a la coexistencia en cada provincia de dos Bancos del Estado, y a la manipulación política de que eran objeto por los Gobernadores de provincia, el Dr. Juan A. Terry le manifestaba a Próspero García

"...que la política del 80 aún no ha terminado su obra organizadora y que en sus primeras sesiones se ocupará de buscar el medio más sencillo para hacer desaparecer el Banco de la Provincia de Buenos Aires que hoy es un arma política de gran alcance y de perfecta precisión en manos del Dr. Rocha".<sup>67</sup>

Conocedores los Rochistas de la existencia de una amenaza de una ley de conversión,

"...se preparan a resistir y como medida previa se ocupan de colmar las cajas del Banco con el mayor oro posible, a fin de parar el golpe si el se produce en el sentido de obligarlo a la conversión".<sup>68</sup>

Existía en ese entonces la sospecha de que el Banco de la Provincia de Buenos Aires "...será la piedra de donde surgirá la chispa encargada por la providencia y por los malos hijos deste país a incendiar toda la República".<sup>69</sup> En Mendoza, los Bancos Nacional y Provincial eran en 1888, según el ex-Gobernador Rufino Ortega, "...el cuartel general de nuestros opositores, ambos establecimientos están

completamente a disposición del [Gobernador Tiburcio] Benegas".<sup>70</sup> Y diez años después, en 1897, el ex-Senador Nacional Emilio Civit le ruega a Roca que impida que un tal Sr. Alfonso,<sup>71</sup> hombre del Diputado Nacional Benito Villanueva, sea designado Gerente del Banco Nación en reemplazo de Elías Villanueva, pues es sabido que el fuerte de aquél "...ha sido siempre el torniquete bancario y la tropa de línea".<sup>72</sup>

### **La instrumentación de la Banca para el favoritismo y la discriminación política.**

Los bancos fueron y son desde su creación instrumentos de formación y destrucción de hegemonías políticas. En Mendoza, en Noviembre de 1890, Ortega le confesaba al General Roca, que

"...el punto capital de los trabajos sobre esta gente [los Liberales] está en el terreno financiero. Su situación es difícil, desesperada y es Vd. quien puede, maniobrando hábilmente, quebrarlos allí y acá por medio de los Bancos. Ahí tienen el talón de Aquiles estos señores".<sup>73</sup>

Y el mismo año, el entonces Diputado Nacional Emilio Civit le confiaba a Roca, que

"...a los Bancos nadie se resiste y con muy buenos modos sirviéndoles en sus intereses personales y sin perjuicio y con beneficio del Banco mismo se les puede llevar adonde se quiera".<sup>74</sup>

Los Bancos Nacional y de la Provincia intervenidos, "...deshacen la Unión Cívica, desmontan a [Oseas] Guñazú y al gran diablo".<sup>75</sup>

En Salta, en 1895, los principales accionistas de la Sociedad "El Edén",<sup>76</sup> eran los que representaban "...la política desastrosa de la época pasada, estos que vendieron sus edificios públicos y dejaron exhaustas las Cajas del Banco Provincial".<sup>77</sup> Entre estos últimos, el caso de José Antonio Chavarría era el más ostensible por cuanto estaba "...especialmente vinculado a [Martín Gabriel] Güemes por el negocio de los \$118.000 que se hizo pagar por apoyar en el Senado el contrato sobre el Banco [Provincial] y que la Legislatura declaró pago ilegal".<sup>78</sup>

En Córdoba, a fines del aciago año de 1890 Diego Chapeaurouge le denunciaba a Roca que "...si son ciertos la mitad de los cargos [acusaciones] al Banco, hay para un proceso".<sup>79</sup> Pero le aclaraba a Roca, que el Directorio de ese entonces "...tomó el esqueleto del Banco y casi no ha prestado nada", siendo los responsables del desquicio financiero los directores anteriores (Juan José Pitt, Julio Astrada, Santiago Díaz, Aranda y otros).<sup>80</sup> El Ministro de Gobierno Bernabé Domínguez intentaba justificar el despilfarro denunciándole a Roca que

"...entre los Cívicos está el mayor número de quebrados y es a los que menos conviene que se abra el Banco; y no creas que esto es farsa; los amigos de Marcos [Juárez], si bien abusaron del crédito, ganaron también mucho en sus negocios, mientras que los otros abusaron también y no ganaron".<sup>81</sup>

A comienzos de 1892, el Jefe del partido Nacionalista Julio Astrada volvió a valerse de "...la Presidencia del Banco".<sup>82</sup> Y la organización partidaria denominada los Palomas Blancas,<sup>83</sup> operada por Manuel Dídimo Pizarro, (a) "El Payo", contaba con el apoyo de los dirigentes Ramón Ferreyra, Angel Machado,<sup>84</sup> y Alejandro Vieyra, que a juicio del Ministro de Gobierno Benjamín Domínguez,



"...si no lo aplasta le dará al menos dolor de cabeza, pues los Jefes Políticos de los Departamentos, los Comisarios de Campaña, los Directores del Banco, la policía de ésta, y muchas oficinas están en poder de los Cívicos y en este momento le declaran guerra sin cuartel y amagan revolución".<sup>85</sup>

Y en Buenos Aires, en 1889, cuando Gregorio Torres,<sup>86</sup> se entera que el dirigente político Mendocino Benito Villanueva iba a ser nombrado Presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, le decía a Roca

"...me imagino que será para que Julio Costa,<sup>87</sup> pueda hacer sus trabajos a la gobernación sin que se le diga que abusa del Banco el cual en manos de Don Benito sería como si lo estuviese en los de Costa".<sup>88</sup>

En tiempos del Gobernador Dardo Rocha (1883), el Banco de la Provincia de Buenos Aires había intentado conquistar las situaciones del interior del país, en gran parte celebrando contratos para la instalación de sucursales,<sup>89</sup> adquiriendo prensa propia o sobornando a la prensa existente.<sup>90</sup> En San Luis, el periodista Joaquín Carlés, Director de El Oasis, le anunciaba a Roca que

"...la mano de Rocha se siente ya y diputados al Congreso Nacional que recibieron dinero del Banco de la Provincia, para fines particulares, y a cuenta de servicios ulteriores".<sup>91</sup>

En Catamarca, a juicio del Gobernador de Santiago del Estero Luis G. Pinto, la Casa Comercial de los Molina, vinculada al ex-Gobernador de Catamarca Gral. Octaviano Navarro, se encontraba a comienzos de 1883

"...en condiciones desfavorables y ha podido ralear [sic] la banca rota mediante un fuerte préstamo que ha obtenido del Banco Provincial de Buenos Aires".<sup>92</sup>

Y en Santiago del Estero, el Comandante Aureliano Cuenca le advierte al Gobernador de Córdoba Juárez Celman que "...se fije mucho en las armas y los medios de que se está valiendo Rocha para ganar los gobernadores de provincia".<sup>93</sup> Y el Senador Nacional Absalón Rojas le sugería a Roca la posibilidad de que en Febrero de 1885 se produjera un motín, pues a Rocha

"...le conviene cualquier alarma y al fin y al cabo puede exigirles que hagan cualquier bochinche para no perder del todo su plata o mejor dicho la plata del Banco de la Provincia, de ese Banco que es necesario quitarles como se quita el arma de fuego de manos de un muchacho travieso y que hicimos mal en no quitarles a tiempo".<sup>94</sup>

### **La quiebra de la banca privada.**

La quiebra de la banca privada también involucraba a los poderes públicos. En Mendoza, en 1879, Lauro Galigniana Villanueva le advertía a Roca con referencia a la quiebra de la Banca González,<sup>95</sup> que "...para vergüenza de la administración de justicia ya les mandan entregar a los González todos sus intereses".<sup>96</sup> Y cuando el Banco de Cuyo,<sup>97</sup> con sede en San Juan, entró en 1885 en liquidación, la mayoría de los accionistas tenía interés en un arreglo que se haría con el Banco Nacional,<sup>98</sup> pero los tenedores de una tercera parte de las acciones, propiedad de Clemente y Juan José Videla, se opusieron a ello por cuanto estando el Banco en manos de ellos "...obtienen ventajas que no

alcanzan a los otros accionistas, a la vez que les sirve la institución de poderosa arma política".<sup>99</sup> También en Entre Ríos se registró el impacto de la quiebra de bancos privados.<sup>100</sup> Y en Catamarca, la Revolución de Junio de 1891 había sido hecha, según el Diputado Félix T. Avellaneda, "...por mercenarios traídos por quebrados deudores a los Bancos de aquí".<sup>101</sup> Estos reiterados abusos, hicieron decir al Gobernador de Salta y ex-Gerente del Banco Nacional Pío Uriburu Castro, que para el Directorio del Banco de la Nación "...cada Provincia es una toltería y cada comerciante un ladrón".<sup>102</sup>

Por último, podemos concluir que los niveles de corrupción vigentes en los ambientes bancarios del interior argentino estaban lo suficientemente generalizados como para certificar que la prolongación de las prácticas del Antiguo Régimen aún se hallaban presentes en la segunda mitad del siglo XIX.

## NOTAS

<sup>1</sup> Para el caso de los Estados Unidos, ver Chernow (1991): y Doti y Schweikart (1991): para el de Rusia, ver Anan'ich (1988): y para el de la India, ver Rudner (1989).

<sup>2</sup> Para la relación entre la banca y la política, ver Hammond, 1991; Kane, 1923, 1981; y McCulley (1992). Para la relación entre la banca, el parentesco y el desarrollo económico, ver Lamoreaux (1986).

<sup>3</sup> ver Saguier, 1995a, 1995b y 1996-1997.

<sup>4</sup> Murilo de Carvalho, 1982, 396.

<sup>5</sup> ver Saguier, 1995; y Eduardo R. Saguier: "El Periodismo como instrumento de la competencia partidaria. El caso de las provincias en la Argentina decimonónica", ponencia presentada al Primer Encuentro Argentino-Chileno de Estudios Históricos, celebrado en Mendoza en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo, del 9 al 12 de Noviembre de 1995.

<sup>6</sup> consistente en la pluralidad de niveles informativos susceptibles de ser extraídos de las fuentes al margen del fin utilitario que dió origen a cada documento.

<sup>7</sup> Zimmermann, 1994, 5.

<sup>8</sup> ver Linares Quintana, 1942, II, 571; y Eduardo R. Saguier: "El Periodismo como instrumento de la competencia partidaria. El caso de las provincias en la Argentina decimonónica"; y "La magistratura como herramienta de contienda política. La Justicia Federal en el siglo XIX de la Argentina".

<sup>9</sup> Caballero, 1910, 73.

<sup>10</sup> Irigoin, 1995, 26.

<sup>11</sup> Rufino Ortega a J. Roca, Mendoza, 27-XI-1890, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.61.

<sup>12</sup> Diputado Juan J. Ibáñez, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 13-VI-1892, 7a sesión ordinaria, p.184.

<sup>13</sup> Francisco J. Ortiz a Victorino de la Plaza, Salta, 23-I-1878 (AGN, Archivo de Victorino de la Plaza, Sala VII, 4-7-14, fs.377).

<sup>14</sup> Marcos Figueroa a Victorino de la Plaza, Salta, 14-XI-1879 (AGN, Sala VII, 5-1-1, fs.730).

<sup>15</sup> *Ibídem.*

<sup>16</sup> Marcos Figueroa a Victorino de la Plaza, Salta, 11-XII-1880 (AGN, Sala VII, 5-1-2, fs.703).

<sup>17</sup> Pío Uriburu a Roca, Salta, 13-II-1892, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.66.

<sup>18</sup> José Olmos a Julio A. Roca, Tucumán, 24-VIII-1891 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.64).

<sup>19</sup> Carlos Doncel a J. Roca, San Juan, 14-IV-1884, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.37.

<sup>20</sup> Carlos Doncel a J. Roca, San Juan, 29-I-1885, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.43.

<sup>21</sup> Moisés Cardozo a D. Rocha, San Juan, 21-VIII-1885, AGN, Sala VII, Arch. D. Rocha, Leg.214.

<sup>22</sup> Rosauero Doncel a Roca, San Juan, 3-XII-1888 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.57).

<sup>23</sup> *Ibídem.*

<sup>24</sup> Benito E. Pérez a Julio A. Roca, Paraná, 3-VI-1896 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.72).

<sup>25</sup> Benjamín Castellanos a Dardo Rocha, Córdoba, 14-V-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.215).

<sup>26</sup> V. López Cabanillas a D. Rocha, Córdoba, 8-VIII-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.215).

<sup>27</sup> Felipe Díaz a Julio A. Roca, Córdoba, 17-IX-1890 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.60).

<sup>28</sup> Benjamín Domínguez a Julio A. Roca, Córdoba, 19-IX-1890 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.60).

<sup>29</sup> Altoperuano, hijo de Juan Ramón Muñóz Cabrera y de Tomasa Cabrera, Cochabambina, fundador en 1845 de La Epoca (La Paz), redactor de El Correo del Interior (Cochabamba), colaborador de El Constitucional (Mendoza) y fundador en 1854 de El Diario (Córdoba) (Cutolo, IV, 714; René-Moreno, 1901; Pereyra, 1952 y Serú Videla de Leal, 1970). Bischoff (1994) se equivoca al sostener su filiación salteña (Bischoff, 1994, 92).

<sup>30</sup> hijo de Estéban Bouquet y Arias y de Tomasa Josefa González y Arias de Cabrera e hijastro del caudillo cordobés José Xavier Díaz.

<sup>31</sup> Dermidio A. de Olmos a J. Roca, Córdoba, 24-V-1893, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.67.

<sup>32</sup> Dermidio A. de Olmos a J. Roca, Córdoba, 24-V-1893, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.67.

<sup>33</sup> Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 18-XI-1919, Reunión No.72, p.245.

<sup>34</sup> Ibídem.

<sup>35</sup> Ibídem.

<sup>36</sup> Rufino Ortega a J. Roca, Mendoza, 27-XI-1890, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.61.

<sup>37</sup> Senador Nacional Carlos Serrey, Cámara de Senadores, Sesión del 9-VI-1939, citado en Linares Quintana, 1942, II, 571.

<sup>38</sup> R. Alurralde a Victorino de la Plaza, Corrientes, 6-XII-1884, AGN, Sala VII, Arch. Victorino de la Plaza, Leg.393.

<sup>39</sup> Ibídem.

<sup>40</sup> Derqui a Juárez Celman, Corrientes, 28-IX-1885, AGN, Sala VII, Arch. Juárez Celman, Leg.17.

<sup>41</sup> aunque Jujeño se hallaba matrimoniado con una integrante de la familia Santiagueña de los Augier.

<sup>42</sup> Rafael de la Plaza a Victorino de la Plaza, Santiago del Estero, 14-III-1881, AGN, Sala VII, 5-1-3, fs.141.

<sup>43</sup> Sisto Terán a J. Roca, Tucumán, 30-IV-1881, AGN, Doc. Donada, Arch. Roca, Sala VII, Leg.15; y Miguel M. Nogués a J. Roca, Tucumán, 28-IV-1881, Sala VII, Leg.15).

<sup>44</sup> Luis G. Pinto a J. Roca, Santiago del Estero, 12-II-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.29.

<sup>45</sup> Luis G. Pinto a J. Roca, Santiago del Estero, 16-IV-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.30.

<sup>46</sup> Luis G. Pinto a Juárez Celman, Santiago del Estero, 17-IX-1884, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.15.

<sup>47</sup> nacido en Mendoza, hijo de Eufasio Pacheco y de Antonia Gutiérrez, Juez de Primera Instancia en 1877, Director y Presidente del Banco Nacional, Diputado Provincial por Buenos Aires, y Ministro de Hacienda de la Nación hasta 1890, fué el autor de la Ley de Bancos Garantidos y creador del Banco Hipotecario Nacional. Se le atribuye la autoría de Bancos de Emisión y Hacienda Pública (Buenos Aires) (Cutolo, V, 254).

<sup>48</sup> Absalón Rojas a J. Roca, Santiago del Estero, 8-I-1885, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.43.

<sup>49</sup> Félix Cordero a Dardo Rocha, Santiago del Estero, 14-VII-1885 (AGN, Archivo Rocha, Leg.215).

<sup>50</sup> Félix Cordero a Dardo Rocha, Santiago del Estero, 14-VII-1885 (AGN, Archivo Rocha, Leg.215).

<sup>51</sup> Joaquín Acuña a J. Roca, Catamarca, 14-X-1879 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.8).

<sup>52</sup> seguidores del Gobernador Francisco Vicente Bustos.

<sup>53</sup> O. E. Pereyra a Juárez Celman, La Rioja, 30-VII-1885, AGN, Sala VII, Arch. Juárez Celman, Leg.18. Benjamín Sastre era un Jefe de Infantería, que se había destacado peleando en ambas Santa Rosas (Cutolo, VI, 737). Y el Dr. Bazán alcanzó a ser Ministro de la Corte Suprema de Justicia.

<sup>54</sup> Manuel F. Rodríguez a J. Roca, Catamarca, 3-XI-1882, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.28.

<sup>55</sup> Ibídem.

<sup>56</sup> Francisco Caracciolo Figueroa a Victorino de la Plaza, Catamarca, 28-III-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.389).

<sup>57</sup> José Daza a J. Roca, Catamarca, 28-VIII-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.46).

<sup>58</sup> "Paz el Gerente es sostenido y garantido por los Figueroas que les obedece ciegamente en todo lo que quieren que haga. Amallo el Consejero, es un comerciante usurero instrumento de los Figueroas" (José Daza a J. Roca, Catamarca, 27-VII-1886, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.53).

<sup>59</sup> "La intriga consiste en haber reproducido la hoja impresa que le adjunto y en que se daba cuenta de la organización de nuestros elementos, cuidando de poner en lugar del nombre de Moisés Soria, que figura en el texto del acta, el de Gustavo Ferrary" (Francisco Caracciolo Figueroa a Roca, Catamarca, 18-VIII-1890 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.59).

<sup>60</sup> Diputado Juan J. Ibáñez, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 7a sesión ordinaria, 13-VI-1892, p.179.

<sup>61</sup> Diputado Juan J. Ibáñez, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 7a sesión ordinaria, 13-VI-1892, p.179.

<sup>62</sup> A juicio del Procurador Fiscal, en el saqueo "...estaban complicados los miembros del directorio o de la administración de aquel establecimiento, que eran a la vez senadores provinciales" (Diputado Juan J. Ibáñez, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 13-VI-1892, 7a sesión ordinaria, p.184).

<sup>63</sup> B. Domínguez a J. Roca, Córdoba, 20-IX-1890, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.60. Abogados de nota opinan, a juicio de B. Domínguez, que el Banco Provincial por estar bajo la jurisdicción de la Oficina de Bancos Garantidos y de sus Inspectores estaba fuera de las prescripciones del Código Comercial y por ende no debía tener Síndico. Sin embargo, "...como el Ministro de Hacienda ha aceptado las denuncias de este funcionario, no se ha querido darlo por suspendido" (B. Domínguez a J. Roca, Córdoba, 20-IX-1890, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.60).

<sup>64</sup> Diputado Víctor S. Guinazú, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 8a sesión ordinaria, 15-VI-1892, p.245.

<sup>65</sup> Francisco J. Ortiz a Victorino de la Plaza, Salta, 11-VI-1878 (AGN, Archivo Victorino de la Plaza, Correspondencia y Documentos Particulares, 1877-78, Sala VII, 4-7-14, fs.613).

<sup>66</sup> Caballero, 1910, 73.

<sup>67</sup> J. A. Terry a Próspero García, Buenos Aires, V-1885 (AGN, Arch. P. García, 20-3-13).

<sup>68</sup> J. A. Terry a Próspero García, Buenos Aires, V-1885 (AGN, Arch. P. García, 20-3-13).

<sup>69</sup> J. A. Terry a Próspero García, Buenos Aires, V-1885 (AGN, Arch. P. García, 20-3-13).

<sup>70</sup> Rufino Ortega a Ramón J. Cárcano, Mendoza, 2-I-1888, Archivo General de la Nación (AGN), Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.26.

<sup>71</sup> probablemente se trate de Salvador Alfonso, Presidente de la Cruz Roja de Tucumán, quien combatiera el cólera en 1886, y Director de La Razón de Tucumán, que con su reaparición en 1890 le hizo decir a El Orden que era "...el periodista que ha cambiado de color político tantas veces como pelos tiene en la cabeza" (García Soriano, 1972, 24); o bien posiblemente de Francisco Alfonso, cronista de El Progreso, diario de Córdoba, dirigido por de Javier Lazcano Colodrero (Bischoff, 1994, 114).

<sup>72</sup> Emilio Civit a J. Roca, Mendoza, 13-XI-1897, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.76.

<sup>73</sup> Rufino Ortega a Julio A. Roca, Mendoza, 7-XI-1890 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.61).

<sup>74</sup> Emilio Civit a J. Roca, Mendoza, 6-XI-1890, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.71.

<sup>75</sup> Emilio Civit a J. Roca, Mendoza, 6-XI-1890, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.71.

<sup>76</sup> José Antonio Chavarría Saravia, Juan Tomás Frías, Sidney Tamayo Gurruchaga, los Ovejero, los Zerda, los Linares, los Arias, los Cornejo, y los Figueroa.

<sup>77</sup> Francisco F. Cornejo a Julio A. Roca, Salta, 19-V-1895 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.69).

<sup>78</sup> Francisco J. Ortíz a Julio A. Roca, Salta, 19-III-1895 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.69).

<sup>79</sup> Según Chapeaurouge, "...para lo que se ha prestado más dinero, ha sido para que compraran terrenos en los biscacherales de la Alta Córdoba a 5 y 10 pesos vara donde no valía 10 centavos y ese negocio era de [José] Rodríguez del Busto y [Ramón J.] Cárcano y parte de Marcos [Juárez] y después de que el primero se ha enriquecido tira de la manta" (Diego Chapeaurouge a J. A. Roca, Córdoba, 21-VIII-1890, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.59).

<sup>80</sup> Diego Chapeaurouge a J. A. Roca, Córdoba, 21-VIII-1890, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.59.

<sup>81</sup> Bernabé Domínguez a J. Roca, Córdoba, 8-X-1890, Arch. Roca, Leg.60.

<sup>82</sup> Benjamín Domínguez a Julio A. Roca, Córdoba, 24-IV-1892 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.66).

<sup>83</sup> ver Saguier, 1993.

<sup>84</sup> futuro Diputado Nacional entre 1898 y 1900.

<sup>85</sup> Benjamín Domínguez a Julio A. Roca, Córdoba, 13-XII-1892 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.66).

<sup>86</sup> hijo de Lorenzo Torres, miembro de la Legislatura Rosista.

<sup>87</sup> Acerca de la relación de Costa con la prensa, ver Duncan, 1980, 766 y 774.

<sup>88</sup> Gregorio Torres a Julio A. Roca, Buenos Aires, 23-I-1889 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.58).

<sup>89</sup> Se hablaba de contratos a celebrar con los gobiernos de Entre Ríos, Santiago del Estero y Santa Fé. Estos proyectos fueron frustrados por el Ministro del Interior Bernardo de Irigoyen, quien advirtió que dichos contratos requerían la homologación del Congreso Nacional (Rato de Sambuccetti, 1995, 217).

<sup>90</sup> Los métodos practicados por Rocha eran disímiles. En algunos casos se trataba de meros regalos y en otros se los disfrazaba mediante letras. Según el Gobernador José S. Daza "...el gran derrochador de dinero del Banco de la Provincia de Buenos Aires ha regalado al Cura Segura 2.000 nacionales para la construcción del Seminario que está construyendo, 1.000 para la Virgen del Valle, y por ese orden obsequios para los curatos de los Departamentos. El Cura y más clero son Rochistas. Estos pillos están predicando que los que simpatizan con la candidatura Juárez se condenarán en vida, por otra parte quieren corromper las masas a fuerza de dinero" (José S. Daza a J. Celman, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.17). En otros casos, relatados por José Guesalaga a Juárez Celman, se hacía "...descontar letras en el Banco a individuos que [Rocha] recomienda, el dinero se toma, la letra se vence, no se paga y cuando se trata de hacerse efectivo el pago, no se halla, ni el jirante, ni el aceptante, no hay pues entonces a quien ejecutar y pasa a ganancias y pérdidas ese crédito" (José Guesalaga a Juárez Celman, Buenos Aires, 24-XI-1882, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.11).

<sup>91</sup> Joaquín Carlés a J. Roca, San Luis, 4-III-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.30.

<sup>92</sup> Luis G. Pinto a J. Roca, Santiago del Estero, 12-II-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.29.

<sup>93</sup> Aureliano Cuenca a Juárez Celman, s/f, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.10. "Uno de los individuos o los dos contra los que debía girar son directores del Banco de la Provincia, lo que quiere decir que Rocha tiene a este como capital para comprar gobernadores y tal vez encuentre muchos que no resistan a esa clase de argumentos" (Ibídem).

<sup>94</sup> Absalón Rojas a J. Roca, Santiago del Estero, 3-II-1885, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.43.

<sup>95</sup> ver Cunietti-Ferrando, 1989; Bragoni, 1993; Fortín de Iñones, 1993; y Saguier, 1995. Sólo Cunietti-Ferrando trata este crucial y crítico acontecimiento de la Banca González. Lamentablemente Bragoni (1993) no incursiona en este evento, que podría estudiarse analizando el expediente del concurso o quiebra correspondiente que debe existir en el Archivo Judicial de Mendoza.

<sup>96</sup> Lauro Galigniana a J. R., Mendoza, 30-VIII-1879, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.8.

<sup>97</sup> El Banco de este nombre abrió sus puertas en Mendoza en 1868, y debió cerrarlas al poco tiempo. Pero según Cunietti-Ferrando (1989), algunos de sus accionistas, tales como Benito Borda, Carlos Mansilla, Valentín Videla, Ambrosio Lezica y otros lo revivieron con el mismo nombre en San Juan (Cunietti-Ferrando, 1989, 8).

<sup>98</sup> A juicio de Moisés Cordero, "...sin el consentimiento del Dr. Miguel S. Echegaray, fuerte accionista, no conseguirían la liquidación, pero es el caso que este está muy mal con el Gerente [Juan J.] Videla y se presta a ello" (Moisés Cordero a Dardo Rocha, San Juan, 16-VII-1885, Sala VII, Arch. D. Rocha, Leg.214). Miguel Segundo Echegaray era hijo del Gobernador Miguel Echegaray Cano y de Nicolasa Videla Echegaray y marido de Margarita Videla Lima, hermana del Gobernador Valentín Videla Lima.

<sup>99</sup> Carlos Doncel a J. Roca, San Juan, 18-VI-1885, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.45.

<sup>100</sup> Se trata del caso del Banco propiedad de Nicolás Garbino y Juan Oxandaburu, el último partidario de López Jordán (Cunietti-Ferrando, 1995).

<sup>101</sup> Félix T. Avellaneda a Julio A. Roca, Catamarca, 21-IX-1891 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.65).

<sup>102</sup> Pío Uriburu a J. Roca, Salta, 27-VIII-1898, Arch. Roca, Leg.80. Según Francisco J. Ortiz, Pío Uriburu llevaba en 1892 dos bancos fundidos (Ortiz a Roca, Salta, 4-II-1892, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.66).



## Conclusion del Tomo-XI

En resumen, reconocemos, en el siglo XVIII, la existencia de siete períodos de expansión seguidos por siete crisis comerciales. Los períodos de expansión ocurrían cuando se concretaban Tratados de Paz. Estos fueron los de Alfonso (1701), Utrecht (1715), Madrid (1750), París (1763), Versailles (1783), Basilea (1795) y Amiens (1802). Las crisis comerciales ocurrieron en Buenos Aires cuando en Europa se producían las declaraciones de Guerra. Ello ocurrió en 1705, cuando en España se produce --al morir sin herederos Carlos I el Hechizado-- la Guerra de Sucesión; en 1740 cuando tras la caída de Portobello España entró en la guerra de la Oreja de Jenkins; en 1760, cuando entró en la Guerra de los Siete Años, en coalición con Francia y contra Inglaterra; en 1781, cuando volvió a entrar en guerra con Inglaterra por la Independencia de Estados Unidos; en 1794 y 1798, cuando España entró en coalición con Inglaterra contra la Francia Revolucionaria; y en 1804 cuando entró en coalición con la Francia Revolucionaria contra Inglaterra. En estas crisis comerciales muchos comerciantes quedaron atados a créditos de compra especulativa, cuando las mercaderías se sobrevaloraban, motivo por el cual entraban en quiebra cuando comenzaban los procesos de desvalorización o liquidación del capital mercantil sobrante. Si bien las crisis comerciales pudieron haber erosionado las estructuras políticas del Antiguo Régimen no he hallado elemento alguno que me permita afirmar que las mismas incidieron en la transformación de las relaciones de producción vigentes. Esto me lleva a reconocer con Stern (1985) la precedencia de las crisis sociales como motor de la transformación de aquellas.

Para terminar, podemos afirmar, sobre la base de las numerosas listas, cuadros y apéndices aquí producidos, que si bien el trato con las casas monopolistas de Cádiz había fortalecido el poder económico y social de algunas casas mercantiles porteñas; la movilidad del comercio generado a través de Buenos Aires, que alcanzó una de las intensidades más altas de la América Latina colonial, había logrado articular las regiones más apartadas del espacio colonial. Esa articulación fue desigual, por cuanto al menos en el último período (1791-1810), en las provincias arribeñas la mayor parte de los comerciantes registrados en la Diputación del Consulado de Buenos Aires no se endeudaban con comerciantes porteños, sino que muy probablemente con comerciantes Salteños y Tucumanos. De la misma manera, en Chile, la mayor parte de los comerciantes no se endeudaban con comerciantes porteños, sino que muy probablemente lo hacían con comerciantes Cuyanos. Por el contrario, en las provincias abajeñas, sin duda alentados por la proximidad geográfica, la mayor parte de los comerciantes registrados en la Diputación del Consulado se endeudaban en Buenos Aires.

En conclusión, podemos afirmar, sobre la base de las numerosas tablas, cuadros y apéndices aquí producidos, que si bien la inestabilidad social colonial, manifestada en los mercados de mercancías de todo el espacio geográfico colonial, en los mercados inmobiliarios urbano y rural del litoral Rioplatense, y en los mercados de mano de obra indígena y esclava, alcanzó uno de los niveles más altos de la América Latina colonial, la estabilidad social vigente en ciertas regiones como Salta, el Paraguay y la Banda Oriental, asfixiaba a las fuerzas vitales de la sociedad colonial. Por último, podemos concluir que los niveles de corrupción vigentes en los ambientes bancarios del interior argentino estaban lo suficientemente generalizados como para certificar que la prolongación de las prácticas del Antiguo Régimen aún se hallaban presentes en la segunda mitad del siglo XIX.